

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO



El Elector Latinoamericano del Siglo XXI

ESTUDIO COMPARADO DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN BRASIL,
CHILE, MÉXICO Y PERÚ

TESIS

PARA OPTAR GRADO DE DOCTOR EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO

DAVID SULMONT HAAK

ASESOR: SINESIO LÓPEZ

Jurado:

Ciro Alegría

Paula Muñoz

Aldo Panfichi

Martín Tanaka

LIMA - PERÚ, 2017

A Patricia, Mathias y Camila, por su amor y paciencia



RESUMEN

El objetivo de la tesis es explicar los comportamientos electorales de los ciudadanos de América Latina, examinando cuatro casos relevantes desde una perspectiva de política comparada: Brasil, Chile, México y Perú. Para ello se ponen a prueba un conjunto de hipótesis derivadas de los modelos teóricos clásicos del comportamiento electoral (modelos sociológicos, sociopsicológicos, de la elección racional) en diálogo con los enfoques que enfatizan la importancia de la dimensión institucional en el comportamiento de los actores políticos y del elector. Para evaluar la pertinencia de las hipótesis formuladas se analiza la información proveniente de encuestas post electorales realizadas en los cuatro países seleccionados en el marco del proyecto internacional “Comparative Study of Electoral Systems”. Se trabaja con 15 encuestas hechas a más de 24 mil electores, realizadas luego de las correspondientes elecciones presidenciales o parlamentarias que tuvieron lugar en los cuatro países entre 1997 y 2011. Entre los hallazgos principales, la investigación muestra que si bien la identificación partidaria tiene un efecto importante en el voto, ésta es relativamente débil en la mayoría de países y poco asociada a clivajes o divisiones sociales basadas en desigualdades socioeconómicas. En segundo lugar se encuentra que la evaluación de la distancia ideológica entre las preferencias del elector y la oferta electoral tiene efectos estadísticamente significativos en el comportamiento del elector, pero que su magnitud depende en gran medida del grado de polarización política que muestren los partidos en competencia. En tercer lugar, se confirma la hipótesis de que el desempeño del gobierno tiene un peso significativo en el voto a favor o en contra del partido de gobierno, pero que ello está mediado por las reglas electorales (básicamente la posibilidad de reelección) y por el grado de consolidación del sistema de partidos.



Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	v
Índice de cuadros	ix
Introducción	xi
I El Estudio del Comportamiento Electoral - Teorías y Métodos	1
1. Los Enfoques Teóricos sobre el Comportamiento Electoral	3
1.1. Los modelos sociológico y socio-psicológico	4
1.2. Los modelos racionales o “económicos”	7
1.3. Estructura social, partidos políticos, clivajes y comportamiento electoral	12
1.4. Modernización cultural y la individualización de la decisión electoral	24
1.5. Diseños institucionales y comportamiento electoral	31
1.6. La infraestructura de la decisión electoral y las nuevas democracias	41
2. Diseño para el Estudio del Comportamiento Electoral	45
2.1. Esquema analítico para el estudio del comportamiento electoral	45
2.2. Objetivos e Hipótesis	49
2.3. Casos, datos y enfoque analítico	52

II El Contexto Político e Institucional de los Casos de Estudio 61

3. Brasil y el Presidencialismo de Coalición 63

3.1. El Sistema Político Brasileño 68

3.1.1. El Sistema Electoral 70

3.1.2. El Sistema de Partidos 75

3.2. La Dinámica Política Brasileña Contemporánea 83

4. Chile: Competencia electoral en bloques ideológicos 91

4.1. El Sistema Político Chileno 92

4.1.1. El Sistema Electoral 94

4.1.2. El Sistema de Partidos 98

4.2. El sistema electoral y sus efectos sobre la competencia partidaria en Chile . . . 106

4.3. La dinámica política chilena 1989 – 2009 115

5. México: De la Hegemonía del PRI a la Competencia Abierta 121

5.1. El Sistema Político Mexicano 122

5.1.1. El Sistema Electoral 123

5.1.2. El Sistema de Partidos 125

5.2. El Proceso Político Mexicano desde la década de 1980 132

6. Perú: Una Democracia sin Partidos 145

6.1. El Sistema Político 152

6.1.1. El Sistema Electoral 155

6.1.2. El Sistema de Partidos 161

6.2. Las dinámicas sociales y la débil institucionalidad del sistema de partidos . . . 178

III Hallazgos Empíricos 185

7. Partidos e Identidad Partidaria 187

7.1. Opinión sobre los Partidos Políticos 188

7.2. Militancia, Identificación y Simpatías Partidarias	194
7.3. Divisiones Sociales y Partidos Políticos	204
7.4. Divisiones Sociales y Voto	216
7.5. Comportamiento Electoral, Identidades Partidarias y Clivajes Sociales	225
8. El Voto Ideológico	229
8.1. Partidos Políticos y Polarización Ideológica	233
8.2. Los Electores y la Dimensión Izquierda Derecha	238
8.2.1. La Competencia en el Uso de la Escala Izquierda Derecha	239
8.2.2. La Posición Izquierda - Derecha y las Diferencias Socioeconómicas	248
8.3. La Dimensión Izquierda Derecha y la Decisión Electoral	250
8.3.1. Asociación Nominal entre Ubicación Ideológica y Voto	251
8.3.2. Utilidad Espacial y Voto Ideológico	252
8.3.3. Utilidad Espacial en el Contexto de cada Elección	260
8.4. Balance sobre el Voto Ideológico en América Latina	264
9. Desempeño Gubernamental y Comportamiento Electoral	267
9.1. Economía y Opinión Pública	269
9.2. Evaluación del Gobierno y Preferencias Electorales	279
9.3. “Accountability vertical” y comportamiento electoral	290
10. Conclusiones	293
Bibliografía	313

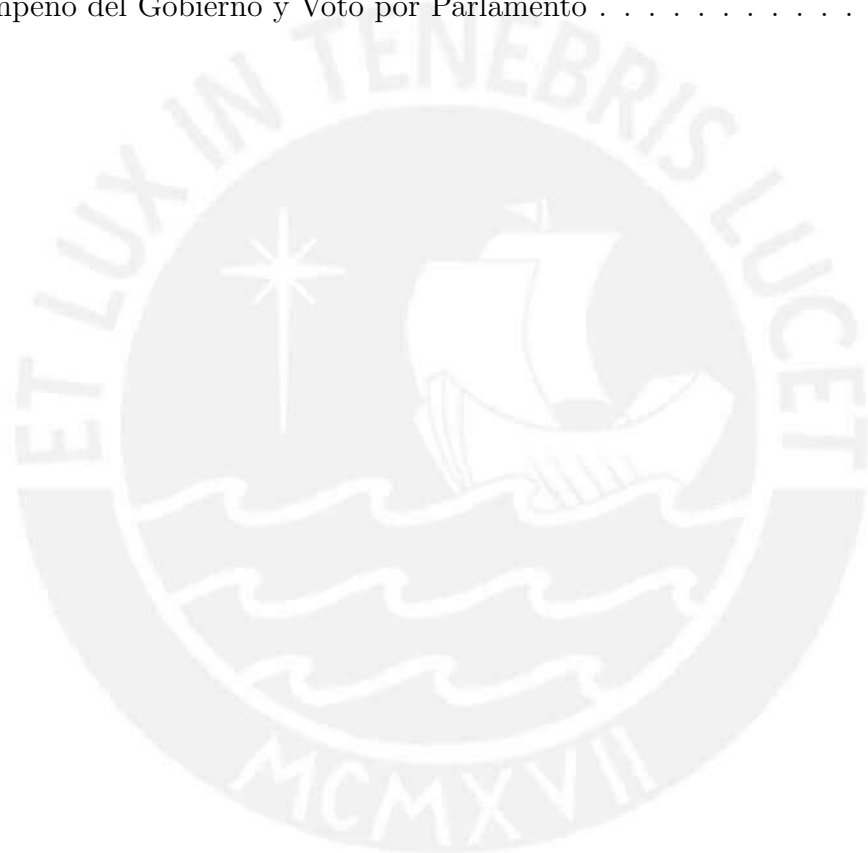


Índice de figuras

1.1. Esquema del embudo de causalidad	6
1.2. Componentes de los Clivajes	18
1.3. Ejemplo de hipótesis del “Rational choice institutionalism”	35
1.4. Esquema de relaciones entre variables del proyecto CSES	37
2.1. Esquema de organización de factores asociados a la decisión electoral	47
4.1. Genealogía de los Partidos Políticos en Chile	100
5.1. Evolución del Voto en las Elecciones Parlamentarias en México 1943-2012	133
7.1. Confianza en Instituciones	191
7.2. Nivel de Confianza en los Partidos Políticos	192
7.3. Representatividad de los Partidos Políticos	193
7.4. Necesidad de los Partidos Políticos para la Democracia	194
7.5. Militancia en Partidos Políticos	195
7.6. Identificación o Simpatía con algún Partido Político	197
7.7. Brasil y Chile: Identificación con Partidos Políticos	199
7.8. México y Perú: Identificación con Partidos Políticos	200
7.9. Efecto de la identificación partidaria en el voto	203
7.10. Brasil y Chile: Grado de preferencia por partidos políticos	205
7.11. México y Perú: Grado de preferencia por partidos políticos	206
7.12. Preferencia promedio del Sistema de Partidos, por país y elección	207

7.13. Brasil y Chile: Correlación entre Preferencias por Partidos y Nivel Educativo del Elector	210
7.14. México y Perú: Correlación entre Preferencias por Partidos y Nivel Educativo del Elector	211
7.15. Brasil y Chile: Correlación entre Preferencias por Partidos y Nivel de Ingresos del Elector	212
7.16. México y Perú: Correlación entre Preferencias por Partidos y Nivel de Ingresos del Elector	213
7.17. Partidos políticos y divisiones sociales	215
7.18. Partidos políticos y divisiones sociales - Detalle	217
7.19. Brasil y Chile: Índice de originalidad para nivel educativo	219
7.20. México y Perú: Índice de originalidad para nivel educativo	220
7.21. Brasil y Chile: Índice de originalidad para nivel de ingresos	223
7.22. México y Perú: Índice de originalidad para nivel de ingresos	224
7.23. Asociación entre voto reportado, nivel educativo y nivel de ingresos del elector	226
8.1. Brasil y Chile: Posición Izquierda - Derecha de los Partidos Políticos según Expertos	234
8.2. México y Perú: Posición Izquierda - Derecha de los Partidos Políticos según Expertos	235
8.3. Índice de Polarización del Sistema de Partidos	238
8.4. Posición Izquierda Derecha y Niveles Socioeconómicos	249
8.5. Voto Ideológico y Polarización del Sistema de Partidos	251
8.6. Utilidad del Voto Ideológico	259
8.7. Utilidad del Voto Ideológico Según Elección	262
8.8. Utilidad del Voto Ideológico y Polarización del Sistema de Partidos	263
8.9. Voto Ideológico, Polarización e Identificación Partidaria	264
9.1. Ingreso Bruto Per cápita 1996-2014	270
9.2. Crecimiento Económico: Índice del Ingreso Bruto Per cápita 1996-2014	271

9.3. Opinión sobre la Situación Económica 2002-2015	273
9.4. Aprobación Presidencial 2002-2015	274
9.5. LAPOP 2004-2012: Evaluación de la Economía y de la Gestión Presidencial . .	275
9.6. LAPOP 2004-2012: Efecto estimado de la Evaluación de la Economía en la Opinión sobre la Gestión del Presidente	278
9.7. Desempeño del Gobierno y Grado de Preferencia por Partidos	285
9.8. Desempeño del Gobierno y Voto Presidencial	287
9.9. Desempeño del Gobierno y Voto por Parlamento	289





Índice de cuadros

1.1. Tipos de División y Clivajes	18
2.1. Elecciones analizadas y número de encuestas en los casos incluidos en el Proyecto CSES - América Latina 1997-2011	54
2.2. Electores y participación electoral en los casos seleccionados	57
2.3. Indicadores del sistema de partidos de los casos seleccionados	59
3.1. Elecciones Presidenciales en Brasil 1989-2010	72
3.2. Partidos que compiten y que obtienen escaños en las elecciones parlamentarias de Brasil 1986-2010	75
3.3. Elecciones Parlamentarias en Brasil 1986-2010	76
3.4. Composición de la Cámara de Diputados Federales, Brasil 1986-2010	77
4.1. Elecciones Presidenciales en Chile 1958-1970	99
4.2. Elecciones Presidenciales en Chile 1989-2013	110
4.3. Elecciones Parlamentarias en Chile 1989-2013	110
4.4. Composición de la Cámara de Diputados en Chile 1989-2013	111
5.1. Elecciones Presidenciales en México 1982 - 2012	139
5.2. Elecciones Parlamentarias en México 1997 - 2012	141
5.3. Composición de la Cámara de Diputados de la Unión en México 1997 - 2012	142
6.1. Elecciones Presidenciales en Perú 1980-1995	152
6.2. Elecciones Presidenciales en Perú 2000-2011	163

6.3. Elecciones y composición del Parlamento en Perú 2000-2011	180
7.1. Confianza en los Partidos Políticos - Encuesta Mundial de Valores 2004-2009 .	189
7.2. Membresía en Partidos Políticos - Encuesta Mundial de Valores 2004-2009 . .	196
7.3. Ejemplo Base de Datos IDP	202
7.4. Ejemplo Base de Datos IDP Reestructurada	202
8.1. Electores y su Distribución en la Escala Izquierda - Derecha	240
8.2. Competencia en el Uso de la Escala Izquierda - Derecha	242
8.3. Modelos Logit Binomiales para Uso de Escala Izquierda - Derecha	245
8.4. Ejemplo hipotético de base de datos original	254
8.5. Ejemplo de base de datos reestructurada para el análisis	254
8.6. Esquema de codificación para la variable IDP	254
8.7. Cálculo del efecto de la utilidad espacial γ según país e identificación partidaria	255
8.8. Modelos OLS y LOGIT para PREFP y VOTO	257
8.9. Estimación del Efecto de Util. I-D en Preferencia por Partidos Controlando por Elección	260
9.1. Presidentes en los casos estudiados entre 1997 y 2015	268
9.2. LAPOP 2004-2012: Estimación del Efecto de la Evaluación de la Situación Económica en la Aprobación Presidencial	277
9.3. Indicadores de Desempeño del Gobierno en los casos estudiados	280
9.4. Estimación del Efecto de Evaluación del Desempeño del Gobierno en Preferencia por Partidos, controlando por Elección	283
9.5. Estimación del Efecto de Evaluación del Desempeño del Gobierno en El Voto por Presidente, controlando por Elección	286
9.6. Estimación del Efecto de Evaluación del Desempeño del Gobierno en El Voto para Parlamento, controlando por Elección	288

Introducción

Votar en las elecciones es probablemente una de las pocas situaciones donde el ciudadano común y corriente de una sociedad democrática debe tomar una decisión que, como efecto agregado, tiene la capacidad de alterar la distribución del poder político en una sociedad. En América Latina, la democracia electoral es un fenómeno de reciente consolidación en la mayoría de países y que ha marcado la dinámica política de estas sociedades desde la década de 1980 en adelante. Millones de ciudadanos latinoamericanos son convocados regularmente a elecciones, que se han venido convirtiendo en un mecanismo cada vez más normalizado para acceder al poder en la región.

Junto con la consolidación de la democracia electoral como sistema de gobierno, a lo largo de los últimos años en América Latina se ha observado una cierta tendencia de erosión de la legitimidad de la democracia en la opinión pública. El proyecto LAPOP,¹ en su informe de la encuesta Barómetro de las Américas 2014, señalaba que varios de los indicadores de legitimidad del sistema democrático habían caído respecto de mediciones previas y que ello podía estar asociado con una evaluación cada vez más crítica de la ciudadanía acerca del desempeño de las instituciones políticas respecto del manejo de la economía, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. Asimismo, se apreciaba una disminución del porcentaje de ciudadanos con actitudes asociadas a la definición clásica de la cultura política democrática (alto apoyo al sistema político y altos niveles de tolerancia política) y un marcado incremento en las actitudes que ponen a la democracia en cuestión (Zechmeister, 2015, pp. XXXV-XXXVI).

La crítica a la democracia o el deterioro de los valores y actitudes que tradicionalmente se han asociado a la cultura política democrática no es exclusiva de la región latinoamericana.

¹Latin American Public Opinion Project. Ver: <http://www.vanderbilt.edu/lapop/>

En los últimos años se ha visto cómo en las sociedades democráticas supuestamente más consolidadas de Europa, partidos políticos populistas especialmente de derecha (y algunos de izquierda en Grecia y España) han venido recibiendo un importante caudal de apoyo en las elecciones. La crisis económica y la crisis de refugiados de oriente medio y de África han exacerbado reacciones xenófobas, anti inmigrantes, racistas y nacionalistas en varios países europeos, así como un mayor rechazo a la globalización y a las elites políticas y económicas en general. Este tipo de discursos y reacciones ciudadanas han influido también los resultados de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Partidos que proponen programas y discursos políticos reñidos con los valores tradicionales de la cultura democrática (tolerancia, libertad, pluralismo) han recibido un respaldo ciudadano importante a través del voto en elecciones libres, justas y competitivas. En América Latina varios países han sido testigos de cómo gobiernos autoritarios han sido legitimados electoralmente, recibiendo un respaldo real de mayorías de votantes. En el Perú el gobierno autoritario de Fujimori en la década de 1990 gozó de altos índices de popularidad en las encuestas y de un amplio respaldo electoral en las elecciones de 1992, 1993, 1995 y 2000.² Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela también han sido ungidos en varios procesos electorales, a pesar de que han venido concentrando cada vez más poder y restringido paulatinamente las libertades democráticas de sus opositores.

Históricamente hay varios casos en los cuales elecciones incuestionables desde el punto de vista procedimental, han entronizado proyectos políticos con discursos divergentes del conjunto de libertades políticas y cívicas que forman parte del diseño de los sistemas políticos democráticos y que, en algunos casos, pueden derivar en gobierno autoritarios. Sin embargo, también es cierto que un adecuado funcionamiento de los mecanismos que sustentan la democracia electoral y la competencia libre y justa entre diversos proyectos políticos, permite que la sociedad se vea representada en el sistema político y que responsabilice a los políticos

²En 1992 tuvo lugar las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático que elaboraría la nueva constitución que fue sometida a un referéndum en 1993. En 1995 y el 2005 tuvieron lugar elecciones presidenciales que resultaron en sucesivas reelecciones de Alberto Fujimori

y gobernantes frente a la ciudadanía en función del grado de bienestar y seguridad que son capaces de producir para el conjunto de la sociedad.

Identificar los factores que intervienen e influyen en la decisión del ciudadano cuando se enfrenta a una boleta electoral nos permite conocer mejor cómo funciona el acto político más básico sobre el cual se funda la legitimidad del sistema político y de gobierno en nuestros países. ¿Cómo votan los ciudadanos de las democracias latinoamericanas?, ¿qué factores influyen en sus decisiones electorales?, ¿qué efecto tienen los diferentes diseños y configuraciones institucionales (sistemas de gobierno, sistema electoral, sistemas de partidos) en la decisión electoral de los ciudadanos? Éstas son las principales preguntas que guían la presente investigación. Esta se enmarca en una larga tradición de estudios sobre el comportamiento electoral, que es uno de los temas clásicos abordados por la ciencia política y la sociología política.

Si bien el título del presente trabajo anuncia un objeto de estudio ambicioso, por razones de disponibilidad de datos comparables en esta investigación se apuntará a un blanco algo más restringido, analizando el comportamiento del elector latinoamericano a partir del estudio de procesos electorales que han tenido lugar desde finales del siglo XX en cuatro países de la región: Brasil, Chile, México y Perú. Específicamente tomará como casos de estudio las elecciones generales de Brasil del 2002, 2006 y 2010; de Chile 1999, 2005 y 2009; de México 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009;³ y de Perú 2000, 2001, 2006 y 2011.

La principal base empírica para este trabajo son las encuestas post electorales realizadas en los países y elecciones seleccionadas en el marco del Comparative Study of Electoral Systems - CSES,⁴. El CSES es un programa de investigación colaborativa comparada que estudia el comportamiento electoral en diversos países del mundo. Desde 1996 viene realizando encuestas post electorales que han cubierto 159 procesos electorales (presidenciales y/o parlamentarios) en 53 países. Uno de los principales objetivos del CSES es evaluar cómo varía el comportamiento del elector en diferentes contextos históricos, sociales, políticos e institucionales, de ahí su enfoque comparado y longitudinal. Junto con la Encuesta Mundial de Valores⁵ y el Progra-

³En el caso mexicano, las elecciones de 2000 y 2006 fueron presidenciales y parlamentarias y el resto sólo parlamentarias.

⁴Véase: <http://www.cses.org/>

⁵Véase: <http://www.worldvaluessurvey.org>

ma de la Encuesta Social Internacional⁶, el CSES constituye unos de los principales proyectos de investigación colaborativa comparada, sustentada en encuestas de opinión a muestras representativas de la población, que abarca a un número significativo de países en más de un continente a nivel mundial.

El Perú participa del proyecto CSES desde el 2000 por iniciativa de la Dra. Catalina Romero, profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quien tuvo a su cargo la coordinación de las encuestas realizadas en las elecciones del 2000 y 2001. Desde el 2006 la coordinación del proyecto CSES en el Perú está a cargo del autor de este trabajo, quien ha sido responsable de la implementación de las encuestas post electorales el 2006, 2011 y 2016.⁷

La fuente empírica de datos de este estudio está compuesta por 15 encuestas post electorales que constituyen muestras representativas del electorado de cada elección en cada país, sumando en total 24,690 entrevistados. A esta información se añade, cuando se ha considerado pertinente, datos proveniente de otros estudios que recogen la opinión, actitudes y comportamiento político de los ciudadanos de los países analizados, específicamente las encuestas del proyecto LAPOP, del Latinobarómetro⁸ y de la Encuesta Mundial de Valores.

La presente investigación se plantea dos objetivos principales. En primer lugar, identificar el rol que juegan ciertas variables en el comportamiento del elector individual; en segundo lugar, analizar en qué medida el rol o importancia que adquieren estas variables está relacionado con diferentes contextos históricos e institucionales en donde se desarrollan los procesos electorales. El diseño de esta investigación se propone entonces hacer un análisis en dos niveles:

- A nivel micro: identificar los factores que influyen en la decisión del elector y estimar el peso específico que tienen cada uno de ellos.
- A nivel macro: evaluar hasta qué punto los criterios que son tomados en cuenta por los electores individuales dependen de configuraciones institucionales concretas (sistemas de gobierno; sistemas electorales; sistemas de partidos).

⁶Véase: <http://www.issp.org/>

⁷Los datos de las encuestas del 2016 no han sido incluidos en esta investigación.

⁸Véase: <http://www.latinobarometro.org>

Específicamente se analizará cómo tres modelos que se derivan de los enfoques teóricos clásicos del comportamiento electoral son capaces de dar cuenta de la decisión de los votantes y hasta qué punto este potencial explicativo depende de los contextos institucionales y coyunturas correspondientes a cada país y elección.

El primero de estos modelos considera el rol de las relaciones entre los partidos políticos y los grupos sociales diferenciados por desigualdades socioeconómicas. Se evaluará hasta qué punto los partidos logran representar en forma más o menos estable estos grupos sociales, generando procesos de identificación partidaria y sus efectos sobre el voto.

El segundo modelo toma en cuenta las preferencias político ideológicas del electorado y su correlación con la oferta electoral que le presenta el sistema de partidos. Estas preferencias se examinan desde una variable clásica en los estudios de opinión y cultura política que es la diferenciación entre izquierda - derecha. En este caso se evaluará la capacidad que tienen los electores de identificar estas distinciones, estimar la distancia relativa entre sus propias preferencias y los partidos que compiten en las elecciones, y el efecto que ello tiene en el voto. En el análisis se considera también la dimensión institucional, en particular cómo los diversos grados de polarización ideológica del sistema de partidos de cada país influyen en los mecanismos del voto ideológico.

En el tercer modelo, la principal variable explicativa es la evaluación que tienen los ciudadanos del desempeño del gobierno y cómo ésta influye en la decisión de renovar la confianza al partido de gobierno o inclinarse por las alternativas de oposición. Como variables intervinientes a nivel macro se considera el efecto del diseño electoral, específicamente la posibilidad de la reelección presidencial, y el nivel institucionalización del sistema de partidos.

Los resultados de esta investigación se exponen en 9 capítulos que están organizados en tres partes. En la primera parte se hace un balance de los principales enfoques teóricos que han sustentado el campo de los estudios sobre el comportamiento electoral y se especifican las hipótesis y el diseño metodológico que guía esta investigación. El capítulo 1 presenta los enfoques teóricos clásicos de los cuales se derivan los modelos que estamos poniendo a prueba en la investigación, así como la discusión sobre los efectos que tienen las configuraciones institu-

cionales y los cambios sociales e históricos que han experimentado las sociedades democráticas sobre las variables que, a nivel individual, pueden ayudar a explicar el voto. Se discute además la pertinencia y limitaciones que estos enfoques tienen para países que han experimentado transiciones democráticas hacia finales del siglo XX, puesto que la mayoría de los cuales han sido desarrollados en contextos de democracias “consolidadas” luego de la 2da guerra mundial.

En el capítulo 2 se presentan las hipótesis y la estrategia metodológica escogida para esta investigación, dando cuenta de las fuentes de datos empíricos que hemos utilizado y de los principales rasgos de los casos que estamos estudiando.

La segunda parte del trabajo presenta el contexto político e institucional de los cuatro casos estudiados, exponiendo con mayor detalle en sendos capítulos (Brasil, Chile, México y Perú) las características del sistema político, el sistema electoral y el sistema de partidos. Asimismo se hace una breve presentación de la dinámica política de estos países en el periodo histórico en el que han tenido lugar las elecciones que estamos analizando.

La tercera parte da cuenta de los hallazgos del análisis de la información empírica que se ha utilizado en esta investigación. El capítulo 7 analiza la relación entre partidos, desigualdades socioeconómicas, identificación partidaria y comportamiento electoral, con la finalidad de poner a prueba los supuestos de las hipótesis asociadas a nuestro primer modelo analítico.

El capítulo 8 sobre el voto ideológico muestra hasta qué punto los partidos políticos en los países y elecciones que estamos analizando logran diferenciarse entre sí en la dimensión izquierda - derecha; hasta qué punto los ciudadanos son capaces de utilizar este tipo de criterios para hacer evaluaciones políticas y qué tanto ello influye en su decisión electoral, dadas las características del sistema de partidos que compite en las elecciones y su grado de polarización ideológica.

El capítulo 9 evalúa los mecanismos asociados a lo que en literatura se llama el “voto económico”, es decir el peso que tiene la evaluación del desempeño del gobierno en la decisión electoral de recompensar o castigar a los responsables del gobierno en los procesos electorales, mostrando además cómo determinados componentes del diseño político y electoral (como la

posibilidad de elecciones parlamentarias intermedias o el comportamiento electoral) o el nivel de institucionalización del sistema de partidos, intervienen en su funcionamiento.

El capítulo final corresponde a las conclusiones generales de la investigación. El recorrido por los casos y la evidencia empírica nos lleva a afirmar que, más allá de las limitaciones en cuanto a la información que manejan y esfuerzo que se inviertan, los electores son capaces de desarrollar un comportamiento “racional”, es decir pueden evaluar las alternativas tomando en cuenta su grado de correspondencia respecto de sus propias preferencias o expectativas políticas y pueden tomar decisiones políticas. También nos indican que hay un margen muy importante de autonomía del electorado respecto de las instituciones políticas, especialmente de los partidos: las identificaciones que pueden desarrollarse con los partidos se limitan a una minoría de la sociedad y pueden ser variables a lo largo del tiempo. Ello dificulta el trabajo de representación de los partidos políticos, generando condiciones para la inestabilidad o incertidumbre política, que pueden mitigarse hasta cierto punto debido a los costos que ciertos diseños institucionales o trayectorias históricas imprimen a los sistemas políticos.

En general se aprecia que los partidos políticos en los casos estudiados no tienen raíces muy profundas en sus estructuras sociales, pero que, a pesar de ello, algunos sistemas logran mayor nivel de estabilidad gracias a las características del sistema político. Ello reafirma el carácter contingente de la acción política y la autonomía de la esfera política respecto de las estructuras sociales. Representar a una sociedad implica un alto grado de exigencia a los partidos políticos, pero ese intento de representación y de obtener poder, en una sociedad democrática, depende en última instancia de la decisión de una persona que pone una marca en una boleta y la deposita en un ánfora. Esperamos que esta investigación ilumine algunos de los aspectos que intervienen en este acto político tan individual como fundamental para la consolidación de una sociedad democrática en nuestros países.



Parte I

El Estudio del Comportamiento Electoral - Teorías y Métodos



Capítulo 1

Los Enfoques Teóricos sobre el Comportamiento Electoral

Los estudios sobre comportamiento electoral constituyen uno de los campos tradicionales de la ciencia política y de la sociología política. Inicialmente este tipo de investigación se sustentaba en el análisis de información agregada de resultados electorales y características sociodemográficas, provenientes de datos censales de las circunscripciones electorales. A partir de los años 30, el surgimiento de la metodología de los sondeos de opinión basados en muestreo probabilístico le permitió a los investigadores contar con datos a nivel individual y poner prueba hipótesis sobre el comportamiento del individuo-elector (Visser, 1994).

En los diversos balances sobre los enfoques utilizados para estudiar el comportamiento electoral (Carmines y Huckfeldt, 1988; Evans, 2003; Knight y Marsh, 2002; Mayer, 2006; Rose, 2000) se distinguen tres grandes tipos de modelos o paradigmas teóricos que buscan explicar los factores que están detrás de la racionalidad de las personas al momento de tomar sus decisiones de voto. En la literatura estos paradigmas son conocidos como (1) el modelo sociológico, (2) el modelo socio-psicológico y (3) los modelos racionales o “económicos”.

1.1. Los modelos sociológico y socio-psicológico

Los enfoques sociológicos y socio-psicológicos constituyen los primeros paradigmas teóricos desarrollados para comprender el comportamiento electoral a nivel individual. El primero de ellos, que corresponde históricamente con la primera fase de estudios de comportamiento electoral basados en encuestas por muestreo en Estados Unidos en la década de 1940, se identifica con los planteamientos de la “Escuela de Columbia”, debido a su origen en la universidad norteamericana del mismo nombre. El iniciador de esta corriente es el científico social Paul Lazarsfeld, quien en sus investigaciones sobre las elecciones presidenciales norteamericanas de 1940 y de 1948 planteó un esquema analítico que enfatizaba el rol y la influencia de los grupos primarios y las características sociales de las personas en sus decisiones electorales. Los trabajos de Lazarsfeld, Hazel y Berelson, *The People’s Choice* (1968) y *Voting* (1954), se han convertido en clásicos de la investigación en sociología política .

La idea fundamental de este enfoque teórico es que el elector es un ser social, cuyas opiniones y opciones políticas se forman a partir de las relaciones sociales (contactos y conversaciones interpersonales) que establece con los demás miembros de los grupos a los cuales pertenece o está adscrito de manera más o menos permanente. De esta forma, la estructura social condiciona la formación de y pertenencia a grupos y comunidades sociales (de clase, religión o grupo étnico), los cuales, a partir del proceso de socialización y de la convivencia cotidiana, ejercen una influencia directa en la configuración de las orientaciones políticas de las personas. Desde esta perspectiva, las decisiones individuales relacionadas con el voto son analizadas como un reflejo de la conformidad de las personas con las normas sociales predominantes en sus grupos de referencia.

El segundo enfoque teórico denominado “socio-psicológico”, está asociado también con la fase inicial de los estudios sobre comportamiento electoral, y es conocido en la literatura como el enfoque de la “Escuela de Michigan”, desarrollado por investigadores del Social Research Center (SRC) de la Universidad de Michigan. Si bien el primer estudio electoral del SRC fue en las elecciones presidenciales norteamericanas de 1948, es en la década de los 50 cuando se va perfilando un nuevo modelo teórico para explicar el comportamiento electoral. A diferencia

de la Escuela de Columbia, que enfatiza la influencia de los factores sociales y de los grupos de referencia, la Escuela de Michigan se centra en el conjunto de las disposiciones y actitudes hacia el sistema político que desarrollan los individuos y que sirven de elementos de juicio para tomar decisiones al momento de votar. El hito central de esta corriente de investigación es el libro aparecido a inicios de los 60's, *The American Voter*, publicado por Campbell, Converse, Miller y Stokes (1960). Desde 1948 el SRC de la Universidad de Michigan es la sede del National Election Studies, proyecto que monitorea el comportamiento de los electores norteamericanos y que constituye la serie de datos continuos más importante de este campo a nivel internacional.

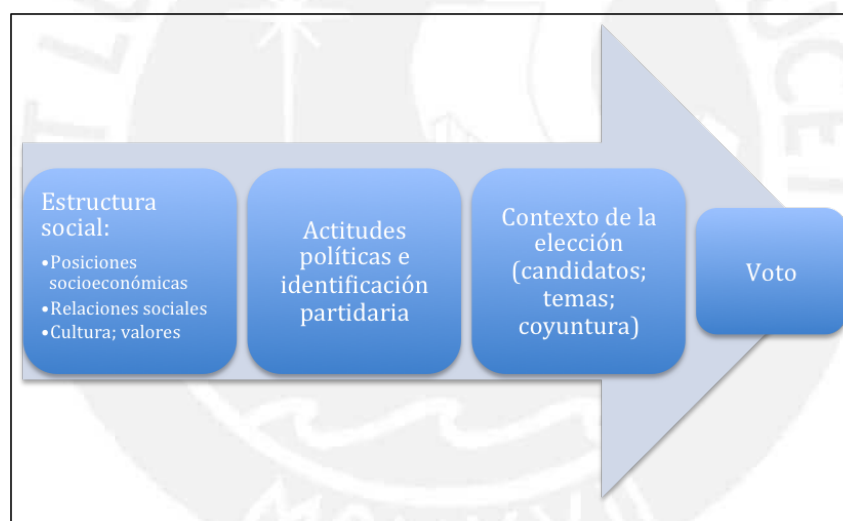
El supuesto básico de este enfoque es que el voto constituye un acto político fundado por la percepción y el mapa cognitivo que tienen los electores respecto de los principales componentes del sistema político. Estos “mapas” o “atajos” cognitivos orientan el comportamiento electoral (la decisión de votar por tal o cual candidato) y se originan a partir de los mecanismos de identificación partidaria, que es definida como una adhesión afectiva duradera con alguna de las principales agrupaciones política que estructuran la vida política de un país. En la medida que el ciudadano promedio no maneja la suficiente información o tiene dificultades para comprender la complejidad de las decisiones políticas que están en juego en una sociedad moderna, la identificación partidaria funciona como un filtro entre el mundo político y el electorado, proveyendo los atajos cognitivos que le permiten a las personas tomar sus decisiones al momento de votar.

Este modelo toma en cuenta también el proceso de socialización, puesto que la identificación partidaria se formaría en etapas tempranas de la vida de los individuos, es a menudo heredada de los padres, y reforzada por el medio social y la adhesión ritualizada mediante la participación habitual en elecciones u otros actos políticos.

En su investigación, Campbell y sus colegas buscaron reconstruir el proceso de toma de decisiones del elector, identificando los factores que podrían jugar un rol importante y ubicándolos en una cadena ordenada de elementos relacionados que da la imagen de un “embudo de causalidad” (funnel of causality), donde en el extremo más amplio se encontrarían las variables estructurales sociales, económicas y políticas que configuran las bases para relaciones estables

entre los individuos y los grupos partidarios; mientras, en el extremo más estrecho se ubican las características específicas de una elección determinada, como la coyuntura económica o política, y la configuración misma de las candidaturas. El vínculo entre ambos extremos se establece a partir de las actitudes que desarrollan los individuos hacia los candidatos, hacia los temas o problemas centrales del debate político (issues) y sobre todo hacia los partidos (la identidad partidaria). A diferencia del “modelo de Columbia”, el “Modelo de Michigan” no considera que las variables como el medio social o familiar, las identidades de clase, religión o grupo étnico, tengan una vinculación directa con el voto, pero sí con los factores que permiten desarrollar las actitudes y los vínculos afectivos con las organizaciones políticas que permiten el desarrollo de las identificaciones partidarias.

Figura 1.1: Esquema del embudo de causalidad



Los modelos de Columbia de Michigan parecen compartir como supuesto de base el hecho de que los electores son ciudadanos políticamente poco sofisticados, que manejan poca información o tienen un bajo conocimiento del funcionamiento de la compleja vida política de una sociedad moderna. Es por ello que para tomar decisiones en una elección, requieren de “faros” o “pistas” (cues) que los orienten. En el caso del modelo de Columbia, estas pistas provienen del comportamiento y los valores predominantes de los grupos sociales de referencia o de pertenencia de los individuos; mientras que en el modelo de Michigan se originan a partir de la identificación partidaria (Mayer, 2006).

1.2. Los modelos racionales o “económicos”

El tercer conjunto de paradigmas teóricos clásicos sobre el comportamiento electoral se basa en los postulados formulados por Anthony Downs en su texto *An Economic Theory of Democracy* (1957). El supuesto de base de estos modelos es que la racionalidad utilitarista del ciudadano pesará más sobre sus orientaciones electorales que sus identidades partidarias o su pertenencia a determinados grupos sociales. En tal sentido, se espera que la decisión del ciudadano se sustente en la percepción que tiene acerca de los candidatos que compiten en una elección, en la evaluación que se haga respecto de su desempeño en el pasado, o en el beneficio que se pueda obtener acerca de las promesas futuras.

Generalmente se identifican dos variantes de los modelos racionales o económicos (Evans, 2003; Mayer, 2006). La primera de ellas son los *modelos espaciales*, basados en el teorema del “votante medio” formulado por Downs. Este tipo de enfoque analiza la distancia o proximidad del elector respecto de los candidatos en torno a determinados temas centrales, posiciones programáticas o ideológicas. La idea detrás de estos modelos es que las personas votarán por aquellos candidatos o agrupaciones de quienes se sientan más cercanas o próximas, ya sea en lo ideológico o respecto de sus posiciones en relación a los temas (issues) que aparezcan como centrales en una campaña electoral determinada. Desde la perspectiva de los candidatos o agrupaciones políticas, los postulados de la teoría sostienen que ganarán la elección aquellos que se ubiquen lo más cerca posible de las preferencias del “votante medio”.

Varias investigaciones desde esta vertiente han analizado las distancias y posiciones entre los electores y los candidatos en el eje izquierda – derecha del espectro político (véase por ejemplo: Badescu y Sum, 2005; Best y McDonald, 2010; Dahlberg, Oscarsson y Berlin, 2005; Dalton, 2010; Kroh, 2009; Lachat, 2008), y se han desarrollado sofisticados modelos matemáticos para operacionalizar y medir esta dimensión “espacial-racional” del comportamiento electoral (véase por ejemplo Adams, Merrill y Grofman, 2005; Best y McDonald, 2010; Merrill y Grofman, 1999).

Un concepto central para los modelos racionales del comportamiento electoral es el del “issue voting” o voto en función de las metas u objetivos que resultan relevantes o valorados

para la sociedad o determinados grupos sociales en una coyuntura específica. Al respecto se distinguen dos tipos de metas u objetivos: las metas controversiales (position issues) y las metas consensuales (valence issues). Las primeras se refieren a conflictos públicos en torno a objetivos de política o los medios para llegar a ellos: por ejemplo la disyuntiva entre promover una política económica orientada básicamente hacia el mercado externo o impulsar otra que busque desarrollar la industria y el mercado internos; o los debates en torno al rol de la iniciativa privada o la intervención estatal. En el plano de los “valores morales”, se pueden destacar los conflictos o debates que surgen en determinadas sociedades en relación al aborto y los derechos reproductivos, o los de las minorías sexuales.

Por otro lado, las metas consensuales (valence issues) apuntan a objetivos que son ampliamente compartidos por el conjunto de la población, como el control de la inflación; la necesidad de generar mayor empleo; luchar contra la delincuencia; reducir la pobreza; mejorar la calidad educativa; etc. La controversia pública en relación a estas metas gira en torno a cuál debería tener mayor prioridad y las percepciones respecto de qué candidatos o agrupaciones pueden ser más competentes para alcanzarlas.

Por supuesto, se trata de una distinción analítica y abstracta, ya que existen múltiples temas donde ambos tipos de metas u objetivos pueden estar interrelacionados. Por ejemplo puede haber consenso en una sociedad de que una prioridad de la política pública es mejorar el acceso universal y la calidad de la atención de la salud (meta consensual), pero al mismo tiempo existir fuertes controversias respecto de la mejor forma de hacerlo: promoviendo un acceso a través de sistemas públicos basados en la solidaridad social; o generando incentivos para la inversión privada en salud y sistemas de seguros individuales.

Las diferentes posiciones relativas entre los ciudadanos y los candidatos respecto de las metas controversiales se prestan más al análisis de la variante espacial de los modelos racionales del comportamiento electoral, puesto que las investigaciones pueden tratar de medir las distancias que los separan en relación a esas metas, identificando de esta manera a los segmentos de la ciudadanía más próximos a determinadas posiciones enarboladas por los candidatos y grupos políticos, con la finalidad de estimar y explicar su potencial respaldo electoral.

La segunda variante de los modelos racionales es la llamada “econométrica” o conocida en la literatura en inglés como *economic voting* o *pocketbook voting* (voto económico o con la “billetera”) (Duch, 2001; Duch y Stevenson, 2006, 2008; Nishizawa, 2009; Lewis-Beck y Paldam, 2000; Dorussen y Taylor, 2002). Esta perspectiva de análisis centra su interés en la medición del impacto de las variables económicas en la popularidad del gobierno y su posible respaldo electoral. La hipótesis central se basa en la dimensión de “vertical accountability” o “responsabilización vertical” de las democracias representativas. La idea es que el electorado responsabiliza al gobierno y a los actores políticos del estado de la economía y vota en función de la evaluación que tiene de su performance en este campo. Uno de los fundamentos de esta hipótesis es la concepción de que las elecciones sirven como mecanismo de control vertical de la acción de los políticos (Fearon, 1999), al ser un momento donde los ciudadanos pueden tomar la decisión de conservar o rechazar a los líderes políticos electos en función de su desempeño en el gobierno. Desde este enfoque, la decisión electoral de los individuos puede concebirse como un acto de evaluación retrospectiva del desempeño de quienes han ocupado cargos de responsabilidad gubernamental, o prospectiva del desempeño esperado en el futuro de las candidaturas en competencia. En general estas evaluaciones tienen un mayor efecto en el voto de los partidos en el gobierno que en el de los partidos de oposición.

En la introducción de una edición especial de la revista *Electoral Studies*, Lewis-Beck y Paldam (2000, pp. 114) ofrecen un resumen de los principales hallazgos de las investigaciones realizadas en relación al voto económico hasta finales del siglo pasado y que sintetizan en 11 puntos:

1. Las funciones que modelan la relación entre la evaluación de la economía con el voto por un lado, y con la popularidad del gobierno por el otro, son muy similares, pero presentan un mejor ajuste en el caso de la popularidad gubernamental.
2. Los cambios económicos pueden explicar hasta un tercio de los cambios en el voto.
3. Los principales aspectos de la economía que tienen efecto sobre el voto son el desempleo, el crecimiento económico y la inflación.

4. Los electores son miopes: en el voto pesa más la evaluación del estado de la economía próximo a la elección que la del pasado.
5. Las evaluaciones retrospectivas tienen mayor peso que las prospectivas, es decir qué es lo que se hizo en el pasado tiene mayor importancia que lo que se cree puede hacerse en el futuro.
6. Las evaluaciones sociotrópicas (el estado de la economía del país) tienden a tener mayor importancia que las egotrópicas (la situación económica del votante o su familia).
7. Hay una asimetría en la evaluación de las variables económicas: los eventos negativos tienen mayor efecto que los positivos.
8. No se sabe bien el tipo de información macroeconómica que manejan los electores ni cómo la obtienen.
9. La funciones que explican el voto por factores económicos son muy inestables: se observan grandes variaciones tanto entre países como dentro de un país entre diferentes elecciones.

Sobre la inestabilidad y variabilidad de las funciones del voto económico, Lewis-Beck y Paldam señalan tres posibles explicaciones. En primer lugar puede deberse a problemas teórico metodológicos, tanto vinculados a una adecuada especificación de las variables independientes como dependientes en los análisis como a problemas para su operacionalización de manera a que se permitan comparaciones más sistemáticas tanto sincrónicas como diacrónicas. Una segunda explicación son los tipos de problemas o estado mismo de la economía asociado a cada contexto electoral: situaciones de expansión o de recesión; deflación o inflación; alto o bajo desempleo; subempleo; etc. En tercer lugar, otra fuente importante de variación son los diversos diseños institucionales, tanto de sistema de gobierno, sistema electoral o sistema de partidos que permiten mediar entre la evaluación económica que hacen los electores y los resultados electorales o sus efectos políticos.

Varios autores señalan que la importancia del voto económico en la decisión electoral está relacionada con el diseño institucional. Un diseño institucional que asigna claramente las res-

ponsabilidades políticas respecto de la buena o mala marcha de la economía puede facilitar un razonamiento económico del votante o hacer que su percepción sobre el buen o mal estado de la economía influya más o menos en su decisión de votar (Whitten y Palmer, 1999). Un sistema presidencialista con un partido de gobierno que cuente con mayoría en el parlamento, permite que el ciudadano responsabilice más claramente al gobierno y al partido de gobierno de la situación económica del país. Cuando el sistema electoral permite la reelección presidencial, la decisión electoral puede simplificarse al convertirse la elección en un plebiscito respecto del desempeño del gobierno en el manejo de la economía.

En cambio, en países con un sistema de gobierno parlamentario, donde el parlamento se elige mediante un sistema proporcional, es probable que para formar un gobierno se requiera construir coaliciones parlamentarias entre partidos de diversas orientaciones programáticas, lo que dificulta la asignación de responsabilidades respecto de la marcha de la economía entre los diversos miembros de una coalición. Asimismo, cuando existe la posibilidad de un gobierno dividido, donde un partido controla el ejecutivo y otro el legislativo, determinar quién es responsable en mayor o menor medida de los resultados económicos de un gobierno puede ser más complicado.

La cantidad de partidos políticos que tiene el sistema de partidos también puede facilitar o dificultar el mecanismo de asignación de responsabilidades que subyace en el funcionamiento del voto económico. Sistemas bipartidistas o con pocos partidos, clarifican las alternativas sobre el rumbo que puede tener la economía en la eventualidad que uno de estos partidos gane. Por otro lado, sistemas multipartidistas o con partidos débiles que desaparecen y aparecen entre una y otra elección, generan mayor incertidumbre sobre el desempeño de eventuales gobiernos en el manejo económico.

Los análisis contemporáneos sobre la importancia del voto económico (véase por ejemplo: Lewis-Beck y Paldam, 2000; Dorussen y Taylor, 2002; Duch y Stevenson, 2008; Lewis-Beck y Ratto, 2013; Ratto, 2015; Klingemann, 2009; Nadeau, Niemi y Yoshinaka, 2002) consideran por lo tanto el conjunto de variables institucionales (sistema de gobierno, sistema electoral,

sistema de partidos) que pueden activar en mayor o menos medida el razonamiento económico del elector y su impacto sobre los resultados electorales.

1.3. Estructura social, partidos políticos, clivajes y comportamiento electoral

Como se ha visto, los primeros paradigmas teóricos sobre comportamiento electoral, donde la mirada analítica estaba fundamentalmente concentrada en el individuo-elector, surgieron en la sociedad norteamericana. En este contexto, los partidos Demócrata y Republicano, y las lealtades y adhesiones que van tejiendo con determinados sectores o grupos de la sociedad, resultan tener un rol central en los modelos teóricos resultantes, en particular en el caso del modelo de Michigan que es, junto con el modelo racional iniciado por los trabajos de Downs, uno de los paradigmas teóricos más influyentes hasta el día de hoy en este campo de estudios. Ello plantea una seria dificultad al momento de trasladar estos enfoques hacia otras sociedades democráticas que tienen sistemas y tradiciones políticas bastante diferentes al de los Estados Unidos.

La pregunta central es cuáles son los procesos que permiten la formación de lealtades políticas estables que sustenten la elaboración de un modelo teórico del comportamiento del individuo elector como el de Michigan. Ello nos lleva a considerar el rol de los partidos y del sistema de partidos en la configuración de las actitudes políticas de los ciudadanos de las democracias modernas.

La literatura sobre los orígenes y desarrollo de los partidos y sistemas de partidos es bastante extensa y prolífica.¹ El trabajo clásico de Maurice Duverger (1965) ubica el origen de estas organizaciones políticas en la confluencia y consolidación de dos procesos a lo largo del siglo XIX: la extensión de las prerrogativas de los parlamentos en el sistema de gobierno y la extensión del sufragio y del cuerpo electoral. Sin embargo, la aceptación de la existencia de los

¹Un compendio que reseña diversos enfoques para el estudio de la política partidaria en las democracias contemporáneas puede encontrarse en el manual de Party Politics, editado por Richard Katz y William Crotty (2006).

partidos políticos en la democracia moderna no fue un proceso fácil, autores como Sartori 1992) dan cuenta de cómo en los orígenes de la política democrática moderna (fines del siglo XVIII e inicios del XIX), una buena parte de sus “padres fundadores” (los políticos liberales ingleses, los revolucionarios norteamericanos y franceses), concebían a la política partidaria como un elemento negativo para la democracia, puesto que se tendía a entenderlos como facciones que debilitaban la unidad del cuerpo social y servían a intereses particulares por encima de los intereses universales.

Sin embargo conforme se fueron consolidando las instituciones políticas de la democracia representativa (el parlamento, las elecciones, la cultura política pluralista) y se expandía el cuerpo electoral mediante la universalización del sufragio, los partidos políticos fueron estableciéndose como un subsistema del sistema político que servían a fines centrales para su funcionamiento, lo que facilitaba su aceptación como actores políticos del juego democrático. Según Sartori, los partidos políticos se convierten en conductos de expresión e instrumentos de representación de intereses diversos en la sociedad, pero que a su vez forman parte de un todo puesto que canalizan, agregan y seleccionan las demandas sociales que pasan a ser objeto de discusión y negociación en la esfera política, permitiendo que se produzcan decisiones políticas alimentadas por información que proviene del cuerpo social y responda hasta cierto punto a sus exigencias y demandas.

Como señala Susan Scarrow (2006), los partidos políticos fueron aparecieron como un efecto secundario, no previsto ni deseado, de la liberalización y democratización política del siglo XIX , pero que finalmente van jugando un rol central de articulación entre la esfera política y la social: estructurando la oferta electoral; coordinado la acción ejecutiva y legislativa; movilizándolo al electoral; y reclutando a candidatos que busquen representarlo.

Al estructurar la oferta electoral, los partidos políticos van cumplir una función de socialización política que les permite a los ciudadanos contar con algunos de los elementos fundamentales para tomar una decisión política en el momento que son llamados a hacerlo: cuando votan en elecciones.

Desde una mirada sociológica, un trabajo clásico que reflexiona y analiza históricamente cómo se han formado estos vínculos entre el electorado y los partidos políticos es el texto coordinado por Martin Lipset y Stein Rokkan: *Party Systems and Voter Alignments*(1967).

Lipset y Rokkan parten de la premisa que cuando los electores van a las urnas en una elección tienen ante sí una serie de opciones que se presentan como “paquetes” históricamente dados de programas, compromisos y visiones del mundo. A lo largo de su reflexión, buscan responder a la pregunta de cómo se han ido formando esos “paquetes” en la historia de consolidación de los sistemas de partidos y su relación con los electores en las sociedades democráticas occidentales. Al consolidarse los sistemas de partidos, éstos se convierten en canales regulares para la expresión de conflictos e intereses sociales en la arena política, lo que a la larga tiene un efecto estabilizador del sistema político.

La noción de que los partidos son canales expresivos (idea que, como vimos, también es retomada por Sartori), les permite a Lipset y Rokkan afirmar que los partidos políticos que compiten entre sí en elecciones periódicas, han ayudado a las comunidades locales y grupos sociales diversos a integrarse al Estado Nacional. El rol integrador de los partidos se cumple a través de dos mecanismos: por un lado, cada partido construye una red de conexiones sociales con grupos específicos de la sociedad buscando representar sus intereses en la esfera política. Por otro lado, la competencia política y la diversidad de opciones políticas que se les ofrece a los ciudadanos en las elecciones, permite que se diferencie las lealtades políticas partidarias de la lealtad hacia el sistema en su conjunto. La idea es que si el acceso al poder depende de las elecciones, los ciudadanos tienen, a través del voto, la capacidad de hacer llegar sus exigencias o preferencias programáticas (representadas por los partidos que apoyan) al sistema político. En cambio, si existe un descontento respecto de la acción gubernamental, las elecciones también representan la posibilidad de cambiar la orientación del gobierno. De esta forma el descontento ciudadano se orienta hacia el partido en el gobierno y no hacia el sistema político en su conjunto, ya que propio sistema ofrece mecanismos para cambiar la orientación del gobierno. Puesto que la supervivencia de los partidos y su acceso al poder dependen de la existencia de

una política competitiva, los partidos políticos tendrán incentivos para sostener la vigencia del sistema democrático.

De acuerdo con Lipset y Rokkan, un sistema de partidos se irá consolidando en la medida que se vayan cristalizando una serie de relaciones entre los partidos que lo componen y la estructura social que buscan representar. Pero para que se constituya un sistema de partidos competitivo, es necesario que los partidos logren diferenciarse entre sí ante los ciudadanos, es decir que expresen conflictos, divisiones y controversias “fundamentales” que dividen al cuerpo social.

Los autores señalan que si bien los conflictos y divisiones surgen de una gran variedad de relaciones en la estructura social, sólo algunos pocos tienden a organizar la competencia política en un sistema determinado. Las divisiones centrales que han marcado la formación de los partidos políticos occidentales son el producto de dos revoluciones modernas: la revolución nacional y la revolución industrial.

La revolución nacional, que tiene que ver con los procesos de centralización del poder y consolidación de los Estados Nacionales, es una fuente de conflictos y divisiones sociales que han dado lugar a dos conjuntos de oposiciones en el seno de la sociedad: Por un lado una oposición centro – periferia, es decir entre las colectividades locales y regionales que buscan defender su autonomía tanto política como cultural, y la élites nacionales que han impulsado el proceso de centralización del poder. Por otro lado una oposición entre la iglesia frente al gobierno, que han sido fuente de conflictos respecto de los contenidos (laicos o confesionales) y el carácter que debe tener la identidad y la cultura nacional.

La revolución industrial da origen a su vez a otra serie de oposiciones y conflictos sociales. En primer lugar entre las regiones, localidades o grupos sociales que sustentan su reproducción sobre diferentes actividades dentro de la economía capitalista, en particular aquellas que dependen fundamentalmente de actividades primarias como la agricultura (las regiones rurales, los campesinos y agricultores y las élites terratenientes) que pasan a tener una relación conflictiva y de subordinación ante las regiones o grupos sociales que dependen de sectores secundarios o terciarios de la economía (las ciudades, las clases urbanas, las élites burguesas).

Otra línea de conflicto se sitúa entre las clases sociales propietarias y el proletariado, donde los conflictos sociales se expresan en términos de la lucha de clases de las sociedades capitalistas.

El resultado de estas dos revoluciones es entonces cuatro tipos de conflictos o ejes de división social fundamentales:

- Culturas locales o sometidas frente a culturas dominantes.
- Iglesia frente a gobierno central.
- Economía primaria frente a economía industrial.
- Trabajadores frente a patronos.

Sobre estos cuatro ejes de división se habrían asentado diferentes tipos de partidos u oposiciones políticas que buscan representar o expresar las demandas sociales de los grupos asentados en los diferentes lados de las líneas de frontera: partidos regionales; partidos liberales y conservadores; partidos confesionales o social cristianos; partidos radicales; partidos agrarios; partidos laboristas, socialistas o comunistas; etc.

El vínculo que se establece entre estas divisiones y conflictos sociales, los grupos sociales concernidos, sus organizaciones sociales y los partidos políticos que se asientan sobre ellas configura lo que se denomina clivajes sociales. Existe un debate en la literatura (Bartolini, 2005; Knutsen y Scarbrough, 1995; Mair, 2006) sobre la definición del término de clivaje y qué es lo que lo distingue de otros tipos de división social (por ejemplo la clase, la etnia, los partidos políticos, los grupos de interés). Siguiendo a Bartolini y a Mair, los clivajes son un tipo de división social compleja que implica la interrelación entre tres componentes: las divisiones objetivas en la estructura social (dimensión estructural); los mecanismos mediante los cuales los grupos sociales organizan sus intereses y los expresan (dimensión organizativa); y el grado en que los grupos desarrollan un sentido de identidad colectiva y solidaridad (dimensión normativa o cultural).

Stefano Bartolini 2005 sostiene que las divisiones sociales se producen cuando los individuos o grupos sociales mantienen posiciones o diferencias sustanciales en tres subsistemas de la

estructura social: el sistema de estratificación social; el sistema normativo o cultural; el sistema de acción social o la base organizativa que permite a los actores un cierto grado de coordinación de sus conductas.

Cuando las divisiones se producen únicamente sobre uno de estos subsistemas, Bartolini indica que estamos ante divisiones “simples”. Por ejemplo, si el único principio de diferenciación se basa en la posición que tienen los actores en el sistema de estratificación social, es decir el lugar que ocupan en la estructura económica y de reproducción material de la sociedad, nos encontramos frente a grupos que están divididos sobre la base de sus intereses materiales o económicos: los agricultores frente a los comercializadores de sus productos; los consumidores frente a los productores; los obreros frente a los empleados; etc.

Por otro lado si las diferencias se ubican únicamente en el sistema normativo, tenemos divisiones de carácter cultural: personas que hablan diferentes idiomas, tienen distintas confesiones religiosas o valores culturales.

En cambio si las diferencias se basan sólo en el sistema de acción social o la base organizativa tenemos divisiones de pertenencias: competencia o diferencias entre miembros de organizaciones distintas (empresas, asociaciones, instituciones, etc.)

Sin embargo, Bartolini sostiene que las divisiones simples no pueden sostener de manera duradera la consolidación política de una entidad, por tanto las divisiones sociales importantes son las divisiones complejas o “compuestas”, ya que son las “únicas capaces de generar las formas de acción política organizada que estudiamos generalmente: los movimientos sociales y políticos, los grupos de interés y los partidos políticos” (Bartolini, 2005, pp. 32). Como puede verse en el cuadro 1.1, sobre la base de la composición de diferentes ejes de diferenciación social, las divisiones sociales resultantes pueden ser de tipo:

- Corporativo: grupos de interés que tienen una base organizativa, como sindicatos o gremios.
- Social: grupos de interés que comparten algún nivel de identidad común (grupos étnicos, grupos religiosos)

- Político: Partidos políticos o movimientos sociales que comparten identidades comunes (valores, visiones del mundo ideología).
- Clivajes sociales: cuando se cristaliza una conjunción de los tres tipos de diferenciación que configuran líneas de frontera más o menos estables.

Cuadro 1.1: Tipos de División y Clivajes

		Divisiones Simples			Divisiones complejas			
Sistema de estratificación social	Orientación de interés	+	-	-	+	+	-	+
Sistema normativo	Orientación cultural / ideológica	-	+	-	-	+	+	+
Sistema de acción social	Base organizativa	-	-	+	+	-	+	+
División resultante		División de intereses	División cultural	División de pertenencia	División corporativa	División social	División política	Clivajes

Fuente: Bartolini (2005, pp. 32). Traducción propia

En tal sentido, siguiendo a Mair (2006): (1) los clivajes están enraizados en divisiones sociales relativamente permanentes, lo que da lugar al surgimiento de grupos identificables “objetivamente”; (2) un clivaje conlleva a menudo un conjunto de valores compartidos por los miembros del grupo; (3) un clivaje puede institucionalizarse en determinados tipos de organizaciones (partidos, iglesias, asociaciones, etc.). La figura 1.2 muestra esquemáticamente la relación entre estos componentes.

Figura 1.2: Componentes de los Clivajes



De acuerdo con Lipset y Rokkan, las orientaciones ideológicas vinculadas con los clivajes de clase social (asalariados y patronos) han sido tradicionalmente expresadas en términos de la izquierda y la derecha, que a su vez, denotan diferentes posiciones o intereses respecto de las desigualdades sociales y del rol del Estado en la economía de mercado. Otro de los clivajes centrales identificados por Lipset y Rokkan en la configuración histórica de los partidos políticos europeos, ha sido la discusión en torno al rol de la religión y la iglesia en la sociedad.

Estos dos ejes de división social (la clase y la religión) habrían servido de base para la formación de partidos liberales, conservadores, socialistas, comunistas, radicales y social cristianos en varios países europeos, y para los alineamientos electorales correspondientes con sus bases sociales. Con la profundización del proceso de secularización, el clivaje religioso habría derivado hacia la distinción entre orientaciones morales liberales o conservadoras, y perdiendo peso frente a la distinción entre izquierda y derecha, que es la que marca más claramente la posición relativa de las agrupaciones partidarias en el espectro político durante gran parte del siglo XX en las sociedades europeas.

Cuando el sistema de partidos se asienta sobre una estructura de clivajes estable, logra un nivel de cristalización importante, haciendo que la lucha o confrontación política en la arena electoral sea hasta cierto punto un reflejo de los conflictos sociales fundamentales que marcan la dinámica de una sociedad particular. Al cristalizarse los clivajes puede generarse un proceso de “pilarización”, es decir, se forman en la sociedad apoyos estables hacia determinadas estructuras organizativas políticas que atraviesan verticalmente un conjunto de asociaciones, grupos sociales o culturales y comunidades territoriales. En algunas sociedades, como la holandesa o la belga, el concepto de pilarización es frecuentemente empleado en el análisis político para dar cuenta de la forma en cómo ciertos partidos han logrado consolidar a lo largo del tiempo una base de apoyo que combina y articula verticalmente bases territoriales, lingüísticas, asociaciones religiosas, gremios, etc. Cada partido se asienta sobre estos pilares que adquieren una gran estabilidad y que recurrentemente explican en gran medida la forma en cómo se comportan los electorados de una elección u otra (sobre el caso de Bélgica ver los trabajos de: Frogner y Aish-van, 2003; Frogner, De Winter y Baudewyns, 2007)

La perspectiva de los clivajes sociales para analizar la relación entre sistemas de partidos y sociedad ha sido una de las más fecundas en cuanto a producción en sociología política,² ya que orienta al investigador hacia a identificación de conflictos fundamentales en una sociedad, la manera en cómo son representados en el sistema político a través de un entramado articulado de grupos y organizaciones sociales, que comparten una determinada visión del mundo que se refleja de alguna manera en identidades políticas y opciones programáticas. A su vez, esta articulación entre partidos y clivajes sociales ejerce un fuerza estabilizadora del sistema político democrático, convirtiéndolo en un mecanismo central para procesar el conflicto social a través de causas institucionalizados.

Sin embargo, como sostienen varios autores (Mair, 2006; Scarrow, 2006; Siavelis, 2006), la perspectiva de los clivajes no debe entenderse como un teoría de sobredeterminación de lo social respecto de lo político. La existencia de algunas divisiones sociales fundamentales no conlleva necesariamente a que partidos específicos se organicen para representarlas y logren constituir una estructura de clivajes sociales. Por ejemplo, Scarrow concibe a los partidos políticos como empresas que tratan de explotar las divisiones sociales existentes, transformando identidades sociales en identidades políticas. Ello resalta el rol activo que tienen los partidos en la construcción de los clivajes, la importancia de las decisiones tomadas por los líderes políticos en momentos históricos específicos y el contexto institucional que facilita o restringe la formación de nuevos partidos. Como señala Mair (2006), las divisiones sociales fundamentales que pueden traducirse en partidos políticos deben ser vistas como condiciones necesarias que facilitan la formación de estas organizaciones, pero el agente principal de esta construcción son los partidos u otras organizaciones que politizan las diferencias sociales y las trasladan a la esfera política.

La forma en cómo se articulan los clivajes con los sistemas de partidos en una sociedad concreta es pues un proceso histórico contingente. Depende tanto de éxito o fracaso de los propios partidos en generar esas articulaciones, como también de la centralidad específica de distintos tipos de clivajes. Pierre Martin (2000, pp. 32-33), citando a Dogan (1996), distingue

²Para un balance de algunos de las reflexiones teóricas e investigaciones empíricas que la obra de Lipset y Rokkan ha inspirado ver: Karvonen y Kuhnle (2001).

dos tipos de clivajes que dan lugar a diferentes configuraciones de partidos y sistemas de partidos: los verticales y los horizontales. En la constitución de clivajes verticales juegan un rol fundamental las divisiones basadas en el sistema normativo y cultural de la sociedad, donde las oposiciones se dan principalmente entre grupos diferenciados por identidades sociales fuertes (étnicas, religiosas, lingüísticas, regionales o comunitarias). Mientras que los clivajes horizontales tienen más bien su base en oposiciones de intereses sociales y económicos (la clase social, el nivel de ingreso, el ámbito urbano o rural de residencia, etc.). Dogan sostiene que los clivajes de tipo vertical implican conflictos sociales más intensos, puesto que lo que está en juego es la supervivencia y el tipo de relación (subordinada o dominante) entre grupos sociales con fronteras identitarias más impermeables, que pueden dar lugar a juegos de suma cero. En cambio, los conflictos “horizontales” se prestan más a negociaciones y repartos “cuantitativos” entre diversos grupos de interés.

Las sociedades donde los partidos políticos se construyen sobre la base de clivajes verticales y que han logrado consolidar un sistema democrático (los ejemplos citados son Holanda, Bélgica, Austria y Suiza) tienden a producir sistemas de gobierno de “coalición”, donde la negociación y los acuerdos entre los representantes políticos de las comunidades sociales (étnicas, religiosas, lingüísticas) que forman la nación se traducen en un reparto del poder entre los líderes de los diferentes partidos, que obliga a que las decisiones gubernamentales que se toman tengan un carácter consensual. Un mecanismo institucional para lograr la representación de los diversos grupos en este tipo de sociedades es la implementación de un sistema electoral de tipo proporcional. En este tipo de países, el sistema de partidos suele estar mucho más “pilarizado” que en aquellos donde los clivajes predominantes son los de tipo horizontal, que se prestan a un juego y una competencia política mucho más abierta y contingente.

Siguiendo a Mair (2006), debemos considerar que los clivajes tienden a persistir y ejercer un efecto estabilizador sobre el sistema político, el sistema de partidos y el comportamiento electoral ya que los intereses en juego resultan fundamentales para las sociedades. Asimismo, no es frecuente que identidades políticas alternativas aparezcan en la arena pública. Las identidades sociales adquieren mayores posibilidades de ser movilizadas políticamente cuando

grandes contingentes de votantes se incorporan al sistema político, y ello llega a un límite con la universalización del sufragio. Finalmente, es necesario considerar que las reglas electorales tienden a favorecer a los actores que ya están en el juego, constituyéndose en barreras de entrada a nuevas identidades y organizaciones políticas.

Al presentar una oferta estable (los “paquetes” de opciones mencionados por Lipset y Rokkan) de opciones políticas, los sistemas políticos con partidos basados en la estructura de clivajes sociales generan las condiciones para que el comportamiento electoral adquiera un importante grado de predictibilidad. Los partidos políticos, al articularse de manera continua con diversos grupos e identidades sociales, ejercen una función de socialización política, generando los procesos de identificación partidaria que proporciona los atajos cognitivos que le permiten al elector orientarse en una contienda electoral, de ahí que los modelos teóricos como los de Michigan hayan tenido un uso extendido en la investigación sobre el comportamiento electoral entre la década de los 50 y 70.

Un sistema de partidos estructurado en torno a clivajes estables tiende a producir fenómenos de alineamiento electoral. Un grupo de electores se considera electoralmente alineado en favor de un partido o tendencia política si este grupo se pronuncia regularmente, en diversas elecciones, en favor de ese partido en forma visiblemente superior al promedio del electorado (Martin, 2000, pp. 27-32). Por ejemplo, puede decirse que los sectores obreros de un determinado país se encuentran electoralmente alineados con el partido socialista, si el porcentaje de votos que obtienen los socialistas entre los obreros es superior a su promedio nacional en varias elecciones consecutivas. El concepto de alineamientos electorales está emparentado con otros dos conceptos derivados: los realineamientos y los desalineamientos electorales. Un realineamiento electoral³ significa un cambio duradero de los alineamientos electorales, se produce cuando hay una o varias “elecciones críticas” y desemboca en un nuevo periodo de estabilidad en los alineamientos electorales (Martin, 2000, pp. 33). Finalmente, la noción de desalineamiento implica el debilitamiento de las afinidades entre determinados grupos políticos y sectores de

³El concepto de realineamiento fue desarrollado por el politólogo norteamericano V. O. Key a partir de su análisis de la elección de F. D. Roosevelt en los años 30 y el periodo del New Deal, momento que marcó un viraje crítico de los sectores que hasta entonces habían venido votando tradicionalmente por el partido Republicano y que luego se orientarían hacia los demócratas (Key, 1955).

la ciudadanía, producto de la erosión de los clivajes vinculados a los alineamientos previos del sistema de partidos. Un grupo se desalinea de una opción política cuando su comportamiento electoral tiende a aproximarse al comportamiento promedio de la población, luego de que en varias elecciones pasadas se hubiera estado comportando en forma claramente diferenciada (Martin, 2000, pp. 34).

Los procesos de realineamiento y desalineamiento electoral, son entonces síntomas que puede indicar el cambio de clivajes y del sistema de partidos. Desde la década de los 70, varias investigaciones sobre el tema se han concentrado en responder a la pregunta de por qué, determinados clivajes sociales que sustentaban los sistemas de partidos en las sociedades occidentales han cambiado o perdido importancia. Siavelis (2006) distingue dos tipos de perspectivas de análisis en ese sentido. Por un lado un enfoque sociodemográfico, que resalta los cambios producto de la sociedad postindustrial (incremento de la importancia del tercer sector en la economía; entrada masiva de las mujeres en la arena económica y política; incrementos en los niveles educativos de la población; nuevos contextos de socialización para las generaciones jóvenes; etc.). Como consecuencia de estos cambios, las pertenencias a diferentes comunidades sociodemográficas se vuelven más fluidas y se genera mayor competencia entre las diversas redes de pertenencia social. Ello resquebraja los clivajes tradicionales que permitían articular posiciones en la estructura social más o menos estables, con identidades culturales y pertenencias organizativas.

La segunda perspectiva para analizar la transformación o debilitamiento de los clivajes es la del cambio cultural. Esta hace énfasis en la aparición de nuevos valores y temas que entran en la arena política.⁴ Relacionados también con los procesos transformación de las sociedades postindustriales, los nuevos valores resaltan la importancia de la autoexpresión y la autonomía individual, por sobre las determinaciones sociales tradicionales (familia, la religión, los grupos primarios de pertenencia). Temas como la relaciones de género, los derechos sexuales y reproductivos, las minorías sexuales o nuevas minorías culturales, adquieren mayor presencia en el debate político por fuera del sistema de partidos políticos existente.

⁴Una referencia central en esta perspectiva son los trabajos de Ronald Inglehart sobre la modernización y el cambio cultural (Inglehart, 2008, 1997; Inglehart y Welzel, 2005).

Todos estos procesos impactan en la desestructuración o reestructuración de los clivajes clásicos con diversas consecuencias (Siavelis, 2006): Por un lado, los partidos han dejado de ser el instrumento predominante y más efectivo para la representación de intereses. En segundo lugar, se produce una desconexión entre los componentes que conforman los clivajes, es decir: entre el sistema normativo y el sistema de estratificación social (cambios sociodemográficos y cambios de valores); entre el sistema normativo y la base organizativa de los partidos (cambios programáticos; pragmatismo político). En tercer lugar, aparecen nuevos conjuntos de partidos disociados de los clivajes tradicionales (por ejemplo partidos ecologistas o nuevos partidos de extrema derecha). Finalmente, adquieren importancia en el sistema político nuevas arenas de representación política, como los nuevos movimientos sociales (feminismo, ecologistas, gays, migrantes, antiglobalización, etc.) y los medios de comunicación y la opinión pública.⁵

1.4. Modernización cultural y la individualización de la decisión electoral

Varios autores (Clark y Lipset, 2001; Mayer, 2006; Norris, 2006; Rose, 2000; Thomassen, 2005), coinciden en señalar que en los años 60 y 70, la creciente volatilidad del voto y los procesos de desalineamiento político de diversos sectores sociales respecto de los partidos que tradicionalmente habían captado sus preferencias electorales, pusieron en cuestión la utilidad analítica de los modelos clásicos de Columbia y de Michigan, especialmente el énfasis en las variables relacionadas con los procesos de socialización, el peso de los grupos y clivajes sociales, o los mecanismos de identificación partidaria e ideológica. Entre los factores que contribuyeron a este proceso se encuentran los que hemos mencionado al final de la sección precedente.

En aquellos años, aparecieron nuevas perspectivas teóricas, basadas en estudios empíricos comparados, que daban cuenta de un proceso de modernización y desarrollo social (uno de cuyos indicadores es el incremento del nivel educativo de los ciudadanos y de la movilidad social) que genera grados de autonomía individual cada vez más amplios respecto de las restricciones o

⁵Sobre el debilitamiento de los vínculos entre partidos y ciudadanos ver también: Dalton y Wattenberg (2000); Dalton (2004); Diamond y Gunther (2001*a*); Karvonen y Kuhnle (2001)

determinaciones de los grupos sociales de pertenencia. Posteriormente estos desarrollos dieron lugar a la formulación de teorías de la “modernización cultural” (Barnes, 1997; Inglehart, 2008, 1997; Inglehart y Welzel, 2005; Norris, 2006; Thomassen, 2005), que postulan que el comportamiento político estará cada vez más influenciado por las orientaciones de valores asumidos por los individuos en forma cada vez más independiente de los grupos partidarios o sociales de referencia.

El declive del peso relativo de las variables sociológicas en la decisión electoral, así como el desapego de las identidades partidarias o ideológicas que se ha venido registrando en las investigaciones empíricas sobre el comportamiento electoral desde mediados de la década de los 60, han configurado la imagen de un electorado cada vez más sofisticado, cuyas decisiones dependen con menos frecuencia de las pistas provenientes de las fuentes tradicionalmente identificadas por los modelos de Columbia y de Michigan. Estos cambios sociales acompañaron un mayor énfasis en el desarrollo y uso de paradigmas teóricos que enfatizan el peso de los factores individuales y los procesos de decisión racional del electorado (issue voting, pocketbook voting) propios de los modelos racionales y económicos.

Sin embargo, una de las críticas que se formulan respecto de los modelos racionales, es la escasa capacidad y el déficit de información que tienen los ciudadanos comunes para manejar la complejidad de los asuntos públicos y comprender el funcionamiento del sistema político. Ello lleva a plantear la hipótesis de la racionalidad limitada del elector, enfocando el análisis en los procesos de decisión y el tiempo o dedicación que invierten para adquirir y procesar información, asumiendo que, por lo general, los electores siguen siendo personas poco competentes, políticamente hablando.⁶

Este déficit de información sigue siendo cubierto por varios tipos de atajos cognitivos o mecanismos heurísticos que le permiten al elector orientarse en el escenario político, identificar las posiciones de los candidatos respecto de los temas o metas en conflicto (issues) y así

⁶Para un análisis sobre el tema del conocimiento político de los ciudadanos y sus efectos sobre el proceso político en la sociedad norteamericana véase: Althaus (2003); Delli Carpini y Keeter (1996). Para una crítica del modelo racional de pocketbook voting y la información sobre la cual se basan los ciudadanos para formular sus evaluaciones retrospectivas de los gobernantes véase: Achen y Bartels (2004). Para un estudio sobre el conocimiento político y las desigualdades sociales en el Perú véase: Sulmont (2009a)

tomar una decisión. El problema es que estos atajos están cada vez menos condicionados por las variables tradicionales (el entorno social próximo del elector y los partidos políticos) y provienen de múltiples fuentes fragmentadas (entre ellas los medios de comunicación).

En tal sentido, varias investigaciones contemporáneas sobre el comportamiento electoral han buscado responder a la pregunta de cómo los ciudadanos obtienen y procesan su información para evaluar los temas en juego en una campaña, a los candidatos y las agrupaciones políticas. El rol de los medios de comunicación y los sondeos de opinión han sido algunos de los elementos tomados en cuenta en estos análisis. Una fuente de desarrollos teóricos en este campo, es la intersección de los estudios comunicacionales y de la psicología social, que analizan los efectos de encuadre (framing) o de activación de significados (priming) que pueden ejercer los medios o líderes de opinión en el debate político. Varios de los nuevos estudios sobre comportamiento electoral tratan de analizar con mayor detalle los mecanismos de procesamiento de información; la evaluación de la imagen y personalidad de los candidatos; y los efectos que pueden tener las campañas electorales el cambio de preferencias del elector (Knight y Marsh, 2002, pp. 175).

Un ejemplo de este tipo de enfoque es el trabajo de Richard Lau y David Redlawsk (2006), que adoptan una perspectiva que podemos aparentar a los modelos racionales, pero que se concentra en el análisis de los procesos cognitivos del elector. Estos autores discuten diferentes modelos teóricos que explicarían el proceso a través del cual los electores toman una decisión al momento de votar, poniendo énfasis en los mecanismos que son empleados y los costos en los que incurren los ciudadanos para adquirir y evaluar la información que sustentará su elección. Revisando la literatura sobre comportamiento electoral, los autores identifican cuatro modelos básicos para la toma de decisiones a nivel individual (Lau y Redlawsk, 2006, pp. 6-15).

El primer modelo, al que denominan de “Modelo 1: Elección racional”, consiste en la aplicación de una racionalidad utilitarista, basada en el interés individual, donde se sopesan desapasionadamente los costos y beneficios de decidir votar por una de las opciones electorales en competencia y se busca activamente toda la información disponible acerca de las trayectorias de los candidatos o partidos.

El segundo, llamado “Modelo 2: Socialización temprana y consistencia cognitiva”, es el modelo del elector descrito en los trabajos de Campbell y otros (1960) que hemos denominado la perspectiva socio-psicológica del voto o el modelo de “Michigan”. Desde el punto de vista del procesamiento cognitivo que adoptan Lau y Redlawsk, en este modelo la búsqueda de información por parte del elector es básicamente pasiva, ya que la decisión electoral se sustenta más en las predisposiciones, las pistas y atajos cognitivos formados mediante el proceso de identificación partidaria. En la decisión final del elector, la motivación central es la consistencia cognitiva del voto con las identificaciones partidarias.

El tercer modelo o de “Decisión racional rápida y frugal” es un modelo de decisión racional pero concentrada en determinados temas, que en líneas arriba hemos denominado “voto en función de metas y objetivos” (issue voting), en particular los objetivos y metas de tipo controversial (position issues) aunque no exclusivamente. Se trata de un modelo más “económico” y en cierta medida “eficiente” para el elector ya que la búsqueda activa de información para tomar una decisión se concentra en determinados temas de campaña que le resultan importantes (por ejemplo: el aborto, los derechos de las minorías sexuales, los impuestos, la nacionalización o privatización de empresas, etc.).

Finalmente el cuarto modelo o de “Racionalidad limitada y decisión intuitiva” implica que el elector realizará una búsqueda activa de información bastante limitada hasta alcanzar un umbral suficiente de información que le permita tomar una decisión con el mínimo de esfuerzo posible. En este caso se emplean una gran cantidad de atajos cognitivos (estereotipos y esquemas mentales) u otros mecanismos de heurística política. Aplicar una lógica heurística consiste en utilizar “atajos cognitivos que reducen soluciones de problemas complejos en operaciones de juicio más sencillas” (Carmines y Huckfeldt, 1988, pp. 246). Por ejemplo clasificar las alternativas o candidatos que se presentan en una elección en dimensiones con extremos opuestos: cercano / lejano; simpático / antipático; simple / complicado; fuerte / débil; autoritario / democrata; cercano a los ricos / cercano a los pobres; liberal / conservador; etc. La propia dimensión izquierda / derecha es un mecanismo heurístico para clasificar complejos programas políticos en un eje unidimensional.

Las fuentes que permiten esa clasificación pueden provenir del entorno social, de las conversaciones cotidianas, de los medios de comunicación, de las propias campañas electorales y de lo que en algunos estudios de opinión pública se conoce como el “clima de opinión predominante”. En el extremo de este modelo se ubican los electores que deciden en la misma cola de los locales de votación. Este modelo es similar al modelo 2 o de Michigan, ya que ambos se sustentan en lo que hemos llamado “atajos cognitivos” que simplifican la elección. Sin embargo, a diferencia del Modelo 2, en la construcción de estos atajos no intervienen mecanismos de identificación partidaria ya que éstos no se habrían formado a lo largo de su proceso de socialización política. Por otro lado, a diferencia del modelo de “Columbia”, reseñado en la sección anterior, el modelo de decisión intuitiva no implica que los atajos provengan necesariamente de los grupos o redes sociales de pertenencia de los electores, sino de una multiplicidad mucho mayor de fuentes, entre ellas y con cada vez mayor relevancia, aquellos que son producidos o reproducidos desde los medios de comunicación.

Lau y Redlawsk sostienen que lo más común en las sociedades contemporáneas es encontrar a electores que se comportan de acuerdo al Modelo 4, es decir que aplican una “baja racionalidad informativa”. Los electores puramente racionales e interesados en la política son más bien una excepción, la gente común y corriente no tiene ni el tiempo ni la determinación de adquirir toda la información necesaria como para sopesar todos los pros y los contras de la decisión de votar por una opción política o un candidato. En su propia propuesta teórica, los autores que estamos discutiendo sostienen que los electores se ven confrontados a otorgarle mayor peso a uno de dos objetivos al momento de invertir tiempo y recursos cognitivos para tomar una decisión electoral: la disyuntiva es entre tomar una “buena” decisión, o hacer una decisión “fácil”.

Qué es tomar una “buena decisión” o “votar correctamente” resulta un tema controversial. Puesto que no es posible contar con un principio objetivo que determine cuál de las opciones electorales en juego es mejor que la otra, un “voto correcto” no significa que una persona votó por el candidato que tenía la mejor propuesta o que “claramente” tenía las mejores posibilidades de llevar a término un buen gobierno. Desde el punto de vista de los electores,

sus preferencias son equivalentes y no existen principios científicos que determinen qué cosa es bueno o correcto para cada quien, eso es un tema de ética, moral o ideología. Lau y Redlawsk se preocupan de lo que llaman “una decisión de calidad” y sostienen que una “decisión puede ser juzgada de alta calidad en la medida en que se han seguido procesos de toma de decisión racionales (buscar toda la información posible sobre todas las alternativas plausibles, etc.)” (Lau y Redlawsk, 2006, pp. 15-16). Posteriormente se definen como “voto correcto” la decisión de voto que llega a ser la misma que aquella que se hubiese tomado en condiciones plena información” (Lau y Redlawsk, 2006, pp. 75). En otras palabras, podríamos decir que una persona vota “correctamente” si su voto es el mismo que el que hubiese emitido si es que hubiera contado efectivamente con toda la información necesaria para tomar esa decisión.

En el modelo de análisis de Lau y Redlawsk se toma en cuenta los factores que influyen en que una persona opte por el camino de una decisión “informada” o una “buena decisión” o por el camino de una decisión “fácil o rápida”, es decir, qué elementos pueden motivar al electorado a apartarse del “modelo 4” y conseguir más insumos para tomar una decisión. Como premisas se sostiene que los costos para embarcarse en un proceso de toma de decisiones “informado” serán asumidos por el elector cuando: a) la elección se perciba como de mayor importancia o temas más relevantes estén en juego; b) ansiedad respecto del desenlace de la elección sea mayor; c) las elecciones presentan alternativas más novedosas. Por otro lado los electores estarán menos motivados a buscar activamente más información si es que tienen otros intereses u obligaciones que compiten por su atención en el proceso electoral; hay mucha familiaridad o complacencia con las opciones en juego; el proceso de comparar las opciones resulta particularmente complejo y difícil; o tienen poco tiempo para tomar una decisión.

Un elemento interesante del trabajo de Lau y Redlawsk, es que encuentran que los electores que basan su decisión en los modelos 1 y 3 (elección racional “clásica” y elección racional “rápida”) tienden a producir evaluaciones más moderadas y menos polarizadas de los candidatos u opciones electorales que los otros dos. En este caso, pareciera que el sopesar y comparar las posiciones de los candidatos, buscando y procesando información que ayude a tomar una decisión, lleva a evaluaciones más matizadas y menos tajantes de las opciones electorales en

juego. En cambio, cuando los electores se sustentan más en atajos cognitivos (modelos 2 y 4) y la lógica heurística, se tiende a polarizar y resaltar más las diferencias entre los candidatos u opciones en juego. Por otro lado, cuando tomar una decisión resulta una tarea cada vez más compleja (como cuando se enfrentan muchos candidatos poco diferenciados entre sí), los electores que utilizan modelos que economizan el procesamiento de información (modelos 2 y 4) tienden a producir votos más “correctos” que los otros, tal y como se desprende de los resultados de los experimentos empíricos que los actores llevan a cabo para poner a prueba sus supuestos teóricos.

El consenso general de las investigaciones contemporáneas sobre comportamiento electoral (Rose, 2000, pp. 332-339) es que el declive de la influencia de los factores identificados en los modelos clásicos de Columbia y de Michigan, ha hecho que las múltiples y fragmentadas fuentes de pistas o atajos cognitivos que usan los ciudadanos a la hora de votar, configuren un patrón de decisiones electorales ecléctico y egocéntrico, dónde los elementos claves que son evaluados por los ciudadanos pasan a ser sus juicios sobre el desempeño en el gobierno de los actores políticos o la imagen de los candidatos. El declive del “voto sociológico” a lo largo del tiempo, ha estado acompañado de un incremento equivalente de voto en función a metas o temas específicos (issue voting). Aun así, la forma en como las metas o temas son escenificadas y representadas en la competencia política, está a su vez influenciada por las características y las reglas institucionales propias de dicha competencia, de ahí la importancia de tomar en cuenta la dimensión institucional en el análisis del comportamiento electoral.

A pesar de los cambios y las limitaciones de los modelos teóricos de base, éstos siguen siendo útiles en la medida que orientan la mirada del investigador en dimensiones complementarias e interrelacionadas con el comportamiento electoral. Siguiendo a Mayer (2006, pp. 26), puede decirse que el modelo sociológico nos lleva a considerar que el ciudadano-electador no es un individuo aislado, sino que vive en un territorio o en una comunidad, que participa en redes o grupos de vínculos interpersonales que influyen en la configuración de su identidad y de alguna forma sus intereses, creencias o valores. Por su lado, el modelo socio-psicológico apunta a la exploración de las actitudes y valores que estructuran la percepción que tienen los electores

del campo político y su experiencia con los integrantes del sistema de partidos. En cuanto al modelo racional o económico, éste nos invita a tomar en cuenta los componentes indeterminados y contingentes de la acción política, el margen de libertad, de autonomía y de estrategia que está presente en el voto, así como su reacción al contexto y coyuntura específica del momento electoral. Las consideraciones acerca del diseño político-institucional en el que se desenvuelven los actores políticos – las reglas del juego – pueden favorecer o desincentivar estrategias destinadas a activar o desactivar los diferentes factores que pueden ser tomados en cuenta por el elector en su decisión.

Finalmente, además de una decisión política, el voto puede ser una expresión simbólica de otras dimensiones de la vida social y política que van más allá de la competencia entre partidos y candidatos diferentes. Las elecciones son en muchas partes y para muchas personas un ritual cívico-social de integración o de afirmación de identidades comunitarias particulares (Mayer, 2006, pp. 26). Puede ser también un arma de protesta, de oposición o desafío al sistema político y social o a la oferta política dominante, que expresa el descontento, la insatisfacción o la pérdida de legitimidad de los actores e instituciones del sistema democrático para determinados grupos sociales (Perrineau, 2006).

1.5. Diseños institucionales y comportamiento electoral

La aceleración de los procesos de diferenciación social; la multiplicación de focos de interés político y movimientos sociales; la pérdida de legitimidad de los mecanismos de representación y de los partidos políticos; así como la extrema complejidad de las fuentes que proveen a los ciudadanos de los atajos cognitivos para orientarse en la política; ha provocado que los modelos que explicaban el comportamiento electoral sólo a partir de variables fundamentalmente individuales van perdiendo su potencia analítica. Ello motivó la adopción de enfoques que incorporaran variables macro sociales relacionadas a la estructura institucional de las democracias contemporáneas, en particular las características centrales del sistema político (presidencial, parlamentario o mixto), los sistemas electorales (mayoritarios o proporcionales) y los mecanismos organizados de representación política (el sistema de partidos).

En esta tendencia se ubica el Comparative Studies of Electoral Systems (CSES), que constituye un esfuerzo de colaboración internacional entre investigadores de diferentes países e instituciones interesados en el estudio de los procesos de representación democrática y comportamiento del elector. Como esfuerzo conjunto se inició en 1994 a partir de la conferencia organizada por el International Committee for Research into Elections and Representative Democracy en Berlín, donde se definieron las bases para la cooperación internacional en la investigación comparada acerca del comportamiento electoral de los ciudadanos de los países con regímenes democráticos. El proyecto CSES se caracteriza por adoptar un diseño integral en la investigación electoral comparada, que supone analizar conjuntamente la relación entre diseños institucionales, sistemas de representación política, características sociales del elector y comportamiento electoral (Grosse y Appleton, 2009; Schmitt y Wessels, 2005).

Los proyectos de investigación como los del CSES y similares, tratan de analizar el peso combinado de los factores sociales, individuales e institucionales en el comportamiento electoral.⁷ Uno de los principales elementos de la discusión respecto de los factores institucionales y su relación con el comportamiento electoral individual gira en torno a si los efectos de las instituciones sobre el elector son directos o indirectos. La lógica analítica de la mayoría de estos trabajos se basa en los modelos de elección racional, bajo el supuesto que el diseño institucional introduce incentivos o restricciones que son tomados en cuenta por los actores políticos (los votantes) a la hora de tomar decisiones respecto de si participar en una elección o votar por una determinada opción política. Estas decisiones implican un cálculo racional que compara la utilidad esperada de una acción (participar en una elección o votar por un candidato o lista de candidatos) respecto de los costos que ésta tiene para el actor (ir a votar, permitir que una opción gane o pierda, verse o no representado en el parlamento).

Según Anderson, por efectos directos se entiende que la decisión de los votantes individuales resultan afectadas por los incentivos generados por las reglas de juego (Anderson, 2007, pp. 594). Un ejemplo recurrente de investigaciones sobre incentivos directos sobre el votante es el tema de la participación electoral (Nevitte et al., 2009; Norris, 2006; Sigelman y Berry, 1982),

⁷Véase: Curtice (2002); Dalton y Anderson (2010); Dalton y Klingemann (2007); Klingemann (2009); Knight y Marsh (2002); Norris (2006)

en este caso las reglas electorales o la organización electoral (voto obligatorio o voluntario; sistema de registro de electores; distribución de los locales de votación; posibilidades de voto por correspondencia o internet; etc.) generan costos o incentivos que pesan en forma directa en la decisión individual de participar en la elecciones.

En cuanto a los efectos indirectos, el razonamiento implícito es que las instituciones políticas, especialmente el sistema de gobierno y el sistema electoral, tienen consecuencias en las decisiones del elector a través de otras variables intervinientes (Anderson, 2007, pp. 594). La lógica causal vendría a ser la siguiente: las instituciones electorales afectan un conjunto de variables intermedias, las cuales a su vez, son las que pueden tener algún tipo de efecto en la variable dependiente final (la decisión del elector).

Un ejemplo de una investigación donde se analizan efectos directos e indirectos del sistema electoral en el comportamiento del elector es el trabajo de Pippa Norris (2006). Usando los datos del proyecto CSES, la autora busca identificar qué efectos e incentivos tienen sobre el comportamiento de los actores políticos (los partidos, los candidatos y los electores) las diferentes configuraciones posibles en el diseño electoral: los sistemas electorales mayoritarios o proporcionales o la estructura de las candidaturas (por lista, plurinominales, uninominales). Las múltiples variantes resultantes del sistema político y la forma en cómo se le presenta la oferta electoral a los ciudadanos (parlamentarismo, presidencialismo; multipartidismo, bipartidismo; candidaturas partidarias o individuales) tiene efectos en las estrategias de los actores políticos y puede activar diferentes factores que entran en juego en la decisión individual del elector. En el caso de los sistemas electorales proporcionales, donde los partidos pueden acceder a cuotas de poder con el respaldo de porciones modestas del electorado, las reglas electorales podrían reforzar estrategias de “unión” o campañas que enfatizan la adhesión de determinados segmentos de la sociedad (bonding strategies), activando clivajes o identidades sociales y reforzando el peso de las metas controvertidas (position issues) en los procesos de decisión racional del elector.

Por otro lado, los sistemas mayoritarios, basados en el principio de otorgar el poder político a los candidatos o agrupaciones que obtengan la primera mayoría relativa de votos (first past

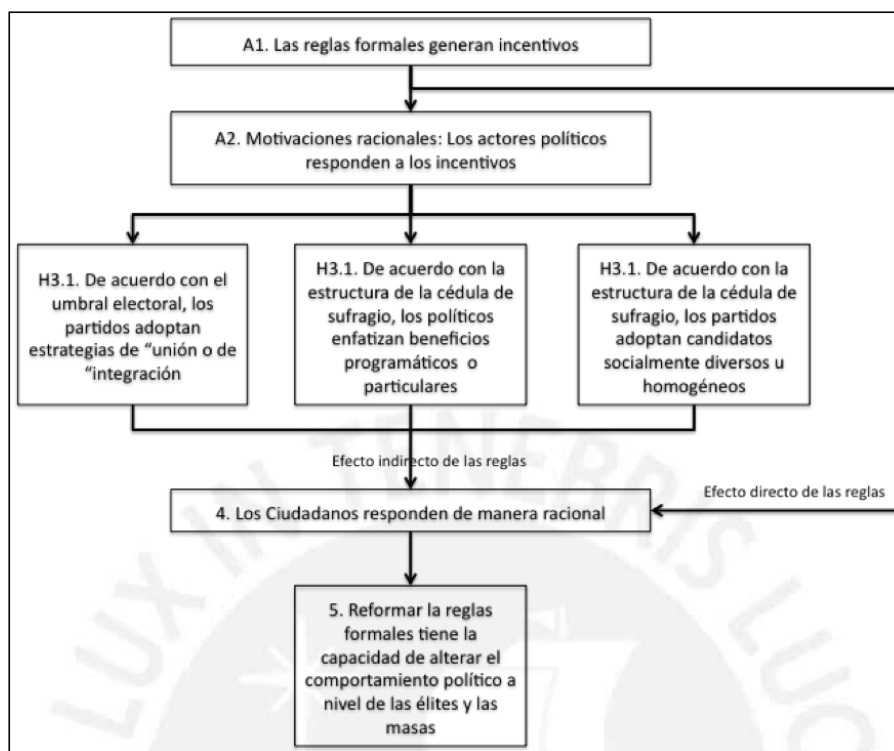
the post, o FPTP), tienden a reforzar en las campañas de los partidos estrategias “atrápalo todo” (catch-all strategies) buscan “integrar” diferentes y amplias bases e intereses sociales en forma simultánea (bringing strategies). En estos contextos, los temas o metas consensuales (valence issues) y la capacidad percibida de los actores políticos para llevar a cabo estos programas, puede reforzar el peso de las evaluaciones prospectivas o retrospectivas de los candidatos o agrupaciones en competencia, o las consideraciones derivadas del pocketbook voting en la decisión del ciudadano.

El sistema presidencial o parlamentario, o si las candidaturas se presentan como listas partidarias o como candidatos individuales, puede también afectar el foco de la evaluación de los ciudadanos y la búsqueda de pistas o atajos cognitivos que puedan orientar sus decisiones. Los sistemas de candidaturas partidarias con listas cerradas centran la atención en el desempeño de los partidos, sus vínculos con determinados segmentos o sectores de la sociedad, o su relación con determinados clivajes históricos, incrementando la influencia del entorno de los grupos de referencia de los ciudadanos en la decisión electoral. En tanto, las elecciones presidenciales, los mecanismos uninominales para elecciones parlamentarias o que favorecen las candidaturas individuales (como el voto preferencial) ponen los reflectores sobre las características personales (integridad, confiabilidad, competencia), la imagen o el carisma del candidato que es proyectada en los medios de comunicación.

En la investigación de Norris, la variable interviniente en el modelo causal que vincula el diseño institucional (las reglas de juego electorales) y el comportamiento del elector, resulta ser la estrategia de los partidos políticos. Estos efectos se traducen en diversos componentes del comportamiento individual del elector: la participación electoral así como los mecanismos cognitivos que son puestos en juego y el peso que adquieren a la hora de tomar una decisión. En la figura 1.3 se presenta el esquema de hipótesis del trabajo de Norris, elaborado sobre los supuestos de su teoría de la elección racional institucional (“rational choice institutionalism”).

En un texto editado por Hans-Dieter Klingemann (2009), varios autores vinculados al proyecto del CSES han puesto a prueba una serie de hipótesis acerca de los efectos del sistema electoral y del sistema de partidos en el comportamiento electoral. Para ello se han analizado

Figura 1.3: Ejemplo de hipótesis del “Rational choice institutionalism”



Fuente: Norris (2006, pp. 8). Traducción propia

encuestas postelectorales correspondientes a 34 elecciones parlamentarias y 11 elecciones presidenciales llevadas a cabo en 33 democracias contemporáneas entre 1996 y 2002. Los países incluidos en la muestra del CSES se distribuyen a lo largo de 4 continentes (Europa, América, Asia y Oceanía), presentando una combinación de democracias “viejas” y “nuevas”; regímenes parlamentarios y presidencialistas; sistemas electorales mayoritarios o proporcionales con diferentes mecanismos de voto (por lista, por candidatos). Constituye una fuente única para analizar en términos comparados la relación entre variables macro sociales (niveles de desarrollo económico y humano), variables institucionales (sistema de gobierno, sistema de partidos y sistema electoral) y variables micro sociales como el comportamiento individual del elector, sus opiniones y actitudes respecto del sistema político.

En los trabajos inspirados bajo el modelo metodológico del proyecto CSES, la variable dependiente central es el comportamiento individual del elector, particularmente en dos dimensiones centrales: la participación electoral y el voto mismo por una determinada opción política.

Asimismo se incluyen diferentes variables independientes a nivel individual, derivadas de las teorías clásicas sobre el comportamiento electoral, y que se supone tienen efectos en las variables dependientes: edad, el género, el nivel socioeconómico y otras características socioculturales (modelo de Columbia); identificación partidaria y posicionamiento en la escala izquierda derecha (modelo de Michigan); evaluación de la economía, posición respecto de determinados temas (issues) opiniones respecto del desempeño del sistema político (modelos racionales y/o económicos).

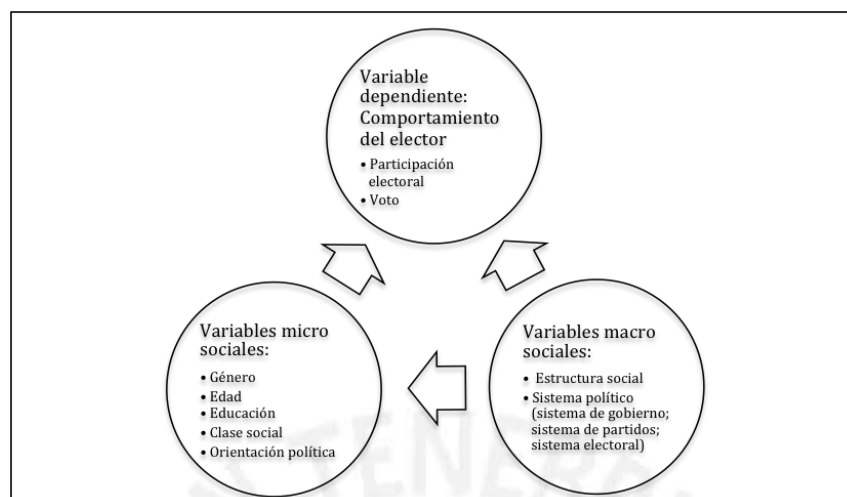
Como se ha mencionado, a nivel macro social, las variables independientes de tipo institucional que considera el diseño del CSES están relacionadas con el sistema de gobierno y su antigüedad (presidencial, parlamentario, mixto; democracias “viejas” y “nuevas”); el sistema de partidos (bipartidista, multipartidista moderado o multipartidista extremo; polarizado o no); el sistema electoral (mayoritario, proporcional, mixto). Finalmente, otro tipo de variables macro sociales que este diseño de investigación permite controlar o tomar en cuenta tienen que ver con el grado de desarrollo económico y la estructura social de cada país.

A partir de estas variables micro sociales (comportamiento electoral y características del elector) y macro sociales (sistema institucional y estructura social), se pueden analizar tres tipos de relaciones o efectos entre las variables macro sociales y micro sociales (Klingemann, 2009, pp. 4-5):

1. Relaciones entre variables dependientes micro sociales (comportamiento del elector) y variables independientes macro sociales (sistema institucional y estructura social).
2. Relaciones entre variables independientes micro sociales (características del elector) y variables independientes macro sociales.
3. El tipo o fuerza de las relaciones entre las variables dependientes e independientes micro sociales, bajo diferentes condiciones o configuraciones de las variables macro sociales.

Los trabajos presentados en el texto editado por Klingemann han puesto a prueba 32 hipótesis acerca de la relación entre estas variables, de las cuales 12 han sido rechazadas y 20 encuentran evidencia empírica que las respalda. Algunas de estas hipótesis analizan el efecto

Figura 1.4: Esquema de relaciones entre variables del proyecto CSES



de las variables independientes (macro o micro sociales) en la participación electoral, mientras que otras consideran como variable dependiente el voto por una opción política determinada o la lógica del elector que ha sido privilegiada al momento de tomar esa decisión.

Por ejemplo, en relación a la participación electoral, Nevitte y otros (2009) encuentran evidencia empírica de que conforme se incrementa la desproporción entre el voto y la distribución de escaños en el parlamento, lo que es más común en distritos electorales pequeños que en los grandes, mayor será la cantidad de electores que se abstengan de votar. Sin embargo, en ese mismo trabajo no se aprecia un efecto significativo del sistema electoral (básicamente el tamaño de las circunscripciones) en el tipo de relación que los factores socioeconómicos (ingreso, edad, educación, género) tienen con la participación electoral.

Por su lado, Banducci y Karp (2009) comprueban que cuanto más partidos efectivos estén representados en el parlamento, al ausentismo electoral tiende a disminuir en la medida que los electores encuentran que los actores políticos capaces de representar sus intereses logran ocupar espacios de poder en el sistema político. Asimismo, los sistemas electorales de representación proporcional que tienen voto obligatorio, tienden a incrementar la participación electoral. La explicación radica en que este tipo de diseño electoral, en la medida que permiten una mayor correspondencia entre el voto y la posibilidad de ocupar un escaño en el parlamento, logra incrementar el sentido de efectividad del voto del elector, lo que motiva su asistencia a las

urnas. En este caso, se comprueba que el diseño electoral tiene impactos en las percepciones de efectividad del voto, las cuales a su vez tienen efectos positivos en la asistencia a las urnas.

Otras proposiciones que logran pasar la prueba de la evidencia empírica tienen que ver con las preferencias que el electorado manifiesta con su voto. Un ejemplo es el tema del voto económico (pocketbook voting), el cual por lo general adquiere mayor relevancia cuando en las elecciones participan candidatos o partidos que ya están en el poder (“incumbents”) y buscan ser reelegidos. Por ejemplo, el trabajo de Nishizawa (2009) encuentra que el voto económico tiene un mayor impacto en la decisión de votar por el candidato o partido que se presenta a una reelección en sistemas parlamentarios que en sistemas presidencialistas. La explicación de esta relación radica en el hecho de que en los países con sistemas parlamentarios se vota por un solo órgano del cual emana el gobierno responsable de la conducción política del país, en cambio en los sistemas presidenciales generalmente se eligen dos órganos de gobierno, por tanto, en el primer tipo de países existe una mayor claridad respecto de qué institución es responsable de los efectos económicos de la acción gubernamental. Por otro lado, el voto económico tiene un mayor impacto en los países donde el parlamento se elige por sistemas de pluralidad que en sistemas proporcionales. Ello vendría a comprobar de alguna forma la idea que los sistemas mayoritarios tienden a incidir sobre la accountability de los gobiernos, ya que su principio fundacional tiene que ver con la posibilidad de que el voto tenga efecto en la conformación de gobiernos más que en la representación de diferentes intereses o grupos sociales.

Otros efectos del diseño institucional y el sistema de partidos sobre el voto individual analizados en la compilación de Klingemann se enfocan en el voto ideológico (Kroh, 2009); la forma en cómo los electores manejan la complejidad del entorno político (Klingemann y Wessels, 2009); o los factores que pueden incrementar o mitigar el voto estratégico (Gschwend, 2009).

En el caso del voto ideológico (el efecto de la clasificación izquierda – derecha del entrevistado y su opción electoral), el trabajo de Kroh comprueba que cuanto mayor es el número efectivo de partidos, el peso del voto ideológico tiende a disminuir, ya que ello incrementa la posibilidad que diferentes partidos tengan posiciones similares sobre los temas en juego en la

elección, dificultando la diferenciación ideológica entre los partidos en el electorado. Sin embargo, el nivel de polarización entre partidos tendría un efecto directo en el voto ideológico. En general, los datos del CSES muestran que el peso del voto ideológico, y por lo tanto la utilidad de los modelos espaciales del voto para dar cuenta de la decisión del elector, tiende a ser mayor cuanto menos complejo es el sistema de partidos (pocos partidos que se diferencian claramente entre sí).

Otro hallazgo relevante de los estudios del CSES concierne al voto estratégico. Este tipo de comportamiento electoral se define como el voto por un partido o candidato que no es la opción más preferida por el elector (voto “sincero”). Las teorías respecto del voto estratégico se basan en la proposición de Duverger (1992) sobre los “efectos psicológicos” de un sistema electoral mayoritario de una sola vuelta. Duverger sostiene que este tipo de sistemas (conocidos también como “First Past The Post” o FPTP) tenderían a favorecer un sistema bipartidista al recompensar por encima de proporcionalidad de los votos, a los partidos que ganan la elección en una circunscripción, independientemente de si ganaron por mayoría absoluta o relativa. Según Duverger, ello enfatizaría el efecto reductor del sistema electoral sobre el sistema de partidos, penalizando a terceros partidos o partidos pequeños que no logren una pluralidad de votos en un distrito electoral. En lo que se refiere al comportamiento del elector, una consecuencia “psicológica” de este sistema electoral sería que los electores inclinados inicialmente a votar por un partido con pocas posibilidades de obtener un escaño o cuota de poder en un sistema de pluralidad, podrían ver su voto “desperdiciado” o perdido, de ahí que se produciría una “tendencia natural a votar por el menos malo de sus adversarios para evitar el éxito del peor” (Duverger, 1992, pp. 39).

Usando los datos del CSES, Thomas Gschwen (2009) demuestra que el principio electoral (mayoritario o proporcional) no es la única variable explicativa del voto estratégico, sino que éste resulta también influenciado por el tamaño del distrito electoral, independientemente del tipo de sistema electoral. Conforme disminuye el tamaño de las circunscripciones electorales, tanto en sistemas mayoritarios como proporcionales, se observa una mayor proporción de vo-

tantes que se comportan estratégicamente, votando por un partido o candidato que no es el más cercano a sus preferencias “sinceras”.

Más recientemente, Dalton y Anderson (2010) han editado un volumen que sigue la agenda del modelo de investigación propuesto por el proyecto CSES, analizando los efectos directos e indirectos del contexto institucional y macro político en el comportamiento electoral individual. Utilizando los datos del módulo II del proyecto CSES, que contiene resultados de encuestas poselectorales realizadas entre el 2001 y el 2006 (incluyendo la encuesta peruana de las elecciones del 2006). En este volumen se revisan nuevamente los efectos de las reglas institucionales en la participación electoral y se presta especial atención a las diferenciaciones al interior de los sistemas de partidos y sus implicancias para las decisiones para el votante individual. Una de sus principales conclusiones es que las “instituciones formales importan sólo en la medida que estructuran la oferta electoral y los incentivos para los actores políticos”, pero que más allá de las reglas formales, son las “características de los sistemas de partidos y de los partidos mismos las que enmarcan la elección del votante y su comportamiento en su sentido más próximo” (Dalton y Anderson, 2010, pp. 252). En tal sentido, los autores sostienen que la investigación sobre los efectos del contexto político en la decisión electoral debe enfocarse mucho más en las características dinámicas del sistema de partidos y de las reglas informales que las estructuran, más que en el diseño institucional formal de los sistemas electorales.

Por lo general, la mayoría de trabajos que incorporan el efecto de las instituciones en el comportamiento electoral sostienen que éstas tienen más efectos indirectos que directos en la decisiones del votante individual (con excepción de aquellos elementos que facilitan o no la participación electoral, es decir ir a votar). El principal efecto de las instituciones en el comportamiento del elector es su capacidad para restringir y configurar la forma en cómo se presenta la oferta electoral. Si bien las preferencias políticas que tienen los individuos pueden ser múltiples y atribuidas a muchas causas, las opciones que tienen al frente en un proceso electoral no son ilimitadas. Como señalan Sniderman y Levendusky, las instituciones políticas (el sistema de partidos y el sistema electoral) tienden a reducir la variedad de opciones disponibles para el elector, configurando “conjuntos de elección” (“choice sets”) con ofertas

restringidas independientes de las preferencias individuales de los votantes. Incluso la forma en cómo se presenta esa oferta ante la ciudadanía hace aparecer o no ciertas características del individuo-elector que resultan ser más o menos relevantes a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, la posición izquierda – derecha del elector se presenta como una variable explicativa central de los modelos espaciales del voto cuando los partidos enfatizan sus diferencias ideológicas entre sí en el debate político, y no necesariamente porque haya una profunda y consistente ideologización política de la ciudadanía que se refleja en las opciones programáticas de los partidos (Sniderman y Levendusky, 2007, pp. 439-441) (véase también: Martin, 2000, pp. 18.21). Por tanto, los diseños y características institucionales del sistema político condicionan la manera en cómo aparece la oferta política ante el electorado, y ésta a su vez puede “activar” o “desactivar” influencias sociales o procesos cognitivos y racionales que entran en funcionamiento a la hora de que los individuos toman decisiones electorales. Sin embargo, si algunos efectos son “activados” o no, depende mucho más de los contextos contingentes específicos de la competencia electoral, lo que está en juego y la forma en cómo las estrategias electorales de los partidos resaltan algunos temas o afinidades con el electorado más que otros.

1.6. La infraestructura de la decisión electoral y las nuevas democracias

Richard Rose (2000, pp. 338-339) indica que las últimas décadas del siglo XX se observó un cierto paralelismo entre los procesos de desalineamiento del voto de los partidos históricos en las democracias occidentales, y los problemas de volatilidad partidaria y electoral en los nuevos países democráticos (Europa del Este y América Latina). La coincidencia de ambos procesos llevaría a pensar que están relacionados con el declive de los factores tradicionales que daban cuenta del comportamiento electoral en los modelos clásicos. Sin embargo, esta similitud es solo superficial ya que existen importantes diferencias entre ambos tipos de sociedades.

En las democracias occidentales más consolidadas, los fenómenos de desalineamiento, fluidez electoral e incremento de la importancia del issue voting, han sido precedidos por un

periodo histórico donde la conformación de clivajes hacía que la estructura social guardaba importantes vínculos con el desarrollo de los sistemas de partidos y las ideologías políticas, lo que daba sentido a modelos de explicación del comportamiento electoral como el sociológico o socio-psicológico. Si bien es cierto que este marco político tradicional ha sido creado en contextos muy diferentes a la realidad contemporánea, se trata de un antecedente histórico que no solamente ha condicionado e influenciado el posterior desarrollo del sistema político (los partidos, las ideologías, las orientaciones programáticas) y sus tradiciones, sino que constituye un marco o una infraestructura que sigue proporcionando algunas de las pautas que les permiten a los actores políticos (candidatos y ciudadanos) orientarse en el escenario político-electoral. El contexto actual donde se desarrollan la vida política de las democracias occidentales tiene altas probabilidades de perpetuar la fluidez y volatilidad electoral en el futuro, pero el proceso político transcurre en un marco de instituciones, tradiciones y culturas políticas consolidadas que le dan cierto nivel de inteligibilidad a la política.

Rose (2000, pp. 339) señala que la volatilidad electoral y la individualización de la decisión del voto en las democracias occidentales, tiene un correlato análogo con la naturaleza cada vez más compleja, fluida e impredecible de la opinión pública. Estas señales de incertidumbre que surgen desde los ciudadanos podrían forzar a los partidos políticos y a sus líderes a ser más sensibles y atentos a las demandas que surgen desde la opinión pública, lo que puede tener efectos positivos en la responsabilización (accountability) del sistema político frente a la sociedad.

En el caso de los nuevos países democráticos, los problemas de volatilidad tanto electoral como partidaria, se producen en un contexto donde no hay antecedentes históricos que conformen clivajes sociales y los articulen con un sistema de partidos y un conjunto de instituciones democráticas que regulen la confrontación electoral en un marco competitivo de larga duración.

Específicamente para América Latina, Kenneth Roberts evalúa la pertinencia del concepto de clivajes para describir la conformación de sistemas de partidos en la región (Roberts, 2002*a,b*; Roberts y Wibbels, 1999). Este autor sostiene que los partidos políticos tienen raíces relativamente superficiales en la estructura social, por lo que no se han podido

construir el tipo de articulaciones que caracteriza a los clivages sociales de las sociedades democráticas occidentales que se describen en el clásico trabajo de Lipset y Rokkan. El bajo nivel de industrialización, la poca extensión de la clase obrera y las clases medias, así como la heterogeneidad estructural que caracteriza a las sociedades latinoamericanas, dificultan la representación política de vastos sectores en estos países, en la medida que su incorporación a la comunidad política nacional es limitada, subordinada a ciertas élites de poder, o simplemente excluyente, generando en este procesos ciudadanía diferenciadas o de geometría variable.

Según Roberts, los partidos políticos en América Latina han buscado generar apoyos sociales sobre bases heterogéneas y transversales, lo que impide la conformación de conexiones estables entre posiciones en la estructura social, identidades culturales y estructuras organizativas. Si bien el autor reconoce que durante la segunda mitad del siglo XX en algunos países ciertos partidos políticos han podido cultivar relaciones más estables con determinados segmentos de sus sociedades a partir de proyectos modernizadores impulsados por el Estado y por políticas populistas, la crisis económica que América Latina atravesó durante la década de 1980 erosionó severamente estos vínculos, lo que tiene efectos negativos en el desarrollo de capacidades del sistema de partidos para representar en forma más estable intereses de determinados grupos sociales en la arena política democrática.

Así como en América Latina, en gran parte de las sociedades en las que la democracia electoral es un fenómeno de reciente institucionalización, el reto consiste en desarrollar una estructura básica para la elección política, precisamente el tipo de marco político que históricamente ha definido las opciones electorales en las democracias occidentales. En la medida que los procesos de individualización de la decisión electoral están relacionados con los procesos de modernización social y cultural por los que también atraviesan las nuevas democracias, la posibilidad de que en estos países se construya una “infraestructura de la decisión electoral” similar a la de las democracias occidentales resulta cada vez más complicada. Por lo tanto, uno de los problemas que deben afrontar las nuevas sociedades democráticas es la conjunción tanto de la fluidez de la racionalidad del electorado como de la volatilidad de la “oferta política”. Ambos fenómenos incrementan exponencialmente los niveles de incertidumbre de la política,

lo que puede tener serias consecuencias en la estabilidad política de las sociedades, y por lo tanto en las condiciones que aseguran un desarrollo social sostenible a mediano y largo plazo.

Estas consideraciones son particularmente pertinentes en el caso peruano, donde no solo se ha experimentado un desalineamiento radical de los partidos políticos que formaban parte del sistema de partidos originado en la transición democrática de 1980, sino que además, desde la década de los 90 la volatilidad electoral de los partidos políticos se ha incrementado significativamente (Roncagliolo y Meléndez, 2007, pp. 403).



Capítulo 2

Diseño para el Estudio del Comportamiento Electoral

2.1. Esquema analítico para el estudio del comportamiento electoral

Como se ha visto en el capítulo precedente, los estudios sobre el comportamiento electoral tienen en su base tres grandes modelos teóricos clásicos que explicarían el voto a nivel individual: el modelo sociológico; el modelo sociopsicológico; y los modelos “racionales”. Como se ha indicado, el primero de ellos enfatiza el peso que tienen las variables sociales de pertenencia a grupos, estamentos o clases sociales en el voto del elector individual. El segundo de ellos, apunta por su lado a relevar la importancia de la identificación del elector con los partidos políticos, la idea es que el elector votará por una u otra opción en función del grado de identificación que tiene con los partidos políticos que estructuran la competencia electoral en un país.

El tercer tipo de modelos teóricos son los llamados racionales, el supuesto es que el elector orientará su voto en función de la evaluación racional que haga comparando sus preferencias con la oferta política de los candidatos o partidos en campaña. En los modelos racionales se distinguen básicamente dos variantes: los modelos espaciales y los modelos “económicos”. Los

modelos espaciales explican el comportamiento del elector en función de la distancia percibida entre sus preferencias y la oferta de los candidatos, ya sea respecto de temas específicos (“issues”), orientaciones ideológicas o programáticas. Por su parte, la hipótesis central de la variante “económica” de los modelos racionales sostiene que el elector decidirá su voto evaluando el desempeño que tienen los actores políticos en el manejo de los principales problemas del país, en especial la economía, de esta forma el voto y las elecciones se convierten en un mecanismo de premios para los políticos que han sabido manejar bien los asuntos públicos, o de castigo si sucede lo contrario.

Sobre la base de estos modelos clásicos, en esta investigación se analizará cómo las variables explicativas que se derivan de cada uno de ellos están o no asociadas con el comportamiento electoral, y cuáles de ellas podrían tener mayor potencia explicativa. Como se ha reseñado en el capítulo precedente, de acuerdo con la literatura contemporánea, los procesos de modernización social y cultural que han atravesado el conjunto de sociedades democráticas contemporáneas habrían debilitado la potencia explicativa de los dos primeros modelos explicativos del comportamiento electoral, por lo que en la actualidad serían los modelos más de tipo “racional” los que tendrían mejor éxito en predecir el voto.

Sin embargo, la literatura también enfatiza que el efecto de las variables identificadas por estos modelos está mediado por los componentes institucionales del sistema político (sistema de gobierno, sistema electoral, sistema de partidos). Las diferentes configuraciones institucionales marcan las reglas de juego político en que se desarrolla la competencia electoral y se presenta la oferta política. Estas reglas podrían potenciar o mitigar el efecto algunos de los factores señalados por los modelos clásicos de explicación del comportamiento electoral.

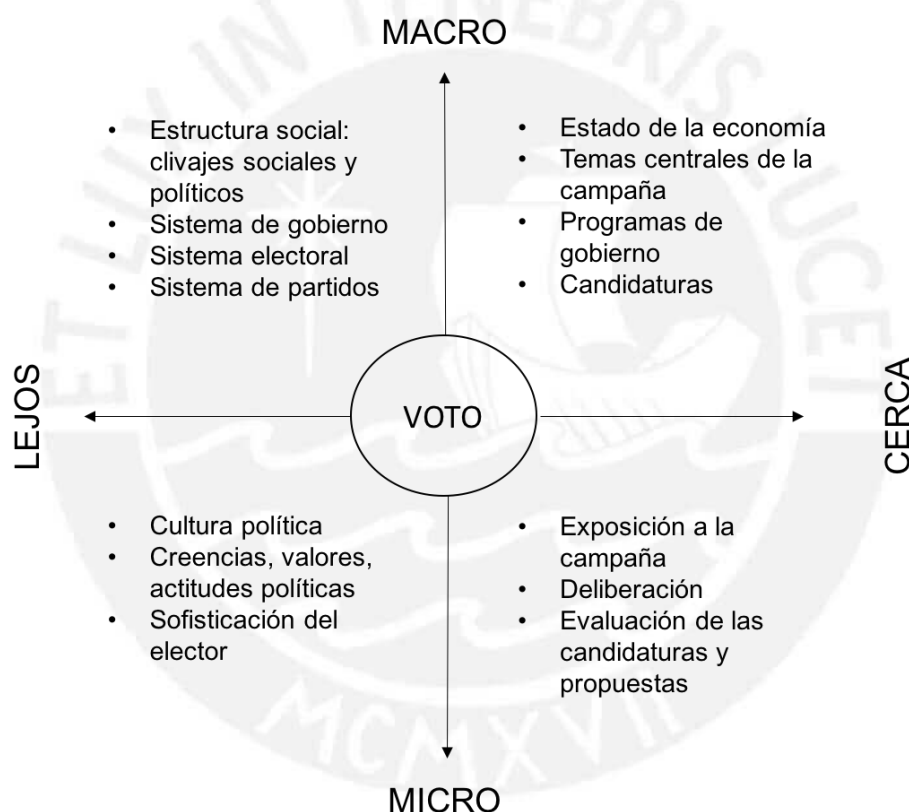
Bellucci y Whiteley (2006) proponen un esquema que organiza las variables que los diversos modelos teóricos y analíticos identifican como factores asociados a la decisión electoral (véase la figura 2.1). Este esquema tendría dos ejes analíticos centrales:

- En el eje horizontal se ordenarían las variables en función del momento en que intervienen en la elección, diferenciando las variables que son propias de la coyuntura electoral específica (CERCA), de las variables que son más estructurales y cambian más a largo

plazo (LEJOS), siguiendo una lógica similar al embudo de causalidad de la escuela de Michigan.

- En el eje vertical se organizarían las variables en función del nivel de la estructura social en que intervienen, diferenciando las variables de tipo MACRO, que influyen y operan en las dimensiones institucionales de los procesos electorales; de aquellas de tipo MICRO, y que operan a nivel individual.

Figura 2.1: Esquema de organización de factores asociados a la decisión electoral



Yuxtaponiendo estos dos ejes tendríamos cuatro cuadrantes que representan sendas dimensiones analíticas del comportamiento electoral:

1. Dimensión LEJOS-MACRO: En esta dimensión se toma en consideración las variables de tipo más estructural o institucional en una sociedad: el sistema de estratificación y de diferenciación social que condiciona el tipo de conflictos sociales centrales que pueden trasladarse a la esfera política mediante los mecanismos de representación política; el

sistema de gobierno (parlamentario o presidencialista) y las características del sistema electoral que configuran las principales reglas de distribución del poder político; el sistema de partidos que organiza los actores que buscan representar diferentes sectores e intereses sociales y compiten por el poder en las elecciones democráticas.

2. Dimensión LEJOS-MICRO: Es esta dimensión de ubica la cultura política, es decir, las creencias, actitudes y valores de los individuos que influyen en su visión y preferencias políticas, sus identidades o identificaciones partidistas y su nivel de sofisticación política.
3. Dimensión CERCA-MACRO: En esta dimensión intervienen las variables propias de la coyuntura electoral misma, en particular: el estado de la economía del país; los temas centrales en los que gira la campaña y las propuestas programáticas de los partidos; los candidatos.
4. Dimensión CERCA-MICRO: Aquí interviene el nivel de exposición de los electores individuales a la campaña electoral; la evaluación específica que hacen de las propuestas electorales en función de sus preferencias; la percepción que tienen de los candidatos y su competencia.

A partir de estas dimensiones se pueden derivar un conjunto de hipótesis o de preguntas centrales de investigación. Sin embargo, su análisis requiere combinar diferentes diseños metodológicos. En el caso de las dimensiones LEJOS (tanto macro como micro), un enfoque comparado entre diversos países es el más apropiado, ya que permite contar con una mayor varianza de las variables independientes al considerar países con diferentes estructuras sociales; sistemas políticos y electorales; y culturas políticas.

Un diseño de corte transversal centrado en un país y una elección permite analizar en mayor profundidad las dimensiones CERCA de este esquema. Un diseño que involucra una comparación longitudinal o diacrónica (el mismo país en diferentes elecciones), nos permite analizar el efecto de la variabilidad de la dimensión MACRO-CERCA en la decisión electoral. Dependiendo del nivel de cambio temporal, un diseño diacrónico también podría permitir examinar los efectos de algunas transformaciones operadas a nivel de las variables MACRO-

LEJOS, en particular cambios o reformas en el sistema electoral, procesos de desalineamiento y transformaciones a nivel de los partidos políticos, sobre todo en países con alta volatilidad electoral.

2.2. Objetivos e Hipótesis

La presente investigación se plantea dos objetivos principales. En primer lugar, identificar el rol que juegan ciertas variables en el comportamiento del elector individual; en segundo lugar, analizar en qué medida el rol o importancia que adquieren estas variables está relacionado con diferentes contextos históricos e institucionales en donde se desarrollan los procesos electorales. El diseño de esta investigación se propone entonces hacer un análisis en dos niveles:

- A nivel micro: identificar los factores que influyen en la decisión del elector y estimar el peso específico que tienen cada uno de ellos.
- A nivel macro: evaluar hasta qué punto los criterios que son tomados en cuenta por los electores individuales dependen de configuraciones institucionales concretas (sistemas de gobierno; sistemas electorales; sistemas de partidos).

Las hipótesis que guían esta investigación se pueden formular para estos dos niveles de análisis.

1. A nivel individual, las hipótesis simples que se derivan de los modelos clásicos del comportamiento electoral pueden resumirse en los siguientes postulados:
 - a) Factores sociales: El comportamiento del elector está básicamente influenciado por sus características socioeconómicas y sociodemográficas. El individuo votará por los candidatos o partidos con quienes se identifiquen personas que pertenecen a sus mismos grupos, estamentos o clases sociales.
 - b) Identificación partidaria: Los electores orientarán su voto hacia los candidatos o listas de partidos con quienes han desarrollado una relación más o menos estable de identificación producto de procesos de socialización política.

- c) Voto ideológico: Los electores que son capaces de evaluar su distancia o cercanía relativa respecto de los postulados programáticos e ideológicos de los partidos políticos, definirán su voto en función de su correspondiente cercanía o distancia respecto de los partidos políticos que compiten en una elección.
 - d) Voto ideológico: La capacidad de diferenciar ideológicamente a los partidos políticos depende del grado de sofisticación política del elector, que está determinado por su nivel educativo; el manejo e interés que tiene de los asuntos políticos.
 - e) Voto económico: Los electores harán una evaluación del desempeño del gobierno respecto de los principales problemas del país (en particular la economía). En función de ello premiarán al gobierno (al presidente o al partido de gobierno) con su voto, o lo sancionarán votando por los candidatos de partidos de oposición o contendientes del partido de gobierno.
2. A nivel macro, las hipótesis especifican el efecto que tienen los diseños institucionales en el funcionamiento de los factores que explicarían el voto a nivel individual. En tal sentido se puede proponer:
- a) En los países donde los partidos políticos han logrado representar a grupos diferenciados por divisiones socioeconómicas centrales, los factores sociales y de identificación partidaria tendrán efectos más significativos en el comportamiento del elector.
 - b) La importancia del voto ideológico dependerá del grado de polarización ideológica del sistema de partidos en una elección determinada. Cuanto mayor sea la polarización política, más relevante será el voto ideológico para el electorado.
 - c) La reelección presidencial incrementa la importancia del voto económico. La imposibilidad de reelección presidencial mitiga sus efectos en el comportamiento del elector.
 - d) El voto económico tiene mayores consecuencias para la elección del ejecutivo que para las elecciones parlamentarias.

- e) El nivel de institucionalización y estabilidad del sistema de partidos incrementa la importancia del voto económico.

La principal variable dependiente de esta investigación es el comportamiento electoral del votante en una elección específica. Para ello estamos considerando dos tipos de indicadores:

- El grado de preferencia por partidos políticos o candidatos que participan en la elección. Este indicador se mide en una pregunta que se hace en encuestas post-electorales en donde se le pide al entrevistado que evalúe en una escala del 0 al 10 qué tanto le gustan cada uno de los partidos u opciones políticas que compiten en las elecciones, donde cero (0) significa “nada” y diez (10) significa “mucho”.
- El voto reportado en las elecciones ya sea presidenciales o parlamentarias, según sea el caso.

En la medida que esta investigación se centra en los factores que puede explicar las opciones y preferencias políticas que los electores expresan al momento de votar, no se ha considerado como variable de análisis la participación electoral, específicamente el hecho de ir a votar o no. Si bien es posible afirmar que ir o no a votar es una forma de expresión de una preferencia política (abstenerse o participar en una elección), los principales factores que influyen en la participación electoral son una combinación de reglas e incentivos institucionales (como el voto voluntario u obligatorio), y de variables sociodemográficas asociadas a un mayor interés en la política (como el status social o el nivel educativo).¹

Como se aprecia en las hipótesis formuladas, el principal componente del diseño institucional del sistema político que se evaluará en la investigación es el rol que juega el sistema de partidos como mecanismo de intermediación entre las preferencias e intereses de la ciudadanía y el Estado, especialmente en tres dimensiones: el vínculo entre divisiones sociales y partidos políticos; el grado de institucionalización y estabilidad del mismo; y el grado de polarización ideológica.

¹Sobre la participación electoral véase: Nevitte et al. (2009); Norris (2006); Sigelman y Berry (1982); Maldonado (2011, 2014); Mackena (2015); Pérez-Liñán (2001)

Un segundo componente del diseño institucional que se toma en consideración en las hipótesis tiene que ver con las reglas electorales: la posibilidad de reelección presidencial; la simultaneidad de elecciones presidenciales y parlamentarias; la existencia de elecciones parlamentarias intermedias. Las variaciones en cuanto a estas reglas afectarían sobre todo los mecanismos asociados al voto económico.

También es necesario indicar que hay un conjunto de componentes del diseño institucional que no se están evaluando en esta investigación. Si bien se observará el voto tanto en elecciones presidenciales como parlamentarias, dado que los casos de estudio están constituidos por sistemas presidenciales, el análisis estará centrado principalmente en el primer tipo de elección. En tal sentido, no se examinará el efecto que puede tener el tipo de sistema electoral para elecciones parlamentarias (sistemas mayoritario o proporcionales; tamaño de las circunscripciones electorales; voto personal, por listas o preferencial; etc.) en el comportamiento del elector.

2.3. Casos, datos y enfoque analítico

La selección de los casos de estudio ha dependido de la disponibilidad de datos comparables respecto de las principales variables que se quiere analizar. La principal fuente de datos proviene de las encuestas de los módulos I, II y III del proyecto Comparative Study of Electoral Systems - CSES (2003; 2007; 2013).

El diseño metodológico del CSES prevé aplicar un cuestionario estándar en cada país que forma parte del proyecto pocas semanas después de un proceso electoral de carácter nacional (presidencial y/o parlamentario). Para tener una idea de su alcance, el tercer módulo de encuestas del proyecto CSES empezó a aplicarse desde el 2006 hasta el 2011 en 41 países diferentes, la mayoría de ellos democracias europeas.

En América Latina, las encuestas del proyecto CSES se han realizado en 5 países: Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. Sin embargo, solo en los primeros cuatro países éstas han sido aplicadas en más de una oportunidad desde finales de la década de 1990. Con la finalidad de realizar comparaciones tanto transversales como longitudinales, se ha decidido utilizar los

datos de estos cuatro países. En este trabajo se consideran tres niveles de análisis: los países; las elecciones dentro de los países y los electores en cada elección.

En el cuadro 2.1 se presentan las elecciones que serán consideradas para el análisis en los cuatro países seleccionados, indicando además el tipo de elección y el tamaño de la muestra para cada encuesta aplicada (en total suman 24,690 entrevistados). Como puede verse, en total se estarán analizando 15 procesos electorales presidenciales y/o parlamentarios que han tenido lugar en cuatro países entre 1997 y 2011.

El proyecto CSES no es el único que analiza el comportamiento político comparado en América Latina. Las encuestas de la Corporación Latinobarómetro (2015) y del Latin American Public Opinion Project - LAPOP (2015) también han incluido en ciertas ocasiones preguntas sobre preferencias electorales en sus cuestionarios, sin embargo el CSES lo hace de manera más sistemática y su diseño implica que el trabajo de campo se realice pocas semanas luego de las elecciones, lo que no resulta ser el caso de los otros proyectos. No obstante, en esta investigación también se utilizará los datos del Latinobarómetro y de LAPOP para analizar determinados temas específicos. Otra fuente de datos de encuestas que se empleará con el mismo propósito es la Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey, 2015), en la medida que también ha sido aplicada en los países que forman parte de esta investigación en el periodo que se está estudiando.

El periodo de estudio (1997-2011) corresponde a un momento donde, en general, los cuatro países logran consolidar la democracia electoral como sistema de competencia política, a pesar de las diferentes trayectorias específicas. Perú inicia su transición democrática en 1980. Si bien la década de 1980 estuvo marcada por la grave crisis económica y el conflicto armado interno que ocasionó masivas violaciones a los derechos humanos, hasta 1990 las elecciones generales reunieron los requisitos básicos de ser elecciones libres, justas y competitivas. El periodo del gobierno de Fujimori (1990-2000) representó una etapa de quiebre y de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales. A nivel económico significó la implementación de un radical ajuste económico neoliberal con costos sociales muy elevados. El proyecto autoritario fujimorista modificó la constitución para buscar perpetuarse en el poder mediante reelecciones

Cuadro 2.1: Elecciones analizadas y número de encuestas en los casos incluidos en el Proyecto CSES - América Latina 1997-2011

País	Año de elección	Número de encuestados	Tipo de Elección
BRASIL	2002	2,514	Pres. y Parl.
	2006	1,000	Pres. y Parl.
	2010	2,000	Pres. y Parl.
CHILE	1999	1,173	Pres.
	2005	1,200	Pres. y Parl.
	2009	1,200	Pres. y Parl.
MEXICO	1997	2,033	Parl.
	2000	1,766	Pres. y Parl.
	2003	1,991	Parl.
	2006	1,591	Pres. y Parl.
	2009	2,400	Parl.
PERU	2000	1,102	Pres. y Parl.*
	2001	1,118	Pres. y Parl.
	2006	2,032	Pres. y Parl.
	2011	1,570	Pres. y Parl.

En el caso de Perú 2000 sólo se preguntó por el voto en las elecciones presidenciales

sucesivas en 1995 y el 2000, sin embargo la crisis del final de fujimorismo, con la exposición de graves escándalos de corrupción y un proceso de recesión económica, erosionó las bases del régimen y permitió una nueva apertura de la competencia democrática a partir del 2001, aunque con un sistema de partidos bastante débil y volátil.

Brasil emprendió su transición democrática en 1982. A pesar de sufrir los efectos de la crisis económica de la década de 1980 y la crisis política que llevó a la destitución de Collor de Mello en 1992, la sociedad brasileña enfrentó estos procesos sin graves rupturas en su sistema político. Los cambios y crisis políticas fueron procesadas de manera institucional a través de diversas reformas constitucionales (especialmente la constitución promulgada en 1988 y las reformas de 1997). Desde la década de 1990 se configuró un sistema de competencia electoral diferenciado para las elecciones presidenciales y parlamentarias. En el caso de las elecciones presidenciales, dos grandes agrupaciones, el Partido dos Trabalhadores - PT de izquierda y el Partido da Social Democracia Brasileira -PSDB de centro izquierda, concentraron la mayoría de preferencias electorales; mientras que en el caso de las elecciones parlamentarias el número de partidos se incrementaba en forma importante debido a las particularidades del sistema electoral y de las bases regionales de las diversas agrupaciones políticas. Desde mediados de

la década de 1980 la política brasileña ha estado caracterizada por juegos de negociación entre el ejecutivo y alianzas de geometría variable con diferentes actores en el parlamento, que en muchos casos implicaban otorgar prebendas políticas a cambio de apoyos para iniciativas legislativas del gobierno.

En el caso de Chile, la transición democrática se inicia en 1988 con el referendun que pone fin a la dictadura de Pinochet. Ello inaugura un proceso de competencia política entre la coalición de centro izquierda que impulsó la transición democrática y los partidos de derecha, que en diversa medida reivindicaban el legado político del pinochetismo, especialmente en el campo de las reformas y estabilidad económica. Desde 1989 la lucha política chilena ha estado marcada por un paulatino y largo proceso de desmontaje de algunos de los legados autoritarios del régimen pinochetista, con la finalidad de eliminar los dispositivos que permitían un cierto grado de “tutela” autoritaria de los gobiernos democráticos, fundamentalmente liderados por los cuatro gobiernos de la coalición de centro izquierda que se sucedieron entre 1989 y el 2005. Este proceso de liberalización política gradual con cambios incrementales, ha estado acompañado por un importante ciclo de desarrollo económico, lo que le ha dado al régimen y a la democracia chilena un alto grado de estabilidad e institucionalidad.

De los cuatro países, el que tiene una plena apertura a la democracia electoral en forma más tardía es México. Las elecciones del 2000 marcan un momento “fundacional” para la democracia mexicana, al ponerle fin a siete décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional -PRI. Sin embargo, la competencia electoral ha sido un componente fundamental de la legitimación del régimen priísta, sólo que ésta se daba en condiciones y bajo reglas electorales (o la abierta manipulación de las mismas) que tendían siempre a favorecer al PRI. Hasta mediados de la década de 1990, México era un caso de “autoritarismo competitivo”, siguiendo el concepto acuñado por Levistki y Way (2010). En este marco desigual, los principales competidores del PRI eran el Partido de Acción Nacional - PAN, de tendencia de derecha; y agrupaciones de izquierda que hacia finales de la década de 1980 se aglutinaron en torno al Partido de la Revolución Democrática - PRD, de tendencia de centro izquierda. Sin embargo, desde fines de la década de 1980, los costos tanto internos como internacionales de mantenerse

indefinidamente en el poder comenzaron a ser cada vez más elevados para el PRI. En la década de 1990 el régimen mexicano emprendió un conjunto de reformas destinadas a fortalecer la independencia de los organismos electorales con la finalidad de asegurar elecciones más justas, libre y competitivas. Este proceso culminó con la elección de Vicente Fox, candidato del PAN en las elecciones del 2000. A pesar de su derrota electoral, el PRI se ha mantenido como uno de los pilares del sistema de partidos mexicano, dados sus recursos organizacionales y su histórico arraigo en diversas regiones y sectores de la sociedad mexicana. Entre el 2003 y el 2012 las elecciones mexicanas han estado marcadas por la competencia de tres bloques políticos representados por tendencias de derecha (PAN), centro (PRI) y centro izquierda (PRD), configurando uno de los sistemas de partidos más estables de los cuatro casos estudiados.

Si bien los cuatro países que forman parte de este estudio tienen en común el hecho de que sus sistemas de gobierno son presidencialistas, presentan diferencias relevantes en cuanto a la duración de los mandatos presidenciales, la composición del parlamento, los sistemas electorales y los sistemas de partidos. Ello nos permitirá comparar los efectos de las variables a nivel individual en diferentes configuraciones institucionales.

De los casos seleccionados, sólo en México el voto es voluntario, lo que tiene efectos importantes en la participación electoral en ese país, tal y como puede verse en el cuadro 2.2. En el caso de Chile, hasta antes de las reformas del 2015, el registro en el padrón electoral era voluntario, pero para los electores registrados el voto era obligatorio, las peculiaridades de este sistema en Chile serán exploradas en el capítulo 4.

En Brasil y Chile, el mandato presidencial es de 4 años; en Perú es de 5 años y en México de 6 años. En Brasil, Chile y Perú, el presidente debe ser elegido por más del 50 % de los votos válidos, caso contrario tiene lugar una segunda ronda electoral entre los dos candidatos más votados, ello ocurrió en todas las elecciones presidenciales de estos tres países consideradas en el presente estudio. Las encuestas del proyecto CSES fueron aplicadas entre ambas rondas electorales en Chile y Perú, mientras que en Brasil se aplicaron luego de la segunda vuelta en los tres casos correspondientes a ese país. En México, el sistema electoral para las elecciones presidenciales es de mayoría simple.

Cuadro 2.2: Electores y participación electoral en los casos seleccionados

País	Elección	Electores inscritos	
		en millones	Participación (%)
BRASIL	2002	103.2	82.3 %
	2006	115.4	83.2 %
	2010	135.8	81.9 %
CHILE	1999	8.1	90.0 %
	2005	8.2	87.7 %
MEXICO	1997	52.2	57.7 %
	2000	58.8	64.0 %
	2003	63.9	41.7 %
	2006	71.4	58.6 %
	2009	77.8	44.6 %
PERU	2000	14.6	82.8 %
	2001	14.9	82.3 %
	2006	16.5	88.7 %
	2011	19.9	83.7 %

Tribunal Supremo Electoral de Brasil; Servicio Electoral de Chile; Instituto Nacional Electoral de México; Jurado Nacional de Elecciones de Perú

En la actualidad, de los países incluidos en este estudio, sólo Brasil contempla la reelección presidencial por un periodo consecutivo adicional, lo cual tuvo lugar en las elecciones del 2006. En el caso peruano, la reelección presidencial estuvo permitida para los comicios del 2000, cuando Alberto Fujimori fue elegido por tercera vez consecutiva. Luego de la caída del régimen fujimorista en noviembre del 2000, se implementó una reforma constitucional que eliminó la figura de la reelección presidencial consecutiva. Al igual que Perú, Chile no permite la reelección presidencial inmediata, pero sí luego de pasado un periodo. En el caso de México el presidente sólo puede ser elegido para un periodo sin posibilidad de postular nuevamente nunca más.

En todos los países las elecciones presidenciales coinciden con elecciones parlamentarias (en Chile a partir del 2005). Sin embargo, en México donde el mandato de los parlamentarios de la cámara de diputados es de 3 años, hay elecciones parlamentarias intermedias, por ello se incluyen las encuestas del CSES realizadas en este país luego de las elecciones para la cámara de diputados de 1997, 2003 y 2009. Con la excepción de Perú, los parlamentos son bicame-

rales, aunque en este trabajo las elecciones parlamentarias que serán analizadas corresponden únicamente a las de la cámara baja.

Para las elecciones parlamentarias, Brasil y Perú tienen sistemas electorales proporcionales en distritos plurinominales con importantes variaciones en su tamaño. En el caso de Chile, hasta la última reforma constitucional de 2013 regía el llamado “sistema binomial”, que configura circunscripciones electorales de dos escaños. En México existe un sistema mixto, que combina elecciones por mayoría simple en circunscripciones uninominales y elecciones proporcionales en circunscripciones plurinominales.

En todos los países seleccionados existen sistemas multipartidistas, aunque con diferencias importantes. En el cuadro 2.3 se muestra la información compilada por Manuel Alcántara (2013) relativa a algunos indicadores clave de los sistemas de partidos de los casos estudiados: el índice de volatilidad electoral (para elecciones presidenciales y parlamentarias), el número efectivo de partidos políticos electorales (NEPE) y el número efectivo de partidos parlamentarios (NEPP).

El índice de volatilidad electoral de Pedersen (1979) mide en una escala de 0 a 100 la diferencia en la proporción de votos válidos obtenidos por los partidos políticos en dos elecciones consecutivas, a mayor volatilidad, mayor es el grado de inestabilidad del sistema de partidos para representar a diferentes grupos de la ciudadanía.

Los índices de número efectivo de partidos electorales y parlamentarios de Laakso y Taagepera (1979) miden la fragmentación del sistema de partidos, tanto a nivel de la distribución de los votos (NEPE) como de los escaños parlamentarios (NEPP). Un mayor número de partidos configura un sistema más disperso y fragmentado de representación política, lo que a su vez podría tener efectos negativos en la gobernabilidad al hacer más complejo el proceso de negociación política.

Como puede apreciarse en el cuadro 2.3, el sistema de partidos mexicano es el que presenta menores niveles de volatilidad electoral y fragmentación, lo que es indicador de un sistema más estable centrado en tres grandes bloques partidarios (PRI, PAN y PRD) hasta las elecciones del 2009.

Cuadro 2.3: Indicadores del sistema de partidos de los casos seleccionados

País	Año de Elección	Volatilidad		Fragmentación	
		Pres.	Parlam.	NEPE	NEPP
BRASIL	2002	44.82	15.30	9.28	8.47
	2006	30.32	17.35	10.62	9.52
	2010	19.53	11.10	11.19	10.37
CHILE	1999	23.48	n.a	n.a	n.a
	2005	30.31	10.77	6.57	5.59
	2009	44.98	18.15	7.30	5.63
MEXICO	1997	n.a	13.57	3.42	2.85
	2000	18.49	15.52	3.00	2.54
	2003	n.a	12.15	3.54	3.02
	2006	23.02	20.16	3.40	3.58
	2009	n.a	23.70	3.75	3.03
PERU	2000	46.40	41.28	4.00	3.81
	2001	58.50	46.40	6.64	4.37
	2006	50.75	44.66	6.95	3.78
	2011	61.52	44.49	5.69	3.97

Fuente: Alcántara (2013). Elaboración Propia

Los indicadores de Chile muestran una baja volatilidad, sobre todo a nivel a nivel parlamentario. Los índices de fragmentación son mayores que México y Perú, pero como se verá con mayor detalle en el capítulo 4, los principales partidos políticos tienden a agruparse en dos grandes bloques diferenciados ideológicamente (centro izquierda versus derecha), lo que también produce un nivel importante de estabilidad e institucionalización partidaria.

La volatilidad en el caso de Brasil es relativamente baja, especialmente en la elección del 2010, pero su sistema de partidos es el más fragmentado de todos, lo que genera dinámicas complejas de negociación política entre el ejecutivo y el parlamento que pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema político.²

El Perú es el país que muestra el mayor grado de volatilidad electoral, lo que da cuenta de las grandes dificultades que hay para consolidar e institucionalizar un sistema de partidos y de representación política más estable. Si bien el grado de fragmentación política no es el más elevado de los casos estudiados, la volatilidad electoral hace que varios de los partidos

²Si bien el rango temporal de esta investigación no considera la coyuntura política y electoral de Brasil luego del 2010, la crisis política reciente en este país (2016) tiene como una de sus causas principales los problemas de fragmentación de su sistema de partidos.

que logran representación pierdan gran parte de su respaldo electoral o desaparezcan en la elección siguiente. Ello también incentiva dinámicas centrífugas que provocan que los partidos que logran obtener escaños se dividan y fragmenten dentro del parlamento al segundo o tercer año de su mandato.

En los capítulos siguientes se procurará realizar una descripción más detallada de las características de los sistemas políticos, electorales y de partidos de los casos estudiados y que han sido escuetamente esbozadas en esta sección.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos y poner a prueba las hipótesis planteadas, el diseño metodológico de esta investigación combina tres lógicas de análisis complementarias:

En primer lugar, un enfoque de corte transversal, donde se analizará la relación entre las variables asociadas al voto a nivel individual en elecciones específicas en los casos seleccionados para el estudio.

En segundo lugar, un enfoque de estudio comparado de casos, donde se evalúa cómo las variaciones en los factores institucionales de nivel macro pueden afectar o estar relacionadas con impactos diferenciados de las variables explicativas del comportamiento electoral a nivel individual.

Finalmente, un enfoque de análisis longitudinal, con la finalidad de identificar si los efectos tanto a nivel individual como a nivel macro cambian o se mantienen relativamente constantes a lo largo del tiempo en diversas elecciones. Este enfoque analítico también debería permitir observar si el contexto coyuntural específico a cada elección tiene algún tipo de influencia en los efectos de las variables macro y micro que podrían influir en el comportamiento del elector.

Parte II

El Contexto Político e Institucional de los Casos de Estudio



Capítulo 3

Brasil y el Presidencialismo de Coalición

Brasil es uno de los países democráticos más grandes del mundo, en las elecciones presidenciales del 2010 participaron 111.2 millones de electores de los cerca de 135.8 millones de ciudadanos inscritos para votar. En este capítulo describiremos las principales características del sistema político brasileño y presentaremos un panorama de la evolución de su dinámica política desde la transición democrática que tuvo lugar en la segunda mitad de la década de 1980.

Brasil se independizó de Portugal en 1822 y asumió el sistema de gobierno de una monarquía constitucional encabezada por el emperador Pedro I. Durante la monarquía, si bien existía un parlamento bicameral, el emperador gozaba de amplios poderes, incluidos los de disolver el congreso a su voluntad. En 1889 los militares derrocaron al emperador Pedro II y declararon la República el 16 de noviembre de ese mismo año. La primera constitución republicana de 1891 estableció un régimen federal, con un presidente electo por sufragio directo. Entre 1891 y 1930 la participación electoral estaba restringida a una proporción minoritaria de la población (menos del 3%) y la competencia política estaba circunscrita a las negociaciones entre las grandes oligarquías de los principales estados brasileños, quienes manipulaban las elecciones para que éstas reflejen los intereses de los principales grupos de poder regional. Estos competían desde partidos con base local, donde estructuras patriarcales de dominación (el llamado “coronelismo”)

mo”, parecido al gamonalismo peruano) les permitían movilizar a los electores a partir del control económico que ejercían sobre la población fundamentalmente rural (Delury y Schlager, 2006, pp. 164; Luna y Klein, 2006, pp. 8; Nohlen, 2005, pp. 164).

La crisis económica de 1929 debilitó el poder de las oligarquías regionales y en 1930 un golpe de estado, promovido por altos oficiales del ejército y algunas elites de los principales estados, puso en la presidencia a Getulio Vargas quien inauguró un régimen dictatorial de derecha, inspirado en los regimenes fascistas europeos, y que emprendió una importante reforma y centralización del Estado (manteniendo la estructura federal) al establecer el Estado Novo en 1937. La dictadura de Vargas duró hasta 1945 y en esos años la nueva estructura de poder en el Brasil disminuyó la influencia de las grandes oligarquías regionales, permitiendo que nuevos grupos de interés (tecnócratas, militares, líderes industriales y nuevas elites regionales) participaran en mayor medida del poder del Estado (Luna y Klein, 2006, pp. 9). El periodo de Vargas consolidó una fuerte estructura de gobierno federal e inauguró una etapa de mayor intervención del Estado en la economía a través de políticas regulatorias y de promoción de la industrialización.

Durante el gobierno de Vargas, Brasil se involucró directamente en la Segunda Guerra mundial al lado de las potencias aliadas. Al finalizar el conflicto mundial, las dictaduras y los regímenes totalitarios como el de Vargas perdieron legitimidad y en octubre de 1945 los militares dieron un golpe de estado para restablecer un régimen democrático y diseñar una nueva constitución.

Entre 1945 y 1964, las elecciones competitivas fueron el principal mecanismo para llegar al poder. Fue un periodo donde por primera vez Brasil contó con un sistema de partidos nacionales, dos de los cuales habían sido creados por el propio Vargas en previsión de su retorno a la política electoral (Delury y Schlager, 2006, pp. 165). El Partido Social Democrático (PSD) representaba a las bases del régimen Varguista, entre las cuales figuraban los tecnócratas estatales promotores de políticas intervencionistas, los terratenientes rurales y un sector del empresariado industrial. El Partido Trabalhista Braliseiro (PTB) aglutinaba a los sectores obreros urbanos organizados a partir de los sindicatos corporativistas estatales creados durante

la dictadura. La oposición a Vargas estaba representada en la União Democrática Nacional (UDN), con bases más urbanas y donde participaban sectores conservadores liberales de la sociedad brasileña (Luna y Klein, 2006, pp. 10-11; Nohlen, 2005, pp. 165-166).

La democracia de 1945 a 1964 en Brasil estuvo fuertemente marcada por los actores políticos surgidos de la maquinaria partidaria configurada por Vargas (el PSD y el PTB), pero también por varios episodios de crisis política e institucional y amenaza constante de intervención militar. Desde 1930 los militares se habían constituido en un actor “tutelar” del Estado brasileño, guardando una influencia importante como “veto players” en el régimen político. En el plano económico, este periodo está caracterizado por la continuidad de las políticas de desarrollo por sustitución de importaciones iniciadas durante la dictadura Varguista y por la consolidación de la intervención del Estado en la conducción de la economía.

Entre 1945 y 1960 los partidos Varguistas (el PSD y el PTB) se alternaron en el gobierno con las presidencias sucesivas del general Enrico Dutra (PSD), Getulio Vargas (PTB) y Juscelino Kubitschek (PSD-PTB). A lo largo de este periodo, y sobre todo a partir del gobierno de Vargas en 1951-1954, se intensificó el rol del Estado en la economía, en especial mediante las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, la nacionalización de sectores estratégicos de la economía (es la época en que se crea Petrobrás y Electrobrás, así como el Banco Nacional de Desarrollo Económico), y se impulsaron políticas populistas para promover el apoyo de las clases populares al régimen de Vargas. Ello provocó una creciente oposición de las bases más conservadoras del Varguismo e intensificó los temores de una intervención militar en la política.

En 1954 Getulio Vargas se suicida en medio de una serie de escándalos políticos y, luego de un proceso de transición difícil que incluyó un golpe militar en 1955 y tres presidentes en el intermedio, en las elecciones de 1955 gana la presidencia Juscelino Kubitschek con el apoyo de la coalición PSD-PTB, quien logra culminar su mandato en 1961. En las elecciones de finales de 1960 el gobernador de Sao Paulo, Jânio Quadros, es electo presidente con el respaldo de la UDN, pero a los ocho meses renuncia y es sucedido por el vicepresidente João Goulart, quien trata de impulsar una agenda de gobierno izquierdista, marcada por una fuerte oposición de

los militares y los sectores conservadores de las elites brasileras. En medio de una grave crisis económica y una creciente polarización política, los militares deciden deponer a Goulart en 1964 e inauguran un régimen dictatorial que se extiende por 20 años.

El régimen militar reprime a los actores políticos con agendas de izquierda. Si bien mantiene la regularidad de las elecciones parlamentarias y el funcionamiento del congreso (salvo por un periodo de diez meses entre 1968 y 1969), los militares tienen poder de veto respecto de quiénes pueden participar en ellas. Para mantener una fachada de legitimidad el congreso elegía al presidente entre los miembros designados por la junta militar. El periodo más represivo del gobierno militar tuvo lugar entre 1969 y 1974, bajo la presidencia del general Emílio Medici. Durante su gobierno se emitieron decretos que limitaban severamente las libertades civiles y se reprimió duramente a la oposición (fundamentalmente de izquierda) mediante prácticas violatorias de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones). Este periodo también estuvo marcado por altas tasas de crecimiento económico al mismo tiempo que se generaba una alta concentración de la riqueza y un incremento de la desigualdad social. Sin embargo, el crecimiento económico impulsó la creación de puestos de trabajo en el sector formal y la mejora en los ingresos y niveles de vida de la población, lo que le permitió al régimen autoritario gozar de un importante respaldo popular, reforzado por un uso intensivo de la propaganda en los medios de comunicación de masas (Luna y Klein, 2006, pp. 20).

En 1974, sectores más moderados de los militares deponen a Medici, y con la presidencia de Ernesto Geisel (1974-1979) se inicia gradualmente un largo periodo de apertura política que es seguido por João Figueiredo (1979-1985) hasta la transición democrática de 1985.

Durante la dictadura militar, se forjan en la oposición de centro izquierda y de izquierda, las carreras políticas de varios de los principales actores del proceso redemocratización brasileño posterior a 1985, en particular Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva. Cardoso se exilia a Chile en 1964 y al retornar a Brasil a fines de los 60 forma un think thank (el Centro Brasileiro de Analisis y Pesquisas) que le servirá de plataforma para consolidar su reputación como analista e intelectual de centro izquierda. Lula adquiere protagonismo nacional al liderar las huelgas de los obreros metalmecánicos de Sao Paulo en 1978 y luego, junto con líderes sindicales

y con el respaldo de activistas católicos de izquierda funda el Partido dos Trabalhadores (PT) en 1978.

Como una forma de encuadrar la participación política en las elecciones parlamentarias durante la dictadura, el régimen militar disolvió el antiguo sistema de partidos del Varguismo e “inventó” un sistema bipartidista sobre la base de dos agrupaciones nacionales: La Aliança Renovadora Nacional (ARENA) se creó como el partido del gobierno y el Movimento Democrático Brasileiro (MDB) como el partido de la oposición. Entre 1965 y 1979 ARENA y el MDB se disputaban las elecciones parlamentarias, hasta que en el marco del proceso de apertura, en 1979 el gobierno disolvió ambos partidos y permitió la creación y participación de nuevas organizaciones en las elecciones. El Partido de la Democracia Social (PDS) reemplazó a ARENA y el MDB añadió la “P” de “Partido” a su nombre, convirtiéndose en el PMDB. En esos años se formaron otros partidos como el Partido Democrático dos Trabalhadores (PDT), el Partido dos Trabalhadores Brasileiros (PTB) y el Partido dos Trabalhadores (PT). A pesar de que el sistema de partidos iba tendiendo a un mayor multipartidismo, en las primeras elecciones del proceso de apertura el PDS y el PMDB seguían concentrando la mayoría de los votos, ello en parte gracias a la manipulación de las leyes electorales durante el gobierno de Figueiredo (Delury y Schlager, 2006, pp. 170).

En 1982 se convocaron a elecciones directas para los gobernadores federales por primera vez desde el inicio de la dictadura donde la oposición, en particular el MDB, obtuvo victorias en varios estados importantes. Por esos años, el deterioro de la situación económica (recesión e inflación) así como el incremento de la protesta social, hacían cada vez más insostenible la continuidad del régimen militar. A finales de 1984, en el colegio electoral se forma una mayoría opositora (en parte debido a la división del PDS), para elegir a Tancredo Neves, dirigente del PMDB, como nuevo presidente para asumir el mando en marzo de 1985. Sin embargo, antes de tomar el mando y a consecuencia de una intervención quirúrgica éste fallece y asume la presidencia su vicepresidente, José Sarney, un antiguo dirigente de la oficialista ARENA.

Sus lazos iniciales con ARENA hacían pensar que Sarney continuaría el proceso de transición gradual impulsada por los militares más moderados del régimen anterior. Sin embargo, una

vez en la presidencia, Sarney decide construir el apoyo a su gobierno sobre la base del PMDB y profundiza las medidas de liberalización y transición democrática convocando en 1986 a una asamblea constituyente (Luna y Klein, 2006, pp. 27).

La nueva constitución de 1988 es bastante progresista al incluir una serie importante de derechos sociales y políticos, entre ellos el voto a los analfabetos y la reducción de la edad de votar a los 16 años. Asimismo, reinstaura la elección directa del presidente por voto popular (abolida por la dictadura en 1964) mediante un sistema de dos vueltas electorales. Sin embargo, la constitución resulta muy detallista en una serie de medidas y provisiones que normalmente se tratan en la legislación regular. Se entronizan en la constitución algunos monopolios estatales y se plantea una descentralización fiscal, otorgándole a los Estados y municipalidades mayores ingresos y discrecionalidad en el gasto, complicando la elaboración y el balance de las cuentas fiscales (Luna y Klein, 2006, pp. 28).

En las elecciones presidenciales de 1990, Fernando Collor de Mello es elegido como presidente en la segunda vuelta disputada con Lula del PT. Collor de Mello es el primer presidente electo por sufragio universal y directo desde Jânio Quadros treinta años atrás.

3.1. El Sistema Político Brasileño

Brasil¹ es una República Federal, compuesta por 26 estados y un distrito federal. La constitución de 1988 le otorga amplios poderes al ejecutivo: el presidente nombra y remueve directamente a los ministros y es el jefe supremo de las fuerzas armadas; el ejecutivo se encarga de la elaboración del presupuesto y tiene facultades para proponer iniciativas legislativas ante el parlamento; el presidente puede nombrar varios funcionarios a nivel federal y controla gran parte del gasto presupuestal. El ejecutivo tiene potestades legislativas importantes ya que puede emitir decretos con fuerza de ley, los cuales pueden renovarse cada 30 días si es que el congreso no los deroga.

¹Está sección se basa en los siguientes trabajos: Bustani (2001); Delury y Schlager (2006); IDEA (2006); Nicolau (2004); Payne, Zovatto y Mateo Díaz (2007); Power (2000)

La constitución de 1988 fijaba la duración del mandato presidencial en 5 años, sin posibilidad de reelección inmediata. En 1994, mediante una enmienda constitucional se redujo el mandato presidencial a 4 años, manteniendo la prohibición de reelección inmediata. Posteriormente en 1997, durante el gobierno de Cardoso, se introdujo una nueva reforma constitucional que permitía la reelección inmediata del presidente por una única vez, lo que rompió con una tradición constitucional de no reelección que venía desde los inicios de la república a fines del siglo XIX.

El parlamento brasileiro es bicameral. El Senado está conformado por 81 miembros, cada uno de los 26 estados de la federación tiene 3 senadores, al igual que el Distrito Federal de Brasilia. Los senadores son elegidos para servir un mandato de ocho años y las elecciones para el senado tienen lugar cada cuatro años, en las cuales se elige de manera alternativa un tercio y dos tercios del senado respectivamente. Los candidatos a senador deben tener por lo menos 35 años al momento de la elección y pueden ser reelegidos de manera indefinida.

La Cámara de Diputados está compuesta por 513 representantes elegidos en 27 circunscripciones electorales plurinominales (cada estado, más el Distrito Federal es una circunscripción). Cada circunscripción tiene un número de diputados de acuerdo con su peso poblacional, sin embargo la legislación establece que el número de diputados por estado no debe ser menor de ocho ni mayor de 70. Ello crea cierta desproporcionalidad en algunos estados, sobre todo los más grandes, así por ejemplo el Estado de Sao Paulo, que es el más poblado de Brasil con 39.9 millones de habitantes, contiene el 21.5 % de la población del país pero sus 70 diputados representan el 13.6 % del total de diputados de la cámara baja. Para ser diputado los candidatos deben tener por lo menos 21 años al momento de la elección. Los diputados son elegidos por periodos de cuatro años y al igual que los senadores pueden ser reelectos indefinidamente.

Las dos cámaras del parlamento tienen iniciativa legislativa, la leyes originadas en una cámara pasan a ser revisadas por la otra. Una vez que una ley es aprobada por ambas cámaras, es sometida al presidente para su promulgación. El presidente tiene el poder de veto total o parcial sobre las leyes, el cual puede ser revertido por el parlamento con una mayoría de votos en una sesión conjunta de ambas cámaras.

La cámara de diputados ejerce el control político sobre el ejecutivo y puede llamar a los ministros para ser interpelados sobre temas específicos. La declaratoria de guerra y de estados de emergencia, así como los tratados internacionales deben pasar por la aprobación del congreso. Se requiere la autorización del congreso para que el presidente o el vicepresidente se ausenten del país por un periodo mayor a 15 días.

La nominación de altos funcionarios del Estado (jueces supremos, fiscal general, embajadores, presidente y directores del Banco Central) debe ser aprobada por el Senado. Asimismo, el Senado debe autorizar los proyectos de endeudamiento de los gobiernos federal, estatales y locales. Los procesos de censura de ministros, o de pedido de vacancia del presidente o vicepresidente son iniciados en la cámara de diputados con una mayoría calificada de dos tercios de los votos, estos casos pasan a ser juzgados por el Senado.

A nivel subnacional, los 26 estados son conducidos por un gobernador y tienen una asamblea estatal. El tamaño de las asambleas de cada estado es equivalente a 3 veces el número de diputados que tiene el estado en el congreso federal hasta un máximo de 36, luego de eso se añade un diputado estatal por cada diputado federal con que cuentan los estados que tienen más de 12 diputados federales. Por ejemplo, Sao Paulo tiene 70 diputados federales, por lo que su asamblea estatal está compuesta por 94 representantes $((12 \times 3) + 58 = 94)$. Los gobernadores y diputados estatales son elegidos por periodos de cuatro años. A nivel local, los prefeitos (alcaldes) y vereadores (consejeros municipales) también son elegidos por periodos de 4 años.

Hasta 1997 la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes no estaba permitida. Con la reforma constitucional de ese año que permitió la reelección presidencial por un periodo consecutivo, se extendió esa provisión también para los gobernadores y alcaldes. De hecho esa medida fue parte de la estrategia de Cardoso para lograr que los partidos políticos de base estatal apoyen la aprobación de la reelección como figura constitucional.

3.1.1. El Sistema Electoral

Desde la reforma constitucional de 1994 que redujo el mandato presidencial de 5 a 4 años, las elecciones para presidente, senadores, diputados federales, gobernadores y diputados estatales

se realizan de manera simultánea el primer domingo de octubre del año electoral. Todos los ciudadanos mayores de 16 años tienen derecho a votar, y el voto es obligatorio para los alfabetos y las personas entre 18 y 70 años de edad. El derecho a voto a los analfabetos fue otorgado en 1985 en el contexto de la transición democrática.

Para ser elegido presidente o gobernador es necesario alcanzar más del 50% de los votos emitidos, caso contrario se procede a una segunda ronda electoral entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. En 1989 se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales directas en Brasil desde 1960,² resultando electo Fernando Collor de Mello en la segunda vuelta disputada con Luiz Inácio Lula da Silva. En las elecciones de 1994 y 1998, Fernando Henrique Cardoso resultó elegido presidente en la primera vuelta. Las siguientes elecciones del 2002, 2006 y 2010 requirieron nuevamente de una segunda vuelta.

Como se indicó previamente, para las elecciones a la cámara de diputados federales, los candidatos compiten en 27 circunscripciones plurinominales (26 estados y el Distrito Federal), los más pequeños tienen 8 escaños (11 circunscripciones), mientras que los estados más grandes, como Rio de Janeiro, Minas Gerais y Sao Paulo tienen 46, 53 y 70 escaños respectivamente. Al igual que el presidente, los diputados son elegidos para periodos de cuatro años y el sistema de elección es de representación proporcional. Las candidaturas se presentan en listas abiertas, donde los candidatos individuales de cada lista aparecen en forma desordenada. El elector tiene un solo voto, el cual puede dirigirse a una lista o a un candidato individual dentro de la lista. Para determinar la cantidad de votos de cada lista se suman los votos obtenidos ya sea por la lista o por los candidatos individuales dentro de cada lista. El número de escaños para cada lista es atribuidos mediante la fórmula D'Hondt (similar al caso peruano) y pasan a ser ocupados por los candidatos que obtuvieron más votos individuales.

Los candidatos deben estar afiliados a un partido político, y todos los partidos deben estar registrados en el Tribunal Superior Eleitoral (TSE). En cada estado o circunscripción electoral, los partidos pueden presentarse solos con su propia lista o formar listas en alianza con otros partidos. Los partidos que van solos pueden presentar en su lista un número de candidatos

²Durante la dictadura las elecciones presidenciales se llevaban a cabo en forma indirecta mediante un colegio electoral compuesto por los miembros del congreso

Cuadro 3.1: Elecciones Presidenciales en Brasil 1989-2010

Brasil 1989-2010: Resultados de las elecciones presidenciales

Elección	Candidatos	% 1ª Vuelta	% 2ª Vuelta
1989	F. Collor de Mello (PRN)	30.5	53.0
	Lula (PT)	17.2	47.0
	L. Brizola (PDT)	16.2	
	M. Covas (PSDB)	11.5	
	P. Maluf (PDS)	8.9	
	Otros	15.7	
1994	F. H. Cardoso (PSDB)	54.3	
	Lula (PT)	27.0	
	Otros	18.7	
1998	F. H. Cardoso (PSDB)	53.1	
	Lula (PT)	31.7	
	C. Gomes (PPS)	11.0	
	Otros	4.2	
2002	Lula (PT)	46.4	61.3
	J. Serra (PSDB)	23.2	38.7
	A. Garotinho (PSB)	17.9	
	C. Gomes (PPS)	12.0	
	Otros	0.5	
2006	Lula (PT)	48.6	60.8
	G. Alckim (PSDB)	41.6	39.2
	H. Helena (PSOL)	6.9	
	Otros	2.9	
2010	D. Rousseff (PT)	46.9	56.1
	J. Serra (PSDB)	32.6	44.0
	M. Silva (PV)	19.3	
	Otros	1.2	

Fuentes: Bustani (2001); Nicolau (2004); Nohlen (2005); Nicolau (2008); Meneguello (2011). Elaboración propia

equivalente a 1.5 veces la cantidad de escaños que tienen las circunscripciones con más de 20 escaños; en las circunscripciones que tienen 20 escaños o menos, el número de candidatos de la lista de un partido puede ser hasta del doble de la cantidad de escaños en disputa. En el caso de alianzas electorales, el número de candidatos puede duplicar la cantidad de escaños en circunscripciones de más de 20 escaños, o triplicarlo en el caso de circunscripciones con 20 o menos escaños. Por ejemplo, en las elecciones del 2010 para diputados federales en el estado de Sao Paulo, el PT se presentó en alianza con otros cuatro partidos (el PRB, el PR, el PC do B y el PT do B),³ y la lista de esta alianza sumaba 107 candidatos para competir por los 70 escaños que le corresponden a ese Estado. En esas elecciones, en el mismo Estado de Sao Paulo, se presentaron 27 partidos, conformando 17 listas (5 alianzas multipartidarias y 12 listas partidarias), que presentaron un total de 1276 candidatos para diputados federales, haciendo que en promedio cada lista tuviera 75 candidatos. En todo el país, el 2010 se presentaron 4910 candidatos aptos para las elecciones a diputados federales.⁴

Las actuales leyes electorales prohíben que los partidos que compiten en las elecciones presidenciales se junten en la misma alianza para participar en las elecciones parlamentarias, pero hasta 1998, los partidos tenían completa libertad para juntarse en alianzas, lo que creaba situaciones paradójicas en las que partidos que competían por la presidencia, se presentaban juntos en alianzas para elegir diputados en determinados estados. Las alianzas pueden variar de estado en estado, siempre que no se junten en una misma partidos que compiten a nivel presidencial. De hecho hay partidos que no presentan listas presidenciales y que en determinados estados forman alianza con un partido que tiene a X como candidato a presidente, y que en otro estado se juntan con el partido del candidato presidencial Y.

En el caso de las elecciones para el senado, dependiendo de si se renuevan dos tercios o un tercio de los senadores, los estados se convierten en circunscripciones binominales o uninominales. El elector tiene un voto cuando los distritos son uninominales y dos votos cuando son binomiales. Las listas para el senado son por candidatos individuales. En las elecciones

³PRB = Partido Republicano Brasileiro; PR = Partido da República; PC do B = Partido Comunista do Brasil; PT do B = Partido Trabalhista do Brasil.

⁴Fuente: Tribunal Superior Eleitoral, <http://www.tse.jus.br>.

del 2010 se eligió un senador por estado, mientras que en las del 2006 los brasileños votaron por dos senadores por estado. El sistema electoral para gobernadores y diputados estatales funciona con reglas similares a las de las elecciones presidenciales.

En las elecciones municipales de 1996 se iniciaron las primeras pruebas para implantar un sistema de voto electrónico en Brasil. En las elecciones generales de 1998, dos tercios del electorado votaron haciendo uso del sistema electrónico y desde el 2002, todos los votos de las elecciones se realizan mediante este sistema, lo que ha simplificado en gran medida el proceso de votación, de conteo de votos y proclamación de los resultados. El voto electrónico ha permitido eliminar algunos casos marginales de fraude en ciertas regiones del país, pero sobre todo ha reducido drásticamente el número de votos blancos y viciados, en el sistema antiguo los electores debían escribir el nombre o el número de sus candidatos para diputado federal o diputado estatal, lo que provocaba un alto número de votos anulados debido a los errores de llenado de las boletas electorales (Nicolau, 2004).

De los cuatro casos que estamos analizando, el sistema electoral brasileño es el único que permite en la actualidad la reelección inmediata del presidente por un solo periodo (Perú lo hizo entre 1995 y el 2000). El sistema electoral para la cámara de diputados es el más abierto de los cuatro casos, ya que combina elementos que permiten que un número importante de partidos logren representación electoral: sistema de representación proporcional, fórmula D'Hondt y distritos plurinominales grandes. Ello hace que el número efectivo de partidos electorales y el número efectivo de partidos parlamentarios sea el mayor de los cuatro casos que estamos analizando.

Por otro lado, el sistema de listas abiertas y las diversas configuraciones posibles de alianzas electorales en los diferentes estados y tipos de elección (diputados federales, senadores y diputados estatales) hace que las elecciones parlamentarias brasileñas sean unas de las más competitivas del mundo, puesto que a la competencia inter-partidaria, tanto entre diversas listas como dentro de las mismas alianzas, se suma la competencia intra-partidaria o intra-lista entre los candidatos individuales por atraer el voto preferencial.

La propaganda electoral es posible sólo después de la inscripción de candidaturas, lo que sucede a inicios de julio de cada año electoral. A los partidos políticos registrados, el estado les asigna en forma gratuita tiempo de propaganda en la radio y la televisión, el cual es distribuido en forma equitativa entre los candidatos. Los partidos pueden hacer propaganda en periódicos, revistas y por Internet, pero la propaganda en televisión y la radio está limitada únicamente al tiempo otorgado por las autoridades electorales.

3.1.2. El Sistema de Partidos

Las particularidades del sistema electoral brasileño permiten una gran proliferación de partidos políticos, puesto que facilita que agrupaciones pequeñas tenga la posibilidad de alcanzar un escaño en el parlamento. Sin embargo, ello tiene como correlato que muchas de las agrupaciones partidarias tengan estructuras organizativa débiles y que exista mucha fluidez en la pertenencia a los partidos. De acuerdo con medios de información brasileños, entre 1995 y 1997, los diputados federales habían cambiado de afiliación partidaria por lo menos 174 veces (Delury y Schlager, 2006, pp. 172).

Cuadro 3.2: Partidos que compiten y que obtienen escaños en las elecciones parlamentarias de Brasil 1986-2010

Elección	No. partidos que compiten	No. partidos en parlamento
1986	29	29
1990	33	20
1994	23	18
1998	30	18
2002	30	19
2006	29	21
2010	27	22

Fuentes: Bustani (2001); Nicolau (2004); Nohlen (2005); Nicolau (2008); Meneguello (2011). Elaboración propia

Muchos partidos políticos son altamente dependientes de las personalidades políticas que se presentan como candidatos en determinadas circunscripciones, las cuales aportan al partido ya sea su carisma o su capacidad para recaudar fondos de campaña. Ello provoca una baja lealtad partidaria, escaso compromiso ideológico o programático, y altos niveles de pragmatismo en

la actuación política de los representantes electos, los cuales negocian sus votos de apoyo a las iniciativas gubernamentales en el congreso a cambio de beneficios que pueden extraer del ejecutivo. Por otro lado, la legislación electoral es bastante permisiva en cuanto a la creación e inscripción de nuevos partidos, al respecto Timothy Power (2000) señala que esta permisividad es producto de un diseño institucional que buscó “sobrecompensar” el carácter extremadamente cerrado y controlado de la competencia electoral durante el periodo del gobierno militar, dando como resultado un conjunto de reglas que abren y permiten la participación a diversos actores, creando luego dificultades para la negociación política dentro del parlamento y en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. A la larga, este sistema de reglas institucionales ha mostrado gran resistencia a la reforma debido a que los actores llamados a modificarlo (los partidos) tienen muchos incentivos para seguir perpetuándolo.

Cuadro 3.3: Elecciones Parlamentarias en Brasil 1986-2010

Elecciones parlamentarias en Brasil 1986-2010: % de votos válidos para la Cámara de Diputados Federales, por principales partidos

Elección	Partidos					Total
	PT	PSDB	PFL / DEM	PMDB	Otros	
1986	6.9	n/p	n/p	47.8	45.3	100
1990	10.2	8.7	12.4	19.3	49.4	100
1994	12.8	13.9	12.9	20.3	40.1	100
1998	13.2	17.5	17.3	15.3	36.7	100
2002	18.4	14.3	13.4	13.4	40.5	100
2006	15.0	13.6	14.6	10.9	45.9	100
2010	16.9	11.9	7.5	13	50.7	100

Fuentes: Bustani (2001); Nicolau (2004); Nohlen (2005); Nicolau (2008); Meneguello (2011). Elaboración propia

En las elecciones parlamentarias del 2010 participaron 27 partidos políticos, 22 de los cuales eligieron por lo menos a un diputado federal (Meneguello, 2011, 2). Muchos de estos partidos tienen su origen en maquinarias políticas locales cuyo objetivo es reproducirse y perpetuarse en la administración pública de sus propias localidades. De acuerdo con McCann (2008, pp. 13-16) estas maquinarias locales no son ideológicas sino “fisiológicas”, es decir sus integrantes

son burócratas que ocupan puestos en los diferentes órganos de la administración pública local. Muchos de ellos tienen su origen en el sistema bipartidista creado por la dictadura (ARENA y MDB), periodo durante el cual los políticos locales afiliados a estas agrupaciones lograron vincularse estrechamente con el aparato estatal en diferentes regiones del país. Con la democratización, estos actores se convirtieron intermediarios políticos entre el gobierno central, las administraciones locales y la población y varios formaron diversas agrupaciones políticas para participar en el juego electoral. De esta forma logran mantener una carta de negociación en el parlamento para apoyar diversas iniciativas gubernamentales a cambio de recursos públicos o ciertas prerrogativas políticas en sus propias localidades.

Cuadro 3.4: Composición de la Cámara de Diputados Federales, Brasil 1986-2010

Número y % de escaños obtenidos por los principales partidos políticos en las elecciones para Diputados Federales, Brasil 1986-2010

Elección	Partidos					Total	
	PT	PSDB	PFL / DEM	PMDB	Otros		
No. de Escaños	1986	16	n/p	n/p	260	211	487
	1990	35	37	83	109	238	502
	1994	49	62	89	107	206	513
	1998	58	99	105	83	168	513
	2002	91	71	84	74	193	513
	2006	83	65	65	89	211	513
	2010	88	53	43	79	250	513
% de Escaños	1986	3.3	n/p	n/p	53.4	43.3	100.0
	1990	7.0	7.4	16.5	21.7	47.4	100.0
	1994	9.6	12.1	17.3	20.9	40.2	100.0
	1998	11.3	19.3	20.5	16.2	32.7	100.0
	2002	17.7	13.8	16.4	14.4	37.6	100.0
	2006	16.2	12.7	12.7	17.3	41.1	100.0
	2010	17.2	10.3	8.4	15.4	48.7	100.0

Fuentes: Bustani (2001); Nicolau (2004); Nohlen (2005); Nicolau (2008); Meneguello (2011). Elaboración propia

En ciertas coyunturas específicas, estos actores locales logran pasar a la arena política nacional, tal es el caso de Fernando Collor de Mello, quien era un joven político y gobernador del pequeño estado de Alagoas en el nordeste brasileño, región caracterizada por sus altos

índices de pobreza. Collor de Mello se lanzó a la campaña presidencial de 1990 formando su propia organización, el Partido de la Reconstrucción Nacional, y gracias a su carisma y a una efectiva campaña electoral logró pasar a la segunda vuelta con 29 % de los votos, seguido por Lula del PT con el 15 %. El temor de un gobierno radical de corte izquierdista del PT hizo que Collor obtuviera el apoyo de la mayoría de partidos del centro a la derecha y ganara la elección en la segunda vuelta electoral (Luna y Klein, 2006, pp. 30).

A pesar del gran número de partidos que participan en las elecciones parlamentarias, existe un grupo más reducido de partidos en torno a los cuales se organiza lo fundamental de la competencia y de las alianzas políticas electorales. Entre ellos destacan el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), el Partido da Frente Liberal (PFL) y el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

El Partido dos Trabalhadores - PT

Los orígenes del PT se remontan a finales de la década de 1970, sus bases principales fueron los nuevos sindicatos formados en los principales centros industriales del Sudeste brasileño y que buscaban desafiar la antigua estructura sindical corporativista heredera de las reformas del primer Varguismo. Los nuevos sindicatos de los años 1970 se organizaron en la Central Unica de Trabajadores (CUT) y lideraron una serie de luchas y huelgas obreras para pedir mejoras salariales y en las condiciones de trabajo para los trabajadores de la industria automotriz de la región de Sao Paulo en 1978. Es en ese contexto de luchas sindicales que emerge la figura de Luis Inácio Lula da Silva, hijo de inmigrantes del nordeste brasileño y obrero metalmeccánico. En 1979, con la apertura política iniciada por la dictadura, varios de los líderes sindicales, junto con activistas católicos de comunidades cristianas de base, fundan el PT para llevar las luchas obreras a un plano más político y participar en la arena electoral.

A diferencia de los partidos organizados en la época de la dictadura (como ARENA y el MDB) más dependientes de la estructura estatal, la organización del PT se forja desde las bases que crean comités y mecanismos de contribución económica de sus militantes. El PT ha participado en todas las elecciones presidenciales organizadas desde 1989, presentado como su

candidato a Lula (con excepción de las elecciones del 2010). Hasta el 2002 Lula había siempre ocupado el segundo lugar en las elecciones presidenciales, logrando disputar la segunda vuelta de 1989 con Fernando Collor de Mello.

Si bien históricamente el PT ha experimentado tensiones entre sus alas más radicales de izquierda y los sectores más moderados de centro-izquierda, hasta las elecciones del 2002 su plataforma política era considerada fundamentalmente de izquierda, con propuestas de reforma estructural tanto en el ámbito rural (reforma agraria) como urbano. Ha sido partidario de una distribución más equitativa de la riqueza y de una participación activa del Estado en la economía con la finalidad de asegurar el pleno empleo y políticas sociales progresistas en el campo de la salud y la educación. También ha sido un partido crítico del libre mercado y de una integración sin condiciones de la economía brasileña a la globalización.

Sin embargo, durante las elecciones del 2002, Lula decide moderar su plan de gobierno para mitigar los temores de los grandes empresarios y la banca internacional, así como de sectores de la clase media y alta brasilera, ante un eventual gobierno suyo. Luego de ganar las elecciones, el gobierno de Lula ha seguido una estrategia pragmática, manteniendo en pie varias de las reformas económicas liberales emprendidas por el gobierno de Cardoso. Ello provocó importantes tensiones internas con su ala más de izquierda, en el 2004 estas tensiones se tradujeron en la expulsión y renuncia de algunos de sus dirigentes más radicales para formar una nueva agrupación política, el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que presentó la candidatura de la ex dirigente petista, Heloisa Helena, en las elecciones presidenciales del 2006.

Las bases históricas del PT se han concentrado en los estados más industriales del sureste brasileño (en particular Sao Paulo). Sin embargo, a raíz de las elecciones del 2006 y de los programas sociales impulsados por el primer gobierno de Lula, el PT logró tener mayor apoyo en los estados más empobrecidos del nordeste que en los más prósperos del sureste, lo que representa un giro histórico en las bases sociales de dicho partido (Hunter y Power, 2007).

Hacia finales del gobierno de Lula, altos dirigentes del PT se vieron envuelto en varios escándalos de corrupción vinculados a la compra de lealtades de diputados federales en el

congreso, lo que hizo peligrar las probabilidades de reelección de Lula el 2006. Sin embargo, Lula logró superar esta crisis política al independizar su imagen de la deteriorada reputación de su partido, y finalmente resultó ganador en la segunda vuelta. En las elecciones del 2010 el PT presentó la candidatura de Dilma Rousseff, jefa del gabinete de ministros en la última etapa del gobierno de Lula, quien resultó ser la primera mujer elegida presidente del Brasil en la segunda vuelta electoral.

Dentro del variopinto panorama de partidos políticos brasileños, el PT ha mostrado una mayor disciplina relativa de sus miembros y representantes electos en el parlamento. Al convertirse en partido de gobierno, el PT ha sufrido conflictos y divisiones internas producto de las tensiones entre sus propuestas programáticas e ideológicas originarias y la gestión cotidiana de la marcha gubernamental. Los escándalos políticos de los que varios de sus principales dirigentes han sido protagonistas en los últimos años del gobierno de Lula han mellado hasta cierto punto su imagen, pero su posición como partido de gobierno genera incentivos para que muchos de sus miembros respalden y se mantengan leales al partido. De ser un partido ubicado en el lado de la izquierda radical del sistema político (con una militancia forjada durante las luchas contra la dictadura en los años 70), el PT se ha convertido en un partido pro-sistema y en una importante maquinaria política con mayores niveles de burocratización interna.

El Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB

El PSDB se fundó en junio de 1988 a partir de la disidencia de un grupo de militantes del PMDB, entre los que se encontraban Fernando Henrique Cardoso, Jose Serra y Gerardo Alckmin, quienes criticaron el “giro a la derecha” del PMDB luego de la transición democrática de 1985. El PSDB se constituyó como un partido de centro izquierda, siguiendo el molde de los partidos social demócratas europeos y se identifica como un espacio político que aglutina a intelectuales no radicales de centro izquierda, con cierto respaldo entre sectores de clase media, en particular en los estados del Sudeste y de Sao Paulo, pero con poco arraigo entre sectores obreros y de las clases populares (Delury y Schlager, 2006, pp. 174; Palermo, 2003, pp. 92.

Durante la presidencia de Itamar Franco (quien como vicepresidente sucedió a Fernando Collor de Mello a finales de 1992), el PSDB tuvo una importante participación en el gobierno, en particular mediante su principal líder, Fernando Henrique Cardoso, quien se desempeñó primero como ministro de relaciones exteriores y luego como ministro de economía. Durante la gestión de Cardoso en el ministerio de economía, se impulsó el Plan Real que estabilizó la economía brasilera y se reinició un ciclo de crecimiento económico que se ha mantenido hasta los últimos años.

A finales de 1994, Cardoso gana la presidencia de la república encabezando una alianza liderada por el PSDB y que incluyó a otros partidos de derecha liberal como el PFL y de izquierda como el PDT (cuyo antecesor había sido el antiguo PTB fundado por Vargas en los años 40). En el gobierno Cardoso logra incluir a otros partidos como el PMDB y el PPB para formar una mayoría parlamentaria que le permitiese impulsar una agenda de reformas económicas de libre mercado, así como otras de tipo político, entre las que destacan la reelección presidencial. Los éxitos de la gestión económica de Cardoso entre 1995 y 1998 le permitieron ganar la reelección en 1998 en primera vuelta.

Desde el 2003, el PSDB ha sido el principal partido de oposición a los gobiernos del PT, y sus candidatos presidenciales (Serra en el 2002; Alckmin el 2006; nuevamente Serra el 2010; Neves el 2014) disputaron las segundas vueltas con los candidatos del PT (Lula el 2002 y 2006; Rousseff el 2010 y 2014). Desde el 2003, el PSDB ha sido el tercer partido con mayor cantidad de escaños en la cámara baja del parlamento brasileño.

El Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB

El PMDB se funda en 1979 como sucesor del Movimiento Democrático Brasileiro – MDB, que era el partido de oposición legal creado durante dictadura de los años 60 y 70. Al momento de fundarse, el PMDB incluyó en sus rangos a antiguos miembros de los partidos que apoyaban al régimen militar (ARENA y PSD) (Delury y Schlager, 2006, pp. 175).

El PMDB se convirtió en la primera fuerza política en las primeras elecciones presidenciales de la transición democrática de 1985. En aquella oportunidad el presidente era elegido de

manera indirecta por un colegio electoral conformado por ambas cámaras del congreso de la república. Tancredo Neves resultó elegido presidente pero poco antes de asumir su mandato murió luego de una intervención quirúrgica y fue reemplazado por el vicepresidente José Sarney quien culminó su mandato a inicios de 1990.

El PMDB es un partido que se sitúa en el centro político y que en realidad constituye un “partido atrápalo todo”, que integra en su seno a políticos de diversas tendencias ideológicas, lo que lo convierte en una agrupación bastante heterogénea, con baja disciplina interna y poca coherencia ideológica (Delury y Schlager, 2006, pp. 175; Palermo, 2003, pp. 91). Esta heterogeneidad interna se traduce en la incorporación de cuadros con diferentes trayectorias políticas así como divisiones internas, como en el caso de la defección de algunos de sus militantes para formar el PSDB en 1988. Asimismo ello se refleja en los cambios que ha experimentado su base electoral: en sus inicios el PMDB gozaba de mayores apoyos en las zonas más urbanizadas del país, en los últimos años estos se han concentrado más bien en las zonas rurales del interior y el PMDB se ha convertido en un partido clientelista altamente dependiente de su capacidad para redistribuir recursos públicos desde los puestos de gobierno que ocupa a nivel local y regional (Delury y Schlager, 2006, pp. 176).

Luego de las elecciones de 1985 el PMDB no ha tenido mayores éxitos en las contiendas presidenciales, sin embargo se ha mantenido como un importante partido parlamentario, llegando a obtener entre 10 % y 15 % de los votos para la cámara baja entre 1998 y el 2010, lo que le ha permitido negociar su participación y ocupar carteras ministeriales en los gobiernos de Cardoso y de Lula. Asimismo, la escasa disciplina partidaria de sus miembros en el parlamento ha hecho que algunos de los diputados o senadores del PMDB voten por las iniciativas del gobierno de Lula, incluso cuando su partido abandonara la coalición gubernamental en el 2004. La trayectoria sinuosa y oportunista del PMDB se refleja también en el hecho de que para las elecciones del 2010, este partido integrase la alianza electoral encabezada por el PT que presentó la candidatura de Dilma Rousseff en las elecciones de ese año (Meneguello, 2011, pp. 7) y más recientemente en las elecciones del 2014, en las que uno de sus líderes, Michel Temer, participó como candidato a la vicepresidencia en la lista encabezada por Rousseff,

convirtiéndose luego en presidente luego del juicio político entablado en contra de Rouseff el 2016.

El Partido da Frente Liberal – PFL / Partido Demócrata - DEM

El PFL se forma en 1985 a partir de una facción PDS que apoyaba la dictadura militar. Ideológicamente el PFL es un partido de centro derecha que apoya políticas de libre mercado. Sus bases electorales se encuentran principalmente en los estados del Nordeste brasileño, especialmente en Bahia y Pernambuco (Delury y Schlager, 2006, pp. 174; Palermo, 2003, pp. 91.92).

Se trata de un partido fundamentalmente parlamentario, que tiene una lógica “fisiológica” similar al PMDB pero más a la derecha del espectro político. Su fuerza parlamentaria es comparable al del PMDB. En 1990 dirigentes importantes del PFL integraron el gobierno de Collor de Mello apoyando su agenda privatizadora. Posteriormente ha formado parte de las alianzas electorales que han impulsado las candidaturas presidenciales de los líderes del PSDB en las elecciones que se han llevado a cabo desde 1994 hasta el 2014. Entre 1995 y el 2002 varios de sus dirigentes han participado como ministros del gobierno de Cardoso y desde que el PT ha asumido la presidencia del país se ha constituido, junto con el PMDB en uno de los principales partidos de oposición. En marzo del 2007, el PFL se refunda adoptando el nombre de Partido Demócrata (DEM).

3.2. La Dinámica Política Brasileña Contemporánea

El sistema político brasileño contiene varios elementos que podrían constituirse en fuentes de inestabilidad política con el potencial de generar crisis políticas que pongan en riesgo el régimen democrático: un presidencialismo fuerte; un sistema electoral complejo que favorece la multiplicidad partidaria y una débil relación entre el elector y sus representantes; un sistema de partidos altamente fragmentado, compuesto por organizaciones con escasa cohesión interna y consistencia ideológica, que favorece el pragmatismo y el oportunismo de las élites políticas para seguir sus propios intereses faccionales. A ello hay que añadir la persistencia de altos niveles

de desigualdad social que, pese al desarrollo económico experimentado en los últimos años, son una fuente continua de conflictos y demandas sociales que ponen a prueba la capacidad del Estado y los actores políticos para enfrentarlos en el marco de las reglas de juego de la democracia. Todo ello puede agravarse en un contexto de deterioro de la dinámica económica.

Sin embargo, a pesar de estos problemas, desde la transición de 1985, la democracia brasileña ha mostrado un creciente proceso de estabilización y consolidación. Pese a sus debilidades, el sistema político brasileño ha podido superar graves crisis económicas y políticas. La hiperinflación y la recesión económica de fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990 logró ser revertida gracias a las políticas económicas iniciadas durante el gobierno de Itamar Franco y continuadas durante la administración de Cardoso, lo que permitió una liberalización importante de la economía brasileña, el incremento de la inversión privada y la recuperación de altas tasas de crecimiento económico, lo que se han traducido también en mayores recursos para que el Estado implemente ambiciosos programas sociales destinados a los sectores más desfavorecidos. Varios aspectos del modelo económico iniciado a mediados de 1990 fueron continuados durante el gobierno de Lula por lo que en la actualidad existe un importante consenso en el conjunto de los actores políticos respecto de las principales líneas de la política macroeconómica brasileña (Power, 2010, pp. 227.228).

Por otro lado, la crisis política desencadenada por la destitución de Fernando Collor de Mello en 1992 pudo resolverse dentro de los cauces constitucionales y con la elección de Lula como presidente en el 2002 se disiparon los temores de los sectores empresariales y de derecha del país respecto de un cambio de rumbo radical impuesto por gobiernos de izquierda. Desde 1985 no hay actores políticos que busquen “patear el tablero” de las reglas de juego democráticas y la influencia de los militares en la política brasileña - los principales veto-players entre 1930 y 1985 - se ha reducido significativamente al punto que el gobierno de Rousseff constituyó una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Kurt Weyland (2005) analiza los factores que habrían permitido que el actual periodo democrático brasileño iniciado en 1985 tenga muchos mayores niveles de estabilidad que la expe-

riencia anterior de 1946-1964. En primer lugar, los cambios en la estructura social y económica de Brasil han creado una sociedad mucho más urbanizada y compleja, lo que reduce en gran medida el potencial conflictivo y desestabilizador que tienen las grandes desigualdades en la sociedad rural brasileña, limitando además la influencia que tienen los poderes locales y las élites terratenientes, fundamentalmente conservadoras, sobre la clase política brasileña. Por otro lado, la sociedad urbana se ha vuelto más compleja y plural, a la vez que más fragmentada en términos organizacionales, lo que disipa el potencial polarizante de conflictos sociales y políticos sobre la base de clivajes sociopolíticos fuertemente contrapuestos que amenacen de manera radical el orden social predominante, ello tendría como consecuencia una mayor tolerancia por parte de las élites económicas y de los políticos conservadores a la apertura democrática y la participación política de actores y partidos de izquierda.

Otro factor importante en la consolidación de la democracia brasileña es que el proceso abierto en 1985 coincide con la caída de los regímenes comunistas y el avance de las reformas de mercado. Estos elementos habrían tenido efectos positivos en la estabilidad de la democracia al “des-radicalizar a la izquierda, reasegurar a la derecha y por tanto, promoviendo una convergencia política en la elite y las masas” (Weyland, 2005, pp. 120).

Los cambios en la estructura social brasileña y el contexto internacional favorable a la democratización, así como el funcionamiento continuo de las reglas democráticas a lo largo de las últimas décadas, habrían también provocado, siguiendo a Weyland, que se produzcan una mayor apreciación del sistema democrático a nivel de la cultura y normas sociales de las élites económicas y políticas brasileñas, aunque no puede decirse que estos cambios culturales hayan permeado en la misma medida a nivel de las masas (Weyland, 2005, pp. 111-115. Véase también: Power, 2010, pp. 238-242; Rennó et al., 2011).

Weyland también señala una serie de cambios institucionales que han permitido que, pese a la complejidad y aparente disfuncionalidad del sistema político brasileño, las reglas del juego democráticas hayan podido operar en un diseño que favorece la fragmentación de los actores políticos. Entre ellos menciona la inclusión de los partidos de izquierda, sobre todo el PT, en el sistema político, lo que permite moderar el conflicto y hacerlo discurrir dentro de causas

institucionales. Asimismo se resaltan las prerrogativas que goza el ejecutivo dentro del sistema presidencial brasileño, particularmente la posibilidad de emitir decretos ley temporales que le permiten al presidente responder de manera flexible y rápida ante situaciones de crisis y evitar bloqueos en la relación entre el ejecutivo un poder legislativo altamente fragmentado debido al diseño del sistema electoral (Weyland, 2005, pp. 120).

Al respecto, Timothy Power (2010) sostiene que los actores políticos brasileños han atravesado por un proceso de aprendizaje de complejos mecanismos de negociación política dentro de las dificultades que impone el sistema político y de partidos de este país. Estas dificultades de alguna manera afectaron la forma en cómo los actores políticos respondieron a los retos de la crisis económica en los primeros años de la transición democrática (1985-1994), sin embargo el éxito del plan real logró reencaminar la economía brasileña a una senda de estabilización y crecimiento. En este éxito jugó un papel clave la gestión de Cardoso (en tanto ministro de economía y posteriormente presidente de la república) quien supo moverse en el intrincado juego de las políticas de alianzas entre los múltiples partidos brasileños para lograr el apoyo político necesario a su programa de reformas económicas. De esta manera, Cardoso instituyó una dinámica de “presidencialismo de coalición” que le permite al gobierno asegurar las condiciones de gobernabilidad necesarias para impulsar su agenda de gobierno.

Dado que en el sistema brasileño es poco probable que un presidente cuente con el respaldo de una mayoría parlamentaria, es necesario que el presidente comparta el poder con otros partidos representados en el parlamento. Power describe el “presidencialismo de coalición” de la siguiente manera (Power, 2010, pp. 231): se requiere conformar una coalición legislativa amplia “supernumeraria” y a la vez “desconectada”. La amplitud de la coalición parlamentaria significa que las mayorías que se construyen son más numerosas de lo que se necesitaría para aprobar una legislación. El carácter “desconectado” de la coalición implica que los participantes provienen de diversos lados del espectro político, sin que sean necesariamente adyacentes ideológicamente. Ambos elementos funcionan como un sistema de “seguro” para proteger la agenda gubernamental de posibles bloqueos y boicots por parte del poder legislativo, ya que la amplitud de las mayorías parlamentarias previenen casos de deserción que ocurren a me-

nudo, y el carácter desconectado de estas mayorías le permite al ejecutivo reunir el apoyo de sectores diferentes del espectro político para iniciativas que podrían ser no aceptadas por algunos de ellos en momentos distintos. Estos mecanismos de “presidencialismo de coalición”, iniciados por Cardoso siguieron siendo usados por el gobierno del PT para mantener el apoyo parlamentario a su agenda gubernamental.

Este apoyo parlamentario, extenso y desconectado se logra mediante diversos mecanismos: distribución de puestos en el ejecutivo; inclusión en el presupuesto de partidas que benefician programas en ciertas circunscripciones o feudos electorales de algunos de los partidos o parlamentarios de la coalición; pero también recurriendo a formas de corrupción y compra de votos. De hecho, hacia finales del segundo gobierno de Lula (2005), la administración del PT se vio envuelta en grandes escándalos de corrupción al descubrirse que altos dirigentes del PT pagaban una suma mensual (el “mensalão”) a diputados de partidos de su coalición parlamentaria a cambio de sus votos a favor de la legislación propuesta por el PT. El “escándalo del mensalão” llegó a poner en riesgo la reelección de Lula el 2006 (quien tuvo que someterse a una segunda vuelta electoral disputada con Gerardo Alckmin, candidato del PSDB). Las investigaciones sobre estos escándalos de corrupción siguieron durante el segundo gobierno de Lula y los primeros años del gobierno de Rousseff, provocando en el 2012 la condena de varios dirigentes importantes del PT (entre ellos José Dirceu, jefe del gabinete de ministros de Lula hasta el 2005; y José Genoíno, presidente del PT hasta el 2005) a penas de prisión por corrupción de funcionarios y lavado de dinero.

De acuerdo con Power (2010), una vez superados los retos iniciales de la transición democrática mediados de la década de 1990 (por un lado la apertura a la competencia electoral de una multiplicidad de actores políticos previamente excluidos por la dictadura; y la severa crisis económica por el otro), la democracia brasileña se encuentra en un periodo de estabilización caracterizado por cuatro elementos que permiten cierto consenso y continuidad entre los diversos actores de la política brasileña. En primer lugar, desde el gobierno de Cardoso, como se ha señalado previamente, las políticas macroeconómicas, que refuerzan el rol del libre

mercado, han seguido un curso estable a lo largo de los últimos años y que no se han visto alterados de manera significativa en sus grandes rasgos por los sucesivos gobiernos del PT.

En segundo lugar, la implementación de políticas sociales destinadas a aliviar la situación de pobreza de significativos segmentos de la población brasileña le han permitido al sistema político y a los gobiernos del PSDB y del PT gozar de una importante legitimidad social. De acuerdo con el Banco Mundial, el porcentaje de la población brasileña que vive con menos de dos dólares diarios se ha reducido de 30 % en 1990 a 11 % en el 2010.⁵ Un sistema de transferencias condicionadas de dinero iniciado durante el gobierno de Cardoso y luego continuado y expandido durante el gobierno de Lula (Bolsa Familia) ha logrado tener una penetración importante entre los sectores populares brasileños y creado una red de seguridad social que tiene impactos sustanciales en la reducción de la pobreza (Hunter y Power, 2007, pp. 17-21; Power, 2010, pp. 229) Para implementar este sistema, el Estado Brasileño ha desarrollado una burocracia especializada a nivel central que supervisa el desarrollo y el cumplimiento de las metas de los programas sociales, los cuales son ejecutados por los gobiernos locales. Según Hunter y Power, la expansión de estos programas sociales es una de las principales razones que explicarían el éxito electoral de Lula en su reelección del 2006, a pesar de los escándalos de corrupción que afectaron en final de su primer gobierno.

El tercer elemento que habría contribuido a la estabilización de la democracia brasileña según Power, habría sido la recentralización fiscal realizada por Cardoso en el contexto de la implementación del “Plan Real”, que limitó las capacidades de los gobiernos estatales y municipales de endeudarse y generar gastos discrecionales. Ello redujo los márgenes de maniobra de las élites políticas regionales y locales para negociar o extraer prebendas de parte del gobierno central, incrementando la autonomía del presidente respecto de los gobernadores de los estados, lo que a su vez fortalece la capacidad de negociación del ejecutivo central dentro de lo que ha sido llamado un “nuevo equilibrio federal” (Power, 2010, pp. 230-231).

Finalmente, como ha sido previamente descrito, el “presidencialismo de coalición” se ha convertido en un mecanismo eficaz para construir las alianzas políticas y el apoyo necesario

⁵Véase: <http://databank.worldbank.org/ddp> [Consulta el 12/02/13].

para impulsar la agenda política del partido de gobierno, reforzando la estabilidad del sistema democrático.

Los procesos de transformación sociopolítica experimentados por la sociedad brasileña a lo largo de las últimas décadas, así como los consensos y continuidades desarrollados en el transcurso de las administraciones de Cardoso, Lula y Rousseff le han permitido entonces al sistema democrático brasileño alcanzar importantes niveles de estabilidad, sobre todo si se lo compara con otros países sudamericanos sometidos a graves crisis sociales y políticas durante los años 90 (los países Andinos y Venezuela por ejemplo). Ello a pesar de un diseño institucional (federalismo; presidencialismo; sistema de representación proporcional exacerbado; sistema de partidos fragmentado) cuyas características podrían tener un potencial desestabilizador importante.

Desde el gobierno de Cardoso, se ha reforzado la figura del presidente como “estabilizador” de la política brasileña mediante un conjunto de incentivos institucionales (el presidencialismo de coalición) que tiene efectos centrípetos que contrarrestan la dinámica centrífuga y fragmentadora de la competencia partidaria, sobre todo a nivel de las elecciones legislativas y subnacionales. Las transformaciones económicas, sociales y políticas han permitido también que los principales partidos políticos implementen estrategias “centristas” tanto para ganar las elecciones como para gobernar. En las elecciones presidenciales llevadas a cabo desde 1994 hasta el 2014, se ha configurado un clivaje “centro derecha / centro izquierda” que tiene al PSDB y al PT como actores principales, y a gran parte del resto de la amplia constelación de partidos políticos como satélites que orbitan alrededor de ellos, formando coaliciones fluidas y pragmáticas que permiten lograr importantes niveles de gobernabilidad (Nicolau, 2004, pp. 343; Nicolau, 2008, pp. 174-175). Un factor que ha permitido la consolidación de este clivaje ha sido la introducción de la reelección presidencial en 1997, la cual habría incentivado la lógica plebiscitaria de la elección presidencial, otorgándole al votante la posibilidad de recompensar o sancionar al presidente y al partido de gobierno según cómo se ha evaluado su desempeño durante su mandato, justo en un contexto histórico económicamente favorable para el Brasil.

El presidencialismo y la figura de la reelección también refuerzan el personalismo en la política brasileña lo que de alguna manera puede aislar a los presidente de la mala imagen que en general tiene dentro de la opinión pública la política partidaria brasileña. Sin embargo, a pesar de su protagonismo y carisma, tanto Cardoso, Lula y Rousseff se han desenvuelto dentro de organizaciones partidarias que les otorgan la maquinaria política y los cuadros necesarios para ocupar los principales puestos de la administración pública; para movilizar al electorado; y/o para desarrollar complejos procesos de negociación dentro del fragmentado sistema multipartidista del país. Si bien cuando se presentó a la reelección el 2006 el partido de Lula atravesaba por una seria crisis de legitimidad debido a los escándalos de corrupción, los éxitos económicos y sociales de su gobierno fueron suficientes como para que importantes sectores del electorado, especialmente en zonas que no formaban parte de la base social original del PT, le dieran su respaldo en la segunda vuelta. El segundo gobierno de Lula generó incentivos para que el PT mantenga cierta cohesión a pesar de las divisiones internas que sufrió, y nuevamente la evaluación positiva de su desempeño permitió que la ciudadanía volviera a darle un mandato a la candidata de ese partido el 2010 y que fue renovado en las últimas elecciones del 2014.

Si bien Brasil ha conseguido alcanzar niveles importantes de estabilidad y consolidación democrática, el país sigue enfrentando serios problemas sociales y políticos: la violencia urbana; la escasa profundidad del “estado de derecho”; la corrupción y su impunidad que se percibe en el manejo de los asuntos públicos; continúan siendo problemas que tienen efectos negativos sobre la legitimidad de las instituciones democráticas en Brasil (véase por ejemplo: Rennó et al., 2011, pp. 228-229) y que podrían servir de plataforma política para el surgimiento de outsiders que quiebren la dinámica de coaliciones extensas y flexibles entre partidos políticos que ha venido caracterizando la política brasileña en las últimas décadas (Power, 2010, pp. 243). Finalmente, desde el 2013, la desaceleración del crecimiento de la economía brasileña genera retos adicionales que pueden poner en cuestión los éxitos de la política social que el PT ha venido impulsado a lo largo de sus ya cuatro gestiones presidenciales.

Capítulo 4

Chile: Competencia electoral en bloques ideológicos

Entre 1973 y 1989, Chile experimentó uno de los regímenes dictatoriales más brutales de América Latina. Durante el gobierno de Pinochet se cometieron masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de militantes de las organizaciones políticas de izquierda y de los opositores al régimen. Asimismo, la dictadura militar transformó radicalmente la economía chilena, aplicando de manera pionera en América Latina un conjunto de reformas destinadas a liberalizar la economía y reducir el rol del Estado en la economía.

A nivel político, la represión política contra los partidos de izquierda modificó la correlaciones de fuerza entre los principales bloques partidarios que caracterizaron la historia política del Chile durante el siglo XX. La movilización contra la dictadura y por el referendun de 1989 generaron incentivos para que se forme una nueva coalición de partidos de izquierda y de centro que impulsó la transición democrática de la última década del siglo pasado y que estructuró la competencia política en dos bloques diferenciados ideológicamente en torno al legado de la dictadura pinochetista.

Desde 1990, los gobiernos democráticos chilenos han conducido un importante ciclo de crecimiento y desarrollo económico bajo un modelo liberal de promoción de la inversión privada e impulso de las exportaciones. Asimismo, paulatinamente han logrado llevar a cabo reformas

políticas e institucionales que han ido desmontando la estructura política diseñada por Pinochet para asegurar su influencia sobre el estado chileno en el periodo post dictatorial.

4.1. El Sistema Político Chileno

Chile es una república unitaria con un territorio dividido en 13 regiones, con un sistema presidencialista y con un parlamento bicameral. Las reformas constitucionales del 2005 fijan el periodo presidencial a cuatro años sin posibilidades de reelección inmediata, sin embargo la duración del periodo presidencial ha variado en diversas ocasiones. La constitución de 1925 fijaba el periodo presidencial en seis años y excluía la reelección inmediata del presidente. Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, el referéndum constitucional de 1980 cambió el periodo a ocho años. En 1988 tuvo lugar un plebiscito para decidir acerca de la continuidad del gobierno militar, la victoria por el “NO” abrió lugar a un conjunto de negociaciones entre los partidos de oposición y el gobierno para regular el proceso de transición democrática, que incluyeron una serie de reformas constitucionales destinadas a eliminar varias disposiciones antidemocráticas de la constitución de 1980, entre ellas la prohibición de la participación política de partidos de inspiración marxista. El paquete de reformas constitucionales fue aprobado en un nuevo referéndum en junio de 1989, entre ellas se establecía que el primer mandato presidencial de la transición tendría una duración de cuatro años y que luego se retornaría al sistema de seis años (Delury y Schlager, 2006, pp. 245).

Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en diciembre de 1989, resultando elegido Patricio Aylwin de la Concertación de Partidos por la Democracia. Los presidentes sucesivos elegidos en 1993 y 1999 (Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente) tuvieron un mandato de seis años, hasta que la nueva reforma constitucional del 2005 redujo el mandato presidencial a su duración actual de cuatro años.

El régimen político es fuertemente presidencialista, el presidente tiene la potestad de nombrar y remover a sus ministros a discreción y designa a los intendentes responsables del gobierno de las 15 regiones en las que está subdividida la república. Asimismo nombra al contralor general de la república, quien debe ser ratificado por el Senado y que ejerce su cargo hasta la edad

de 75 años. Por otro lado, cuando el ejecutivo le otorga el carácter de urgencia a un proyecto de ley, el parlamento tiene 30 días para discutirla, si ello no ocurre en ese plazo, el presidente tiene la potestad de promulgar directamente esa ley. El presidente chileno tiene la facultad de llamar a sesiones especiales del congreso y de emitir ciertas leyes por decreto (Delury y Schlager, 2006, pp. 246).

El parlamento chileno es bicameral. En la actualidad el Senado está compuesto por 38 miembros elegidos en 19 circunscripciones electorales (dos senadores por circunscripción) y que ejercen su mandato por un periodo de ocho años. La Cámara de diputados tiene 120 representantes, dos por cada una de las 60 circunscripciones electorales para la cámara baja, y que son elegidos cada cuatro años. Cambios recientes (2015) en la legislación chilena han modificado esta composición, como veremos más adelante.

Durante la dictadura militar, el parlamento fue disuelto y la constitución de 1980 estableció un Senado compuesto por 28 miembros electos y nueve senadores designados. La figura de los senadores designados le permitiría al gobierno militar mantener un importante poder de veto en las decisiones que tome la Cámara Alta cuando se convoquen nuevamente elecciones parlamentarias, ya que cuatro de ellos eran designados por el Consejo de Seguridad Nacional que debía elegir entre quienes se hubieran desempeñado como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (Ejército, Aviación y Marina) o como directores generales de Carabineros de Chile. Otros tres senadores serían designados por la Corte Suprema y los dos últimos senadores designados serían nombrados por el Presidente de La República, que debía escogerlos entre los rectores universitarios y los ex Contralores de la República. Sin embargo, como parte de los acuerdos de la transición de 1988-1989, se decidió elevar el número de senadores electos de 26 a 38. Además de la figura de los senadores electos y designados, se instituyeron los senadores vitalicios, cargo que le correspondería ocupar a los ex presidentes luego de concluir su mandato constitucional. Entre 1989 y el 2005, los sucesivos gobiernos de la Concertación intentaron eliminar infructuosamente la figura de los senadores designados hasta que el cambio de correlaciones políticas en la sociedad chilena permitió que se aprueben las reformas constitucionales del 2005 que, además de modificar el periodo presidencial, eliminaron tanto los

senadores designados como los vitalicios. Es así que desde el 2005 se volvió a un Senado de 38 miembros electos directamente por sufragio universal.

Las leyes en el congreso deben aprobarse por mayoría en ambas cámaras del parlamento. El presidente tiene poder de veto sobre las leyes y las devuelve al parlamento con sus observaciones. El parlamento puede aprobar las leyes con las observaciones del ejecutivo o revertir el veto presidencial con una votación calificada de dos tercios de ambas cámaras. Para reformar la constitución se requiere la mayoría calificada de dos tercios de ambas cámaras del parlamento, previsión que junto con la figura de los senadores designados, hacía muy difícil que el gobierno y su mayoría parlamentaria apruebe reformas constitucionales contrarias a los intereses de las fuerzas armadas o los partidos políticos cercanos al régimen pinochetista.

La cámara de diputados puede formular acusaciones o procesos de destitución de las principales autoridades del Estado (presidente, ministros, intendentes regionales, gobernadores provinciales, jueces supremos). Estos casos son juzgados en la cámara alta.

A nivel subnacional, las 13 regiones que componen el Estado chileno son administradas por Intendentes Regionales nombrados directamente por el presidente, quien también designa a los gobernadores de las provincias en las que subdividen las regiones. A nivel local, existen 300 municipales con autoridades electas por sufragio universal por periodos de cuatro años

4.1.1. El Sistema Electoral

El sufragio en Chile es universal, directo y secreto. Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar, para ejercerlo, hasta las elecciones del 2005 era necesario registrarse en las listas electorales, siendo el voto obligatorio para los ciudadanos registrados. Sin embargo, debido a los problemas de bajo registro electoral de ciertos grupos de la sociedad chilena (especialmente los jóvenes) en los procesos electorales posteriores a la dictadura, a finales del 2011 el parlamento chileno aprobó una ley que establecía el registro automático de todos los mayores de 17 años en el padrón electoral junto con el voto voluntario. Las elecciones municipales del 2012 se realizaron con este nuevo marco legal.

Entre 1988 y el 2009 la participación electoral de los ciudadanos inscritos en el padrón de electores hábiles ha sido relativamente alta y constante en Chile, por encima del 85 %, con picos cercanos o superiores al 95 % en el plebiscito de 1988 y las presidenciales de 1989. Sin embargo, la evolución de la población en edad de votar que está inscrita en el padrón ha tenido una tendencia decreciente desde 1992. En las elecciones municipales de 1992, el padrón electoral incorporaba al 88.3 % de la población adulta de Chile, mientras que en las elecciones presidenciales del 2009 (primera vuelta), este porcentaje se redujo al 68 %. Si tomamos en cuenta la participación electoral efectiva (ir a votar) sobre el total de la población adulta (mayores de 18 años), esta pasó de 79.4 % en 1992 a 59.6 % en el 2005. Aún así estos niveles de participación están dentro o cerca del promedio latinoamericano ya que de acuerdo con Payne y otros (2007, 249), en promedio la participación electoral en la región entre 1990 y el 2004 ha sido del 61 %

El problema específico en el caso Chileno es que la participación ciudadana es bastante heterogénea si se miran las diferencias entre grupos de edad, tanto respecto del registro electoral (voluntario) como del voto (obligatorio para los registrados). La proporción de jóvenes (18 a 24 años) dentro de los votantes hábiles ha venido reduciéndose sistemáticamente, desde 21.2 % en 1988 hasta 4.5 % en el 2009; asimismo, se aprecia un incremento sustantivo de la proporción de las cohortes mayores, en particular la de mayores de 50 años. La reforma del 2011, al establecer el registro automático en el padrón electoral para todos los adultos mayores de 18, buscaba revertir esta tendencia de los jóvenes nacidos luego del final de la dictadura militar de no inscribirse en el padrón electoral y por lo tanto autoexcluirse de la participación política electoral.

Sin embargo, estas reformas parecen no haber tenido los efectos deseados. En el caso de las elecciones municipales del 2012, las primeras que se realizaron con las nuevas reglas electorales, cantidad de votantes disminuyó en poco más de 1 millón de personas en comparación con las elecciones municipales del 2008. En 2012, el ausentismo superó el 55 % de un total de 13.4 millones de electores hábiles. En las últimas elecciones presidenciales del 2013, el número de votantes disminuyó en más de medio millón de personas, en comparación con las elecciones

del 2009, registrándose un ausentismo de poco más del 50 % de un total de 13.6 ciudadanos inscritos en el padrón.

En un reciente trabajo, Bernardo Mackena (2015), analiza los efectos de estos cambios en la composición del electorado chileno, específicamente entre los que efectivamente participan en las elecciones. Los resultados de este trabajo indican la composición de los votantes chilenos ha sufrido cambios bastante significativos que se expresan en: una caída importante de la participación de electores nacidos antes de 1971¹; un incremento del nivel educativo de los votantes; y un proceso de autoselección del votante, por el cual los votantes menos informados e involucrados de la política dejan de ir a votar. Mackena concluye que las reformas han tenido como efecto un proceso de elitización y sofisticación de los votantes, indicando que ello puede traer ciertos riesgos para la democracia, sobre todo en sociedades marcadas por importantes desigualdades socioeconómicas, en la medida que las elecciones sobrerrepresentan las preferencias políticas de los sectores sociales más privilegiados, mientras que los grupos sociales con menores niveles socioeconómicos tienden a excluirse, reforzando su alineación y desafección política. Estas desigualdades políticas podrían a su vez profundizar las desigualdades sociales.

De acuerdo con las reglas electorales,² para ser elegido presidente, el candidato debe ser chileno de nacimiento (ya sea por haber nacido en el territorio o en el extranjero de padres chilenos) y tener 35 años al momento de la elección. La elección es directa por mayoría absoluta de los votos válidos, caso contrario se procede a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados en la primera ronda.

La segunda vuelta presidencial fue introducida por la constitución de 1980, antes de ello, si un candidato no alcanzaba la mayoría absoluta el presidente era elegido por el parlamento entre los dos candidatos más votados. En las elecciones de 1970, Salvador Allende de la izquierdista Unidad Popular obtuvo 36.6 % de los votos mientras que Jorge Alessandri (candidato de la derecha), alcanzó el 34.9 %, finalmente el congreso optó por Allende. La primera vez que se utilizó la segunda vuelta para la elección presidencial fue en 1999 cuando Ricardo

¹La mayoría de los cuales estaba obligado a votar en el antiguo sistema electoral

²Para este tema se han utilizado los textos de: Carey (2006); Delury y Schlager (2006); Gamboa y Segovia (2006); Heath (2007); Hughes y Parsons (2001); IDEA (2006); Nohlen (2005, 2006); Rojas y Navia (2005); Siavelis (2005*b,a*)

Lagos, candidato de la Concertación, derrotó a Joaquín Lavín de la derecha Alianza por Chile quien resultó segundo en la primera ronda electoral. Las elecciones de 2005, 2009 y 2013 dieron nuevamente lugar a una segunda vuelta electoral en la que ganaron Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y nuevamente Michelle Bachelet respectivamente.

En el caso de las elecciones parlamentarias los requisitos para ser diputado son tener 21 años cumplidos al momento de la elección, tener un nivel educativo equivalente a la secundaria completa y residir en su circunscripción electoral por un periodo no menor a dos años antes de las elecciones. Para los senadores se aplican los mismos requisitos, con la excepción que la exigencia de edad se amplía a los 30 años. Tanto los diputados como senadores pueden ser reelegidos de manera indefinida.

Hasta el 2013 para las elecciones al parlamento se utilizaba el llamado sistema binomial, que resultaba ser una peculiaridad del sistema electoral chileno ya que ninguna otra democracia moderna lo emplea. Los representantes a la cámara de diputados eran elegidos cada cuatro años en 60 circunscripciones binomiales donde se aplica la regla de la pluralidad simple. En cada distrito electoral los partidos políticos o alianzas electorales presentaban listas cerradas y no bloqueadas de dos candidatos, el elector debía votar por una lista, y dentro de cada lista escoger un candidato de su preferencia. A la lista con el mayor número de votos se le asignaba el primer escaño, mientras que el segundo le corresponde a la siguiente lista con más votos. Los escaños eran ocupados por los candidatos con mayor cantidad de votos dentro de sus listas respectivas. Una misma lista podía ganar los dos escaños de una circunscripción si es que sus votos sumaban más del doble de los votos obtenidos por la segunda lista. De esta manera el sistema electoral establecía un umbral efectivo bastante elevado, ya que para obtener un escaño un partido o alianza debía obtener por lo menos el 33.4% de los votos de un distrito electoral, mientras que para ganar ambos escaños se requería el 66.7% de los votos (IDEA, 2006, pp. 92).

En el caso de las elecciones al senado se aplicaba el mismo sistema, los senadores eran elegidos en 19 distritos binomiales para un periodo de ocho años, sin embargo, en esta cámara se realiza la renovación de la mitad de sus miembros cada cuatro años. Antes de las elecciones

del 2005, puesto que el mandato del presidente y de los parlamentarios tenían duraciones diferentes (seis años para el presidente; cuatro para los diputados; ocho para los senadores), las elecciones parlamentarias y presidenciales no necesariamente eran simultáneas. Con las reformas constitucionales del 2005, a partir de las elecciones de ese año, los dos procesos pasaron a ser concurrentes, de forma tal que todos los diputados y la mitad de los senadores acompañan el periodo del mismo presidente.

En abril del 2015 se aprobó una reforma electoral que cambia radicalmente la estructura del sistema binomial para las elecciones parlamentarias (Gobierno de Chile, 2015) y que configura un nuevo sistema más proporcional, pero cuyos efectos recién podrán conocerse a partir de las próximas elecciones del 2018. Los detalles de esta reforma se examinarán en las secciones siguientes.

4.1.2. El Sistema de Partidos

Los primeros partidos políticos chilenos empezaron a desarrollarse de manera paulatina hacia mediados del siglo XIX, diferenciándose en torno a las tensiones de las relaciones Estado – Iglesia en dos grandes movimientos políticos: Liberales y Conservadores. Posteriormente, hacia la segunda mitad del siglo XIX aparecieron los partidos Radical y Demócrata en la arena política. Con el desarrollo de las clases urbanas y obreras a inicios del siglo XX el sistema de partidos fue haciéndose más complejo: el partido Demócrata se dividió en diversas facciones, una de las cuales se convirtió en el Partido Obrero Socialista (1912), que a partir de 1922 pasó a ser el Partido Comunista de Chile – PCCh. A partir de 1932 se inicia un largo periodo de estabilidad política basada en la competencia electoral. En los años 30 aparecieron el Partido Socialista – PS (1933) y los Demócrata Cristianos (1935) y hacia finales de la década de 1950 los diversos grupos de derecha (Liberales, Conservadores y Nacionalistas) se organizan en un solo partido, dando origen al Partido Nacional – PN en 1960.

En 1957, el PS y el PCCh conforman una alianza electoral, el Frente de Acción Popular – FRAP, que presenta la candidatura del líder socialista Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1958 y 1964. El 1969, el FRAP junto con el Partido Radical, el Movimiento

de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente (API) forman la alianza Unidad Popular (UP) que presentará nuevamente la candidatura de Allende en 1970 (Collier y Sater, 2004, pp. 327; Delury y Schlager, 2006, pp. 249; Nohlen, 2005, pp. 253-254). A mediados de la década de 1960, con una postura crítica a la estrategia electoral del PS y el PCCh, se conforma el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con militantes provenientes de canteras universitarias, de orientación marxista leninista y que apuestan por la lucha armada como medio de llegar al poder. Durante el gobierno de Allende el MIR decide suspender temporalmente su opción armada, pero a raíz del golpe militar sus militantes son duramente reprimidos y muchos son víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas.

Hasta antes del golpe militar de 1973, la competencia electoral entre los partidos chilenos reflejaba una dinámica política de tres grandes bloques políticos: los partidos de izquierda (PS y PCCh), el centro (Radicales y Demócratas Cristianos) y la derecha (Partido Nacional); quienes por lo general representaban cada uno cerca de un tercio del electorado. Esta dinámica tiene una buena ilustración en los resultados electorales de 1958 y 1970.

Cuadro 4.1: Elecciones Presidenciales en Chile 1958-1970

Chile 1958 – 1970: Resultados de elecciones presidenciales

Elección	Candidato	% Votos
1958	J. Alessandri (Derecha: Independiente)	31.2
	Salvador Allende (Izquierda: FRAP)	28.5
	Eduardo Frei (Centro: PDC)	20.5
	Luis Bossay (Centro: Partido Radical)	15.4
1964	Eduardo Frei (Centro: PDC)	55.6
	Salvador Allende (Izquierda: FRAP)	36.6
	Julio Durán (Centro: Partido Radical)	4.9
1970	Salvador Allende (Izquierda: UP)	36.6
	J. Alessandri (Derecha: Independiente)	34.9
	R. Tomic (Centro: PDC)	27.9

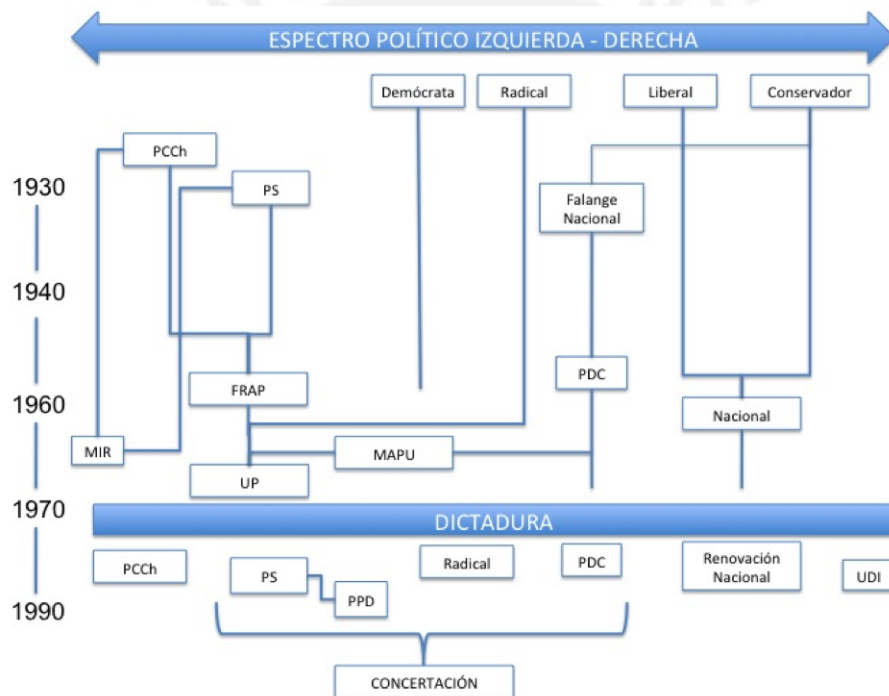
Fuente: Delury y Schlager (2006, pp. 246). Elaboración propia

El golpe militar de 1973 rompe con este sistema de partidos y reprime fuertemente a las fuerzas de izquierda. La competencia electoral queda restringida a los referéndums convocados por el gobierno de Pinochet (1978, 1980, 1988) que tenían el objetivo de darle algún tipo de legitimidad electoral a la dictadura, hasta que en el plebiscito de 1988 las fuerzas opositoras

que impulsan la campaña por el “NO” logran forzar un proceso de transición democrática y la convocatoria a elecciones libres, justas y competitivas en 1989.

El sistema de partidos que emerge luego de la dictadura, si bien es tributario en parte del sistema anterior, logra romper la competencia en tres bloques (izquierda, centro, derecha), instalando un nuevo sistema basado en la división entre centro – izquierda y derecha, ésta última “heredera” del legado de la dictadura Pinochetista. La figura 4.1 busca presentar de manera esquemática la trayectoria y disposición de los partidos políticos chilenos en un eje clásico de izquierda - derecha antes y después de la dictadura militar.

Figura 4.1: Genealogía de los Partidos Políticos en Chile



Adaptado de: Collier y Sater (2004, pp. 257 y 379), con información de Delury y Schlager (2006, pp. 250-253).

El Partido Demócrata Cristiano - PDC

Los orígenes del PDC se sitúan en la Falange Nacional, partido reformista católico que rompe con el antiguo partido conservador en 1935. Con poco respaldo electoral hasta mediados de la década de 1950, la Falange Nacional se fusiona con los Conservadores Social Cristianos, creando finalmente el PDC en 1957 (Delury y Schlager, 2006, pp. 260).

Durante la década de 1960 el PDC se embarca en un proceso de búsqueda de apoyo entre diversos sectores de la sociedad chilena, en particular entre los universitarios, los sectores populares urbanos y rurales. Con ello logra hegemonizar el centro político chileno y su candidato Eduardo Frei obtiene una aplastante victoria electoral en 1964. Durante el gobierno de Frei (1964-1970) se dan importantes reformas sociales y económicas, especialmente la reforma agraria y una mayor intervención del estado chileno en las actividades mineras de extracción y procesamiento del cobre (Collier y Sater, 2004, pp. 331-355).

En las elecciones de 1970, a pesar de que Salvador Allende obtiene la primera mayoría, el PDC seguía siendo la principal fuerza en el parlamento y sus votos permiten la confirmación de Allende como presidente de la república. No obstante, durante el gobierno de la UP, el PDC mantiene una fuerte oposición parlamentaria al programa gubernamental de Allende. La radicalización de las tensiones y conflictos políticos al final del gobierno de Allende llevaron a una coalición de congresistas del PDC y del Partido Nacional a emitir a finales de agosto del 1973 una resolución que acusaba al gobierno de violar sistemáticamente la constitución y las leyes y de tolerar la acción paramilitar de grupos de extrema izquierda, esta resolución incluía una invocación a los miembros de las fuerzas armadas que participaban en el gabinete de ministros a tomar medidas al respecto (Collier y Sater, 2004, pp. 382). El golpe del 11 de septiembre de 1973 fue visto con buenos ojos por algunos dirigentes del PDC que confiaban que una vez removido Allende los militares permitirían que el PDC vuelva al poder. Sin embargo, luego del golpe, la junta militar declaró fuera de la ley a todos los partidos que conformaban la Unidad Popular y declaró en “receso” al resto de partidos (Delury y Schlager, 2006, pp. 250).

La crisis económica de inicios de 1980 dio lugar a un resurgimiento de la oposición al régimen de Pinochet y una renovación de los partidos políticos. En esa época el PDC comienza a reactivar sus bases y junto con una facción del Partido Socialista, los Radicales y la llamada “Derecha Democrática” conforman una “Alianza Democrática” para impulsar la lucha política contra el régimen y preparar la campaña por el NO para el Plebiscito de 1988 (Collier y Sater, 2004, pp. 406-407). Con el liderazgo de Patricio Aylwin, el PDC, y un grupo de 15 partidos y movimientos políticos (que incluía a los miembros de la Alianza Democrática) conforman

la “Concertación de Partidos por el NO” que luego servirá de base para la “Concertación de Partidos por la Democracia” que logra ganar las elecciones de 1989 (con Aylwin como candidato presidencial) y que se construye como un proyecto político de largo aliento para la transición democrática. El liderazgo del PDC en la Concertación se refleja en el hecho de que en las elecciones de 1993 gana la presidencia Eduardo Frei Ruiz (hijo de Eduardo Frei Montalva, presidente electo por el PDC en 1964). Posteriormente, en las elecciones del 2009, Eduardo Frei vuelve a presentarse como candidato, perdiendo frente a Sebastián Piñera en la 2da vuelta.

La participación del PDC en la Concertación junto con sus antiguos rivales socialistas les permiten a la democracia chilena consolidarse y romper el patrón de confrontación tripartita izquierda – centro – derecha que caracterizó el sistema de partidos en las décadas previas a la dictadura militar.

El Partido Socialista - PS

El PS se funda en 1933 y hasta la década de 1970 conforma una serie de alianzas con el PCCh y el Partido Radical para participar en las elecciones. En 1956 estos partidos conforman el Frente de Acción Popular (FRAP) que presenta la candidatura de Allende en las elecciones de 1958 y 1964, logrando obtener el respaldo de cerca de tercio del electorado en esas ocasiones. En 1969, los miembros del FRAP junto con el Movimiento de Acción Popular Unitaria – MAPU (un grupo escindido de la PDC) y la Acción Popular Independiente (API) constituyen la Unidad Popular (UP) que logra ganar las elecciones de 1970 nuevamente con la candidatura de Allende.

Las reformas económicas y sociales impulsadas por el gobierno de Allende fueron fuertemente resistidas por el resto de agrupaciones políticas y los grupos de poder económico del país. Con el incremento de la polarización política, varios militantes de la UP, entre ellos algunos militantes del PS, radicalizaron sus posturas políticas llegando inclusive a proponer la posibilidad de la lucha armada (propuestas que el propio Allende firmemente rechazó). A raíz del golpe militar el PS y el resto de partidos de la UP fueron prohibidos y varios de sus

militantes fueron objeto de dura persecución y represión, incluyendo varios casos de tortura, asesinato y desaparición forzada.

El duro golpe al PS y las discusión en torno a las estrategias a seguir frente al gobierno militar provocaron serias tensiones internas entre sectores radicales y moderados del partido. Un sector del PS (todavía ilegal) apostó por formar la Alianza por la Democracia junto con el PDC y luego integrar la Concertación que participó en la campaña por el NO del plebiscito de 1988 y las siguientes elecciones presidenciales. Ricardo Lagos, dirigente del PS fue presidente de la Alianza por la Democracia, posteriormente, junto con otro dirigentes socialistas funda el Partido por la Democracia (PPD) que también se integra a la concertación.

La participación del PS en la Concertación hizo que moderara su programa político, acercándolo más a posiciones similares a las social democracia de los países de Europa occidental (Delury y Schlager, 2006, pp. 251). En el 2005, Michelle Bachelet líder del PS, gana la nominación de la Concertación para las elecciones de ese año y se convierte en la primera presidenta mujer de Chile, luego de derrotar a Sebastián Piñera, candidato de Renovación Nacional, en la segunda vuelta electoral. El en 2013 Bachelet se presenta y gana nuevamente las elecciones presidenciales de ese año, encabezando la alianza de la Concertación que incluye, por primera vez, al Partido Comunista Chileno.

El Partido por la Democracia - PPD

El PPD se forma a partir de un grupo de disidentes del PS, encabezados por Ricardo Lagos, que tenían como objetivo participar en la campaña por el “NO” de 1988. Inicialmente el PPD fue pensado como una formación “táctica” para aglutinar a los sectores de izquierda interesados votar contra la continuidad del régimen Pinochetista y muchos esperaban que desaparezca una vez que el PS logre nuevamente inscribirse como un partido legal (Delury y Schlager, 2006, pp. 251-252). Sin embargo a pesar de que el PS se refunda luego de las elecciones de 1989, el PPD se mantiene como partido dentro de la concertación, aunque con fuertes cercanías con el PS.

Ricardo Lagos, obtiene la nominación de la Concertación y gana la presidencia del país en las elecciones de 1999, derrotando en la segunda vuelta a Joaquín Lavín, líder la Unión Democrática Independiente (UDI) y candidato de la derechista Alianza por Chile.

La cercanía entre PS y del PPD les permiten contraponer el peso del PDC dentro de la Concertación y desde el 2001 ambos partidos superan la representación del PDC en la cámara baja del parlamento chileno.

Renovación Nacional - RN

Fundado en 1987, Renovación nacional es el primer partido político que se forma en Chile luego del periodo de prohibición de los partidos decretada por la dictadura. Sus fundadores provienen de la UDI, el Frente Nacional del Trabajo (FNT) y algunos miembros del Partido Nacional, la Democracia Radical y del PDC que colaboraron con el gobierno militar.

El objetivo inicial RN es apoyar la campaña por el SI en el plebiscito de 1988, respaldando la continuidad de las reformas económicas emprendidas por la dictadura. Meses antes del plebiscito la UDI se separa de RN pero ambos partidos logran formar la alianza “Democracia y Progreso” que impulsa la candidatura de Hernán Buchi en las elecciones presidenciales de 1989.

La plataforma política de RN es de centro-derecha y de promoción de las políticas económicas de libre mercado, pero buscando distanciarse del legado autoritario del régimen de Pinochet, lo que la diferencia de la más derechista UDI. A pesar de ello, tanto RN como UDI se han presentado como aliados en las elecciones presidenciales de 1989, 1993 y 1999 bajo diferentes denominaciones (Democracia y Progreso en 1989; Unión por el Progreso en 1993; Alianza por Chile en 1999), así como en todas las elecciones parlamentarias. En las elecciones del 2005, RN presentó su propio candidato presidencial, el empresario y magnate chileno Sebastián Piñera, quien fue derrotado por Michele Bachelet. Piñera es nuevamente candidato el 2009, por la “Coalición por el Cambio” integrada por RN y la UDI y gana la presidencia en la segunda vuelta disputada con Eduardo Frei de la Concertación. De esta forma, Piñera inaugura la alter-

nancia política en la democracia chilena, luego de 4 victorias consecutivas de la Concertación en las elecciones presidenciales posteriores a la dictadura.

La Unión Democrática Independiente - UDI

La UDI es un partido que se reclama claramente como heredero del régimen de Pinochet, justificando incluso la represión política de la dictadura. En tal sentido es el partido que se ubica más a la derecha en el espectro político chileno. Arturo Alessandro y Joaquín Lavín han sido los candidatos de la UDI en las elecciones presidenciales de 1993 y 1999, en las que se presentó conjuntamente en alianza con RN y otros partidos de derecha. En el 2005, esta vez sin RN, el candidato de la UDI fue nuevamente Joaquín Lavín quien quedó en tercer lugar en el escrutinio electoral.

Si bien la UDI ha formado alianzas con RN en para participar en las elecciones chilenas, y en particular en las elecciones parlamentarias, su programa más radical de derecha lo hace un partido más reacio a realizar compromisos y negociaciones políticas con los partidos de la Concertación, sobre todo en los asuntos que atañen la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen de Pinochet.

Otros Partidos Políticos

Hay otras agrupaciones con menos éxito electoral que participan en el sistema político Chileno. Por el lado de la Concertación se puede mencionar al Partido Social Demócrata Radical (PSDR), heredero del antiguo Partido Radical fundado en 1863 que cambia su nombre al PSDR en 1994. Hacia la derecha se encuentra la Unión de Centro Centro Progresista (UCC) que desde 1993 se integra a la alianza conformada por RN y la UDI. A la izquierda del espectro político se ubica el PCCh que por lo general se ha presentado en alianza con otros partidos de izquierda en las diferentes elecciones presidenciales y parlamentarias, hasta que el 2009 integra la alianza de la Concertación en las elecciones parlamentarias del 2009.

En el 2009, Marco Enríquez-Ominami, renuncia al PS para encabezar la candidatura presidencial de la alianza Nueva Mayoría por Chile, que es integrada además por otros partidos menores de centro izquierda como el Partido Humanista (PH) y el Partido Ecologista.

4.2. El sistema electoral y sus efectos sobre la competencia partidaria en Chile

Las características únicas del sistema binomial para las elecciones parlamentarias en Chile han sido objeto de intenso debate y análisis. En primer lugar es importante señalar que el diseño del sistema electoral fue producto de las reformas introducidas por la dictadura en un contexto de nula competencia política, por lo que estas fueron una decisión autoritaria del gobernante, aunque durante la negociación política para la transición luego del plebiscito de 1988 se introdujeron algunos cambios que pasaron por un referéndum en 1989. Por lo general, durante regímenes democráticos resulta muy difícil reformar las reglas de juego electorales puesto que los actores que participan de manera hegemónica del sistema político y de las elecciones tienen fuertes intereses invertidos en su continuidad y las correlaciones de fuerzas tienden a ser contrarias a los actores más excluidos del sistema. Los consensos necesarios para impulsar reformas radicales en el sistema electoral son muy difíciles de lograr. El caso de la transición democrática chilena representa un ejemplo de reformas electorales que al momento de producirse no han sido sometidas a este juego de correlaciones de fuerzas de actores políticos con representación electoral. Sin embargo, últimamente, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet inaugurado el 2014 se han introducido importantes reformas al sistema electoral cuyos efectos recién podrán verse en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 2018.

Un resultado previsible del sistema binomial era romper con la dinámica tripartita de la competencia electoral previa a la dictadura, ya que en teoría le permitiría alcanzar representación parlamentaria solo a dos partidos o grupos de partidos. Sin embargo, algunos autores (Rojas y Navia, 2005; Siavelis, 2005*b*) sostienen que además de forzar una concentración del sistema de partidos, al diseñar el sistema electoral, el gobierno de Pinochet tenía como objeti-

vo explícito asegurar una sobrerrepresentación de los partidos políticos favorables al régimen militar tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores (en este último caso ello se aseguraba además con la figura de senadores designados).

En el plebiscito de 1988 para decidir por la continuidad del régimen de Pinochet, el NO obtuvo el 56 % de los votos válidos, mientras que la opción por el SÍ 44 %. Con estos resultados se podía prever que en las siguientes elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989, los partidarios de Pinochet podían lograr esperar un apoyo electoral similar al obtenido en el plebiscito. La coalición política de centro-izquierda que impulsó la campaña por el NO, y que dio origen a la Concertación tenía grandes posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, algo que de hecho ocurrió puesto que su candidato, Patricio Aylwin (líder del PDC), obtuvo el 55.2 % de los votos, porcentaje casi idéntico al voto por el NO en 1988. Ante ese escenario, dado que el umbral para obtener los dos escaños correspondientes a cada circunscripción es bastante elevado (66.7 % de los votos), el sistema binomial ofrecía la posibilidad de que los partidos de derecha, como segunda mayoría nacional, lograsen tener cerca del 50 % de los escaños del congreso y convertirse en mayoría gracias a la figura de los 9 senadores designados por la dictadura. Ello serviría de “candado” para evitar que el gobierno democrático intente desmontar algunas de las reformas emprendidas por la dictadura, tanto en el terreno económico como político, así como prevenir que se avance en la investigación y sanción de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por el régimen Pinochetista.

Adicionalmente a la introducción del sistema binomial, quienes diseñaron el sistema electoral tuvieron la oportunidad de configurar el mapa de circunscripciones electorales utilizando la información de la votación del plebiscito de 1988, de manera tal que la conformación de ciertas circunscripciones busque favorecer sistemáticamente una determinada opción política, especialmente la de los partidos de la derecha (Rojas y Navia, 2005, pp. 94-94). Ello se intentó formando distritos electorales de diferente tamaño, ya que los resultados del plebiscito indicaron que la opción por el NO logró tener más votos en regiones densamente pobladas, mientras que el SI alcanzó mayores preferencias en regiones menos pobladas. Es así que el mapa electoral chileno tiene regiones donde el número de habitantes por escaño es bastante

heterogéneo: desde 45,746 habitantes por diputado en la XI Región de Aysen , hasta 189,412 habitantes por diputado en la Región Metropolitana (Rojas y Navia, 2005, pp. 96).

En varios sistemas electorales parlamentarios es común encontrar cierta desproporción entre el número de habitantes y los escaños de las circunscripciones electorales, lo que en la práctica rompe el principio representativo de un ciudadano – un voto, ya que ciertas regiones se requieren menos votos para tener un representante que en otras (por ejemplo, en el caso peruano para ser elegido parlamentario en Madre de Dios se requieren muchos menos votos que para serlo en Lima). Ello suele ocurrir en particular en los sistemas bicamerales donde existe un Senado que busca una representación territorial, el ejemplo más claro es el senado norteamericano donde cada estado de la Unión, independientemente de su población, elige a dos senadores. En las cámaras bajas, donde la representación busca ser proporcional, se trata de adecuar el tamaño de las circunscripciones de manera tal que su peso político – electoral corresponda al peso demográfico, para ello, en ciertos sistemas donde los distritos electorales son pequeños (usualmente uninominales), se realizan con alguna frecuencia reacomodos en la demarcación de las circunscripciones para ajustar el número de escaños a la población de esas localidades (por ejemplo en los EEUU, en el Reino Unido, en Australia, en Francia y en Japón).

Lo particular en el caso chileno es que no solo la desproporción entre votos y escaños ocurre en el Senado sino también en la cámara de diputados. Es por ello que Rojas y Navia sostienen que “en el caso de Chile queda en evidencia que la mala representación de los distritos que se inicia en 1989 responde a intereses claramente partidistas, en el sentido que la distribución de escaños se realiza con el claro objetivo de favorecer la votación de los partidos de derecha” (Rojas y Navia, 2005, pp. 97).

Analizando los resultados electorales, puede apreciarse que el sistema electoral chileno ha favorecido en efecto la concentración de las preferencias políticas en dos grandes bloques políticos: el centro – izquierda, representado por los partidos de la Concertación y la derecha, representada por RN y la UDI, que salvo en las elecciones del 2005, han presentado sus candidaturas presidenciales bajo la forma de una alianza electoral. Hasta 1993, la Concertación ha logrado ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, es a partir de las elecciones

presidenciales de 1999 que ha sido necesaria una segunda vuelta electoral, ya que tanto en 1999 como en el 2005, la proporción de votos de la Concertación y de la derecha en las primeras vueltas han sido bastante similares. De hecho, de no haber presentado candidaturas divididas en las elecciones del 2005, es probable que la derecha hubiese ganado las elecciones en primera vuelta ese año. Las elecciones presidenciales del 2009 marcan un hito importante al romperse la lógica “bipartidista”, con la presencia de un tercer candidato independiente de centro izquierda (Marco Enriquez-Ominami) que logra obtener el respaldo de un quinto del electorado en la primera vuelta. El desgaste de la concertación luego de 20 años de gobierno, junto con el mal desempeño en la campaña del candidato de la concertación (Eduardo Frei), permitieron finalmente la victoria de la derecha, liderada por Sebastián Piñera y abrir un posible flanco a nuevos actores políticos, aunque esta última posibilidad sea más difícil dada la relación entre el sistema electoral parlamentario y los resultados en este tipo de elecciones.

De hecho, las elecciones presidenciales del 2013 tuvieron como principales protagonistas a los bloques tradicionales de la política Chilena desde la transición democrática: la derecha conformada por la coalición RN-UDI; y la centro derecha, con los partidos de la Concertación (liderados por el PS de Bachelet), a los cuales se sumó el PCCh.

Donde ocurre el efecto concentrador del sistema electoral sobre el sistema de partidos es en los resultados de las elecciones parlamentarias. El elevado umbral del sistema binomial genera fuertes incentivos para que los partidos políticos presenten candidaturas en alianzas electorales. Como se aprecia en las siguientes tablas, los dos principales bloques políticos logran concentrar más del 85 % de los votos válidos y más del 90 % de los escaños en las elecciones a la cámara de diputados, haciendo extremadamente difícil que agrupaciones menores o independientes logren algún escaño, incluso presentándose en alianzas.

En cuanto al sesgo que el diseño electoral (tanto por la regla binomial como por la configuración de las circunscripciones electorales) tendría a favor de los partidos de derecha, los resultados electorales ofrecen evidencias menos claras, especialmente en lo que se refiere a los resultados en la cámara de diputados. Si comparamos el porcentaje de votos válidos con el porcentaje de escaños obtenidos por los principales bloques políticos que se muestran en los

Cuadro 4.2: Elecciones Presidenciales en Chile 1989-2013

Chile 1989-2013: Resultados de elecciones presidenciales

Elección	Candidatos	% 1ª Vuelta	% 2ª Vuelta
1989	P. Aylwin (Concertación)	55.2	
	H. Buchi (Democracia y Progreso)	29.4	
	F. Errazuriz (UCC)	15.5	
1993	E. Frei (Concertación)	58.0	
	A. Alessandri (Unión para el progreso)	24.2	
	J. Piñera (Independiente)	6.2	
	M. Max-Neef (Independiente)	5.6	
	E. Pizarro (PCCh)	4.7	
	C. Reitze (PH)	1.2	
1999	R. Lagos (Concertación)	48.0	51.3
	J. Lavín (Alianza por Chile)	47.5	48.7
	G. Marín (PCCh)	3.2	
	Otros	1.3	
2005	M. Bachelet (Concertación)	45.9	53.5
	S. Piñera (RN)	25.4	46.5
	J. Lavín (UDI)	23.2	
	T. Hirsch (Juntos Podemos Más)	5.4	
2009	S. Piñera (Coalición por el Cambio)	44.1	51.6
	E. Frei (Concertación)	29.6	48.4
	M. Enriquez-Ominami (Independiente)	20.1	
	J. Arrate (PCCh)	6.2	
2013	M. Bachelet (Nueva Mayoría / Concert.)	46.7	62.2
	E. Matthei (Alianza)	25.0	37.8
	M. Enriquez-Ominami (STQ/CHC)	11.0	
	F. Parisi (Independiente)	10.0	
	Otros	7.3	

Fuentes: Nohlen (2005); Heath (2007); Servicio Electoral de Chile (2015). Elaboración propia

Cuadro 4.3: Elecciones Parlamentarias en Chile 1989-2013

Elecciones parlamentarias en Chile 1989-2009: % votos válidos para la cámara de diputados por grandes bloques políticos

Elección	Bloques Políticos			Total
	Concertación	Derecha	Otros	
1989	51.3	34.2	14.5	100.0
1993	55.3	36.6	8.1	100.0
1997	50.4	36.4	13.2	100.0
2001	47.8	44.3	7.9	100.0
2005	51.8	38.7	9.5	100.0
2009	44.4	43.4	12.2	100.0
2013	47.7	36.3	16.0	100.0

Fuentes: Nohlen (2005); Heath (2007); Servicio Electoral de Chile (2015). Elaboración propia

Cuadro 4.4: Composición de la Cámara de Diputados en Chile 1989-2013

Número y % de escaños obtenidos por las principales coaliciones y partidos políticos en las elecciones para la cámara de diputados en Chile: 1989-2013

Elección	Concertación					Derecha			Otros	Total
	PDC	PPD	PS	Otros	Total	RN	UDI	Otros		
No. de Escaños										
1989	38	16	n/a	15	69	29	11	8	48	3
1993	37	15	15	3	70	29	15	6	50	n/a
1997	38	16	11	4	69	23	17	7	47	4
2001	23	20	10	9	62	18	31	8	57	1
2005	20	21	15	9	65	19	33	2	54	1
2009	19	18	11	9	57	18	37	3	58	5
2013	21	15	15	16	67	19	29	1	49	4
% de Escaños										
1989	31.7	13.3	n/a	12.5	57.5	24.2	9.2	6.7	40.0	2.5
1993	30.8	12.5	12.5	2.5	58.3	24.2	12.5	5.0	41.7	n/a
1997	31.7	13.3	9.2	3.3	57.5	19.2	14.2	5.8	39.2	3.3
2001	19.2	16.7	8.3	7.5	51.7	15.0	25.8	6.7	47.5	0.8
2005	16.7	17.5	12.5	7.5	54.2	15.8	27.5	1.7	45.0	0.8
2009	15.8	15.0	9.2	7.5	47.5	15.0	30.8	2.5	48.3	4.2
2013	17.5	12.5	12.5	13.3	55.8	15.8	24.2	0.8	40.8	3.3

Fuentes: Nohlen (2005); Heath (2007); Servicio Electoral de Chile (2015). Elaboración propia

cuadros 4.3 y 4.4 observamos que los partidos de derecha siempre obtienen un porcentaje de escaños mayor al porcentaje de votos válidos. Sin embargo ello también ocurre en el caso de la Concertación. De hecho, en las seis elecciones parlamentarias la desproporción “benefició más” a la Concertación en tres de ellas (1989, 1997 y 2001). Realizando un análisis más sofisticado a nivel de circunscripciones de las elecciones de 1989 al 2001, César Zucco también concluye que el pretendido efecto pro-derecha del sistema electoral chileno no se sostiene empíricamente, al menos en el caso de las elecciones para diputados (Zucco, 2007). Si algún sesgo ocurre es en contra terceros actores que no logran pasar el umbral.

Por otro lado, de acuerdo con Rojas y Navia, el sesgo inicial del diseño de las circunscripciones electorales hacia los partidos de derecha, que pudo haber jugado un rol en favorecerlos en las elecciones parlamentarias de 1989, ya no se produce, dado que los cambios demográficos y políticos en la sociedad chilena han provocado que la correlación entre el tamaño de las circunscripciones y determinadas opciones políticas deje de funcionar (Rojas y Navia, 2005, pp. 115)

La relación entre el sistema electoral y el sistema de partidos en Chile tiene otros componentes que van más allá de los supuestos efectos mecánicos del mismo (como los efectos concentradores sobre el sistema de partidos). Autores como Siavelis y Carey sostienen que la necesidad de formar alianzas para alcanzar el umbral requerido para ganar los dos escaños de una circunscripción electoral son una fuente de tensión dentro de las coaliciones políticas, en particular dentro de la Concertación (Carey y Siavelis, 2005; Siavelis, 2005*b*). Como el voto es por listas que contienen cada una dos candidatos, dentro de las cuales los escaños se asignan en función del voto preferencial, en muchos casos los miembros de las alianzas electorales tienen que realizar complejas negociaciones para distribuirse los puestos en las listas de forma tal que puedan repartir sus candidatos entre las diversas circunscripciones, no solo para que logren atraer una masa crítica importante de votantes, sino también para que los diferentes partidos que componen la alianza puedan lograr alguna representación parlamentaria y la alianza no se resquebraje debido a la hegemonía de alguna agrupación en particular.

Los riesgos que enfrentan los miembros de una coalición en las elecciones parlamentarias chilenas no dejan de ser importantes, como señalan Carey y Siavelis, coordinar una campaña requiere compromisos entre los miembros de la coalición que podrían alienar el apoyo de algunas de sus bases. Además, si la coalición no logra duplicar el voto de la lista adversaria, y si los partidarios de un candidato dentro de la lista binomial se ven decepcionados por los compromisos políticos que la alianza ha tenido que asumir, este candidato puede perder la competencia intra lista (por el voto preferencial) y quedarse sin escaño. En el caso de la Concertación, este tipo de riesgos buscan recompensarse mediante la promesa de puestos en el gobierno si se ganan las elecciones, lo que constituye una especie de “seguro” para los perdedores que mitiga las tendencias centrífugas intra coalición, pero ello depende de la capacidad de la concertación mantener esas ofertas (Carey y Siavelis, 2005, pp. 18), cosa que no ocurre si se sufre una derrota electoral como en la elecciones presidenciales del 2009.

De acuerdo con la literatura revisada, las principales críticas que tiene el sistema binomial pueden resumirse en los siguientes aspectos: En primer lugar, el efecto concentrador que tiene sobre el sistema de partidos contribuye de cierta forma a su rigidez, ya excluye de la representación parlamentaria a partidos menores cercanos a los intereses de determinados segmentos de la sociedad chilena (como otros partidos que compiten en el flanco izquierdo de la Concertación), al mismo tiempo que dificultan la entrada de nuevos actores en el sistema de partidos que podrían representar a nuevos elementos del electorado (por ejemplo los jóvenes). En segundo lugar, la desproporción que existe en la configuración de las circunscripciones electorales rompe con el principio de representatividad al otorgarle mayor peso político a ciertas regiones del país menos pobladas, en comparación a las áreas de mayor población.

Por otro lado, se critica el posible sesgo político del sistema electoral, ya que, como segunda fuerza política entre 1989 y el 2005, la derecha tiene asegurada una alta representación parlamentaria por encima de su votación nacional. Ello se vería reforzado por la configuración inicial de las circunscripciones electorales. Sin embargo, la evidencia muestra que, en el caso de las elecciones a la cámara de diputados, este sesgo no es sistemático, de ahí que no resulten claros los beneficios que tendría para los partidos de la Concertación modificar este sistema que en

varias ocasiones también los ha favorecido. En el caso de la cámara de senadores, sí es cierto que este sesgo es más pronunciado, pero ello tiene que ver en parte importante con la figura de senadores designados, que desde las elecciones del 2005 ha dejado de existir. Finalmente, las componendas necesarias dentro de las alianzas para distribuir de manera equilibrada las candidaturas parlamentarias entre las diferentes circunscripciones, son una fuente de tensiones de potencial centrífugo dentro de las coaliciones electorales.

A pesar las críticas al sistema binomial, autores como Carey han destacado varias de sus virtudes: la concentración permite la formación de coaliciones electorales fácilmente identificables y diferenciables entre sí, con programas que buscan ser implementados cuando se llega al poder; las alianzas han logrado incluir a ciertos grupos minoritarios que tienen ventajas comparativas en determinadas circunscripciones y capacidad de “jalar votos”; se cuenta con una oposición viable y un marco institucional donde las coaliciones y la confrontación política pueden desarrollarse. Por otro lado, las listas abiertas permiten al elector castigar o recompensar la actuación de determinados partidos al marcar su voto preferencial. Asimismo, el reducido número de candidatos dentro de una misma circunscripción previene que las campañas se conviertan en una “cacofonía de propuestas individuales que podrían confundir más que informar a los votantes” (Carey, 2006, pp. 235). Estos elementos podrían haber contribuido a la estabilidad del sistema de partidos y del sistema político chileno, así como a la institucionalización y consolidación paulatina de la democracia luego de la dictadura.

En abril del 2015, el parlamento chileno aprobó una reforma política que pone fin al sistema binomial, introduciendo un sistema de elección proporcional para la cámara de diputados con circunscripciones plurinominales. Para ello, se redujeron las circunscripciones de 60 a 28 y se aumentó la cantidad de escaños de 120 a 155. Esta reforma también incluye cambios en la elección a senadores; las cuotas de género; y la reducción de barreras para la participación de agrupaciones independientes (Gobierno de Chile, 2015). Los efectos de estas reformas sobre el sistema de partidos y la representación electoral podrán verse en las próximas elecciones del 2018.

Si bien es cierto de que muchas de las observaciones anotadas acerca del sistema electoral chileno se refieren al diseño de las reglas de las elecciones parlamentarias, el análisis posterior que se haga de la relación entre el sistema electoral, el sistema de partidos y el comportamiento del elector individual usando los datos de encuestas postelectorales estará centrado en los casos de las elecciones presidenciales. A pesar de esta aparente incongruencia, se tratará de argumentar que la dinámica que se produce entre el sistema electoral y el sistema de partidos en Chile, tiene efectos sobre cómo el elector enfrenta su decisión en el caso de votar por un presidente, puesto que ese tipo de elección resulta de todas formas enmarcada en un contexto institucional que restringe y/o condiciona la manera en cómo se presenta la oferta electoral y los criterios que puede usar el elector para tomar su decisión.

4.3. La dinámica política chilena 1989 – 2009

De acuerdo con Collier y Sater, al momento de ganar las elecciones de 1989, el nuevo gobierno de los partidos de la Concertación tenía ante sí tres retos principales: reforzar el consenso democrático asegurando la existencia de relaciones fluidas entre los civiles y militares; enfrentar el problema de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura; y mantener el crecimiento económico que Chile empezó a experimentar desde 1985, atendiendo los problemas sociales derivados de la pobreza y del ajuste estructural de la economía realizado durante el régimen de Pinochet (Collier y Sater, 2004, pp. 390).

Si bien la coalición de partidos de centro-izquierda había logrado una clara victoria electoral al alcanzar el 55 % de los votos por su candidato presidencial Patricio Aylwin (líder del PDC), la transición democrática estuvo enmarcada en un diseño institucional que restringía la capacidad del nuevo gobierno de emprender grandes transformaciones, tanto a nivel político como económico. El poder que los militares mantenían en la nueva institucionalidad democrática chilena se veía expresado en la figura de los senadores designados, la permanencia de Augusto Pinochet como comandante en jefe de las fuerzas armadas, y un poder judicial conformado por jueces mayoritariamente nombrados durante la dictadura, especialmente en la Corte Suprema. Por otro lado, el sistema binomial y la conformación de las circunscripciones electorales le

otorgaba a los partidos de derecha (RN y UDI) una importante presencia en el parlamento, tanto en la cámara de diputados (40 % de los escaños) como en la de senadores (16 sobre 47), a los cuales había que agregar los 4 senadores designados entre los jefes de los institutos armados y los 3 senadores elegidos entre los miembros de la Corte Suprema. Ya que toda reforma constitucional requería una mayoría calificada de 2/3 de ambas cámaras, esta configuración del parlamento hacía que esa posibilidad fuera remota en el corto plazo.

De acuerdo con Francisco González, la oposición al régimen Pinochetista tuvo que aceptar que el nuevo sistema político democrático chileno estuviera marcado por un conservadurismo constitucional y un régimen económico neoliberal (González, 2008, pp. 147). A pesar de sus rigideces, este tipo de institucionalidad hizo que la dinámica del conflicto y la confrontación política chilena post dictadura se desarrolle en un contexto de relativa estabilidad, donde los cambios, tanto a nivel del modelo y los “candados” políticos, como en lo referente a las políticas económicas y sociales, se fueron realizando de manera negociada, lo que produjo transformaciones incrementales a lo largo de las dos décadas siguientes.

A nivel económico, Chile experimentó un impresionante proceso de crecimiento impulsado por la promoción de las importaciones (mineras y agroindustriales) y por el desarrollo del sector de servicios y finanzas. Entre 1991 y el 2005, la tasa de crecimiento del PBI per cápita chileno fue de 4.1 %, significativamente superior al promedio mundial (Schmidt-Hebbel, 2006). El 2010, el PBI per cápita en US dólares a precios actuales fue de es de US\$ 12,683.00 , el más alto de los países latinoamericanos, y 5.8 veces superior al registrado a finales del gobierno de Pinochet.³ La solidez de la economía chilena le ha permitido afrontar con éxito dos importantes shocks externos producto de crisis internacionales: la crisis asiática de 1997 y la crisis internacional del 2008-2009.

Durante el gobierno militar se produjeron profundas reformas que reconfiguraron la estructura de la economía chilena, orientándola hacia el libre mercado y la preeminencia de la actividad privada. Sin embargo estas reformas incurrieron en costos sociales importantes que los nuevos gobiernos democráticos debían enfrentar. Hacia finales del gobierno de Pinochet,

³Datos del Banco Mundial en su página web: www.bancomundial.org.

cerca del 40 % de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. Durante el gobierno de Aylwin se hicieron importantes esfuerzos en el ámbito de las políticas sociales que permitieron reducir la pobreza al 27 % en 1994. Los sucesivos gobiernos de la Concertación continuaron los programas sociales de lucha contra la pobreza, que combinados con el crecimiento económico, han hecho que al final del mandato de Michele Bachelet los chilenos en situación de pobreza representasen el 15 % de la población. La desigualdad social (medida con el índice GINI) se ha reducido entre 1990 y el 2008, pero aún así sigue siendo algo mayor que el promedio de los países latinoamericanos (CEPAL, 2010, pp. 187).

A nivel institucional, los sucesivos gobiernos de la Concertación han tratado de impulsar paulatinamente una serie de reformas destinadas a levantar varios de los candados institucionales y legales que formaron parte del legado de la dictadura, implementando soluciones con cierto nivel de compromiso con los partidos de la oposición. Durante el gobierno de Aylwin se aprobó una reforma fiscal duramente resistida por los grupos de poder económico, con la finalidad de incrementar los recursos públicos destinados a los programas sociales. Asimismo le logró levantar varias de las restricciones a la conformación de organizaciones sindicales que habían sido puestas en práctica durante la dictadura.

En la presidencia de Eduardo Frei se pudo hacer una reforma de la Corte Suprema de justicia al reducir la edad de jubilación de sus magistrados, lo que permitió renovar su composición y retirar hacia inicios del nuevo siglo a la mayoría de los jueces designados en la época de la dictadura. Durante el gobierno de Ricardo Lagos se concluyeron una serie de reformas constitucionales que terminarían por dismantelar la mayoría de candados institucionales puestos por la dictadura: la eliminación de la figura de senadores designados y vitalicios; se le devolvió al presidente la facultad de remover a los comandantes de las fuerzas armadas; se modificó el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) para que éste fuera un órgano de asesoría presidencial directamente convocado sólo por el presidente;⁴ y se redujo el mandato presidencial a 4 años, para que de esta forma las elecciones parlamentarias y la primera vuelta presidencial

⁴ Antes de ello el CONASE podía ser convocado por cualquiera de sus miembros, entre los cuales destacaban los comandantes militares y los jueces supremos.

fuesen concurrentes. Estas reformas fueron aprobadas en agosto del 2005, a escasos 4 meses de las elecciones presidenciales que dieron como ganadora a Michele Bachelet.

Uno de los problemas más espinosos con los que ha tenido que lidiar la democracia chilena entre 1989 y el 2006 ha sido el de la investigación y sanción a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Este ha sido probablemente el tema que más ha polarizado a la sociedad chilena en las últimas décadas y que ha alimentado la configuración de un clivaje político en torno al eje izquierda / derecha y partidarios / opositores del legado del gobierno autoritario que ha caracterizado gran parte de la confrontación política y la competencia electoral en las décadas posteriores a la transición democrática.

Las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile por la dictadura se estiman en unas 2,920 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas y cerca de 28,500 víctimas de detenciones y torturas (Hayner, 2011, pp. 48 y 61), además de miles de expatriados en diversos países. En 1978 el gobierno de Pinochet promulgó una ley de amnistía que evitaba que la mayoría de estos casos pudieran ser investigados y sancionados. Durante la presidencia de Patricio Aylwin se creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por el jurista Raúl Rettig centrada en la investigación de los casos de asesinatos y desapariciones. El “Informe Rettig” (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991), como es conocido el reporte de dicha comisión, fue entregado en febrero de 1991 y provocó airadas reacciones de los partidarios de Pinochet, quienes se rehusaron a reconocer las responsabilidades del régimen, acusando al gobierno de reabrir las heridas del pasado y justificando la represión debido a la “amenaza comunista” que habría pesado sobre Chile durante el gobierno de Allende.

Las tensiones en torno a los casos de derechos humanos continuaron durante el gobierno de Frei. A finales de su mandato, una serie de eventos empezaron a cambiar la correlación de fuerzas a favor de la investigación y sanción de los crímenes cometidos por la dictadura. En octubre de 1998 Pinochet fue arrestado en Londres por mandato internacional emitido por el juez español Baltazar Gastón en relación a casos de violaciones a los derechos humanos. Ello ocurrió seis meses después de que Pinochet dejara el cargo de Comandante en Jefe del Ejército y asumiera su puesto como senador vitalicio (lo que le permitía gozar de inmunidad

parlamentaria ante la justicia chilena). Luego de varios meses de procedimientos legales, y en virtud de su deteriorado estado de salud, el gobierno británico decidió permitir el retorno de Pinochet a Chile en marzo del 2000, cuando Ricardo Lagos ya había asumido la presidencia de la república y se había cambiado la composición de la Corte Suprema. Entre el 2000 y el 2006 se suceden en Chile varios recursos legales para intentar juzgar a Pinochet por crímenes de derechos humanos, a los cuales se agregaron cargos de corrupción. A pesar de su mal estado de salud, en el 2006 los tribunales chilenos lo declaran apto para ser juzgado, pero los procesos se ven truncados por la muerte de Pinochet en diciembre del 2006. Los juicios contra Pinochet y las acusaciones de corrupción que pesan sobre miembros cercanos de su familia, erosionaron fuertemente el apoyo de sectores conservadores de la sociedad chilena a su causa, provocando además que los partidos de derecha traten distanciar su agenda del tema de los derechos humanos y de la defensa cerrada del legado del gobierno dictatorial.

Las elecciones del 2009, donde resultó ganador Sebastián Piñera, inauguran un nuevo ciclo político, donde la competencia entre los bloques políticos de centro-izquierda y derecha resulta menos marcada por los temas que fueron el legado de la dictadura y de la transición democrática. La agenda chilena se encuentra ahora más marcada por problemas de sociedad contemporáneos (inseguridad ciudadana, calidad de la educación, reformas en el sistema de protección social, entre otros). El electorado chileno contemporáneo, al cual recientemente se ha incorporado un gran contingente de jóvenes que no comparten la cultura y los clivajes políticos de sus mayores (marcada por los debates y confrontaciones de la transición democrática) presenta nuevos desafíos a la capacidad del sistema de partidos de representar a las demandas del nuevo entorno social del Chile de hoy.

Las elecciones del 2013 le permiten a Michel Bachelet volver a la presidencia encabezando nuevamente a la Concertación, a la cual se suma también el Partido Comunista de Chile, liderando una propuesta programática que hace nuevos énfasis en políticas redistributivas e importantes reformas en el sistema educativo (como la recientemente aprobada gratuidad de la enseñanza en la educación superior pública). Sin embargo escándalos de corrupción que involucran a miembros cercanos de la familia de la presidenta, así como una coyuntura

económica más complicada debido al deterioro del precio mundial de las materias primas y los minerales, han deteriorado seriamente la aprobación presidencial y hecho que el porcentaje de chilenos que desapruere la gestión de su presidenta supere largamente al de la aprobación desde inicios del 2015 (CADEM, 2016).

Más allá de los vaivenes de la coyuntura política, es importante recalcar que el contexto histórico así como el diseño institucional de la democracia chilena (grandes bloques de alianzas políticas y un sistema electoral altamente concentrador) le han permitido al sistema político chileno alcanzar un alto nivel de estabilidad e institucionalización, lo que a su vez ha hecho que los cambios políticos en Chile hayan sido graduales, de naturaleza incremental y sometidos a complejas negociaciones tanto intra como extra coaliciones políticas. Sin embargo ese grado de institucionalización y estabilidad ha provocado también una rigidización del sistema de partidos, el cual ahora debe mostrar mayor capacidad de flexibilidad para enfrentar la agenda futura de Chile. Queda ver si las recientes reformas políticas permiten esta flexibilización manteniendo la estabilidad de la democracia chilena.

Capítulo 5

México: De la Hegemonía del PRI a la Competencia Abierta

Como ha sido indicado, los procesos electorales mexicanos que serán objeto de análisis en este trabajo son las elecciones parlamentarias de 1997, 2003 y 2009, así como las elecciones generales del 2000 y 2006 (presidenciales y parlamentarias). Estos procesos son particularmente significativos en la historia política contemporánea de este país puesto marcaron el fin de la hegemonía política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que duró cerca de 7 décadas, y el inicio de un ciclo político caracterizado por el multipartidismo, la alternancia política y el gobierno dividido, donde el partido que controla el poder ejecutivo ya no goza de la mayoría absoluta en ambas cámaras del parlamento.

Este ciclo político representa también la culminación de un proceso de reformas institucionales, particularmente en el sistema electoral, que se extendió a lo largo de la década de 1990 y que constituyó una prolongada transición de un régimen autoritario – competitivo hacia la democracia multipartidaria.¹

¹Sobre la transición democrática en México y su relación con los procesos electorales ver en particular los trabajos de: Eisenstadt (2004); Greene (2007); Haber (2008); Klesner (2002, 2005); Levitsky y Way (2010); Moreno (2003, 2009); Nohlen (2005).

5.1. El Sistema Político Mexicano

Los Estados Unidos Mexicanos son una República Federal compuesta por 31 estados y un Distrito Federal. A la cabeza del poder ejecutivo se elige un presidente que ejerce su mandato por un periodo de 6 años sin posibilidades de reelección y que nombra directamente su gabinete ministerial, gozando además de amplias facultades legislativas.

El Congreso de la Unión es bicameral. El Senado está compuesto por 128 miembros elegidos por periodos de 6 años. Cada estado elige a 3 senadores y los 32 restantes son elegidos en una sola circunscripción electoral. La cámara de Diputados tiene 500 miembros que sirven por un periodo de 3 años; 300 de ellos son elegidos en igual número de circunscripciones electorales y 200 son elegidos en cinco circunscripciones de 40 diputados cada una.

Cada estado elige a un gobernador y a un Congreso Estatal. Al igual que en el nivel federal, el gobernador ejerce su mandato por seis años y tampoco tiene posibilidades de reelección. Los diputados y senadores federales y estatales no pueden ser reelegidos inmediatamente, pero pueden volver a postular luego de un periodo legal.

Cada estado está subdividido en municipios que eligen un presidente municipal y un cabildo. El Distrito Federal se divide en delegaciones presididas por un jefe delegacional. Todos estos cargos se ejercen por periodos de tres años y no pueden ser reelegidos inmediatamente.

El principio de la no reelección es un fundamento central de la política mexicana y tiene sus orígenes en la Revolución Mexicana de 1910, cuando Francisco Madero se levanta en contra del gobierno autocrático de Porfirio Díaz quien se mantenía en el poder desde 1876 mediante una sucesión de reelecciones, en su mayoría amañadas. Una de las consignas de la revuelta de Madero era la de “sufragio efectivo y no reelección”. Este principio hace que periódicamente todas las autoridades electas de la federación cambien o roten entre niveles (municipal, federal, estatal, con excepción de los presidentes) y que los liderazgos políticos se ejerzan dentro de las organizaciones partidarias. La carrera de un político mexicano es fuertemente dependiente de su lealtad a sus organizaciones partidarias donde se deciden las listas de candidatos que se presentarán a en cada nivel de gobierno.

5.1.1. El Sistema Electoral

El sufragio es universal, directo y secreto. Todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años tienen derecho a votar si se encuentran inscritos en el registro electoral. En principio el voto es obligatorio y hay penalidades en caso de no acudir a las urnas, sin embargo éstas no son implementadas por lo que en la práctica el voto se convierte en una decisión voluntaria de cada ciudadano.²

Para ser elegido presidente la constitución establece que se tiene que ser mexicano de nacimiento, haber residido en el país por lo menos veinte años. Adicionalmente hay que tener por lo menos 35 años el día de la elección, haber residido en el país un año completo antes de la elección y no ser ministro de ninguna iglesia. Tampoco pueden postular los miembros de las fuerzas armadas o militares retirados con menos de seis meses en esa condición. Se excluye también a algunos altos funcionarios del Estado que no hayan renunciado a su cargo por lo menos seis meses antes de la elección.

Para las elecciones de cargos ejecutivos (Presidente, gobernadores, presidentes municipales y jefes de delegación) rige un sistema de mayoría simple de los votos válidos.

Para ser candidato a la Cámara de Diputados Federales hay que ser mexicano de nacimiento y tener más de 21 años al momento de la elección. Asimismo deben haber nacido o residido en su circunscripción por lo menos seis meses antes de la elección. Las mismas restricciones se aplican a los candidatos al senado, con la salvedad de que en este caso la edad se eleva a los 28 años.

El sistema electoral para la Cámara de Diputados es un sistema mixto segmentado. Cada elector tiene dos votos, uno para una circunscripción uninominal (CU) y otro para una circunscripción plurinominal (CP). De los 500 diputados, 300 se eligen en CU por sistema de mayoría simple (first past the post o FPTP). La distribución de las 300 CU depende de la distribución de la población establecida por el censo nacional que se lleva a cabo cada 10 años. Los 200 diputados de CP se distribuyen en 5 circunscripciones de 40 miembros cada una. Las listas de candidatos a las CP son cerradas y bloqueadas y los escaños en cada una de ellas son

²Para esta sección utilizamos los trabajos de: Delury y Schlager (2006); Haber (2008); IDEA (2006); Klesner (2002, 2007); Nohlen (2005); Payne, Zovatto y Mateo Díaz (2007)

asignados de manera proporcional al porcentaje de votos obtenidos a nivel nacional por los partidos políticos.

Ninguna de las 32 entidades de la federación puede tener menos de dos representantes electos ya sea en CU o en CP. Asimismo, ningún partido puede tener más de 300 diputados federales (ya sea elegidos en CU o CP), ello previene que alguna agrupación logre una mayoría de dos tercios en la cámara de diputados que le permita realizar enmiendas constitucionales sin concertar con otros partidos. El porcentaje de escaños que obtiene un partido no puede exceder en más de ocho puntos al porcentaje de votos que este obtuvo a nivel nacional, ello constituye un mecanismo para mitigar la desproporción que suele ocurrir entre los votos y los escaños que obtienen los partidos en sistemas que tienen un importante componente de candidatos elegidos en CU por el sistema mayoritario simple.

Por otro lado, con la finalidad de reforzar la función concentradora del sistema electoral y evitar una proliferación de pequeños partidos representados en el parlamento, se establece un sistema de vallas electorales donde para recibir un escaño en la cámara de diputados los partidos deben registrar candidatos en por lo menos dos tercios de las CU y obtener un mínimo de 2% de votos en las CP.

Tres cuartos de los escaños del Senado compuesto por 128 miembros representan a las 32 entidades federales de la Unión. Cada una de ellas tiene 3 senadores, dos de ellos son asignados al partido que obtiene la mayoría simple de los votos y el tercero al partido con la primera minoría de votos. Los 32 senadores restantes se eligen en un distrito plurinominal nacional usando la fórmula de Hare del mayor resto.

Las organización de las elecciones y el conteo de votos están a cargo del Instituto Federal Electoral (IFE) que desde 1996 goza de plena autonomía en sus funciones respecto del gobierno central. El IFE también fiscaliza el financiamiento de las campañas y el uso de los fondos públicos que se le asignan a los partidos políticos. Asimismo, administra el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión y que se asigna a los partidos políticos en época de campaña electoral. En la conformación del IFE participan el poder legislativo, los partidos políticos y representantes de la sociedad civil. Desde las elecciones de 1997 el IFE ha ganado

una alta credibilidad y transparencia en la organización de los procesos electorales mexicanos, convirtiéndose en uno de los organismos electorales más poderosos y eficientes de América Latina. A partir del 2014, a raíz de la reforma constitucional de ese año, el IFE cambia de nombre y pasa a llamarse Instituto Nacional Electoral (INE).

Las disputas en materia electoral son resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación (TRIFE) que es una rama especializada de la Suprema Corte Federal. El TRIFE asigna los miembros de ambas cámaras elegidos en CP, valida los resultados electorales y proclama al presidente ganador.

5.1.2. El Sistema de Partidos

Como se mostró en la 2.3, el sistema de partidos Mexicano es uno de los más concentrados de los cuatro casos que se están analizando. En las elecciones que se están analizando en esta investigación, la competencia básicamente ha estado centrada en tres grandes agrupaciones: el PRI, el PAN y el PRD.

El Partido Revolucionario Institucional - PRI

El principal partido que ha dominado la historia política mexicana a lo largo del siglo XX ha sido el Partido Institucional Revolucionario (PRI). Este partido tiene sus orígenes en 1929, cuando el presidente Plutarco Calles decidió la creación de un partido nacional, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) que aglutinase las diferentes facciones políticas que habían participado en la Revolución Mexicana, con la finalidad de institucionalizar la sucesión del poder luego de un extenso proceso revolucionario marcado por una extrema convulsión social y política. En 1934, Plutarco Calles designó a Lázaro Cárdenas como candidato presidencial del PRN, figura emblemática de la política mexicana del siglo XX, quien empezó un proceso de modernización económica y política de México. En la década de los 30 se institucionalizó el principio de no reelección del presidente, el mandato presidencial de seis años y la práctica de selección unilateral de su sucesor por parte del presidente en ejercicio (conocida como “el dedazo”).

En 1946 el PRN cambió de nombre para convertirse en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). A lo largo de la década de 1940 se conformó la estructura corporatista de la base social del PRI, fundamentada en la organización de los campesinos, obreros, empleados estatales, profesionales, comerciantes y sectores de la clase media, en poderosas confederaciones afiliadas al partido (Confederación de Trabajadores de México – CTM; Confederación Nacional Campesina – CNC; Confederación Nacional de Organizaciones Populares – CNOP), que junto con su práctico monopolio de los cargos de elección popular a lo largo de los diferentes niveles de la Federación de Estados Mexicanos (municipios, gobernaturas estatales, asambleas estatales, parlamento federal), le permitieron al PRI penetrar en todos los estamentos sociales y políticos de la sociedad mexicana y gozar de una hegemonía política casi indiscutible hasta la década de 1980 (Delury y Schlager, 2006, pp. 887-888).

La disciplina intrapartidaria del PRI es bastante elevada y se sustenta en una serie de relaciones interpersonales, verticales y horizontales que conforman un conjunto de camarillas políticas. Un político exitoso dentro del PRI construye su entorno con pares que va conociendo a través de su vida académica o profesional (relaciones horizontales), así como a través de sus asistentes o funcionarios de confianza que va reclutando en los diversos puestos de responsabilidad pública que ocupa a lo largo de su carrera (relaciones verticales). Conforme asciende en su trayectoria política, la camarilla del líder partidario comienza a ocupar posiciones más importantes en el escalafón de la administración pública o en los puestos de elección popular (Delury y Schlager, 2006, pp. 888).

El PRI fue el principal impulsor de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que modernizó la sociedad mexicana durante el siglo XX. Ello significó una presencia directa y rol central del Estado en la economía, y el desarrollo de amplias políticas sociales (educación, salud, vivienda y trabajo) dirigidas a los sectores populares y a las bases sociales del partido organizadas corporativamente.

Desde la década de 1940 hasta finales de la década de 1980, la hegemonía del PRI en la política mexicana se sustentó en una combinación de diversos factores complementarios o alternativos (dependiendo del contexto político de la época): políticas populistas y la construcción

de bases corporatistas y de redes clientelistas; momentos de represión selectiva de la oposición política (en ocasiones masivas); y construcción de lazos cercanos con importantes sectores del empresariado y los medios de comunicación masiva. Todo ello era posible gracias al control casi absoluto del aparato estatal del que gozó el PRI por cerca de 70 años (Greene, 2007).

Hacia mediados de la década de 1980, el PRI inició una serie de reformas neoliberales y privatizaciones para promover una mayor participación de la inversión privada en la economía, pero manteniendo un rol central del Estado en el manejo de la misma y de algunos sectores estratégicos (en especial la industria petrolera). Esta combinación de preferencias de políticas gubernamentales y el peso de sus bases sociales corporatistas y regionales ubican al PRI aproximadamente al centro del espectro político, en comparación con los otros partidos políticos importantes del México contemporáneo (Delury y Schlager, 2006, pp. 887-888; Greene, 2007; Haber, 2008). Luego de 12 años de desempeñarse como un partido de oposición en los sucesivos gobiernos del PAN, en el 2012 el PRI volvió a ganar la presidencia de la república de la mano de su candidato Enrique Peña Nieto.

El Partido de Alianza Nacional - PAN

El principal partido de oposición al PRI desde mediados del siglo XX ha sido el Partido de Alianza Nacional – PAN. El PAN se fundó en 1939 inspirado en principios católicos, definiendo su doctrina como “humanista y católica”, en parte en reacción al fuerte anticlericalismo demostrado por el PRI y el gobierno. Ello hizo que entre 1940 y mediados de la década de 1960 el PAN se constituyese en un partido conservador de derecha que cultivaba un nicho electoral pro católico, en especial en los estados del norte de México. Hacia finales de la década de 1960 se intentó hacer un viraje hacia posiciones demócrata cristianas y más liberales en el terreno económico. Ello provocó una serie de disputas internas entre la “vieja guardia” doctrinaria y sectores más liberales y pro mercado del partido que querían ampliar la base electoral del mismo hacia los centros urbanos, las clases medias y el empresariado.

Hacia mediados de los 80, las medidas de estatización de la banca decretadas por el presidente López Portillo para enfrentar los efectos de la crisis de la deuda alienaron al PRI de

importantes sectores del empresariado que fueron inclinándose hacia el PAN. Los “neopanistas” que se acercaron al partido en la década de los 80 impulsaban posiciones políticas más liberales y pro mercado en el terreno económico, mitigando el tradicional clivaje católico conservador del PAN para irse posicionando como un partido más liberal de derecha que reclamaba una mayor apertura democrática al régimen del PRI (Greene, 2007, pp. 89.91). Ello le permitió al PAN tener mayores éxitos electorales en sectores urbanos de la clase media mexicana e incluso ganar por primera vez una elección para gobernador del estado de Baja California en 1989.

Hacia finales de la década de 1980 e inicios de la década de 1990, el respaldo electoral del PAN comienza a incrementarse de manera importante, ganando algunas elecciones gubernatoriales y mayores escaños en el Congreso de la Unión. En 1991 Vicente Fox gana la gobernatura del estado de Guanajuato y se convierte en el principal líder del PAN para disputar las elecciones presidenciales del 2000. Para esas elecciones el PAN encabeza una alianza electoral (Alianza por el Cambio) que integra al Partido Verde Ecológico de México (PVEM) y Vicente Fox resulta ser elegido presidente con el 43.4% de los votos válidos con una plataforma de campaña basada en la exigencia de la alternancia política y el fin de la hegemonía del PRI en la presidencia de la Unión. El PAN logró una nueva victoria electoral al elegir a Felipe Calderón como presidente en las elecciones del 2006 por un apretado margen de 235 mil votos (de un total de 42 millones de votos emitidos) por encima del candidato del PRD Manuel López Obrador.

Ideológicamente el PAN se ubica a la derecha del espectro político mexicano, propugnando políticas de libre mercado y pro empresa.

El Partido de la Revolución Democrática - PRD

El tercer partido más importante de México contemporáneo es el Partido de la Revolución Democrática – PRD. Se crea oficialmente en 1989 luego de las elecciones presidenciales del año precedente a partir de la confluencia de diversos grupos políticos de tendencia de izquierda: una facción disidente del PRI conocida como “Corriente Democrática”; la “Izquierda Socialista” que venía del Partido Mexicano Socialista (PMS), el Partido Mexicano de los Trabajadores

(PMT), el Partido Unificado Socialista de México (PSUM), el Partido Comunista Mexicano (PCM), la “Coalición de la Izquierda” y el “Movimiento de Acción Popular”; y la “Izquierda Social” compuesta por diversas organizaciones sociales de trabajadores, campesinos y grupos cívicos (Delury y Schlager, 2006, pp. 890).

La tradición de la revolución mexicana que dio origen al PRI y sus políticas nacionalistas y populistas que atraían a vastos sectores populares de la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX constituían un escenario de dejaba poco espacio a la organización de fuertes partidos de izquierda de corriente socialista o comunista. El Partido Comunista Mexicano (PCM), el antecedente más antiguo del PRD, fue fundado en 1917 y mantuvo una tendencia pro-soviética a lo largo de gran parte del siglo XX, como muchos de sus similares en otras partes del mundo. Obtuvo un estatus legal para participar en procesos electorales recién en 1979 donde alcanzó 5.4 % de los votos en las elecciones para la cámara de diputados (Delury y Schlager, 2006, pp. 890).

Como ha sido común en la historia política de varios países latinoamericanos, las divisiones y el sectarismo ideológico hicieron que proliferasen varias corrientes marxistas y socialistas que formaban diferentes organizaciones. Sin embargo, en 1981, el PCM junto con otros partidos más pequeños se unieron en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) que presentó candidato a las elecciones presidenciales de 1982 obteniendo menos del 5 % de los votos.

A raíz de las políticas de ajuste estructural y de reformas neoliberales implementadas por el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se conformó una facción opositora dentro del PRI conformada por militantes de tendencia izquierdista, liderados por Cuauhtémoc Cárdenas, ex gobernador del estado de Michoacán e hijo del histórico líder del PRI Lázaro Cárdenas, y por Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente del partido. En 1986 formaron la llamada “Corriente Democrática” (CD) del PRI que impulsaba la candidatura de Cárdenas para las elecciones presidenciales de 1988. Cuando la dirigencia del partido optó por la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, los miembros de la CD se retiraron del PRI y conformaron junto con el PSUM, el PMS y otras agrupaciones de izquierda el Frente Democrático Nacional (FDN) que presentó la candidatura de Cárdenas a las elecciones de 1988 (Greene, 2007, pp. 93). Cárdenas

obtuvo el 38.1 % del conteo oficial en una elecciones que fueron fuertemente cuestionadas por los partidos de oposición y los observadores internacionales debido a las abundantes evidencias de fraude electoral.

Al año siguiente el FDN se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual presentó nuevamente la candidatura de Cárdenas a las elecciones presidenciales de 1994 donde quedó tercero (detrás del PAN) con el 17 % de los votos. En 1997 el PRD obtuvo significativas ganancias en las elecciones parlamentarias, llegando a constituirse como la segunda fuerza en la Cámara de Diputados con 25 % de los escaños. Asimismo logró una importante victoria al lograr la elección de Cárdenas como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cargo que siguió estando en manos de líderes del PRD hasta la actualidad (2014).

El PRD es considerado un partido de centro izquierda, afiliado a la Internacional Socialista, con un programa político favorable al mantenimiento de un rol importante del Estado en la economía y de impulso de programas públicos para eliminar las desigualdades sociales.

Otros Partidos Menores

Si bien el PRI, el PAN y el PRD son los principales pilares del sistema de partidos mexicano, existe un conjunto de agrupaciones menores que participan de las elecciones, a veces de manera independiente (en elecciones de diverso nivel), otras veces en alianza con algunos de los grandes partidos nacionales. Entre ellos destacan el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (CD).

El PVEM fue fundado en 1986 por Jorge González Torres, antiguo militante del PRI. A pesar de su etiqueta ecologista, varios analistas sostienen que el PVEM se constituyó como una plataforma política para la familia González, una familia de empresarios que controla una importante cadena de farmacias en México. Cuando su fundador se retiró de la vida política el liderazgo del partido fue asumido por su hijo Jorge Emilio González. En el 2004 Emilio González estuvo envuelto en escándalos de corrupción relacionados con desarrollos inmobiliarios en el municipio de Quintana Roo controlado por el PVEM (Delury y Schlager, 2006, pp. 891).

El las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales, el PVEM ha participado en alianzas diferentes con los principales partidos políticos. En el 2000 formó parte, junto con el PAN, de la Alianza por el Cambio que impulsó la candidatura presidencial de Vicente Fox. En el 2003 presentó candidaturas conjuntas con el PRI para las elecciones parlamentarias de ese año; el 2006 formó con este partido la Alianza por México que estuvo detrás de la candidatura del priísta Roberto Madrazo; más recientemente, el 2012, el PVEM respaldó la candidatura del priísta Enrique Peña Nieto, quien ganó las elecciones de ese año.

El Partido del Trabajo (PT) es un partido ideológicamente cercano al PRD, conformado por militantes con ciertos vínculos con partidos maoístas. Algunos críticos sostienen que la fundación del PT fue avalada por el Presidente Zedillo y el PRI con la finalidad dividir el apoyo al PRD y otros partidos de izquierda en las elecciones presidenciales de 1994 (Delury y Schlager, 2006, pp. 891). En las elecciones presidenciales del 2000 el PT, junto con la CD, fue uno de los partidos que integró la alianza encabezada por el PRD (Alianza por México)³ para impulsar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. El PT volvería a aliarse con el PRD y la CD para formar la Coalición por el Bien de Todos que participó en las elecciones del 2006 presentando como candidato presidencial al peredista Andrés Manuel López Obrador.

La Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (CD), creada en 1991, agrupa una serie de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas de derechos humanos, promoción de la democracia, derechos sociales y derechos indígenas (Delury y Schlager, 2006, pp. 891-892). En las dos últimas elecciones presidenciales (2000 y 2006), la CD ha sido parte de las alianzas encabezadas por el PRD.

³No confundir la Alianza por México creada para participar en las elecciones presidenciales del 2000 y encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, con la alianza del mismo nombre conformada por el PRI y el PVEM que se formó para las elecciones presidenciales del 2006.

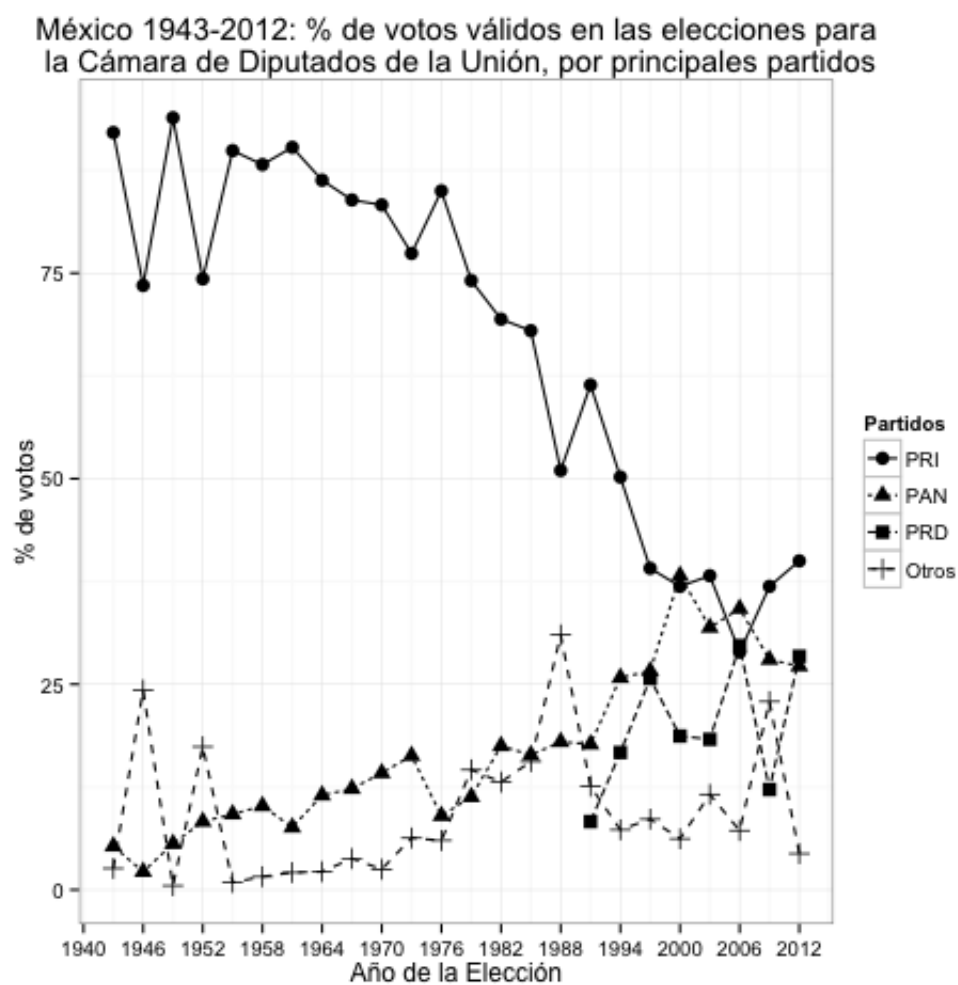
5.2. El Proceso Político Mexicano desde la década de 1980

Entre la décadas de 1920 y 1980, el régimen autoritario electoral de México mostró una gran estabilidad bajo la hegemonía del PRI (Haber, 2008; Levitsky y Way, 2010, pp. 153). La crisis económica de la década de 1980 y el pésimo desempeño de la economía mexicana a lo largo de los años siguientes, ocasionaron una fuerte erosión de la legitimidad social y política del régimen del PRI, proceso que venía incubándose desde finales de la década de 1960. Como se aprecia en la figura 5.1, desde mediados de la década de 1970,⁴ el porcentaje de votos y de escaños que el PRI venía obteniendo en las elecciones parlamentarias comenzó un proceso gradual, pero sostenido, de declive, que se hizo más agudo a partir de las elecciones parlamentarias de 1985 (Haber, 2008, pp. 130; Nohlen, 2005, pp. 458-471). Si bien el sistema electoral mexicano estaba diseñado de tal forma que el PRI alcanzara sistemáticamente la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión, le resultaba cada vez más complicado mantener su hegemonía política respecto de los demás partidos políticos, tanto a nivel federal como en los diferentes Estados de la Unión, así como contener facciones disidentes dentro del mismo partido que se oponían a las políticas económicas implementadas por el gobierno del presidente La Madrid (1982-1988) y reclamaban mayor democracia interna en la elección de los candidatos del partido en los diferentes procesos electorales.

Entre 1986 y 1987, el PRI sufre un proceso de escisión cuando un conjunto de líderes de tendencia de izquierda del partido se alejan del mismo para conformar el Frente Democrático Nacional (FDN), que presentó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a las elecciones presidenciales de 1988, respaldada por un grupo de partidos más pequeños de diversas tendencias de centro izquierda y de izquierda.

⁴En 1968 ocurrió la masacre de Tlatelolco, en la cual las fuerzas armadas mataron e hirieron a cientos de universitarios reunidos en la plaza del mismo nombre en Ciudad de México, reclamando mayor autonomía universitaria, demandando medidas de apertura democrática y protestando por las desigualdades sociales. Ello provocó la indignación internacional y de vastos sectores de la clase media mexicana. Posteriormente durante la década de los 70s aparecieron algunos movimientos insurgentes organizados por partidos de izquierda ante la cerrazón del régimen a una mayor apertura política, movimientos que fueron duramente reprimidos por las fuerza de seguridad del Estado (Haber, 2008, pp. 128)

Figura 5.1: Evolución del Voto en las Elecciones Parlamentarias en México 1943-2012



Las elecciones de 1988, en donde salió elegido Jaime Salinas de Gortari, fueron extensamente cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional debido a abundantes evidencias de fraude electoral. A pesar de la manipulación de los resultados electorales, el PRI apenas obtuvo el 50.4% de los votos válidos en las elecciones parlamentarias, el porcentaje más bajo de su historia electoral hasta esa fecha, sobre todo si se compara con los resultados superiores al 70% obtenidos en elecciones precedentes. En esas elecciones el FDN terminó segundo en el conteo electoral, seguido de cerca por el PAN. Tanto el FDN como el PAN se unieron inicialmente para buscar invalidar el resultado electoral. Para legitimarse a pesar del fraude electoral, el gobierno de Salinas de Gortari tuvo que negociar con el PAN que acepte los resultados a cambio de que el gobierno reconozca las victorias del PAN en algunas de las elecciones estatales y municipales (Haber, 2008, pp. 133). Es necesario indicar que en aquel momento las elecciones eran organizadas por una agencia dependiente del Gobierno Federal y el proceso de certificación de las mismas debía pasar por la Cámara de Diputados Federales, en donde el PRI gozaba de una amplia mayoría debido al diseño del sistema electoral.

A lo largo de la década de 1980, el PRI buscó introducir reformas sucesivas al sistema electoral que le permitiesen dar signos de apertura política para aplacar los reclamos de los partidos de la oposición y la crítica internacional, pero al mismo tiempo conservar la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Luego de las elecciones de 1988, ante la acelerada erosión de la legitimidad política del PRI, los principales partidos de oposición, el PAN y el PRD vieron que era realísticamente alcanzable derrotar al PRI en la arena electoral, tanto a nivel federal como estatal y municipal, siempre y cuando el gobierno accediera a introducir reformas al sistema electoral que lo vuelvan más independiente, transparente e imparcial. Por otro lado, el PRI evaluó que si quería continuar siendo un actor hegemónico y legítimo en la política mexicana debía dar mayores muestras de apertura democrática del sistema político, haciendo reformas más profundas al sistema electoral.

Estas reformas se fueron introduciendo de manera paulatina en la primera parte de la década de 1990 a iniciativa del propio PRI que seguía controlando la mayoría parlamentaria necesaria para pasar el paquete de reformas electorales. A pesar del proceso de reformas, éstas

seguían siendo insuficientes, con marchas y contramarchas, y le seguían dando una importante ventaja al PRI al momento de repartir los escaños en el parlamento.

Para las elecciones parlamentarias de 1991 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), la primera agencia electoral autónoma en la historia de México. Sin embargo, el mecanismo para designar a los comisionados del IFE en esa época le permitía todavía al PRI tener un grado importante de control sobre dicha institución.

Durante la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994), el gobierno introdujo una serie de medidas sociales y económicas, creando programas sociales de lucha contra la pobreza y focalizando su implementación en circunscripciones donde la oposición tenía ventajas relativas sobre el PRI. Ello le permitió recobrar cierto respaldo electoral en las elecciones legislativas de 1991.

Las elecciones presidenciales de agosto de 1994 se desarrollaron en un contexto político muy particular. En enero de ese año se dio inicio a la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas. Ello generó en el gobierno el temor (infundado) de que el PRD abandone la lucha electoral para plegarse a un proyecto de insurgencia armada (Eisenstadt, 2004, pp. 48).

El gobierno de Salinas de Gortari se propuso impulsar un nuevo paquete de reformas electorales que eviten que los principales partidos de oposición cuestionen los resultados de las elecciones presidenciales de 1994 y se genere un contexto de mayor inestabilidad política e ingobernabilidad, a la vez que le permitiese al PRI mantenerse como actor central de la política mexicana. En pleno proceso de diseño del nuevo código electoral y casi al inicio de la campaña, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en una manifestación política y fue reemplazado por Ernesto Zedillo.⁵ Las elecciones se desarrollaron bajo un nuevo marco regulatorio, que le daba mayor autonomía al IFE; limitaba los gastos de campaña y

⁵Las circunstancias del asesinato de Colosio no llegaron a ser del todo esclarecidas. Algunas versiones lo vinculan a pugnas de poder dentro del PRI, sobre todo debido a que durante la campaña presidencial Colosio hizo públicas fuertes críticas a las políticas implementadas por la administración de Salinas de Gortari. Algunos líderes del PRI señalaron la posible responsabilidad de Salinas y de Zedillo, lo que no ha podido ser probado (Islas, 2008). La hipótesis de las pugnas internas asociadas al crimen recrudescieron cuando luego de las elecciones, en septiembre de 1994, fue asesinado en Ciudad de México José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado Salinas de Gortari. El mismo año, el PRI perdía a dos prominentes figuras del partido.

fiscalizaba mejor el uso de fondos públicos para favorecer a los candidatos oficialistas; así como eliminaba ciertas ventajas que el sistema de repartición de escaños parlamentarios le daba al partido mayoritario.

Si bien el PRI ganó las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias, los partidos de oposición como el PAN y el PRD lograron tener una representación parlamentaria importante. Los resultados fueron legitimados tanto internamente como internacionalmente (Lipset, Worcester, and Turner 1998). La victoria del PRI fue posible gracias a que seguía teniendo ventajas como partido de gobierno y pudo beneficiarse del éxito relativo de las políticas sociales emprendidas por el gobierno durante la administración de Salinas que lograron contener momentáneamente los efectos negativos de la crisis financiera que se avecinaba. Si bien las elecciones de 1994 fueron limpias, no fueron del todo justas ya que la asimetría en recursos y cobertura mediática todavía seguían beneficiando al PRI por encima de sus competidores (Levitsky y Way, 2010, pp. 158).

Sin embargo, para mediados de la década de 1990 resultaba evidente que la capacidad de maniobra del PRI para mantenerse en el poder como partido hegemónico enfrentaba serios desafíos. Las tensiones políticas y sociales, tanto externas como internas, que debía enfrentar el PRI llegaban a puntos extremos.

Por un lado, las reformas económicas liberales introducidas por la administración de Salinas, en parte destinadas a adecuarse a la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, habían implicado un proceso de privatización que erosionaba la capacidad distributiva del Estado y del partido para generar lealtades clientelistas entre sus bases corporativas y regionales a nivel estatal y municipal, lo que limitaba sus posibilidades para generar amplios respaldos electorales en la sociedad mexicana, incluso a pesar del uso de programas sociales focalizados.

Las presiones populistas de las bases sociales del PRI alienaban hasta cierto punto el apoyo de sectores importantes del empresariado mexicano y ciertos sectores de las clases medias urbanas, que veían en el PAN una alternativa de un partido de derecha más afín a políticas de mayor liberalización de la economía y que podía representar una posibilidad de alternancia

política sin alterar el fondo de las reformas económicas implementadas por la administración de Salinas.

Por el lado de la izquierda, el PRD y la amenaza de una insurgencia armada del EZLN también le restaban respaldo de sectores sociales descontentos con el desempeño económico del gobierno en un país con altas tasa de pobreza y desigualdad social y en un contexto donde la economía mexicana resultó gravemente afectada por la crisis financiera de 1994.⁶

Internamente existía una pugna política al interior de la dirigencia del PRI entre sectores más conservadores (conocidos como los “dinosaurios”) que tenían bases políticas importantes en algunos Estados y gobiernos locales del interior del país y eran reticentes a perder el poder político derivado del control del aparato estatal, y sectores más tecnocráticos o “modernizadores” que buscaban una renovación del partido en un contexto de mayor globalización y presiones por apertura democrática del régimen entre las clases sociales más urbanizadas.

Como señalan Levisky y Way (2010, pp. 158-159), para la segunda mitad de la década de 1990, las correlaciones de fuerza entre los principales partidos políticos mexicanos (PRI, PAN, PRD) habían sufrido cambios importantes en detrimento de la hegemonía del PRI. Las reformas económicas neo liberales implementadas por el gobierno de Salinas habían permitido una mayor diversificación de la clase media y de un nuevo empresariado privado que veían en el PAN una alternativa política más afín a sus intereses, en contraste con la tradición estatista del PRI. Ello le permitió al PAN contar con el apoyo de sectores importantes del empresariado y acceso a fondos para el financiamiento de campañas políticas y convertirse en un contendor electoral importante capaz de disputarle al PRI la victoria en diferentes elecciones a nivel federal y regional.

Asimismo, a lo largo de la década de 1990 el PRD había logrado ampliar se manera significativa su militancia, llegando a aglutinar cerca de 2 millones de afiliados que sintonizaban con la propuesta más izquierdista de este partido. Por otro lado, gracias a la autorrestricción de la represión gubernamental, aparecieron nuevos medios independientes, organizaciones de

⁶En 1994 el porcentaje de la población debajo de la línea de pobreza nacional en México ascendía al 52 %, hacia 1996, luego de la crisis económica (“efecto Tequila”), este porcentaje aumentó a 69 % (Fuente: World Bank, Data Bank, <http://databank.worldbank.org/>)

derechos humanos y ONGs pro democráticas más vigilantes y críticas del frente al accionar del gobierno. Finalmente, la crisis económica de 1994 terminó por afectar seriamente el respaldo popular al gobierno del PRI.

En ese contexto, mantenerse en el poder por medio de las elecciones parlamentarias de 1997 y presidenciales del 2000 hubiese implicado que el PRI orqueste un fraude electoral de proporciones mayores a las registradas en 1988, lo que hubiese representado un costo político muy alto tanto dentro como fuera del país (Levitsky y Way, 2010, pp. 159).

Dadas estas circunstancias, el gobierno de Zedillo inició un conjunto de negociaciones políticas con las fuerzas de oposición que tuvieron su expresión en el nuevo código electoral adoptado en 1996 (Nohlen, 2005, pp. 444-445). La nueva legislación electoral eliminó el control gubernamental en el conteo de votos y fortaleció al IFE como una institución plenamente autónoma del poder político, eliminando la presencia de funcionarios designados por el ejecutivo entre sus miembros. El IFE sería desde ese momento la única institución encargada de conducir los procesos electorales y validar los resultados. El Tribunal Federal Electoral (TRIFE) se incorporó al poder judicial como órgano especial de la Corte Suprema y máxima autoridad para la resolución de disputas electorales. Adicionalmente se introdujeron regulaciones concernientes al financiamiento de las campañas electorales, especialmente el financiamiento público de los partidos políticos, la fijación de límites máximos en los gastos de campaña y sistemas de fiscalización de los mismos con fuertes sanciones a los partidos que infringiesen esas normas. También se establecieron mecanismos para asegurar un acceso más equitativo de los partidos a los medios de comunicación (Nohlen, 2005, pp. 445).

En su conjunto, las reformas electorales de 1996 reforzaron la transparencia y la equidad de las elecciones, haciéndolas cada vez más competitivas y los resultados menos dependientes de los recursos (especialmente financieros, públicos y privados) que invertían los partidos políticos en las campañas electorales, donde el PRI gozaba de mayores ventajas (Molinar Horcasitas, 1999).

Gracias a este conjunto de medidas, las elecciones parlamentarias de 1997 fueron las más justas y transparentes de la historia mexicana hasta ese momento. Si bien el PRI obtuvo la

Cuadro 5.1: Elecciones Presidenciales en México 1982 - 2012

México 1982-2012: Resultados de elecciones presidenciales

Elección	Candidatos	% Votos válidos
1982	M. de la Madrid (PRI)	74.3
	P. Madero (PAN)	16.4
	Otros	9.3
1988	C. Salinas (PRI)	50.7
	M. Clouthier (PAN)	16.8
	C. Cárdenas (FDN)	31.1
	Otros	1.4
1994	E. Zedillo (PRI)	50.1
	D. Fernández (PAN)	26.7
	C. Cárdenas (PRD)	17.1
	Otros	6.1
2000	F. Labastida (PRI)	36.9
	V. Fox (Alianza por el Cambio [PAN])	43.4
	C. Cárdenas (Alianza por México [PRD])	17.0
	Otros	2.7
2006	R. Madrazo (Alianza por México [PRI])	22.2
	F. Calderón (PAN)	35.9
	A. López Obrador (CPBT [PRD])	35.3
	Otros	6.6
2012	E. Peña Nieto (Compromiso por México [PRI])	39.2
	A. López Obrador (Mov. Progresista [PRD])	32.4
	J. Vázquez (PAN)	26.1
	G. Quadri (PANAL)	2.3

Fuentes: Nohlen, 2005, pp. 439-478; Klesner, 2002; Klesner, 2007; Instituto Nacional Electoral, 2015. Elaboración propia. En las elecciones del 2006 las siglas CPBT significan “Coalición Por el Bien de Todos”

mayoría relativa de votos para ambas cámaras del Congreso de la Unión, perdió por primera vez la mayoría absoluta de escaños en la Cámara de Diputados Federales (conservó sin embargo el 60 % de escaños en el Senado). Asimismo, en aquellas elecciones el PRI perdió las elecciones para la gobernación del importante Distrito Federal, sede de la capital de la República, en las cuales resultó electo Cuauhtémoc Cárdenas, líder del PRD. El PAN alcanzó el 24.2 % de los escaños de diputados, obteniendo 3 parlamentarios más que en las elecciones precedentes de 1994. El principal beneficiario de las elecciones parlamentarias de 1997 fue el PRD, que en alianza con el PT obtuvo el 26.2 % de los escaños de diputados y 51 parlamentarios más que en las elecciones precedentes.

La limpieza y transparencia de las elecciones de 1997 construyeron el prestigio del IFE como institución autónoma capaz de asegurar resultados electorales legítimos y reglas de juego que permitiesen una verdadera competencia electoral.

Las históricas elecciones presidenciales del 2000 representaron el principio de la alternancia política en México en el poder ejecutivo. Por primera vez desde su fundación a fines de la década de 1920, el PRI perdía una elección presidencial. Vicente Fox, del PAN fue elegido presidente con el 43.4 % de los votos válidos, por encima Francisco Labastida del PRI (36.9 %) y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD (17 %).

A pesar de su victoria presidencial, el PAN no pudo llegar a la mayoría parlamentaria, aunque su alianza con el PVEM le otorgaba el 44.6 % de los escaños de la Cámara de Diputados y el 39.8 % de los senadores. Fox debía gobernar con un parlamento dividido, donde el PRI mantenía el 42.2 % de los escaños de diputados y el 46.9 % de los senadores; mientras que por su lado la alianza encabezada por el PRD contaban con el 13 % de los escaños de diputados y un porcentaje similar de escaños del senado.

La victoria de Fox en las elecciones del 2000 y cambio político que significaron, generaron altas expectativas de reformas importantes en la sociedad Mexicana, en un contexto donde el 53.4 % de la población se ubicaba por debajo de la línea oficial de pobreza y la economía entraba en una fase recesiva (la tasa de crecimiento del PBI en el 2001 fue de 0 %), de la cual se recuperó lentamente en los años siguientes.

Cuadro 5.2: Elecciones Parlamentarias en México 1997 - 2012

Elecciones parlamentarias en México 1997-2012: % de votos válidos para las circunscripciones uninominales de la Cámara de Diputados de la Unión por grandes agrupaciones políticas

Elección	Partidos / Bloques Políticos				Total
	PRI	PAN	PRD	Otros	
1997	39.1	26.6	28.3	6.0	100.0
2000	36.9	38.2	18.7	6.2	100.0
2003	42.3	31.9	23.1	2.7	100.0
2006	28.9	34.2	29.7	7.2	100.0
2009	46.1	29.6	19.4	4.9	100.0
2012	40.0	27.2	28.4	4.4	100.0

Fuente: Instituto Nacional Electoral, 2015. Los resultados incluyen a los aliados de las principales agrupaciones o bloques. Elaboración propia.

La agenda de reformas que quería implementar el PAN se vio frustrada por la ausencia de mayoría propia en el parlamento y la polarización política que ahí se experimentaba. El PRD no estaba dispuesto a colaborar con un gobierno que consideraba de derecha. Por su parte el PRI consideraba que sus opciones para recuperar el gobierno el 2006 podían incrementarse si se negaba a colaborar con el PAN en el parlamento. El estilo carismático de gobierno de Fox, que, en vez de buscar salidas negociadas en el parlamento, trataba de generar respaldo político apelando directamente a la comunicación mediática con la población, no ayudaba a impulsar sus políticas, generando más bien la suspicacia y el rechazo a colaborar por parte de los líderes políticos de la oposición, e incluso de su propio partido (Haber, 2008, pp. 156-157). La consecuencia de ello fue un bloqueo legislativo de las iniciativas gubernamentales y un desgaste político de la administración Fox.

Estos elementos tuvieron repercusiones negativas para el PAN en las elecciones parlamentarias del 2003. El partido de gobierno perdió 72 escaños en la cámara de diputados y tanto el PRI como el PRD tuvieron ganancias significativas, reforzando sus expectativas de disputarle el poder al PAN en las elecciones presidenciales del 2006.

En las elecciones del 2006 el PRD gozaba de ventajas importantes. En el 2000, el PRD había logrado nuevamente ganar las elecciones del Distrito Federal con la candidatura de Andrés López Obrador, hecho que lo convertía en la principal figura para encabezar la alianza

Cuadro 5.3: Composición de la Cámara de Diputados de la Unión en México 1997 - 2012

Número y % de escaños obtenidos por los principales partidos en las elecciones para Diputados de la Unión 1997-2012

	Elección	Partidos / Bloques Políticos				Total
		PRI	PAN	PRD	Otros	
No. de Escaños	1997	239	121	132	8	500
	2000	211	223	66	0	500
	2003	241	151	108	0	500
	2006	123	206	158	13	500
	2009	264	142	83	10	500
	2012	241	114	135	10	500
% de Escaños	1997	47.8	24.2	26.4	1.6	100.0
	2000	42.2	44.6	13.2	0.0	100.0
	2003	48.2	30.2	21.6	0.0	100.0
	2006	24.6	41.2	31.6	2.6	100.0
	2009	52.8	28.4	16.6	2.2	100.0
	2012	48.2	22.8	27.0	2.0	100.0

Fuente: Instituto Nacional Electoral, 2015. Los resultados incluyen a los aliados de las principales agrupaciones o bloques. Elaboración propia.

de partidos de izquierda liderada por el PRD para las elecciones del 2006 (Coalición para el Bien de Todos). Los altos índices de popularidad durante su gestión gubernatorial y su campaña centrada en ofertas de justicia e inclusión social mediante la creación y expansión de programas sociales, le dieron una importante ventaja en las primeras encuestas de opinión.

El desgaste en el gobierno del PAN afectó inicialmente la campaña de su candidato, Felipe Calderón, quien se mantuvo en segundo lugar en las encuestas hasta casi el final de la campaña electoral. El candidato del PRI era Roberto Madrazo, presidente del partido y caracterizado como parte de la “línea dura” del mismo (Klesner, 2007, pp. 805). Discusiones internas dentro del PRI y las reminiscencias de fraude en el manejo de fondos de campaña cometido durante su elección como gobernador de Tabasco en 1994 afectaron su candidatura (Haber, 2008, pp. 158), lo que lo mantuvo siempre en un tercer lugar en los sondeos y haciendo que varios votantes del PRI dividiesen sus preferencias entre Calderón y López Obrador, manteniendo un voto partidista para las elecciones parlamentarias (de hecho en las elecciones parlamentarias el PRI obtuvo 6 % más de votos que en las presidenciales).

En el último tramo de la elección, una agresiva campaña negativa del PAN en contra de López Obrador, acusándolo de radical y vinculándolo a la órbita ideológica del presidente venezolano Hugo Chávez, contribuyó a cerrar la brecha entre Calderón y López Obrador, al punto que los sondeos previos a la elección daban cuenta de un empate técnico (Klesner, 2007, pp. 806). Finalmente el candidato del PAN se impuso al del PRD por un muy estrecho margen de votos (véase el cuadro 5.1). Los resultados fueron radicalmente cuestionados por el PRD, acusando al gobierno de fraude en protestas que duraron varios meses, sin embargo el IFE legitimó las elecciones y Felipe Calderón se convirtió en el segundo presidente panista de la historia de México.

El debate electoral del 2006 estuvo marcado por la discusión alrededor de las limitaciones del modelo económico mexicano y sus secuelas de exclusión social, así como por los problemas de inseguridad debido a la violencia de los carteles de la droga que empezaban a escalar seriamente y que se convertiría en uno de los principales problemas del México contemporáneo. Este tipo de temas electorales da cuenta de un cambio sustancial respecto del debate acerca del continuismo del PRI o cambio que caracterizó el contexto electoral del 2000.

En las elecciones parlamentarias del 2009 el PRI obtuvo 237 de los 500 escaños en disputa en la cámara de diputados federarles y junto con su aliado, el PVEM, obtuvo el control de la mayoría en ese cuerpo legislativo, llegando a sumar 264 escaños (Klesner, 2010).

La posición centrista del PRI, en relación al PAN y el PRD, así como la tradición histórica de identificación partidaria de muchos votantes mexicanos con este partido, le permiten gozar un espacio electoral favorable, a pesar del legado autoritario de su historia política en el siglo XX. El PRI sigue manejando varios gobiernos estatales y mantiene importantes bastiones políticos en el conjunto del amplio territorio de México. En los primeros años del siglo XXI el PRI se ha logrado ubicarse en una posición equidistante de los principales partidos que representan a la derecha y la izquierda mexicana, lo que permite seguir jugando un rol gravitante en el nuevo contexto político multipartidario de ese país (Greene, 2007, pp. 299-303).

De hecho, estos activos son los que le permitieron al PRI recuperar la presidencia de la República en las elecciones generales del 2012 con la candidatura de Enrique Peña Nieto, quien

obtuvo 39 % de los votos válidos, por delante de Andrés Manuel López Obrador (de la alianza “Movimiento Progresista” compuesta por el PRD, el PT y el MC), quien quedó en segundo lugar con 32 % de la votación. Josefina Vásquez, la candidata presidencial del PAN, quedó en tercer lugar con 26 % de la votación. En las elecciones parlamentarias, la alianza PRI-PVEM perdió la mayoría absoluta que gozaba en la cámara de diputados, alcanzando esta vez 241 de los 500 escaños en disputa.



Capítulo 6

Perú: Una Democracia sin Partidos

Durante gran parte de su historia republicana, el Estado peruano ha sido conducido por una larga serie de gobiernos autoritarios y dictatoriales, interrumpidos por algunos breves períodos de gobiernos democráticamente electos mediante el sufragio popular. En 1980, luego de doce años de gobierno militar, se abre un proceso de transición democrática con la convocatoria a elecciones generales en las que resulta ganador Fernando Belaúnde Terry, cuyo primer mandato como presidente constitucional había sido truncado por el golpe militar de octubre de 1968. La nueva etapa democrática encuentra un país profundamente transformado tanto en lo social, económico como en lo político. A lo largo de la década de 1960 el Perú pasó de ser una sociedad predominantemente rural a una donde la mayoría de su población vivía en centros urbanos: entre 1961 y 1970, el porcentaje de población urbana pasó de 47.4 % a 59.4 % respectivamente, a inicios del nuevo gobierno democrático de 1980 ésta se había incrementado hasta llegar al 64 % de la población total.

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas que se inició en 1968 implementó una serie de reformas que aceleraron varios de los cambios sociales que el país había experimentado en las décadas previas. La ley de Reforma Agraria terminó con el sistema de grandes haciendas y latifundios, transfiriendo la propiedad de la tierra a cooperativas agrícolas y quebrando definitivamente la base social y económica del poder político que había ostentado la oligarquía terrateniente en el Perú a lo largo del siglo XX. Se emprendieron un conjunto de reformas económicas que nacionalizaron sectores importantes de la economía peruana (minería, petróleo,

servicios públicos y comunicaciones), reforzando el rol y el peso del Estado en la economía. Nuevas leyes industriales dieron participación a los trabajadores en ciertas decisiones de las industrias y se emprendieron reformas importantes en el sistema educativo que contribuyeron a acentuar el proceso de masificación de la educación escolar que venía de las décadas previas.

Hasta 1975 la economía peruana registraba altas tasas de crecimiento económico, pero los límites de la versión peruana del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones ocasionaron una severa crisis económica que erosionó la legitimidad del régimen militar, acentuando una ola de protestas sociales vinculadas al deterioro de la situación económica. Ello forzó al régimen militar a iniciar un proceso de transición democrática, que se plasmó inicialmente en la convocatoria, a fines de 1977, a elecciones para una asamblea constituyente con la finalidad de elaborar una nueva constitución que reemplace al antiguo documento de 1933.

Para las elecciones de la Asamblea Constituyente, que se instaló en 1978, participaron algunas de las agrupaciones políticas que formaron parte del sistema de partidos anterior al régimen militar, en especial el Partido Aprista Peruano (PAP), el Partido Popular Cristiano (PPC) y la Democracia Cristiana (DC). Sin embargo, Acción Popular, el partido del expresidente Fernando Belaúnde se abstuvo de competir, y tampoco estuvo presente la Unión Nacional Odríista (UNO), partido caudillista fundado por el exdictador Manuel Odría (presidente entre 1948 y 1956), el cual, junto con el PAP fue uno de los principales opositores al primer gobierno de Belaúnde. Luego del golpe militar, la UNO, que aglutinaba a varios representantes políticos de los terratenientes de la sierra peruana, prácticamente desapareció como actor político relevante, lo que es indicativo de las transformaciones sociopolíticas ocurridas durante la década de 1970. Un nuevo actor importante en la asamblea constituyente fueron los partidos de la izquierda peruana (marxista y socialista), entre los que destacaban el Frente Obrero Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP), el Partido Socialista Revolucionario (PSR), el Partido Comunista Peruano (PCP) y la Unión Democrática Popular (UDP). En conjunto estos partidos de izquierda lograron obtener cerca del 30 % de los votos válidos en esta elección (Base de Datos Políticos de las Américas, 2013).

La apertura a la participación electoral de agrupaciones de izquierda radical, así como el peso que lograron obtener en las elecciones constituyente y en las posteriores elecciones realizadas a lo largo de la década de 1980, representan otro de los síntomas de los cambios sociales y políticos experimentados por la sociedad peruana en la segunda mitad del siglo XX, y que se vieron acelerados por las reformas sociales y económicas introducidas por el gobierno militar. Hacia finales de la década de 1980, los partidos de izquierda agrupados en la alianza Izquierda Unida (IU) llegaron a convertirse en la segunda fuerza política del país, logrando una importante representación parlamentaria en las elecciones de 1980 y 1985, así como ganar elecciones municipales en importantes localidades, entre las que destaca la propia capital, en la que Alfonso Barrantes, líder de IU, logró convertirse en el primer alcalde socialista de Lima en el periodo 1984 – 1986.

La nueva constitución de 1979 introdujo algunas innovaciones institucionales, así como nuevos derechos civiles y sociales. Se amplió el derecho al sufragio a los analfabetos, lo que implicó la incorporación al padrón electoral a un importante contingente de ciudadanos, especialmente de las zonas rurales del país. En cuanto al sistema político y el sistema electoral, se mantuvo el régimen presidencialista con un parlamento bicameral donde se aplicaba el principio de la representación proporcional, tanto el presidente como los parlamentarios serían elegidos de manera simultánea para un periodo de 5 años. La constitución de 1979 eliminó el sistema de elección indirecta del presidente de la república al introducir la figura de la segunda vuelta presidencial, elevando el umbral electoral a más del 50% de los votos válidos. Hasta las elecciones de 1963, el presidente de la república debía obtener por lo menos un tercio de los votos válidos para ser elegido, caso contrario, el parlamento elegía al presidente entre los tres candidatos más votados. A partir de las elecciones de 1985, si ningún candidato presidencial obtenía más de la mitad de los votos válidos debía procederse a una segunda vuelta entre los dos más votados. A nivel subnacional la constitución de 1979 establecía la elección de alcaldes y regidores de los municipios distritales y provinciales. Por otro lado se introdujo la figura de las regiones y gobiernos regionales, pero su implementación recién empezó a darse en 1989 y posteriormente

el autogolpe de 1992 paralizó el proceso de regionalización hasta la transición democrática del 2000.

La apertura democrática de la década de 1980 coincide con dos graves crisis que marcaron el panorama social y político peruano de las décadas posteriores. La crisis económica y la inflación deterioraron profundamente los niveles de vida de la población: en 1990 la tasa de inflación anual alcanzó un record de 7,650 % y el PBI per cápita de ese año representaba apenas el 72 % del de 1975; recién en el 2005 los valores per cápita del PBI recuperaron los niveles equivalentes de 30 años atrás.

Paralelamente, en 1980 el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL), de inspiración maoísta y fundamentalista, da inicio a sus acciones armadas, desencadenando un conflicto armado interno que provocó la muerte y desaparición de unas 70 mil personas (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003), convirtiéndose así en el episodio de violencia política más sangriento de la historia peruana desde la rebelión de Túpac Amaru a finales del siglo XVIII. Más de la mitad de las víctimas fatales reportadas en los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad tienen como responsable al PCP-SL.

A pesar de la gravedad de la crisis económica y del conflicto armado interno, en 1990, diez años después del fin del gobierno militar, la democracia electoral parecía haber alcanzado cierto grado de institucionalización en el Perú. En las elecciones que tuvieron lugar entre 1978 y 1990, los ciudadanos tuvieron la posibilidad de optar por varias alternativas diferentes entre sí, el conteo de votos fue imparcial, los contendientes aceptaron los resultados y las autoridades electas tuvieron la posibilidad de ocupar sus cargos y tomar decisiones sobre la base de la autoridad que el sufragio popular había depositado en ellas.

En 1990, en medio de una de las más graves crisis económicas de la historia republicana del país y de un recrudecimiento de las acciones subversivas de Sendero Luminoso en el conjunto del territorio nacional, se llevaron a cabo por tercera vez desde la transición de 1980, elecciones presidenciales y legislativas. A pesar de lo crítico de la situación social y política, las elecciones de 1990 reunieron los requisitos fundamentales de un proceso limpio y competitivo. Cuando el 28 de julio de 1990 el presidente Alan García Pérez se retiró del poder para dar paso a Alberto

Fujimori Fujimori, el Perú parecía haber superado una de las pruebas que, según Samuel Huntington (1994), definiría el momento en que una democracia ha llegado a consolidarse como régimen político: por segunda vez consecutiva, un presidente salido de las urnas transfiere el poder a otro presidente elegido también por sufragio universal y perteneciente a una tendencia política diferente.

Paradójicamente, las elecciones de 1990 marcan un punto de quiebre en la relación entre la ciudadanía y el sistema de partidos que había predominado durante la década de 1980. Los principales partidos y organizaciones políticas de esos años (Partido Aprista Peruano, Izquierda Unida, Acción Popular, Partido Popular Cristiano) vieron descender sus votos en las elecciones parlamentarias de un 94 % del electorado en 1985, a 73 % en las de 1990. Este proceso de “desalineamiento” de la relación entre los partidos políticos predominantes en aquel periodo y la ciudadanía había empezado a ser visible en las elecciones municipales de 1989, donde las listas llamadas “independientes” lograron atraer cerca del 30 % del voto válido en la elección de alcaldes provinciales. En las elecciones posteriores a 1990, durante el régimen del presidente Alberto Fujimori, las agrupaciones políticas que caracterizaron el sistema de partidos de la década de 1980 casi desaparecen del escenario electoral, llegando a acumular menos del 3 % del voto válido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2000.

De acuerdo con algunos analistas (véase por ejemplo: Pease, 2003; Tanaka, 1998), la crisis de la representatividad electoral de los partidos políticos a finales de los 80 se debería a que éstos no supieron resolver eficazmente los problemas de la violencia política y la crisis económica que aquejaron al Perú en aquellos años. Sin embargo, la sanción electoral producto de la incompetencia en el manejo gubernamental (tanto del gobierno de Belaúnde como del de García), tuvo consecuencias particularmente intensas, puesto que se aplicó a un conjunto de partidos con serias debilidades institucionales de carácter histórico. La lógica polarizada de la confrontación política que caracterizó la relación entre los principales actores políticos representados en la escena oficial (el PAP, los partidos de derecha y los de la izquierda) contribuyó a alejar a los partidos de una base social ya fragmentada, socavando aún más su capacidad de

representar a la sociedad. Ello, junto a las características del sistema electoral peruano, permitieron el surgimiento de “outsiders”, quienes con un discurso anti partido, lograron captar las preferencias electorales en los años posteriores.

En ese contexto, en las elecciones de 1990 aparece la figura de Alberto Fujimori, quien logra atraer las preferencias ciudadanas, tanto en las elecciones presidenciales como en los sondeos de opinión a lo largo de la década siguiente. Con el apoyo de los organismos financieros internacionales e importantes sectores de las elites económicas, el régimen de Fujimori implementó un programa de reformas económicas neoliberales inspiradas en el “consenso de Washington”. Sus políticas de estabilización y de ajuste estructural lograron parar la inflación y abrieron la economía a la inversión privada y al comercio internacional, mediante medidas de desregulación y flexibilización de los principales mercados (especialmente el mercado de trabajo y el mercado de capitales), acompañada de un vasto programa de privatización de empresas y activos estatales.

Si bien estas medidas provocaron un incremento brusco de los niveles de pobreza de la población, a mediados de la década de 1990 la economía peruana mostró signos importantes de recuperación. En paralelo el gobierno puso en marcha una serie de programas sociales asistencialistas para paliar algunos de los efectos negativos del ajuste estructural, lo que le permitió construir una base de legitimidad social sobre la base de relaciones clientelistas. Asimismo, el gobierno de Fujimori cosechó éxitos políticos en la lucha contra Sendero Luminoso. A finales de la década de 1980 las fuerzas armadas y policiales rediseñaron su estrategia antisubversiva, focalizando su represión hacia aquellos actores sospechosos de pertenecer o apoyar a Sendero Luminoso. Si bien esta estrategia generó violaciones sistemáticas a los derechos humanos (en particular casos de desaparición forzada de personas y violaciones al debido proceso judicial), logró eliminar o capturar a los principales mandos de Sendero Luminoso, siendo el hecho más importante la captura de su líder, Abimael Guzmán, en septiembre de 1992. En 1997, el exitoso rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés retenidos por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fortaleció la imagen de eficacia de Fujimori y de su gobierno en la represión de las acciones subversivas.

Aprovechando la debilidad de los partidos políticos y apoyándose en el respaldo de “poderes fácticos”, en particular de las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y sectores económicos beneficiados por las reformas neoliberales, el régimen de Fujimori emprendió una estrategia política destinada a consolidar su permanencia en el poder, cambiando las reglas constitucionales para reintroducir la reelección presidencial. Al mismo tiempo fue desarrollando un conjunto de prácticas para lograr un mayor control de instituciones estatales (el parlamento y el poder judicial) o de la sociedad civil (básicamente los medios de comunicación) que podrían haberse constituido en contrapesos para el poder del ejecutivo. Los éxitos obtenidos por el gobierno entre 1990 y 1995 en materia económica (control de la inflación y retorno del crecimiento económico) y de seguridad interna y externa (derrota de los grupos subversivos; solución del conflicto fronterizo con el Ecuador) sirvieron de base para la reelección de Fujimori en 1995.

Durante su segundo periodo, Fujimori intensificó su estrategia para limitar los contrapesos institucionales y la competencia política, recurriendo con cada vez más frecuencia a la intimidación de sus opositores o la cooptación mediante prácticas de corrupción, con la finalidad de continuar el poder mediante una nueva reelección en el 2000. La caída de Fujimori el 2001 se produce debido a la conjunción de varios factores: las contradicciones internas del régimen; la pérdida de legitimidad debido a la visibilización de la corrupción presente en el régimen y a la recesión económica de fines de la década de los 90; la movilización de algunos sectores de la sociedad civil; y la presión de la comunidad internacional frente a los signos de deterioro de los componentes formales de la democracia en el país (en particular las serias irregularidades de las elecciones del 2000).

La nueva transición democrática iniciada a finales del 2000 encuentra al país con una nueva estructura económica y social y debe afrontar el reto de reconstruir una institucionalidad democrática profundamente afectada por la crisis económica, el conflicto armado interno y una década de autoritarismo fujimorista que promovió un discurso de la “antipolítica” (Degregori, 2000) que pone en cuestión la legitimidad del conjunto de los actores políticos ante la ciudadanía.

Cuadro 6.1: Elecciones Presidenciales en Perú 1980-1995

Perú 1980-1995: Resultados de elecciones presidenciales (% votos válidos)

Elección	Candidatos	% 1ª Vuelta	% 2ª Vuelta
1980	F. Belaúnde (AP)	45.4	
	A. Villanueva (PAP)	27.4	
	L. Bedoya (PPC)	9.6	
	H. Blanco (PRT)	3.9	
	H. Zeballos (UNIR)	3.3	
	Otros	10.4	
1985	A. García (PAP)	53.1	
	A. Barrantes (IU)	24.7	
	L. Bedoya (PPC)	11.9	
	J. Alva (AP)	7.3	
	Otros	3.0	
1990	A. Fujimori (C90)	29.1	62.5
	M. Vargas Llosa (FREDEMO)	32.6	37.5
	L. Alva (PAP)	22.6	
	H. Pease (IU)	8.2	
	A. Barrantes (IS)	4.8	
	Otros	2.7	
1995	A. Fujimori (C90/NM)	64.4	
	J. Pérez de Cuellar (UPP)	21.8	
	M. Cabanillas (PAP)	4.1	
	Otros	9.7	

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (2015). Elaboración propia

6.1. El Sistema Político

El Perú es una república unitaria, compuesta por 25 regiones y una Provincia Metropolitana. Su sistema de gobierno es presidencialista y cuenta con un parlamento unicameral. La unicameralidad fue introducida en el diseño institucional en la Constitución de 1993, la cual abolió el sistema bicameral que funcionó hasta 1992. Tanto el presidente como los parlamentarios son elegidos de manera simultánea para un periodo de 5 años. No existe la reelección inmediata para el presidente de la república, el cual sólo puede presentarse nuevamente a una elección transcurrido un periodo presidencial. Los congresistas pueden reelegirse de manera indefinida.¹

El presidente es acompañado por dos vicepresidentes, que lo reemplazan de manera sucesiva en caso se declare la vacancia presidencial. Cuando el presidente se ausenta del país, el despacho presidencial es encargado provisionalmente al primer vicepresidente (o al segundo en su defecto).

¹Sobre el régimen político peruano, puede verse: Bernales y Otárola (1996).

El presidente de la república es la cabeza del ejecutivo, y tiene la potestad de nombrar y remover a al Presidente del Consejo de Ministros, así como a los demás ministros a propuesta y con acuerdo del Presidente del Consejo de Ministros. El presidente, con la aprobación del consejo de ministros, puede proponer leyes al Congreso de la República, asimismo tiene la capacidad de emitir decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, con cargo a dar cuenta al congreso, el cual puede modificar o derogar los referidos decretos. También puede reglamentar las leyes y resoluciones de ley dentro de los límites impuestos por las mismas y decretar estados de emergencia o de excepción de manera temporal. El presidente puede observar (vetar) todo o parte de una ley aprobada por el congreso antes de su promulgación. El Congreso puede superar el veto presidencial a una ley con el voto de más de la mitad de los miembros del congreso. Por lo general, las potestades legislativas del presidente le permiten un amplio margen de maniobra de autonomía respecto del Congreso (al respecto, véase: Grompone y Barrenechea, 2010).

El presidente es el jefe supremo de las fuerzas armadas y puede nombrar y remover a embajadores, con cargo de dar cuenta al Congreso. Asimismo designa a algunos funcionarios de alto nivel, en particular a presidente de Banco Central de la Reserva (BCRP) y parte de su directorio, además del Contralor General de la República. El presidente del BCRP y el Contralor deben ser ratificados por el Congreso.

El Congreso de la República está compuesto por 130 parlamentarios elegidos en 25 circunscripciones plurinominales y una circunscripción uninominal. Cada región, además de la Provincia Metropolitana de Lima, es una circunscripción. Hasta 1990, el Congreso era bicameral, con una Cámara de Diputados de 180 escaños y una Cámara de Senadores de 60. Los diputados se elegían en circunscripciones plurinominales conformadas por los departamentos y los senadores en una circunscripción nacional única. Con el autogolpe de 1992 y la posterior constitución de 1993, se eliminó la bicameralidad y se creó un congreso compuesto por 120 parlamentarios elegidos en una sola circunscripción nacional hasta el 2000. Para las nuevas elecciones generales del 2001 se volvió al sistema de circunscripciones múltiples y plurinominales, pero manteniendo la unicameralidad.

Además de las funciones legislativas comunes, como parte de su función de control político, el Congreso de la República puede interpelar y censurar a los ministros. Cuando se cambia al Presidente del Consejo de Ministros (ya sea por remoción o por renuncia), el presidente debe nombrar a un nuevo gabinete, el cual debe exponer su plan de gobierno al congreso y solicitar su voto de confianza. La negativa de este voto de confianza implica la remoción de todo el gabinete. El presidente puede disolver al Congreso de la República si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, pero no puede hacerlo en el último año de su mandato. Al disolver el Congreso el presidente está obligado a convocar inmediatamente a nuevas elecciones parlamentarias. La capacidad de disolver el parlamento estaba ya prevista en la constitución de 1979, sin embargo, como tal, nunca ha sido utilizada por el presidente de la República. Alberto Fujimori disolvió el parlamento en 1992 en clara violación de la normativa constitucional.

El congreso también nombra a algunos altos funcionarios del Estado, en particular al Defensor del Pueblo, a los Miembros del Tribunal Constitucional y a parte del Directorio del BCRP. En estos casos se requiere una mayoría calificada de dos tercios del congreso para proceder a su elección.

A nivel subnacional, el Perú está dividido en 25 gobiernos regionales y una región metropolitana. Esta estructura de gobiernos regionales fue creada a partir del 2002, los gobiernos regionales están liderados por un presidente regional elegido por sufragio directo por un periodo de 4 años, y están acompañados por un consejo regional elegido para el mismo periodo.

Por debajo los gobiernos regionales se encuentran los gobiernos municipales, liderados por alcaldes provinciales y distritales elegidos por sufragio universal (al igual que sus respectivos consejos municipales). Las elecciones municipales se han desarrollado de manera ininterrumpida desde 1980; hasta 1998 el periodo de gestión de los gobiernos locales era de 3 años, el cual fue ampliado a 4 años desde 1999.

6.1.1. El Sistema Electoral

Para ser elegido presidente se requiere ser peruano de nacimiento y tener 35 años cumplidos al momento de la elección. Para las elecciones presidenciales se presentan listas presidenciales encabezadas por un candidato a Presidente y dos vicepresidentes, quienes reemplazan al presidente de la República en caso éste sea destituido, renuncie o se declare la vacancia presidencial.

Para ser presidente se requiere contar con más de la mitad de los votos válidos emitidos en la elección presidencial (no se cuentan los votos blancos o viciados). En caso no se logre superar este umbral, tiene lugar una segunda ronda presidencial entre los dos candidatos más votados. Como se indicó previamente, el ballottage para la elección presidencial fue introducido por la constitución de 1979, aunque una disposición transitoria establecía que en la elección presidencial de 1980 el umbral debía ser de 36 % de los votos válidos.

Hasta 1985, se consideraban todos los votos emitidos (incluyendo los votos nulos y blancos) en el conteo de votos necesarios para ser elegido presidente, lo que hubiese significado la convocatoria a una segunda vuelta presidencial ese año, ya que Alan García del PAP, el candidato más votado en aquella ocasión, logró alcanzar el 45.8 % de los votos emitidos. Sin embargo, Alfonso Barrantes de la IU y quien terminó en segundo lugar, declinó participar en esta segunda vuelta al estimar que tenía pocas probabilidades de superar el umbral requerido. A partir de las elecciones generales de 1990 los votos nulos y blancos fueron excluidos del cómputo de votos válidos para alcanzar un cargo de elección popular.

La constitución de 1979 prohibía la reelección inmediata del presidente, ésta sería sólo posible luego de transcurrido un mandato presidencial. El autogolpe realizado por Alberto Fujimori en 1992 tenía como uno de sus objetivos cambiar la constitución para introducir la figura de la reelección inmediata. La constitución elaborada por el Congreso Constituyente Democrático elegido en 1992, y posteriormente aprobada en el Referéndum Constitucional de 1993, introdujo la reelección presidencial inmediata por un solo periodo, lo que le permitió a Fujimori presentarse como candidato en las elecciones generales de 1995. Posteriormente en 1996, el Congreso de la República en donde el fujimorismo y sus aliados contaba con mayoría absoluta, promulgó una “ley de interpretación auténtica de la constitución” con la finalidad

de que los periodos presidenciales incluidos en el cálculo de la reelección se contabilicen recién desde la promulgación de la constitución de 1993, lo que le permitió nuevamente a Fujimori presentarse para un tercer mandato en el 2000. Esta ley fue observada por los jueces del Tribunal Constitucional (institución creada a partir de la constitución de 1993), sin embargo, el Congreso de la República destituyó a los magistrados que emitieron esa resolución, despejando el camino para la candidatura de Fujimori el 2000.

Durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001) el Congreso modificó nuevamente la constitución para eliminar la figura de la reelección presidencial consecutiva y regresar al esquema establecido en 1979. La posición contraria a la reelección presidencial fue uno de los elementos de consenso entre los opositores al régimen fujimorista durante su segundo mandato. Los abusos de poder cometidos por Fujimori por su afán reeleccionista para perpetuarse en el poder hicieron que la figura de la reelección sea vista con extrema desconfianza por gran parte de los actores políticos, las elites intelectuales del país y sectores importantes de la opinión pública.

Para ser elegido parlamentario es necesario ser peruano de nacimiento y tener 25 años cumplidos al momento de la elección. Desde la constitución de 1993 el parlamento peruano es unicameral y en la actualidad está compuesto por 130 miembros elegidos en 25 circunscripciones plurinominales y una circunscripción uninominal. El principio que se aplica para la elección parlamentaria es el de la representación proporcional. Sólo los partidos de alcance nacional inscritos en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas pueden presentar candidatos en las elecciones parlamentarias. Las alianzas electorales no pueden variar de una circunscripción a otra, aunque las agrupaciones no están obligadas a presentar candidatos en todas las circunscripciones. Cada lista debe presentar un número de candidatos equivalente a la cantidad de escaños de las circunscripciones donde compiten, con la excepción de las circunscripciones que tienen menos de tres escaños (3 circunscripciones), en las cuales las listas deben presentar por lo menos 3 candidatos. Existe una cuota de género, es decir, por lo menos el 30% de los candidatos de una lista deben ser hombres o mujeres; en las circunscripciones donde sólo se presentan listas de tres candidatos, por lo menos uno de ellos debe ser hombre o mujer.

En las elecciones parlamentarias de 1995 y el 2000, los parlamentarios eran elegidos en una sola circunscripción nacional de 120 escaños, lo que junto con el sistema de representación proporcional implicaba un diseño que permitía la máxima proporcionalidad de los resultados. Teóricamente, este diseño electoral debía favorecer la existencia de múltiples partidos con representación proporcional. Fernando Tuesta sostiene que estas reformas electorales introducidas por el Congreso Constituyente Democrático de 1992 se hicieron sin haber realizado un mayor diagnóstico de los efectos del sistema electoral, así como sin tomar en cuenta un análisis electoral comparado sistemático. Ello produjo la presencia de múltiples partidos en el Congreso, disminuyendo el efecto reductor del sistema electoral y dificultando el diálogo y la representación política (Tuesta, 2005, pp. 73-74).

Para conformar su mayoría parlamentaria el gobierno fujimorista recurrió a diversos incentivos para fomentar el transfuguismo parlamentario, entre los que se incluía prácticas de corrupción y compra de votos. De hecho, uno de los desencadenantes de la crisis que llevó a la caída del régimen fujimorista fue la difusión de un video donde se veía al asesor presidencial Vladimiro Montesinos ofrecer una suma de dinero a un candidato de la lista opositora de Perú Posible para, una vez electo, respaldar la agenda legislativa del fujimorismo.

Durante el gobierno de transición de 2000-2001 se modificaron nuevamente las leyes electorales para el parlamento para reintroducir el sistema de múltiples distritos electorales plurinominales sobre la base de los departamentos (regiones a partir del 2002). En la actualidad los escaños en cada circunscripción se distribuyen de manera imperfecta en función del número de electores en cada circunscripción. En promedio existe un parlamentario por cada 153 mil electores (de acuerdo al padrón electoral del 2011), sin embargo existen varios casos donde se aprecia cierta desproporción entre electores y parlamentarios: la provincia capital de Lima Metropolitana concentra el 30 % de la población electoral (33 % si se suman los peruanos que votan en el extranjero y que son representados por los parlamentarios de Lima Metropolitana), pero los 36 escaños de esa circunscripción representan el 27.7 % del total; en tanto que regiones como Moquegua, que representan 0.6 % del electorado, tienen 2 escaños, equivalentes

a 1.5 % del total del departamento. Mejorar la proporcionalidad del sistema electoral implicaría aumentar el tamaño del congreso de la República.

De acuerdo con Fernando Tuesta (2005, pp. 43-44), en términos relativos (relación escaños / población), el parlamento peruano es uno de los más pequeños de América Latina (puesto 14 de 17 países), a pesar de ser el quinto país con mayor población de la región.

El número de parlamentarios está fijado por la constitución y se requiere un consenso muy amplio entre los partidos representados en el parlamento para incrementarlo. El descrédito del parlamento peruano entre la opinión pública fue uno de los factores que le permitió a Alberto Fujimori disolver el congreso en su autogolpe de 1992 y establecer un parlamento unicameral limitado a 120 miembros en la nueva constitución de 1993. Los bajos niveles de confianza en la institución legislativa prevalecientes en la opinión pública respaldaron la idea de limitar el tamaño del parlamento, el cual es percibido como una institución que sirve básicamente a la reproducción de la clase política y el beneficio personal de los parlamentarios. La mala imagen del parlamento en la opinión pública también ha impedido que prosperen las iniciativas para retornar al sistema de la bicameralidad. Ello ha dificultado la aceptación de medidas destinadas a ampliar el número de congresistas a lo largo de las últimas década.

A finales del segundo gobierno de Alan García, el parlamento aprobó una reforma constitucional que creaba la circunscripción de Lima – Provincias, dividiendo la anterior circunscripción de Lima en dos: Lima Metropolitana (que incluye a los peruanos residentes en el extranjero) y el resto de provincias del departamento. A la nueva circunscripción se le asignaron 4 escaños, además se ampliaron 6 escaños adicionales que fueron distribuidos según el peso electoral de las demás regiones. El nuevo congreso elegido en el 2011 pasó a contar entonces con 130 escaños.

Para las elecciones parlamentarias los partidos o alianzas políticas presentan listas cerradas pero no bloqueadas de candidatos en cada circunscripción. El elector vota en primer lugar por una lista parlamentaria y posteriormente puede hacer uso de dos votos para señalar su preferencia por uno o dos candidatos dentro de la lista seleccionada. Para asignar el número de escaños correspondiente a cada lista se suman los votos obtenidos por cada una de ellas y se aplica el método D'Hondt, que tiene la particularidad de otorgar una ventaja relativa a

la primera mayoría partidaria. En un segundo momento se computan los votos preferenciales dentro de cada lista para determinar el orden en el que los candidatos pasan a ocupar los escaños atribuidos a su agrupación.

Este sistema, conocido como el “voto preferencial” en las elecciones parlamentarias, se implementó a partir de 1985 con la finalidad de romper con el monopolio de las élites partidarias en la decisión de quiénes ocupan los escaños parlamentarios, aunque ya había sido usado previamente en las elecciones al Congreso Constituyente de 1978. De acuerdo con Fernando Tuesta, la introducción del voto preferencial ha permitido que los ciudadanos influyan en la composición del parlamento: hasta 1995, poco más de un tercio de los parlamentarios elegidos lo fueron gracias a este mecanismo, en las elecciones del 2000 y 2001 esta proporción aumentó a poco menos del 50 % (Tuesta, 2005, pp. 76). Sin embargo, este mecanismo tiene también como efecto incentivar una fuerte competencia intrapartidaria por atraer las preferencias del elector hacia candidatos individuales, lo que debilita la cohesión partidaria e ideológica, a la vez que complejiza las campañas electorales ya que los votantes se ven invadidos por la publicidad, a veces cacofónica, de múltiples candidatos parlamentarios que compiten incluso con los de su propia lista. La cohesión partidaria también se ve debilitada ya que en la búsqueda de atraer votos o de financiar campañas, los partidos que participan en las elecciones parlamentarias se ven obligados a seleccionar candidatos debido a su carisma personal o capacidad para recaudar fondos para la campaña, sin que necesariamente tengan compromisos ideológicos o programáticos con plataforma de los líderes del partido. Los parlamentarios electos gracias al sistema del voto preferencial pueden sentir que el escaño obtenido les “pertenece” más a ellos que a su partido, lo cual les da mayor margen de libertad frente a la agenda del partido, lo que en algunos casos puede incentivar prácticas de transfuguismo político.

Con la finalidad de limitar la cantidad de partidos políticos que alcanzan representación parlamentaria y acentuar el efecto reductor del sistema electoral sobre el sistema de partidos, para las elecciones parlamentarias del 2006 se modificó el umbral electoral al exigir que las agrupaciones políticas obtengan el 4% de los votos válidos a nivel nacional o consigan por lo menos cinco parlamentarios en dos circunscripciones electorales. Para las elecciones del 2011, el

umbral electoral parlamentario fue elevado a 5 % de los votos o por lo menos seis parlamentarios electos en dos circunscripciones. Estas medidas tuvieron ciertos efectos limitados sobre el número de partidos representados en el parlamento: como se mostró en la 2.3, entre el 2001 y el 2006 el número efectivo de partidos representados en el parlamento (NEPp) bajó de 4.37 a 3.78; el 2011 este aumentó ligeramente a 3.97.

Sin embargo, al igual que en otros países latinoamericanos, el umbral se aplica de manera uniforme a las listas parlamentarias, independientemente de si éstas son propuestas por un solo partido o por una alianza electoral (Franco-Cuervo y Flores Henao, 2008).² Dado que una vez en el congreso algunas alianzas políticas e incluso partidos pueden disolverse, debilitarse o dividirse, el número de partidos o agrupaciones parlamentarias tiende a incrementarse, dificultando las negociaciones políticas al interior de ese cuerpo legislativo. De hecho, hacia finales del periodo congresal 2006 – 2011, el partido Solidaridad Nacional del alcalde de Lima Luis Castañeda, que formó parte de la Alianza Unidad Nacional, se separó de dicha alianza y comenzó a funcionar como una bancada autónoma en vistas a las elecciones del 2011. En el Congreso 2011 – 2016, Acción Popular cuyos parlamentarios postularon dentro de la lista de Perú Posible, se separó de esa agrupación y pasó a conformar una bancada diferente, integrando a algunos congresistas adicionales elegidos por otros partidos políticos.

Las constitución de 1993 creó una serie de instituciones autónomas encargadas de conducir los procesos electorales, distribuyendo entre ellas las funciones que hasta 1992 recaían en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Bajo el nuevo esquema constitucional, el JNE es la institución responsable de impartir justicia electoral, proclamar los resultados oficiales de las elecciones y otorgar las credenciales a las autoridades electas. Está compuesto por cinco miembros elegidos por diferentes entidades Estatales y de la sociedad civil: el presidente del JNE es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia; un miembro es designado por la Junta de Fiscales Supremos; otro es elegido en votación universidad por los afiliados al Colegio de Abogados de Lima; y los dos restantes son nombrados por los decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas respectivamente.

²Recientemente (Enero 2016), las modificaciones a la ley electoral elevan el umbral en el caso de las alianzas: 1% más por cada partido adicional que se incorpora a una alianza.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene la responsabilidad de planificar, organizar y ejecutar los procesos electorales, lo que implica diseñar y distribuir el material electoral y realizar el conteo oficial de los votos emitidos. El jefe de la ONPE es seleccionado por concurso público de méritos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Finalmente el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) tiene a su cargo la confección del padrón electoral y la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) que habilita a los ciudadanos a ejercer su derecho a sufragio. El jefe del RENIEC es designado de la misma forma que el jefe de la ONPE.

Durante su segundo gobierno, Alberto Fujimori logró tener un importante grado de control sobre los organismos electorales, en especial el JNE y la ONPE, utilizando mecanismos de cooptación y/o corrupción de sus miembros, lo que puso gravemente en cuestión la legitimidad de los procesos electorales (especialmente las elecciones generales del 2000). Desde la transición democrática de finales del 2000, los organismos electorales lograron recuperar su autonomía del poder político, reforzando de esta forma la limpieza y eficacia en la conducción de las elecciones.

6.1.2. El Sistema de Partidos

En el Perú podríamos distinguir tres etapas en la formación de un sistema de partidos políticos modernos (Meléndez, 2007), que tienen su origen en la década de 1930. Antes de ello, la política se organizaba fundamentalmente alrededor de partidos que representaban o servían de maquinaria electoral para caudillos de diferentes sectores de las elites oligárquicas y terratenientes del país.

Una primera etapa de formación de organizaciones partidarias modernas abarca el periodo comprendido entre 1930 y 1980. En este periodo un conjunto de organizaciones y líderes políticos buscan articular y representar políticamente a diversos sectores sociales de las nuevas clases urbanas y rurales (clase media, la clase obrera, el proletariado rural, el campesinado), desafiando el monopolio político de los representantes de la oligarquía de las clases terratenientes.

La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y el Partido Comunista Peruano, formados en los años 1930, se organizaron inicialmente en torno a plataformas antioligárquicas y antiimperialistas radicales, sin embargo fueron duramente reprimidos en las décadas siguientes y, salvo en algunas coyunturas específicas (por ejemplo en 1945-48 y en 1963), sus caminos para la participación electoral fueron bloqueados ya sea mediante golpes militares o medidas que las declaraban organizaciones ilegales.

Durante la segunda mitad del siglo XX aparecieron nuevas organizaciones políticas que impulsaban programas de reformas sociales y políticas (la Democracia Cristiana, Acción Popular) y que alcanzan su mayor nivel de protagonismo político en durante el primer gobierno Fernando Belaúnde (1963-1968), líder y fundador de Acción Popular. En las décadas de 1960 y 1970, se formaron nuevos partidos de izquierda, en su mayoría de inspiración marxista y radical. De acuerdo con Carlos Meléndez, en esta primera etapa de formación del sistema de partidos, las organizaciones se crearon “dentro de los cánones de la política moderna, basada en la movilización de masas, exigencias de representación de intereses sociales y fundamentada en artefactos ideológicos” (Meléndez, 2007, pp. 220).

En una segunda etapa, que podemos ubicar entre 1978 y 1989, los principales partidos formados en la etapa anterior lograr hegemonizar el escenario político y electoral del ciclo democrático iniciado con la convocatoria a la asamblea constituyente de 1978. En este periodo las diversas agrupaciones de izquierda forman la alianza Izquierda Unida (IU) que se convierte en la segunda fuerza política a lo largo de la década de 1980.

Sin embargo la crisis económica y el conflicto armado interno ponen seriamente a prueba la capacidad de estas organizaciones de conducir el país, asegurar la gobernabilidad y la representación política de la sociedad peruana. A fines de la década de 1980 comienzan a aparecer nuevas organizaciones “independientes” y “outsiders” que aprovechan la pérdida de legitimidad y de arraigo electoral de los partidos políticos formados en la etapa pre-1980.

Con la victoria de Alberto Fujimori en las elecciones de 1992 se abre un nuevo ciclo en el sistema de partidos políticos. Entre 1990 y el 2000, el sistema imperante durante la década anterior colapsó, y se entró en una etapa de desestructuración y fragmentación de la represen-

tación partidaria. Los partidos que habían tenido identificaciones programáticas e ideológicas más definidas pierden rápidamente su arraigo electoral. El caso más notorio es el de los partidos de izquierda agrupados en la Izquierda Unida que se dividen, diluyen y hasta la fecha no han logrado articularse nuevamente como una alternativa electoral viable a nivel nacional. Aparecen nuevas y variadas organizaciones de tipo personalista, desideologizadas y pragmáticas que compiten por las preferencias electorales junto con los remanentes de algunos partidos del periodo anterior.³

Cuadro 6.2: Elecciones Presidenciales en Perú 2000-2011

Perú 2000-2011: Resultados de elecciones presidenciales (% votos válidos)

Elección	Candidatos	% 1ª Vuelta	% 2ª Vuelta
2000	A. Fujimori (P2000)	49.9	74.3
	A. Toledo (PP)	40.2	25.7
	A. Andrade (Somos)	3	
	Otros	6.9	
2001	A. Toledo (PP)	36.5	53.1
	A. García (PAP)	25.8	46.9
	L. Flores (UN)	24.3	
	F. Olivera (FIM)	9.8	
	Otros	3.6	
2006	A. García (PAP)	24.3	52.6
	O. Humala (UPP)	30.6	47.4
	L. Flores (UN)	23.8	
	M. Chávez (AF)	7.3	
	V. Paniagua (FDC)	5.8	
	Otros	8.2	
2011	O. Humala (GP)	31.7	51.4
	K. Fujimori (F2011)	23.6	48.6
	P. Kuczynski (APGC)	18.5	
	A. Toledo (PP)	15.6	
	L. Castañeda (SN)	9.8	
	Otros	0.8	

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (2015). Elaboración propia

El régimen autoritario – competitivo de Fujimori, si bien manipuló las reglas de juego políticas para favorecer su permanencia en el poder, creó un espacio de competencia electoral que permitió la participación de los nuevos y viejos tipos de partidos políticos, aunque estos últimos casi desaparecen del mapa electoral entre las elecciones de 1995 y el 2000. A partir de las elecciones del 2001, en el nuevo ciclo de política democrática, algunos partidos políticos

³Sobre el colapso del sistema de partidos a finales de la década de 1980 véase: Tanaka (1998).

del periodo 1980-1990 logran retornar al escenario electoral (el Partido Aprista Peruano; el PPC bajo la fórmula de la alianza Unidad Nacional), pero deben compartirlo con nuevas organizaciones como el Fujimorismo, y otras surgidas en el contexto de la competencia electoral anti fujimorista de finales de la década de 1990, así como nuevas agrupaciones creadas en la primera década del siglo XXI.

Carlos Meléndez clasifica a los partidos políticos peruanos contemporáneos distinguiendo dos grupos, el primero de ellos estaría conformado por los partidos que se formaron antes del ciclo democrático de 1980-1992, y del cual fueron los principales protagonistas. El segundo grupo está conformado por aquellas organizaciones que aparecieron durante el fujimorismo y que se autoidentificaron como “independientes” (Meléndez, 2007, pp. 216). El calificativo de “independientes” es una forma crear una clara diferenciación respecto de los partidos del primer grupo identificado por Meléndez, los cuales tuvieron que asumir el costo político de la grave crisis de la década de 1980. A este segundo grupo podría añadirse aquellos partidos y organizaciones que se constituyeron en el contexto del segundo ciclo democrático iniciado a partir del 2001.

El Partido Aprista Peruano (PAP), Acción Popular (AP) y el Partido Popular Cristiano (PPC) son los partidos que lograron representación parlamentaria en las elecciones del 2011 y que forman parte del primer grupo identificado por Meléndez. En el segundo grupo se encuentran el Fujimorismo, Perú Posible, el Partido Nacionalista Peruano, Solidaridad Nacional y otras agrupaciones menores.⁴

El Partido Aprista Peruano – PAP

El PAP fue fundado en 1930 por Víctor Raúl Haya de la Torre. Su programa político inicial promovía la conformación de una alianza popular de intelectuales, sectores de las clases medias y obreras urbanas y del proletariado rural. Su agenda era anti imperialista, de integración latinoamericana y de lucha antioligárquica. Su primera participación electoral ocurre en

⁴Dado que el presente trabajo analiza las elecciones peruanas entre 2000 y 2011, no consideraremos en la descripción de los partidos políticos aquellas nuevas agrupaciones que aparecen en las últimas elecciones del 2016.

las elecciones presidenciales de 1931, momento en el cual su candidato Haya de la Torre, es derrotado por el Coronel Luis Sanchez Cerro, quien posteriormente impuso un gobierno dictatorial que reprimió al APRA. Ello desencadenó la Revolución de Trujillo en 1932, localidad donde el partido tenía importantes bases sociales de apoyo. Durante la rebelión, los militantes apristas asesinaron a 34 efectivos militares y policiales que habían sido tomados prisioneros, lo que ocasionó una sangrienta represión que terminó con centenas o hasta millares de personas ejecutadas por el ejército (Basadre, 2005, pp. 209-211). Este hecho marcó profundamente la identidad aprista, así como la desconfianza y rivalidad que caracterizaría las relaciones entre el APRA y las fuerzas armadas a lo largo de gran parte del siglo XX.

Luego de la rebelión de Trujillo, el APRA y varios de sus dirigentes más importantes pasaron a la ilegalidad y a la clandestinidad. Con la apertura democrática de finales de la segunda guerra mundial, el APRA apoyó la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero del Frente Democrático Nacional. Sin embargo las pugnas políticas dentro de esa alianza desencadenaron una crisis política, al final de la cual el APRA promovió una revuelta que fue sofocada y que dio lugar a la dictadura militar del general Odría (1948-1956), durante la cual el partido pasó nuevamente a la ilegalidad y clandestinidad (Portocarrero, 1983)

En 1962, Victor Raúl Haya de la Torre obtiene la primera mayoría en las elecciones presidenciales de ese año. Sin embargo, al no superar el umbral electoral, la elección debía pasar por el congreso donde ningún partido tenía una mayoría clara. Las negociaciones entre el APRA y la Unión Nacional Odrísta (UNO) para que el general Odría asumiera la presidencia a cambio de la participación del partido en el gobierno fueron truncadas por un nuevo golpe militar (Pease, 1977, pp. 27), luego del cual se convocaron a elecciones en 1963, en las que resultó ganador Fernando Belaúnde de Acción Popular (AP), pero sin contar con una mayoría propia en el congreso. La oposición del APRA y de la UNO en el congreso al programa político de Acción Popular provocaron otra crisis política, que culminó con el golpe militar del general Velasco Alvarado y que dio lugar al Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas hasta la transición de 1980 (Pease, 1977, pp. 28-47).

En los años 60, el APRA sufre una de sus primeras divisiones, al escindirse un grupo de jóvenes militantes descontentos con la política de moderación de su partido destinada a abrirle espacios en la política electoral y parlamentaria. Estos militantes pasan a formar el “APRA Rebelde”, que luego se convertiría en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), integrado a otros jóvenes marxistas. El MIR, inspirado por la Revolución Cubana inicia sus acciones guerrilleras en 1965 (Palacios Rodríguez, 2006, pp. 140), pero son rápidamente reprimidos por el ejército, causando la muerte de sus principales dirigentes.

En las elecciones para la asamblea constituyente de 1978, el APRA surgió como primera fuerza política y Haya de la Torre fue elegido presidente de dicha asamblea, jugando su partido un rol importante en la redacción de la nueva constitución. La muerte de Haya de la Torre en 1979 genera una crisis de liderazgo en el partido, y su candidato, Armando Villanueva, ocupa el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1980 en las que gana nuevamente Fernando Belaúnde de AP.

La derrota de 1980 es seguida por una nueva división del partido en 1982, de la cual se recompone rápidamente bajo el liderazgo de Alan García Pérez, quien lleva por primera vez al APRA (que cambia su denominación al PAP) a la presidencia en 1985, con el 53.1 % de los votos (sin contar nulos y blancos).

El primer gobierno aprista tuvo que enfrentar la crisis económica y el recrudecimiento del conflicto armado que se expandió a varias regiones del país. La gestión de Alan García terminó con una economía al borde del colapso y una gran sensación de inseguridad en el país debido a la intensificación del accionar de Sendero Luminoso en las ciudades. El conflicto armado interno afectó duramente la militancia del PAP en el interior del país, ya que según fuentes partidarias más de mil militantes del partido fueron asesinados por Sendero Luminoso (Vergara, 2011, pp. 56), convirtiendo al PAP en el “partido político más golpeado del conflicto armado interno” (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, tomo 3, pp. 37). Las elecciones posteriores el apoyo electoral del PAP declinó significativamente: 22 % en 1990; 4 % en 1995 y 1 % en el 2000.

En el contexto de la transición democrática del 2000 el PAP recupera cierto protagonismo político, especialmente luego del retorno del exilio de Alan García que logra pasar a la segunda

vuelta de las elecciones del 2001 con el 25.8% de los votos válidos. Si bien pierde la segunda vuelta frente a Alejandro Toledo de Perú Posible, se constituye en la principal oposición parlamentaria al ocupar 23% de los escaños del congreso.

En las elecciones del 2006, Alan García vuelve a presentarse como candidato, ganando las elecciones en segunda vuelta frente a Ollanta Humala del Partido Nacionalista Peruano. Durante su segundo gobierno, el PAP mantiene la continuidad del modelo económico de apertura a la inversión privada y a los mercados internacionales de los gobiernos anteriores, beneficiándose de altas tasas de crecimiento económico que permiten además la reducción de los índices de pobreza en el país.

Sin embargo, al terminar su segundo mandato, debido a la carencia de liderazgos carismáticos alternativos a Alan García, el PAP no es capaz de presentar una candidatura presidencial para el 2011 y su lista parlamentaria apenas logra obtener 4 de los 130 escaños en disputa.

En el transcurso de su larga historia política, el PAP ha transitado por diferentes fases: empezó como un partido revolucionario radical en los años 1930, para ir moderando su programa hacia posiciones más reformistas o pragmáticas, con la finalidad de lograr incorporarse como actor en la política electoral entre las décadas de 1950 a 1960. Al llegar finalmente al poder en 1985 intenta poner en práctica un programa de gobierno reformista de centro izquierda, sin embargo la crisis económica, el conflicto armado interno y la ineficiencia y la corrupción en el manejo de las instituciones estatales generan una aguda crisis política y social y una importante pérdida de legitimidad del partido. Luego del fracaso de su primer gobierno en 1985-1990, el PAP pasó por una grave crisis de supervivencia durante el periodo fujimorista.

Hacia el final de fujimorismo, el PAP forma parte de la heterogénea y poco articulada coalición de oposición. Si bien la oposición no logra presentar una candidatura antifujimorista unificada en las elecciones del 2000, la actitud opositora al fujimorismo del PAP le permite situarse como un partido de referencia en el proceso de transición democrática y el retorno de su líder carismático, Alan García, le permite resucitar electoralmente el 2001 y finalmente volver a ganar las elecciones el 2006. En su segundo gobierno, el PAP implementa políticas de centro derecha, conservadoras y continuista de un modelo económico de apertura de los mercados y

promoción de la inversión privada, claramente diferenciada de sus postulados programáticos históricos.

Como organización el PAP mantiene un conjunto de cuadros nacionales con experiencia parlamentaria y la negociación política, que conforman una cúpula relativamente aislada de las bases y comités locales del partido. Electoralmente, su éxito depende mucho del liderazgo carismático de Alan García y de sus proyectos personalistas de mantenerse como figura relevante en la política nacional, sin que hayan surgido cuadros o líderes nacionales alternativos, lo que dificulta procesos internos que consoliden su institucionalización.

El Partido Popular Cristiano – PPC / Unidad Nacional - UN

El PPC fue fundado en 1966 a partir de una división de la Democracia Cristiana. Los fundadores del PPC buscaban que este nuevo partido integre más orgánicamente al ideario social cristiano los principios de respeto a la libertad y propiedad (Meléndez, 2007, pp. 224), por lo que desde su fundación es un partido que se ubica más hacia el centro derecha del espectro político. Su principal líder histórico es Luis Bedoya Reyes, quien fue elegido alcalde de Lima por la alianza Acción Popular – Democracia Cristiana en las primeras elecciones municipales de 1963, y reelegido, ya por el PPC, en 1966.

Luis Bedoya fue cabeza de la lista del PPC en las elecciones para la asamblea constituyente de 1978. También fue candidato presidencial del partido en las elecciones generales de 1980 y 1985, ocupando el tercer lugar en ambas ocasiones. En 1986 postula nuevamente a la alcaldía municipal de Lima, quedando en tercer lugar.

El PPC es uno de los principales actores políticos de la década de 1980. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985) integra la coalición gubernamental, conformando la mayoría parlamentaria junto con los representantes de Acción Popular y ocupando dos carteras ministeriales en el ejecutivo. En 1989, junto con Acción Popular y el Movimiento Libertad, conforma la alianza electoral Frente Democrático (FREDEMO) que presenta la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa para las elecciones de 1990. Ernesto Alayza Grundy, dirigente del PPC fue candidato a la segunda vicepresidencia en aquella oportunidad. Cuando

el Congreso de la República fue disuelto por Fujimori en 1992, dos dirigentes del PPC, Felipe Osterling y Roberto Ramirez del Villar eran los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente.

Durante la década de 1990, aparece la figura de Lourdes Flores Nano como líder del PPC, encabezando la lista de su partido en las elecciones al Congreso Constituyente Democrático de 1992. Posteriormente, el 2001, el PPC impulsa la conformación de y lidera la alianza electoral Unidad Nacional, organización bajo la cual el partido participará en los procesos electorales (nacionales, regionales y municipales) hasta el 2010. Lourdes Flores es designada candidata presidencial por la Alianza Unidad Nacional para las elecciones del 2001, quedando en tercer lugar con el 24 % de votos nacionales. Flores vuelve a postular en las elecciones presidenciales del 2006 donde repite el resultado obtenido 5 años atrás, quedando nuevamente en tercer lugar, apenas un punto por debajo de Alan García.

En las elecciones municipales del 2010, el PPC postula a Lourdes Flores a la alcaldía de Lima, quedando en segundo lugar, apenas con 0.8% de votos menos que Susana Villarán, la candidata del movimiento de izquierda Fuerza Social. Para las elecciones presidenciales del 2011, junto con Alianza por el Progreso, el Partido Humanista Peruano y Restauración Social, el PPC conforma la Alianza por el Gran Cambio (APGC), que presenta la candidatura presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien fuera ministro de economía y presidente del consejo de ministros del gobierno de Alejandro Toledo. La candidatura de PPK obtiene el 18.5 % de los votos válidos, ocupando el tercer lugar en la primera vuelta presidencial.

Ideológicamente el PPC se define como un partido social cristiano, programáticamente ha sido partidario de políticas económicas de libre mercado y de impulso a la inversión privada, contrario a un mayor rol del Estado en la actividad económica. Tiene una presencia importante en la política municipal, especialmente en Lima Metropolitana, llegando a conducir los municipios de varios distritos de clase media de la capital. Sin embargo, más allá de la capital ha tenido dificultades para generar mayores apoyos electorales, por lo que la mayoría de sus cuadros y dirigentes políticos provienen de Lima. A diferencia del APRA y otros partidos fuertemente dependientes de la figura de sus líderes carismáticos, el PPC ha podido formar

cuadros políticos alternativos, sin embargo su poco alcance nacional limita el éxito electoral de estos cuadros.

Acción Popular - AP

Acción popular fue fundado como un partido reformista en 1956, aglutinando algunos jóvenes políticos universitarios y profesionales progresistas de procedencia provinciana (Meléndez, 2007, pp. 222). Su líder histórico y fundador, Fernando Belaúnde Terry fue candidato presidencial en 1956 y posteriormente logró ser elegido como presidente en 1963. Durante su primer gobierno, AP intentó poner en marcha algunas reformas al régimen latifundista, sin embargo la oposición y boicot de la coalición APRA – UNO en el congreso generaron una crisis política que terminó con el golpe militar del general Velasco en 1968.

De vuelta de su exilio, AP postula nuevamente a Belaúnde en las elecciones presidenciales de 1980. La crisis económica y el conflicto armado interno marcan el segundo gobierno de Belaúnde (1984 es el año en que se registra el mayor número de víctimas fatales del conflicto), debilitando profundamente su aceptación popular. Javier Alva Orlandini, el candidato presidencial de AP en las elecciones de 1985 apenas logra obtener 6.2 % de los votos emitidos ese año.

A pesar de su mal desempeño gubernamental y su grave derrota electoral en 1985, AP se mantiene como un actor importante del sistema político durante la década de 1980. Junto con el PPC integra el FREDEMO para participar en las elecciones municipales de 1989 y en las generales de 1990, en esta última oportunidad, Eduardo Orrego (dirigente de AP y alcalde de Lima en el periodo 1980-83), integra la plancha presidencial de Vargas Llosa, postulando a la primera vicepresidencia.

Durante el régimen fujimorista AP entra en un proceso de agudo declive electoral, sus candidatos en 1995 y el 2000 no superaron el 2 % de los votos (Meléndez, 2007, pp. 223). Sin embargo, logra recuperar cierto protagonismo político con la figura de Valentín Paniagua quien asume la presidencia provisional de la República y encabeza el gobierno de transición luego de la caída del régimen de Fujimori.

Con la candidatura presidencial de Valentín Paniagua, AP participa en las elecciones generales del 2006, dentro de la alianza Frente de Centro, integrada además por Somos Perú y la Coordinadora Nacional de Independientes. Sin embargo en esa oportunidad, Paniagua queda en quinto lugar de las preferencias electorales con el 5.8% de los votos.

En las elecciones del 2011, junto con Somos Perú y Perú Posible, AP forma parte de la alianza Perú Posible, lo que le permitió alcanzar cuatro escaños parlamentarios y mantener una presencia en el escenario político nacional.

Con la muerte de Fernando Belaúnde (2002) y de Valentín Paniagua (2006), AP no cuenta con líderes reconocidos de alcance nacional, pero sí con algunos parlamentarios experimentados y dirigentes que logran tener cierto éxito en algunas elecciones regionales y municipales. Sus bases organizativas son muy débiles y su supervivencia partidaria parece depender de la capacidad de sus dirigentes de construir políticas de alianzas que les permitan participar, como figuras secundarias, en las próximas elecciones nacionales.

El Fujimorismo

El Fujimorismo ha utilizado varias denominaciones para participar en los diferentes procesos electorales llevados a cabo desde 1990: Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino, Perú 2000, Sí Cumple, Alianza por el Futuro, Fuerza 2011, Fuerza Popular.

Estas diversas agrupaciones han girado en torno de la figura de Alberto Fujimori, antiguo profesor universitario quien logró su primera victoria electoral al asumir la presidencia en 1990. El fujimorismo es un movimiento personalista que durante la década de 1990 se apoyó en los recursos del Estado, las fuerzas armadas y algunos sectores del empresariado para asegurar la continuidad del gobierno autoritario de su líder. En tal sentido se trata de un movimiento que tiene una estructura autoritaria, donde las principales decisiones son adoptadas por el círculo más cercano de colaboradores de Fujimori.

Luego de la caída del régimen de Fujimori y su huida al Japón, el Fujimorismo entró en un grave proceso de crisis y desprestigio ante la opinión pública debido a los escándalos de corrupción que marcaron el final de su gobierno. Sin embargo los partidarios de Fujimori han

logrado mantener el recuerdo de los éxitos de su gobierno (el control de la hiperinflación y la derrota de la subversión armada) en un sector importante del electorado, lo que les ha permitido construir una base social de apoyo para su reaparición en la escena pública. Según Murakami y Barrenechea (2011) la supervivencia y posterior resurgimiento del fujimorismo político estaría asociado al “recuerdo” y “agradecimiento” que estos sectores tienen de su gobierno, así como al surgimiento de una nueva líder, Keiko Fujimori, que ha sido capaz de “heredar” el carisma de su padre.

En el 2006, luego de la debacle del 2001, el fujimorismo obtiene un importante resultado electoral, alcanzando 13 escaños parlamentarios, representación que le permite mantenerse como un referente activo en el escenario político nacional. En esas elecciones se consolida la figura de Keiko Fujimori, congresista electa por Lima con la más alta votación preferencial. En las elecciones del 2011, Keiko Fujimori encabeza la lista presidencial de Fuerza 2011 y logra pasar a la segunda vuelta con 23.6% de los votos válidos y el fujimorismo se convierte en la segunda bancada más importante del congreso con 37 escaños (28.5% del total de escaños).

Alberto Vergara identifica al fujimorismo como un actor político que representa una vertiente conservadora y autoritaria del populismo latinoamericano, que se caracteriza por una ampliación de algunas funciones estatales para incluir de manera asistencialista a sectores excluidos de la sociedad, a la vez que mantienen políticas económicas ortodoxas que benefician a las élites económicas del país (Vergara, 2007, pp. 87). La insistencia en la necesidad de una mano dura del Estado frente a la protesta social para mantener el orden, relevando los éxitos de la política antisubversiva implementada en su primer gobierno) refuerzan el carácter conservador de la propuesta política fujimorista.

A pesar del juicio a Alberto Fujimori y su condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, el fujimorismo ha logrado mantener un apoyo significativo (entre 15 y 20% del electorado) en los últimos años. Para los partidarios de Fujimori, los problemas legales de su líder son percibidos y presentados como una persecución política, que generan una cierta imagen de victimización del Fujimorismo lo que refuerza su identidad política. Carlos Meléndez (2012b, pp. 19) sostiene que el Fujimorismo en la actualidad reúne varias de las condiciones

que permitirían su consolidación como un partido político en el Perú de los próximos años: una militancia o un grupo “duro” de simpatizantes; referentes ideológicos (que podemos asociar al populismo conservador autoritario que identifica Vergara); élites políticas y sucesores del líder (Keiko Fujimori).

Perú Posible - PP

Perú Posible tiene sus orígenes en la organización País Posible, creada en 1994 en vistas a presentar la candidatura del economista Alejandro Toledo en las elecciones presidenciales de 1995. En aquella oportunidad, País Posible no contaba con inscripción legal, por lo que Toledo tuvo que postular en alianza con otro partido (la Coordinadora Democrática). Finalmente, esa candidatura apenas alcanzó el 3% de los votos válidos.

En las elecciones del 2000, Toledo vuelve a presentarse, esta vez como candidato de Perú Posible. Las elecciones del 2000 fueron particulares ya que Alberto Fujimori intentaba su tercera reelección y la oposición se presentaba dividida. El fujimorismo contaba con los recursos del aparato estatal; manipulaba las principales autoridades electorales; y controlaba a varios de los principales medios de comunicación; lo que configuraba un escenario electoral fuertemente inequitativo y poco transparente.

Durante la campaña electoral, los partidarios y medios de comunicación afines al fujimorismo implementaron una agresiva estrategia de desprestigio de los candidatos que aparecían en las encuestas con mayores posibilidades de enfrentar a Fujimori (Alberto Andrade de Somos Perú y Luis Castañeda de Solidaridad Nacional), logrando reducir sustancialmente su apoyo electoral. Ello tuvo como consecuencia que Alejandro Toledo, quien figuraba en cuarto lugar en las encuestas de intención de votos en enero del 2000, pase a primer plano como el principal contendor de Fujimori en el último mes de la campaña (Apoyo Opinión y Mercado, 2000) y termine en segundo lugar, de acuerdo con los resultados oficiales, con el 40.2% de los votos válidos frente al 49.9% de Alberto Fujimori.

Frente al conjunto de irregularidades y falta de garantías para una elección justa, Toledo llama a la ciudadanía a votar en blanco o viciado en la segunda vuelta presidencial del 2000.

Posteriormente, en las elecciones del 2001, Toledo logra capitalizar el haberse convertido en el líder de la oposición antifujimorista y gana la presidencia en segunda vuelta, pero Perú Posible no logra tener la mayoría en el congreso, por lo que requiere formar una alianza con el Frente Independiente Moralizador.

Durante el gobierno de Toledo se continúa con la investigación y persecución judicial de los casos de corrupción del fujimorismo y se logra reactivar la economía que había entrado en recesión desde la crisis de 1998. El primer gobierno de Toledo se beneficia del boom de exportaciones de materias primas y el 2006 la economía logra registrar una tasa de crecimiento del PBI per cápita del 6.55% (?). Sin embargo, errores políticos y de imagen del propio presidente, así como las divisiones al interior de su partido deterioraron la percepción del gobierno frente a la opinión pública: entre agosto del 2003 y enero del 2006, la aprobación nacional del presidente se mantuvo por debajo del 15%, llegando a recuperarse y alcanzar 33% al culminar su mandato (Apoyo Opinión y Mercado, 2006).

En las elecciones del 2006 Perú Posible no es capaz de presentar candidato presidencial y en las elecciones parlamentarias apenas logra superar la valla electoral y obtener dos escaños en el congreso. En vistas a las elecciones del 2011, a finales del 2010 Perú Posible comienza a reactivarse como maquinaria electoral para presentar nuevamente la candidatura de Alejandro Toledo, quien, luego de haber empezado como favorito en los primeros meses de la campaña, termina en cuarto lugar con 15.6% de los votos de la primera vuelta presidencial. A pesar de ello, la lista parlamentaria del partido logra alcanzar 21 escaños, convirtiéndose en la tercera bancada parlamentaria.

Perú Posible es un partido personalista cuya organización depende mucho de la figura de su líder y está al servicio de sus proyectos electorales. Toledo cuenta con un círculo de allegados que forman parte de la dirección de su partido y que han tenido experiencia ocupando cargos gubernamentales durante su mandato. Sin embargo, la insuficiencia de cuadros políticos obligó a Toledo a recurrir a figuras independientes para asumir importantes carteras ministeriales (incluidas las de primer ministro y ministro de economía). Tampoco tiene la capacidad de competir electoralmente con éxito en procesos regionales o municipales, ya que no cuenta con

una organización que permita presentar candidatos o sostener campañas locales en todas las circunscripciones provinciales.

Como partido personalista, Perú Posible no tiene una posición doctrinaria o ideológica definida; programáticamente, en el campo económico está a favor de políticas de libre mercado y de promoción de la inversión privada. En términos generales podría ubicárselo en el centro del espectro político.

Solidaridad Nacional – SN

Solidaridad Nacional tiene muchas características similares a Perú Posible. Como partido fue fundado en 1999 con la finalidad de presentar la candidatura de su líder, Luis Castañeda Lossio en las elecciones presidenciales del 2000.

En la década de 1980 Castañeda hizo su vida política en el ámbito municipal, siendo elegido regidor de Lima por Acción Popular en 1980. Adquirió mayor notoriedad pública entre 1990 y 1996 cuando asumió la presidencia del Instituto Peruano de Seguridad Social, e impulsando una serie de mejoras que fueron bien percibidas por los usuarios de esa institución pública.

Durante las elecciones del 2000 fue, al igual que los otros candidatos opositores, objeto de una agresiva campaña mediática de desprestigio y, luego de haber estado en tercer lugar en las preferencias electorales, termina en quinto lugar con 1.8% de los votos válidos en la primera vuelta presidencial. En los años posteriores, Solidaridad Nacional pasa a conformar la alianza Unidad Nacional liderada por el PPC y apoya la candidatura de Lourdes Flores en las elecciones presidenciales del 2001 y 2006. A cambio, Unidad Nacional lo presenta como candidato en las elecciones municipales de Lima Metropolitana del 2002, comicios que logra ganar. En el 2006 Castañeda es reelegido alcalde de Lima por la lista de Unidad Nacional.

En el 2008 Solidaridad Nacional se retira de la alianza con Unidad Nacional en preparación al lanzamiento de la candidatura presidencial de Castañeda el 2011, tratando de aprovechar los altos niveles de popularidad que gozó como alcalde de la capital. En las elecciones presidenciales del 2011, Castañeda termina en quinto lugar con el 9.8% de los votos válidos y su partido logra obtener 9 escaños en el parlamento (7% del total de escaños).

El 2014, Castañeda Lossio se presenta nuevamente como candidato de Solidaridad Nacional para las elecciones a la alcaldía de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ganando un tercer periodo edil con el 50.8% de los votos válidos.

Al ser un partido que funciona básicamente en torno a la figura de su líder y sus proyectos electorales, Solidaridad Nacional no cuenta con una plataforma programática o ideológica elaborada. Tiene un grupo reducido de cuadros con experiencia política en la gestión pública en el ámbito municipal que forman parte del círculo cercano de su líder. Sus alianzas electorales con Unidad Nacional y su posición en los debates públicos lo ubican hacia el centro derecha del espectro político.

El Partido Nacionalista Peruano – PNP

El PNP se forma a finales del 2005 con el objetivo de presentar la candidatura del militar en retiro Ollanta Humala en las elecciones presidenciales del 2006. Ollanta Humala adquiere notoriedad pública a finales del 2000 cuando era el comandante de un destacamento militar en el departamento de Tacna, al sur del país. En octubre del 2005, en las postrimerías de la caída de Alberto Fujimori, Ollanta Humala y su hermano Antauro (entonces mayor del ejército) se sublevaron contra el gobierno junto con las tropas que estaban abajo su mando.

El gobierno de transición de Valentín Paniagua reincorpora a Ollanta Humala al ejército y durante el gobierno de Toledo asume las funciones de agregado militar en Francia y Corea del Sur. Durante ese tiempo, su hermano Antauro, ya retirado del ejército, emprende una campaña proselitista a favor de una ideología nacionalista (el “etnocacerismo”), de crítica radical al régimen político y económico peruano. Antauro Humala lidera una revuelta armada en Andahuaylas que deja como saldo la muerte de cuatro policías. Antauro Humala se rinde y es apresado por las autoridades. Ollanta Humala, aún en actividad como agregado militar, deslinda públicamente su participación en esa revuelta y se distancia de las posiciones políticas de su hermano.

En el 2004 Humala se retira del ejército y junto con un grupo de allegados a los que se suman algunos políticos que habían formado parte de partidos de la izquierda peruana, empiezan a

organizar el Partido Nacionalista Peruano. Sin embargo, el PNP no contaba con inscripción oficial para participar en las elecciones del 2006, por lo que acepta la oferta de conformar una alianza con el partido Unión Por el Perú (UPP) que había sido originalmente creado para presentar la candidatura de Javier Pérez de Cuéllar en las elecciones presidenciales del 1995. A pesar de que UPP tenía ya muy poco que ver con el proyecto político original, había logrado conservar su inscripción electoral.

En las elecciones del 2006, bajo el logo de UPP, se presenta una lista parlamentaria que combina militantes del UPP y del PNP. Durante la campaña Ollanta Humala desarrolla un discurso de crítica radical al modelo económico y la clase política peruana; propone una mayor participación del Estado en la economía; se muestra en contra de la firma de tratados de libre comercio; propone un cambio de la constitución fujimorista para retornar a la de 1979; y habla positivamente del modelo implementando durante el gobierno militar de Velasco Alvarado. Asimismo se muestra cercano a los gobiernos “bolivarianos” de Hugo Chávez y de Evo Morales. En tal sentido, el 2006 PNP se posiciona como un partido “antisistema”, a la izquierda del espectro político (McClintock, 2006; Schmidt, 2007; Tanaka, 2011). Este posicionamiento político logra atraer a una proporción significativa del electorado y Humala logra pasar a la segunda vuelta electoral en primer lugar con 30.6 % de los votos, pero es derrotado en la segunda vuelta por Alan García.

Luego de las elecciones del 2006, el PNP se convierte en la principal fuerza de oposición al gobierno de Alan García y se propone desarrollar una estrategia para participar con éxito en las elecciones del 2011 (León, 2011, pp. 109-111). En tal sentido desarrolla una política de alianzas que atrae a diversas organizaciones y personalidades de izquierda que conforman la coalición electoral Gana Perú. Durante la campaña, Ollanta Humala busca moderar su imagen radical del 2006 moviéndose hacia el centro-izquierda político, haciendo explícitamente referencias al modelo implementado en Brasil por Lula y por el PT. Su estrategia de moderación le permite pasar a la segunda vuelta con un resultado similar al que obtuvo en las elecciones del 2006, y luego ganar las elecciones frente a la candidata del fujimorismo.

Como organización el PNP comparte muchos de los rasgos personalistas de los partidos políticos peruanos contemporáneos, en el sentido que su acción política depende mucho de las decisiones y proyectos electorales de su líder. Si bien el PNP mostró algunos elementos de formación de identidades ideológicas y apuestas programáticas de izquierda, prima en su accionar una lógica pragmática de adaptación a la coyuntura política y electoral. Una vez en el gobierno el PNP ha mantenido varios de los componentes del modelo económico peruano (promoción del libre mercado y de la inversión privada; apertura a los mercados internacionales), tratando de fortalecer los programas del Estado de lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero sin emprender mayores reformas que apuesten por una “gran transformación”. Ello ha significado que el PNP pierda a varios de sus aliados o líderes ubicados en su ala izquierda, algunos de los cuales contaban con una importante experiencia política.

El PNP carece de cuadros profesionales y técnicos, ni tampoco cuenta con muchos dirigentes políticos que tengan una amplia experiencia política o parlamentaria. Muchos de los altos funcionarios del gobierno de Humala son tecnócratas independientes.

6.2. Las dinámicas sociales y la débil institucionalidad del sistema de partidos

La transición democrática iniciada con las elecciones presidenciales del 2001 encuentra al país ante un doble crisis. Por un lado una crisis económica asociada a la recesión económica que afectó al país a raíz de las crisis financieras mundiales de la segunda mitad de la década de 1990 (crisis Mexicana, Rusa y Asiática) y que provocó un incremento de los niveles de pobreza que hacia el 2001 logró a alcanzar a cerca del 50 % de los hogares (INEI, 2002). Por el otro el reto de reconstruir la independencia de poderes luego del régimen autoritario fujimorista, así como enfrentar la corrupción y abusos a los derechos humanos cometidos durante ese periodo.

Durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001) y el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se logra superar la recesión económica y recobrar la independencia de algunas instituciones del estado (en especial el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de

Justicia, los organismos electorales y el propio Congreso de la República). Asimismo se hacen importantes avances en la lucha contra la corrupción, procesando a varios altos funcionarios civiles y militares del régimen fujimorista involucrados en este tipo de actos ilícitos.

El presidente Paniagua crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación - CVR, la cual es ratificada y reforzada por el presidente Toledo, lo que le permite realizar y completar su investigación sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), presentando su informe final en agosto del 2003 (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003). Algunos de los resultados de la CVR sirvieron de base para juicios en contra de personas involucradas en violaciones a los derechos humanos, entre ellos el más notorio fue la sentencia 25 años de prisión en contra de Alberto Fujimori por este tipo de hechos emitida por la Corte Suprema en el 2009.

En el 2002, al igual que en el resto de países de la región, se inicia en el Perú un ciclo de fuerte crecimiento económico impulsado por las exportaciones de materias primas y que se prolonga por más de una década. El Ingreso Nacional Bruto per cápita se multiplica por 3 entre el 2002 y el 2014, pasando de US\$ 2,000 a poco más de US\$ 6,000. Este crecimiento económica genera una importante expansión del consumo así como una reducción de la pobreza que pasa de 58.7% de la población en el 2004 a 22.7% en el 2014 (INEI, 2016).

En paralelo al crecimiento económico, se generan un conjunto de movilizaciones sociales, en parte vinculados a demandas redistributivas, pero en muchos casos asociados a conflictos entre poblaciones afectadas o cercanas a grandes proyectos de inversión en industrias extractivas en el interior del país (Defensoría del Pueblo, 2011). El descontento social en torno a la distribución de los beneficios del crecimiento económico, fue uno de los factores que impulsó la candidatura de Ollanta Humala en las elecciones del 2011, presentando un programa que enfatizaba un mayor rol del Estado en la redistribución de la riqueza. Si bien Humala resultó derrotado por Alan García en las elecciones del 2006, obtuvo una importante representación parlamentaria y se ubicó como la principal fuerza de oposición del gobierno de García.

Las elecciones del 2006 fueron también testigos de la reconstitución electoral del fujimorismo y el surgimiento de Keiko Fujimori como la sucesora política de su padre.

El gobierno de García no emprendió mayores reformas institucionales pero se benefició de las altas tasas de crecimiento económico que seguía experimentando el país. Las reservas fiscales le permitieron al Estado peruano enfrentar los efectos de la crisis mundial del 2008. Sin embargo los niveles de conflictividad social y demandas de inclusión económica siguieron siendo importantes (Meléndez, 2013) y sustentaron nuevamente la plataforma política de Ollanta Humala y de Keiko Fujimori, quienes se disputaron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2011. Estas elecciones marcan la consolidación del fujimorismo como una de las principales fuerzas políticas del país, con capacidad de generar lealtades políticas en un significativo sector del electorado, basadas en los logros del gobierno de Alberto Fujimori (control de la inflación, derrota de los grupos subversivos y políticas sociales clientelistas).

Cuadro 6.3: Elecciones y composición del Parlamento en Perú 2000-2011

Perú 2000-2011: Resultados de elecciones parlamentarias y composición del parlamento

Elección	Partidos	% Votos	No. de Escaños	% Escaños	Total Escaños
2000	P2000 (FUJI)	42.2	52	43.3	120
	PP	23.2	29	24.2	
	FIM	7.5	9	7.5	
	Somos	7.2	9	7.5	
	PAP	5.5	6	5.0	
	SN	4.0	4	3.3	
	Otros	10.4	11	9.2	
2001	PP	26.3	45	37.5	120
	PAP	19.7	28	23.3	
	UN	13.8	17	14.2	
	FIM	11	11.0	9.2	
	Otros	29.2	19	15.8	
2006	PAP	20.6	36	30.0	120
	UPP (PNP)	21.2	45	37.5	
	UN	15.3	17	14.2	
	AF (FUJI)	13.1	13	10.8	
	FDC	7.1	5	4.2	
	Otros	22.7	4	3.3	
2011	GP (PNP)	25.3	47	36.2	130
	F2011 (FUJI)	23.0	37	28.5	
	APGC	14.8	12	9.2	
	PP	14.4	21	16.2	
	SN	10.2	9	6.9	
	PAP	6.4	4	3.1	
	Otros	5.9	0	0.0	

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (2015). Elaboración propia

Las dificultades para articular, representar y responder de manera más efectiva a las demandas, movilizaciones y conflictos sociales experimentados por el Perú en un contexto de alto crecimiento económico expusieron las debilidades institucionales del sistema político, tanto del Estado como de los partidos políticos en particular.

En general, las organizaciones que conforman el sistema de partidos contemporáneos en el Perú son fuertemente personalistas y su dinámica gira en torno a los proyectos electorales de sus líderes. Sus cuadros políticos son reducidos y son parte del círculo cercano del líder del partido. Hay una escasa vida institucional por debajo de las cúpulas partidarias y el nivel de cohesión interna es bajo, lo que se ve reflejado en los fenómenos de transfuguismo parlamentario o divisiones internas. Las propuestas programáticas no se fundamentan en una ideología elaborada y las organizaciones funcionan básicamente como maquinarias electorales para competir en las elecciones nacionales. Los partidos políticos tienen poco arraigo en la vida social del país y más allá de las elecciones nacionales, no logran participar exitosamente en las elecciones regionales o municipales, en donde la mayoría de agrupaciones son de carácter local.

Si bien hay líderes políticos que participan como candidatos presidenciales en más de una elección (Fujimori, Toledo, Flores, García), en cada ciclo electoral el sistema de partidos se reconfigura: nuevos líderes con sus partidos aparecen con un caudal de votos importante; partidos que ganaron elecciones o tuvieron una importante representación parlamentaria pierden gran parte de su respaldo electoral en las siguientes elecciones; políticos cambian de un partido a otro entre elecciones; etc.

Cómo se ha visto en el capítulo 2, la volatilidad electoral peruana es la más alta de los cuatro casos analizados, lo que se traduce en una baja tasa de reelección de parlamentarios entre una elección y otra: el 33 % de los parlamentarios fue reelecto el 2001, 18 % el 2006 y 29 % el 2011 (Zavaleta, 2013). Ello tiene como consecuencia que cada nuevo parlamento cuenta con una mayoría de políticos inexpertos que tienen que aprender su oficio y el arte de la negociación política, y que además tienen escasas perspectivas de continuar su carrera política.

Dadas estas dificultades, diversos autores han calificado al Perú como una “Democracia sin Partidos” (Levitsky y Cameron, 2003; Tanaka, 2005). Carlos Meléndez sostiene que las dificul-

tades de institucionalización del sistema de partidos se deben a que éste se encuentra “partido” por brechas verticales y horizontales que dificultan su capacidad para cumplir sus funciones de intermediación entre los conflictos y demandas sociales que surgen desde la dinámica de los actores sociales, y la acción del Estado sobre la sociedad a través de sus políticas e instituciones públicas (Meléndez, 2012*a*, 2013). Las brechas horizontales aluden a las dificultades para conectar el plano político con el social, la relación entre los partidos y los actores sociales propiamente dichos; mientras que las brechas verticales tienen que ver con las debilidades organizativas de los partidos para conectar diferentes niveles de expresión de las demandas y de intervención del estado (local, regional y nacional).

Meléndez identifica como algunos de los factores que estarían detrás de la generación de estas brechas un conjunto de cambios institucionales en el Estado ocurridos a partir del segundo gobierno de Fujimori (1995), pero que incluyen también reformas producidas luego del 2001. Estas reformas institucionales habrían generado una parcelación y fragmentación del poder Estatal, multiplicando instancias deliberativas y ejecutivas (municipios, gobiernos regionales, instancias de democracia participativa) que desbordan las capacidades de los partidos políticos (ya debilitados por el fujimorismo) para articular diversos niveles de acción política, debilitándolos aún más.

La debilidad del sistema de partidos atravesado por esta doble brecha horizontal y vertical general una alta volatilidad electoral e incertidumbre política, que según (Meléndez, 2013, pp. 523-524) se resuelve mediante propuestas populistas ya sea de derecha (el Fujimorismo) como de izquierda (la candidatura de Humala el 2006 y 2011). Alberto Vergara (2007) había ya planteado que la cultura política peruana estaba fuertemente marcada por preferencias por liderazgos de tipo populista que ofrecen resolver los problemas de inclusión política, económica y social mediante una enérgica acción del Estado dirigida por un líder con amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio del poder político.

Partidos débiles ofrecen pocos incentivos para asegurar la lealtad de quienes desean desarrollar una carrera política compitiendo en diversos procesos electorales en distintos niveles (local, regional). Ante ese escenario, Mauricio Zavaleta (2014) sostiene que quienes quieren

hacer política en el país se organizan en “coaliciones de independientes” temporales y flexibles que permiten enfrentar y los costos de la movilización electoral. Sin embargo, de acuerdo con el autor, este tipo de estructura partidaria genera costos importantes para el sistema político en su conjunto (Zavaleta, 2014, pp. 147-159): por un lado la fluidez de las coaliciones impide la consolidación de identidades programáticas y políticas claras, dificultando que el elector haga uso de juicios retrospectivos para decidir su voto ante una oferta tan variable de una elección a otra y con candidatos que se mueven entre varias organizaciones. La ausencia de partidos incentiva a los políticos a concentrarse en el corto plazo y en el horizonte de la elección inmediata por sobre el desarrollo de visiones programáticas más integrales que sostengan una organización y una oferta política en el tiempo. Coaliciones de políticos fluidas, temporales y flexibles impiden la consolidación de un cuerpo de políticos experimentados tanto en labores representativas, de negociación como de gestión pública, pero también el desarrollo de vínculos más continuos con actores sociales y organizaciones de la sociedad civil para articular y representar sus intereses.

La debilidad de las instituciones representativas como los partidos políticos provoca además que no existan contrapesos ante proyectos políticos de corte autoritario (Zavaleta, 2014, 150), fuertes liderazgos carismáticos personalistas, o frente a la captura del Estado por parte de poderes fácticos existentes en la sociedad.

A pesar de sus debilidades institucionales, la democracia electoral ha seguido siendo el principal mecanismo para asegurar el acceso y la alternancia en el poder político. Si bien proyectos populistas (de derecha o izquierda) siguen teniendo el potencial de recibir respaldos importantes en la opinión pública que también se traducen en votos, por el momento no surgen actores que pongan seriamente en cuestión las reglas democráticas para la competencia electoral y todas las crisis políticas experimentadas desde la caída del régimen fujimorista han sido resueltas a través de los cauces institucionales.

Las últimas elecciones presidenciales del 2016 han reproducido la dinámica de competencia entre “coaliciones de independientes”, pero también han reiterado la fuerza del fujimorismo como principal agrupación política nacional. Si bien el fujimorismo sufre de muchas de las

limitaciones de una política basada en estrategias de fluidas y variables para seleccionar y presentar candidaturas de "independientes" en las listas parlamentarias de las diversas regiones del país, tiene la ventaja de contar con un capital simbólico que le otorga reconocimiento como "marca política" ante el electorado. Asimismo ha logrado conformar un núcleo de políticos experimentados que se han mantenido leales a la agrupación y que funcionan como dirigentes nacionales de la misma. Es previsible que el fujimorismo se siga consolidando como un actor central en torno al cual podría estructurarse la competencia política en los próximos ciclos electorales.





Parte III

Hallazgos Empíricos



Capítulo 7

Partidos e Identidad Partidaria

En los sistemas políticos democráticos, los partidos políticos constituyen la principal institución que vincula las preferencias de los diferentes sectores o grupos sociales con las políticas públicas que se implementan desde el Estado. Tanto la sociología política clásica como la ciencia política inspirada en enfoques analíticos sistémicos y funcionalistas, consideran que los partidos políticos cumplen un conjunto de funciones claves (Diamond y Gunther, 2001*b*), tales como: nominar a los candidatos en las elecciones; movilizar al electorado; estructurar temas o problemáticas políticas; representar y agregar intereses sociales; formar y sustentar gobiernos.

Estas funciones le permiten a los partidos políticos convertirse en instituciones capaces de generar integración social, al vincular a los actores sociales con el sistema político, al mismo tiempo que aíslan al propio sistema político de las críticas y del descontento cuando la acción del Estado y del gobierno no satisface las expectativas ciudadanas. El descontento social se dirige entonces hacia los partidos, más que hacia el sistema político en su conjunto. Las reglas democráticas de funcionamiento del régimen político permiten que, a través de las elecciones, la ciudadanía cambie a los partidos que participan del gobierno o del poder, lo que constituye una especie de válvula de escape y una oportunidad para renovar la legitimidad del sistema político en su conjunto.

Los modelos teóricos que buscan explicar el comportamiento electoral le otorgan a los partidos políticos un rol central, en particular aquellos derivados de la “Escuela de Michigan”. Como se ha visto, el esquema del “embudo de causalidad” propuesto por esta escuela ubica a

la identificación partidaria como el mecanismo heurístico que le permite al elector evaluar la oferta electoral en función de las pistas provistas por el proceso de socialización política del que ha participado al identificarse con determinados partidos políticos.

Por otro lado, si los partidos políticos logran desempeñar alguna función de representación, ello se deriva de su capacidad de identificar conflictos y divisiones sociales clave, que oponen o diferencian a vastos grupos, sectores o categorías sociales. Al politizar esos conflictos e intereses y mantener relaciones relativamente estables con porciones del electorado, contribuyen con la formación de identidades políticas y eventualmente a la conformación de clivajes sociales.

En este capítulo examinaremos en primer lugar hasta qué punto los partidos políticos que participan en las elecciones que estamos estudiando logran generar algún nivel de identificación partidaria. Seguidamente veremos si estas identificaciones están asociadas con la representación de grupos sociales o sectores del electorado, especialmente aquellos que se diferencian en términos socioeconómicos, dado que las desigualdades de este tipo constituyen uno de los principales vectores del conflicto social y político en nuestras sociedades. Finalmente, trataremos de evaluar qué efectos pueden tener estos procesos de representación social política en las decisiones electorales de los ciudadanos.

7.1. Opinión sobre los Partidos Políticos

Un fenómeno bastante común en varias democracias contemporáneas es la baja legitimidad y nivel de confianza que generan los partidos políticos entre los ciudadanos. Como hemos visto, las teorías de modernización cultural sostienen que en el mundo contemporáneo los individuos tienden a ser cada vez más críticos de las instituciones tradicionales, entre ellas los partidos políticos. Los países que estamos analizando en esta investigación no son la excepción a este fenómeno.

Como puede verse en el cuadro 7.1, de los 56 países que participaron en la oleada 2005-2009 de la Encuesta Mundial de Valores, en tan solo tres de ellos el porcentaje de personas que declaraban tener mucha o bastante confianza en los partidos político superaba el 50 %. De estos, China y Vietnam son regímenes autoritarios de partido único, mientras que el régimen

Cuadro 7.1: Confianza en los Partidos Políticos - Encuesta Mundial de Valores 2004-2009

Porcentaje de personas que confían mucho
o bastante en los Partidos Políticos

País	%	País	%
Viet Nam	93.8	Russia	22.0
China	86.4	Brazil	21.0
Malaysia	58.3	Iran	20.8
India	46.4	Moldova	20.8
South Africa	43.8	Colombia	19.4
Rwanda	41.1	Japan	18.3
Ghana	40.7	Georgia	18.1
Ethiopia	39.1	Chile	17.9
Mali	36.6	Great Britain	17.9
Uruguay	36.4	Bulgaria	17.3
Morocco	36.0	Ukraine	17.3
Turkey	34.4	Italy	16.5
Jordan	33.7	France	16.4
Sweden	33.2	Andorra	16.3
Cyprus	32.4	United States	15.4
Indonesia	30.5	New Zealand	14.8
Norway	28.6	Australia	13.9
Burkina Faso	28.6	Romania	12.9
Spain	28.5	Germany	12.8
Finland	28.4	Serbia and Montenegro	12.8
Hong Kong	27.8	Guatemala	11.9
Zambia	27.0	Taiwan	10.2
Switzerland	26.2	Trinidad and Tobago	9.7
South Korea	24.2	Hungary	9.3
Mexico	24.0	Slovenia	8.9
Canada	23.4	Argentina	7.8
Netherlands	23.3	Poland	7.0
Thailand	23.3	Peru	4.7

Fuente: Encuesta Mundial de Valores. Elaboración propia

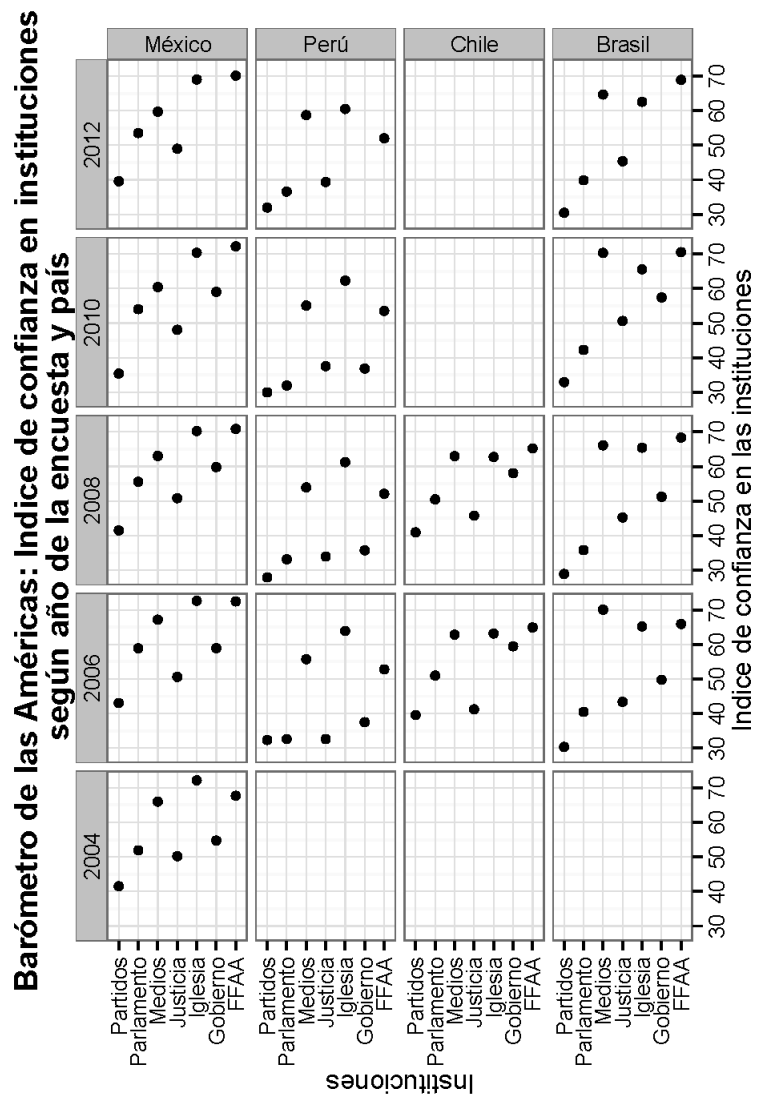
político de Malaysia era calificado por Freedom House como “parcialmente libre” el 2008.¹ Si bien el Perú se encuentra en último lugar de la tabla, no está demasiado lejos de otros países democráticos como Polonia y Argentina. México y Brasil se ubican hacia la mitad de la tabla, algo por encima de Chile. A pesar de que en estos tres países más del 70 % de los entrevistados declaran tener poca o ninguna confianza en los partidos políticos, sus niveles son mejores que otras democracias bastante consolidadas, como Gran Bretaña, Italia, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Alemania.

En el caso de los países de América Latina, desde el 2004, cada dos años el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt aplica la encuesta “Barómetro de las Américas” en la mayoría de los países del hemisferio americano. En esta encuesta se miden varios indicadores sobre cultura política democrática y opinión sobre el desempeño de las instituciones políticas. Uno de estos indicadores es el nivel de confianza en las instituciones, que se mide mediante un índice que tiene valores de 0 a 100, donde 0 representa ninguna confianza y 100 total confianza. Niveles adecuados de confianza para una institución política deberían estar representados con valores superiores a 50 en este índice.

En la figura 7.1 se muestran los resultados del índice de confianza para siete instituciones: los partidos políticos, el parlamento, los medios de comunicación, el sistema judicial, la Iglesia, el gobierno, y las Fuerzas Armadas. El gráfico muestra los resultados para nuestros casos de estudio, por cada año en que se ha aplicado la encuesta. En el caso de Chile, solo se cuenta con datos para el 2006 y 2008; Perú y Brasil forman parte del estudio desde el 2006, por lo que no cuentan con datos del 2004; México ha participado en el proyecto LAPOP desde el 2004. En todos los casos, de las siete instituciones evaluadas, los partidos políticos resultan ser las que gozan de menores niveles de confianza. En Perú y Brasil, los niveles de confianza se sitúan por debajo de 35, lo que es bastante deficiente. Chile y México muestran comparativamente niveles un poco mejores, cerca o por encima de 40 (véase la figura 7.2). La otra institución con bajos niveles de confianza es el Parlamento, el escenario “natural” donde el debate y confrontación política entre los partidos políticos se expresa y resulta en decisiones políticas vinculantes.

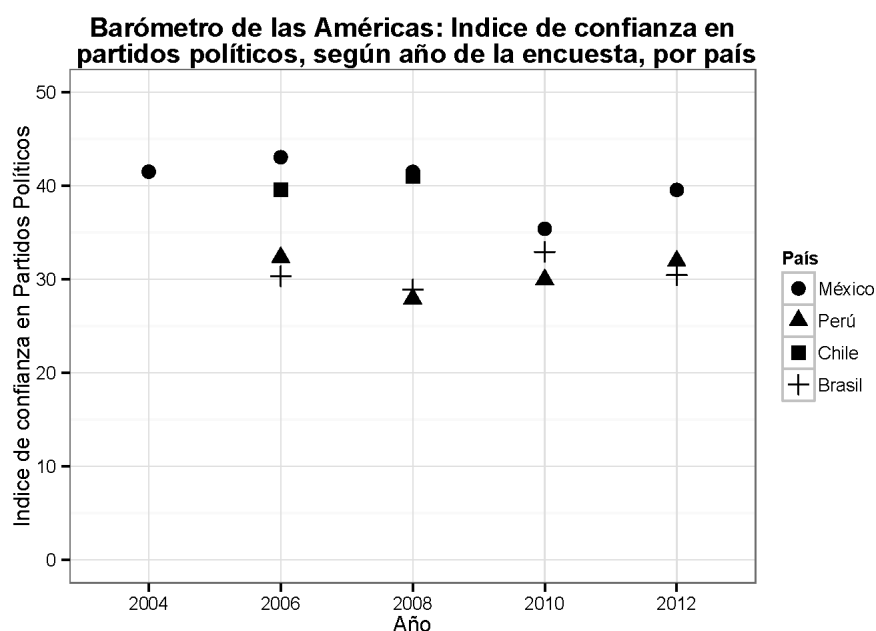
¹Ver: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2008/malaysia>

Figura 7.1: Confiianza en Instituciones



Fuente: The AmericasBarometer by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP), www.LapopSurveys.org. Elaboración propia

Figura 7.2: Nivel de Confianza en los Partidos Políticos



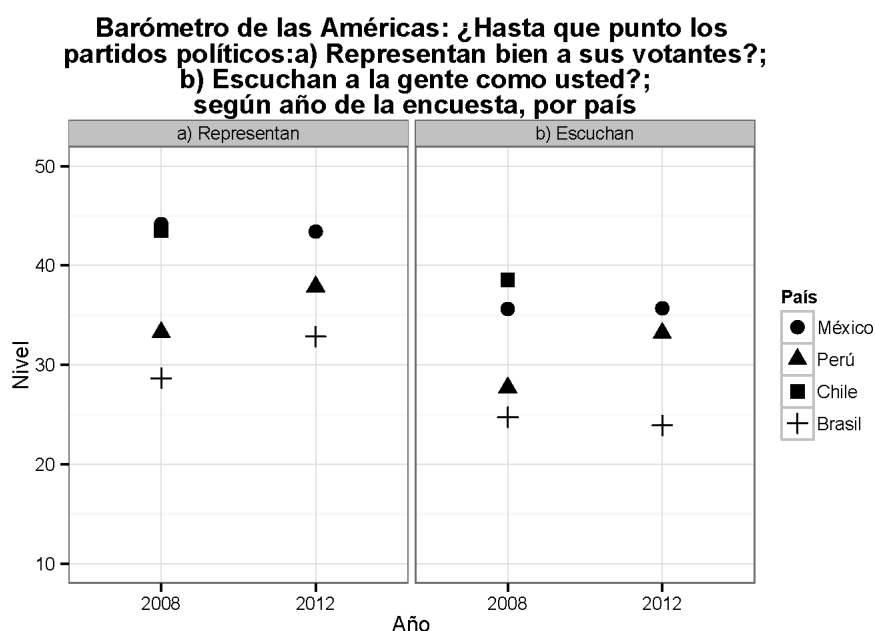
Fuente: The AmericasBarometer by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP), www.LapopSurveys.org. Elaboración propia

Otro elemento importante que debe resaltarse en estos resultados es que por lo general, las instituciones que generan mayor confianza en todos los países y años son las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los Medios de Comunicación, instituciones cuya fuente de legitimidad no es precisamente el voto o sufragio universal.

El Barómetro de las Américas contiene otros indicadores para evaluar el rol de los partidos políticos en las democracias latinoamericanas. En el 2008 y 2012 se preguntó hasta qué punto: a) los partidos representan bien a sus votantes; y b) escuchan a la gente como uno. Los resultados de estas preguntas se representan en el mismo tipo de escala que el de confianza en las instituciones. Como puede verse en la figura 7.3, en las dos preguntas, en ambos años y en todos los casos,² la evaluación de los partidos políticos en estas dos funciones está por debajo de 45, siendo mayor en los casos de México y Chile que en los de Perú y Brasil. Por otro lado, los encuestados consideran que los partidos se desempeñan un poco mejor en su función de representar a los votantes que en la de escuchar a las personas como uno.

²No se cuenta con datos para Chile en la encuesta LAPOP del 2012

Figura 7.3: Representatividad de los Partidos Políticos



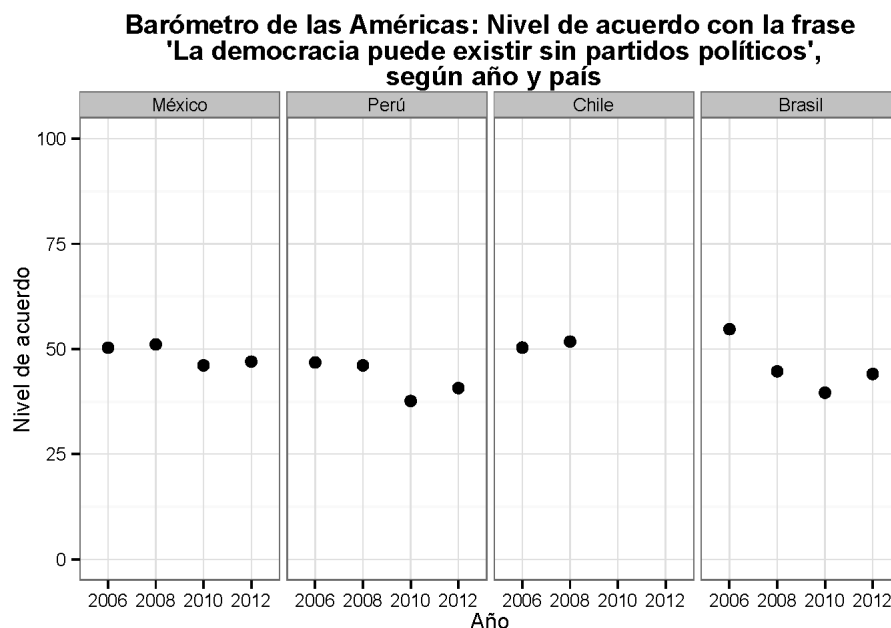
Fuente: The AmericasBarometer by the Latin American Public Opinion Project (LA-POP), www.LapopSurveys.org. Elaboración propia

A pesar de los bajos niveles de confianza y de percepción de la representatividad de los partidos políticos, los ciudadanos de nuestros casos de estudio todavía consideran que los partidos son necesarios para la democracia. Como se aprecia en el siguiente gráfico (7.4), el nivel de acuerdo con la frase “La democracia puede existir sin partidos políticos” no supera los 50 puntos y en algunos años y países ha tendido a disminuir. Paradójicamente ello ha ocurrido con mayor intensidad en dos de los países que muestran menores niveles de confianza en los partidos: Perú y Brasil.

Haciendo un balance preliminar de esta sección, podemos decir que:

- En los cuatro casos de estudio, los partidos políticos son las instituciones políticas que generan menores niveles de confianza en la ciudadanía, además de ser percibidos como poco representativos.
- Los niveles de confianza en los partidos políticos son por lo general bajos, pero están al mismo nivel o por encima de otras democracias occidentales consolidadas, con la notable excepción de Perú.

Figura 7.4: Necesidad de los Partidos Políticos para la Democracia



Fuente: The AmericasBarometer by the Latin American Public Opinion Project (LA-POP), www.LapopSurveys.org. Elaboración propia

- Esto último nos indica que los problemas de representatividad y desconfianza en los partidos políticos son parte de un fenómeno global que afecta al un número importante de nuevas y viejas democracias..
- Entre los cuatro países analizados, Chile y México muestran indicadores de confianza y representatividad de los partidos ligeramente superiores a los de Perú y Brasil.
- A pesar de los resultados deficientes en los indicadores analizados, para una ligera mayoría de ciudadanos de los casos que estamos investigando, los partidos son considerados como instituciones necesarias para el funcionamiento de la democracia.

7.2. Militancia, Identificación y Simpatías Partidarias

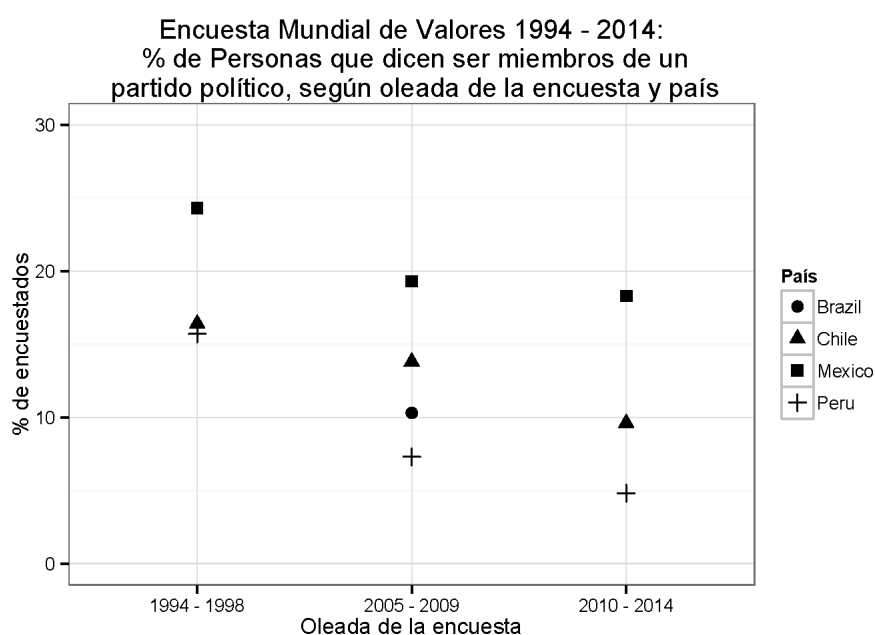
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mundial de Valores 2004-2009, en promedio³ un 14.5% de los adultos de los países que formaron parte de este estudio declaraban ser miembros de algún partido político (ver el cuadro 7.2). Entre las principales democracias

³Asumiendo un peso similar para cada país

occidentales, el país que cuenta con mayor nivel de pertenencia a partidos políticos son los Estados Unidos de Norteamérica, donde el 48.8% de los encuestados por la EMV en aquella oportunidad reconocían ser miembros de un partido político. Esa alta cifra de participación en partidos políticos en los EEUU se explica en parte debido al sistema electoral, donde las elecciones primarias son un componente central del proceso de selección de candidatos y de la campaña electoral. Esta particularidad es una de las razones por las cuales los modelos “psico-sociológicos” de la escuela de Michigan le otorgan tanta importancia a los mecanismos de identificación partidaria en el estudio del comportamiento del elector.

Como se ve en cuadro 7.2, de los cuatro casos que forman parte de nuestra investigación, México es el que en la EMV 2005-2009 contaba con mayores niveles de membresía en partidos políticos, seguido por Chile y mucho más lejos por Brasil y Perú. En el gráfico que se muestra en la figura 7.5 se observa la evolución del porcentaje de personas que se declaran miembros de algún partido político registrado por las diversas oleadas de la EMV. En un lapso de cerca de 20 años hay una disminución significativa de la pertenencia a partidos políticos, en particular en Chile y Perú (para Brasil, la EMV sólo registra este dato en la oleada 2005-2009).

Figura 7.5: Militancia en Partidos Políticos



Fuente: Encuesta Mundial de Valores. Elaboración propia

Cuadro 7.2: Membresía en Partidos Políticos - Encuesta Mundial de Valores 2004-2009

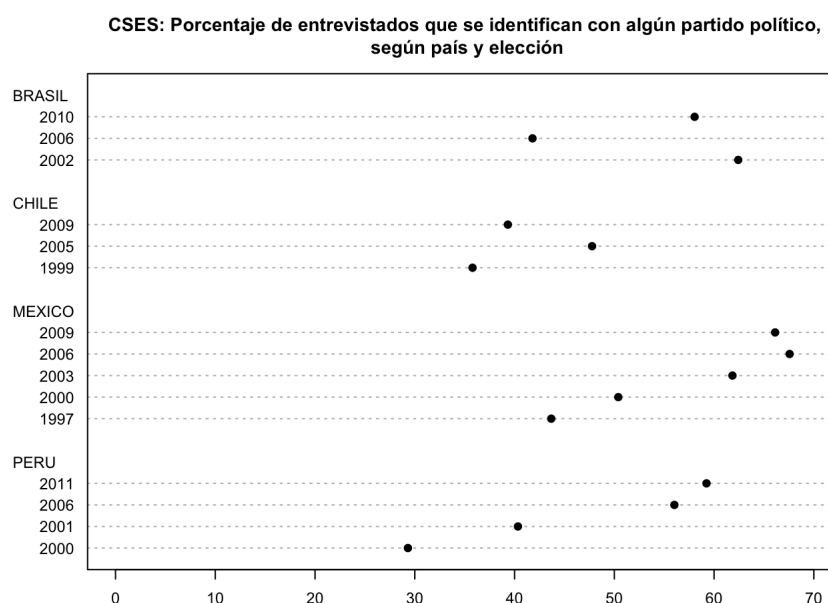
Porcentaje de personas que son miembros de
algún partido político

Pais	%	Pais	%
India	66.3	Brazil	10.3
Ghana	51.5	Andorra	9.5
United States	48.2	Argentina	9.0
Mali	40.7	Moldova	9.0
Zambia	40.7	Iran	8.7
South Africa	35.2	Uruguay	8.0
Rwanda	28.7	Netherlands	7.9
Ethiopia	25.5	South Korea	7.5
Malaysia	23.5	Poland	7.4
Cyprus	20.9	Peru	7.3
Mexico	19.3	Slovenia	6.9
Burkina Faso	18.0	Colombia	6.7
Canada	17.4	Japan	6.7
Trinidad and Tobago	17.4	Ukraine	6.5
Norway	17.1	Taiwan	5.9
New Zealand	16.9	France	5.9
Thailand	16.9	Russia	5.3
Indonesia	16.4	Turkey	5.3
Viet Nam	16.0	Bulgaria	5.2
Switzerland	15.6	Germany	5.1
China	14.1	Spain	4.7
Finland	14.0	Egypt	4.3
Chile	13.8	Romania	3.8
Serbia and Montenegro	12.2	Morocco	2.8
Great Britain	11.3	Georgia	1.1
Sweden	10.6	Hong Kong	0.8
Australia	10.4	Jordan	0.5
Italy	10.4	Hungary	0.4

Fuente: Encuesta Mundial de Valores. Elaboración propia

Más allá de la pertenencia a algún partido político, otro indicador de la importancia de estas instituciones para la vida política de los ciudadanos es el grado en que las personas se identifica o no con alguno de ellos. Una de las preguntas recurrentes del Comparative Study of Electoral Systems (CSES) es si el entrevistado se identifica o simpatiza con algún partido político. Recordemos que las encuestas del CSES se realizan lo más cerca posible del final de un proceso electoral nacional, por lo que sus resultados tienden a reflejar el mayor nivel de politización que se genera en una sociedad luego de una elección.

Figura 7.6: Identificación o Simpatía con algún Partido Político



Fuente: CSES. Elaboración propia

En el gráfico en la figura 7.6 podemos ver que el porcentaje de personas que dice identificarse o simpatizar con algún partido político varía significativamente entre países y entre elecciones dentro del mismo país, desde menos de 30 % de entrevistados en las elecciones peruanas del 2000 hasta cerca al 70 % en las elecciones mexicanas del 2006. En general, si se comparan países en épocas similares, los niveles de identificación partidaria tienden a ser mayores en México. En promedio, los menores niveles de identificación o simpatía por partidos se observan en Chile. Los patrones irregulares que muestran los datos parecen indicar que la identificación o simpatía partidaria en estos casos depende en gran medida de las coyunturas específicas de los países.

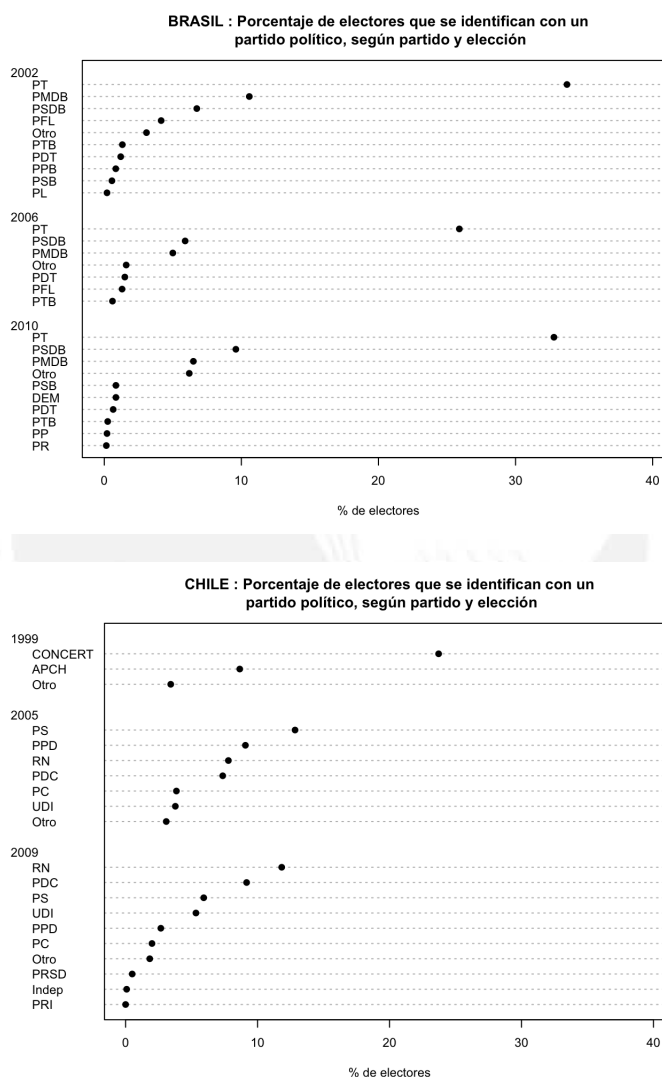
En los siguientes gráficos se muestra el porcentaje de personas que en los cuatro países se identifican con los principales partidos políticos que participan en cada una de las 15 elecciones que estamos analizando. En el caso de Brasil (figura 7.7), el PT aparece como el partido con el que se identifican más personas (más de un cuarto de los entrevistados), muy por encima de los demás partidos políticos, lo que resalta la hegemonía de esta agrupación desde que Lula asumió la presidencia el 2002. El segundo lugar en las identificaciones o simpatías partidarias es disputado entre el PSDB y el PMDB. El PSDB es el principal partido opositor al gobierno del PT y sus candidatos han disputado todas las segundas vueltas de las elecciones presidenciales entre el 2002 y el 2014.

Por su parte, el PMDB es un partido pragmático y "fisiológico" (ver supra pp. 76) que compite básicamente en elecciones parlamentarias y subnacionales. En el PMDB 2002 apoyó la candidatura presidencial de José Serra del PSDB, luego, desde el 2010, el PDMD ha apoyado la candidatura de Dilma Rousseff del PT en las dos elecciones en las que ha competido (2010 y 2014).

En Chile (figura 7.7), la encuesta del CSES 1999 indagó por identificaciones partidarias respecto de las principales alianzas electorales que se presentaron en las elecciones presidenciales de ese año. En los estudios posteriores esta pregunta se hizo para cada uno de los partidos políticos que componen las diferentes alianzas electorales. Salvo la Concertación en 1999, los niveles de identificación partidaria en Chile son bastante bajos en comparación con los demás países, y tienden a privilegiar (como en la mayoría de los otros casos) al partido cuyo candidato ganó las elecciones (recordemos que se trata de encuestas postelectorales).

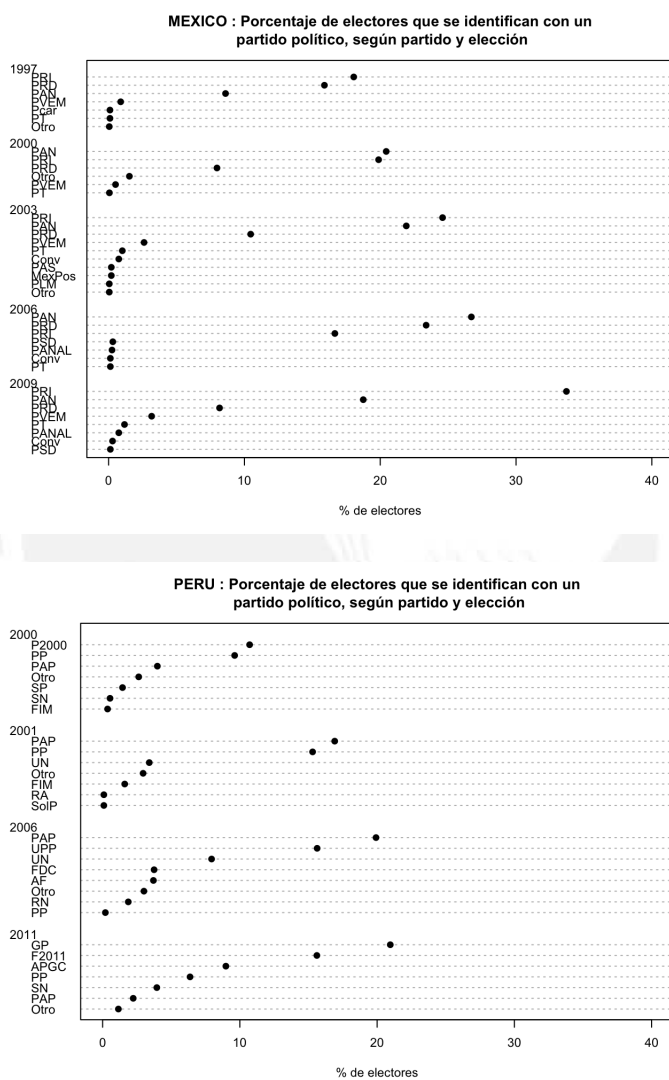
En México, la identificación con los tres principales partidos políticos (PRI, PAN, PRD) es mayor que en los otros países (con la excepción del PT en Brasil). Un punto interesante es que, con excepción del 2006, los niveles de identificación o de simpatía con el PRI han venido incrementándose. En las tres elecciones parlamentarias intermedias que estamos analizando (1997, 2003 y 2009), el PRI ha sido el partido que muestra mayores niveles de identificación partidaria.

Figura 7.7: Brasil y Chile: Identificación con Partidos Políticos



Fuente: CSES. Elaboración propia

Figura 7.8: México y Perú: Identificación con Partidos Políticos



Fuente: CSES. Elaboración propia

A diferencia de los demás casos, en Perú (ver figura 7.8) resulta más difícil hablar de identificaciones partidarias, en la medida que, como hemos visto, el nivel de institucionalización de los partidos es mucho menor que en los otros países. Hay dos temas que destacan en el caso peruano: en primer lugar, los partidos que cuentan con mayores identificaciones o simpatizantes han sido los dos principales que han disputado las elecciones presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta. En segundo lugar, en contraste con los demás casos, las simpatías por el partido de gobierno se reducen de manera significativa y dramática en la siguiente elección.

Luego de sus respectivos gobiernos, Perú Posible (PP) y el Partido Aprista Peruano (PAP) no presentaron candidatos presidenciales en la siguiente elección, lo que nos indica la mayor dependencia que tienen los partidos de caudillos políticos, sobre todo del candidato presidencial, para mantener sus adhesiones entre el electorado. Ello no sucede en los demás países, incluso en Brasil, donde Lula ha sido la figura central del PT desde su primera participación en las elecciones en 1989 hasta su reelección en el 2006. A pesar de la centralidad de Lula para el PT, el partido ha sido capaz de encontrar una figura de liderazgo alternativo en Dilma Rousseff.

Para estimar el efecto de la identificación partidaria en el voto se ha realizado un análisis de regresión logística binomial, donde la variable dependiente es si se vota o no por cada uno de los partidos que compiten en las primeras vueltas de las elecciones presidenciales y la variable dependiente es si el elector se siente identificado o simpatiza con un partido político. Para realizar este análisis se ha procedido a reestructurar la base de datos original siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación.⁴

Supongamos un ejemplo con tres electores (1,2,3) y tres partidos políticos (A,B,C). El elector 1 simpatiza por el partido A y vota por la lista presidencial del mismo partido. El elector 2 se identifica con el partido B y también vota por este partido. En elector 3 no se identifica con ningún partido en particular, pero vota por el partido C. Los datos de este ejemplo se verían representados en una base de datos con 3 variables: 1) Elector; 2) Identificación partidaria (IDP); y 3) voto; tal y como se muestra en el cuadro 7.3.

⁴La metodología descrita ha sido tomada de Lachat (2008), y será utilizada en análisis que se presentan en capítulos posteriores.

Cuadro 7.3: Ejemplo Base de Datos IDP

Elector	IDP	VOTO
1	PARTIDO A	PARTIDO A
2	PARTIDO B	PARTIDO B
3	SIN IDP	PARTIDO C

Para estimar una regresión logística binomial, la variable dependiente, el voto, tiene que ser una variable dicotómica, ya que lo que se busca analizar es el efecto de una variable independiente X (la identificación partidaria - IDP) sobre el voto por un partido determinado. Para cada partido un elector puede o no votar por este (1 ó 0). Además, respecto de cada partido, el elector puede identificarse con éste, identificarse con otro partido, o no identificarse con ninguno. Por ello la identificación partidaria (IDP) para cada pareja de elector - partido, puede representarse por dos variables dicotómicas o “dummy”: se identifica con el mismo partido que se evalúa (IDP-Mismo = 1); se identifica con otro partido (IDP-Otro = 1); o no se identifica con ninguno (IDP-Mismo = 0 & IDP-Otro = 0). Este esquema de codificación se representa en el cuadro 7.4.

Cuadro 7.4: Ejemplo Base de Datos IDP Reestructurada

Elector	Partido	IDP-Mismo	IDP-Otro	Vota
1	A	1	0	1
1	B	0	1	0
1	C	0	1	0
2	A	0	1	0
2	B	1	0	1
2	C	0	1	0
3	A	0	0	0
3	B	0	0	0
3	C	0	0	1

Los coeficientes de regresión logística binomial se calculan con los datos reestructurados, antes de lo cual cada registro (combinación elector - partido) es ponderado por la inversa de veces que el mismo elector aparece en esta base de datos. La ecuación de regresión resultante será:

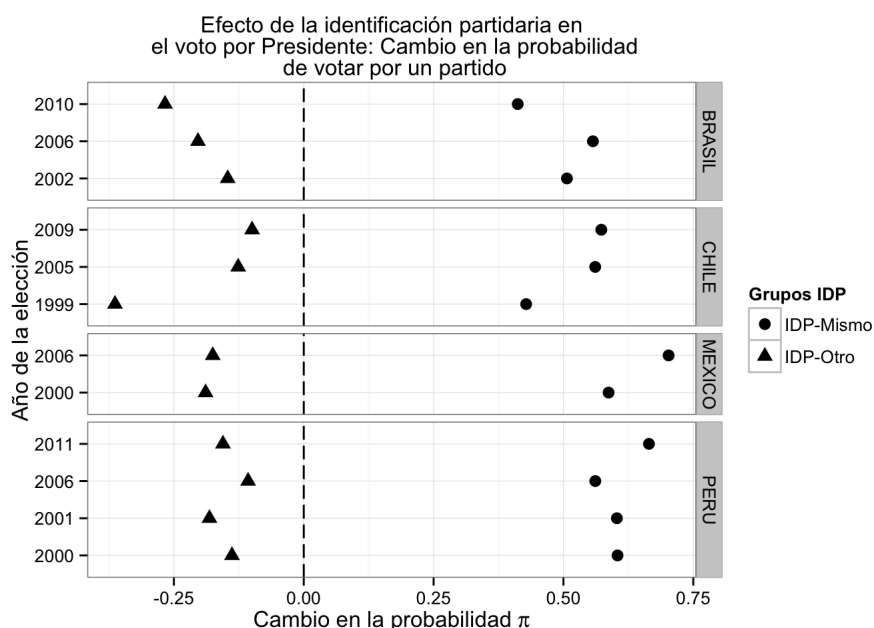
$$\log(\hat{\pi}) = b_0 + b_1IDP.mismo + b_2IDP.otro \quad (7.1)$$

Con la finalidad de interpretar mejor los resultados, hemos convertido los coeficientes de la regresión logística en estimaciones de probabilidad (π), donde:

$$\pi = \frac{e^{b_0+b_1IDP.mismo+b_2IDP.otro}}{e^{b_0+b_1IDP.mismo+b_2IDP.otro} + 1} \quad (7.2)$$

El resultado de este ejercicio se muestra en la figura 7.9. Como se ve, en la mayoría de las elecciones, el simpatizar o sentirse identificado con un partido político incrementa la probabilidad de votar por el en más de la mitad (0.5) respecto de los que no se identifican con ningún partido. Para los que tienen una identificación o simpatía política definida, a la hora de evaluar si se vota por otro partido político, la probabilidad de votar por este disminuye en por lo menos 0.12 (ó 12%) respecto de los que no se identifican con ningún partido.

Figura 7.9: Efecto de la identificación partidaria en el voto



Fuente: CSES. Elaboración propia

Los resultados nos llevan a afirmar que, siguiendo los planteamientos derivados de la escuela de Columbia, la identificación partidaria es un predictor importante de la probabilidad del voto. Sin embargo su eficacia dependerá de la magnitud y estabilidad de dichas identificaciones, cosa que, como hemos visto, varía mucho de elección en elección y de país en país. En el caso Mexicano, resulta ser un indicador más confiable, dados los relativos niveles más altos y

estables de identificación partidista. De hecho, los trabajos de Alejandro Moreno (2009; 2007; 2003) sobre el elector mexicano apuntan en esa dirección. En el caso Chileno, puede ser un indicador relativamente estable, pero su importancia disminuye en la medida que en Chile se observan menores niveles de identificación partidaria (ver fig. 7.6). En Perú resulta ser un indicador muy sujeto a las variaciones conyunturales ya que en el país en el que los niveles de identificación partidaria varían mucho de elección en elección.

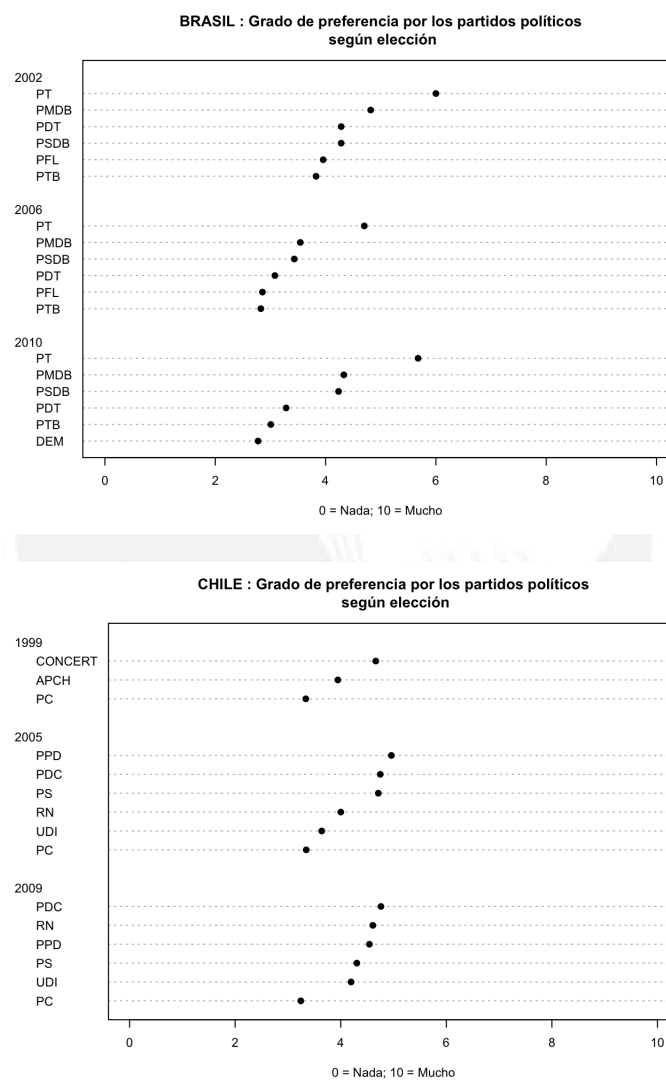
7.3. Divisiones Sociales y Partidos Políticos

Además de las identificaciones y simpatías partidarias, otro indicador que utiliza el CSES para analizar las preferencias partidarias es una pregunta donde se le pide al encuestado evaluar en una escala de 0 a 10, cuánto le gustan cada uno de los principales partidos políticos, donde 0 significa que no les gusta nada, y 10 que les gusta mucho. Una razón importante para usar este indicador es que, como vimos en la figura 7.6 hay un número importante de personas que no identifican con ningún partido político y que puede variar entre 30 % y 70 % del electorado según el país y la elección. Por otro lado, en la mayoría de los casos, más del 50 % de los electores no se identifica con los dos o tres principales partidos políticos que disputan las elecciones. Un indicador que mide la preferencia por cada partido de esta forma puede ayudar a identificar o comprender razonamientos estratégicos del elector que lo pueden llevar a votar por un partido que no con el que más simpatiza, ya sea para no votar por una agrupación que tiene pocas chances de ganar (el “voto perdido”), o para evitar que otro partido llegue al poder (el voto por el “mal menor”).

En las figuras 7.10 y 7.11 se muestra el grado de preferencia, en esta escala de 0 a 10, por cada uno de los principales partidos políticos evaluados en las 15 elecciones que estamos analizando en estos 4 países.⁵ Partidos que tienen altos niveles de preferencia deben mostrar

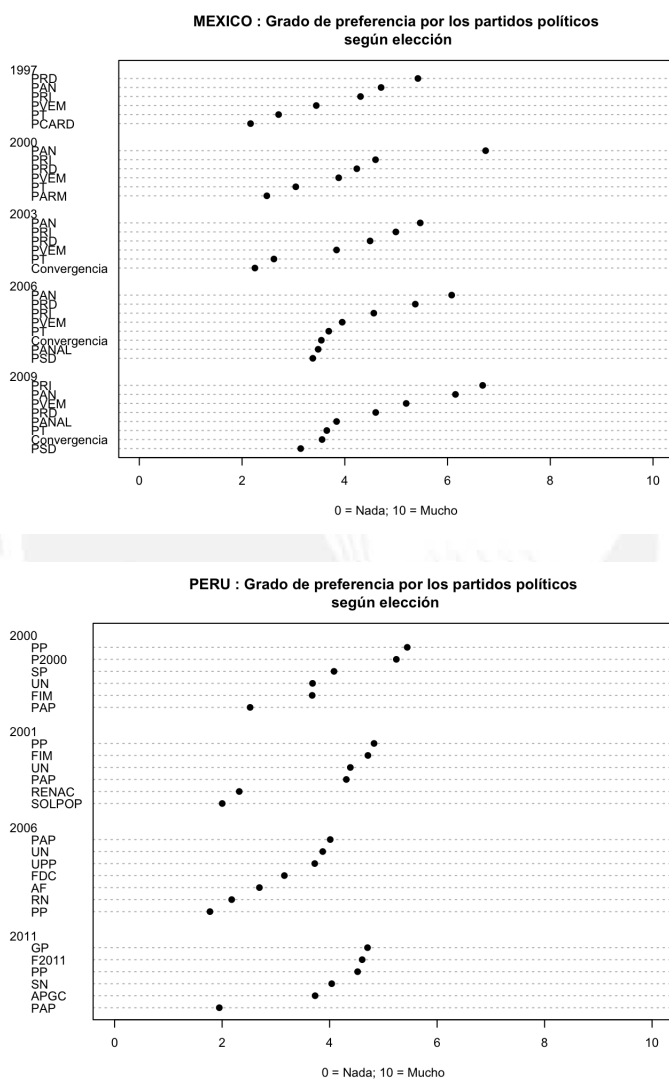
⁵El cuestionario y la base de datos compartida del proyecto CSES limita el número de partidos que se evalúan de esta manera a unos 10 elección. En la mayoría de los casos resulta suficiente, aunque hay países, como Brasil, donde la cantidad de partidos que participan en una elección es bastante alta. Sin embargo, los investigadores responsables de cada país tienen la discrecionalidad para decidir qué partidos será evaluados, obviamente considerando su nivel de importancia y peso electoral. Por ello, varios partidos “pequeños” no figuran en la lista

Figura 7.10: Brasil y Chile: Grado de preferencia por partidos políticos



Fuente: CSES. Elaboración propia

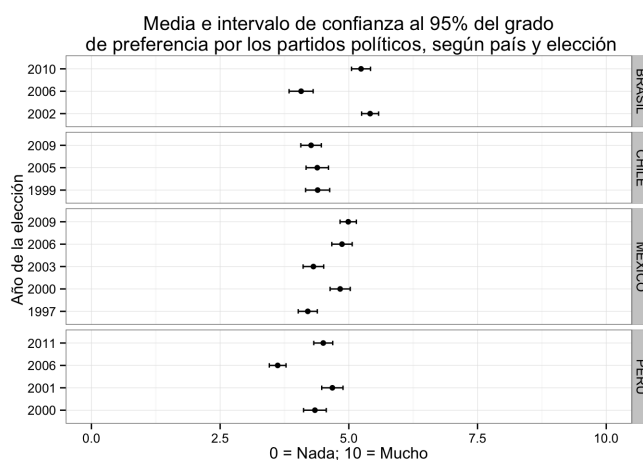
Figura 7.11: México y Perú: Grado de preferencia por partidos políticos



Fuente: CSES. Elaboración propia

valores superiores a 5 en esta escala. Como se aprecia, pocos son los partidos que alcanzan estos niveles de preferencia: el PT en Brasil; el PRI, el PAN y el PDR en diferentes elecciones en México; Perú Posible y el Fujimorismo (Perú 2000) en las elecciones peruanas del 2000; ninguno en el caso de Chile. Por lo general, el orden de preferencias corresponde con el orden de los partidos de acuerdo con los resultados electorales, ya sea presidenciales o parlamentarios.

Figura 7.12: Preferencia promedio del Sistema de Partidos, por país y elección



Fuente: CSES. Elaboración propia

En la figura 7.12 se trata de resumir la información de los gráficos anteriores, calculando una “media” de grado de preferencias por los principales partidos políticos que participan en las 15 elecciones que estamos analizando. Como se aprecia, los promedios tienden a ser más altos en Brasil, fundamentalmente debido al alto respaldo del PT en las tres elecciones evaluadas; y luego en México. Perú muestra resultados más desiguales, pero por lo general con promedios inferiores a 5, lo que indica bajas preferencias por el conjunto de partidos.

¿Hasta qué punto los partidos y sistemas de partidos de los países que estamos analizando representan en el terreno político los conflictos de algunas divisiones o tensiones sociales claves de sus sociedades? Para responder a esta pregunta primero es necesario identificar cuáles pueden ser estas divisiones claves y evaluar hasta qué punto contamos con información que puede ser comparable con nuestros casos.

De acuerdo con la teoría de clivajes políticos de Lipset y Rokkan, algunas de las divisiones y conflictos sociales fundamentales que permitieron la estructuración del sistema de partidos

en las sociedades giraron en torno a: diferencias e identidades religiosas; desigualdades de clase; identidades regionales; identidades y diferencias étnico raciales o culturales; tensiones centro - periferia. Las que marcarán la estructura de los sistemas de partidos serán aquellas divisiones o conflictos que resultaron centrales para sus sociedades al momento del surgimiento de la política democrática y la ampliación del sufragio universal.

En los cuatro casos que estamos estudiando, es posible identificar varios conflictos y divisiones sociales relevantes. En sus procesos de construcción nacional, tanto Brasil, Perú como México han tenido que lidiar con las tensiones provocadas por las desigualdades de sus estructuras étnico raciales, que se intersectan con las desigualdades socioeconómicas de sociedades que se modernizaron e industrializaron en el siglo XX (Telles y Project on Ethnicity and Race in Latin America, 2014). También resultan importantes los conflictos entre regiones con diferentes niveles de desarrollo por acceder a mayores recursos mediante mecanismos de redistribución fiscal; o por contar con mayores niveles de autonomía política para tomar decisiones relevantes para la vida regional.

Lamentablemente, las fuentes de datos con las que contamos (las encuestas del CSES) tienen un número limitado de variables que nos permiten explorar la relación entre conflictos y diferencias sociales, representación política y comportamiento electoral. En tal sentido nos limitaremos a analizar la relación entre las preferencias partidarias y electorales con las desigualdades socioeconómicas, puesto que en todas estas sociedades, los conflictos derivados de la estructuración clasista producto del desarrollo capitalista han acompañado el desarrollo de las instituciones políticas y representativas a lo largo del siglo XX.

En la medida que tenemos que emplear variables que hayan sido medidas de manera comparable en las 15 elecciones que estamos estudiando, utilizaremos como principales indicadores de diferencias socioeconómicas los niveles educativos de los entrevistados y el nivel de ingresos de sus hogares. La variable nivel educativo ha sido estandarizada en todos los casos en 8 categorías ordinales que equivalen aproximadamente a los siguientes niveles en el caso peruano: 1) Primaria incompleta o menos; 2) Primaria Completa; 3) Secundaria incompleta; 4) Secun-

daria Completa; 5) Técnica incompleta; 6) Técnica completa; 7) Universitaria incompleta; 8) Universitaria completa.

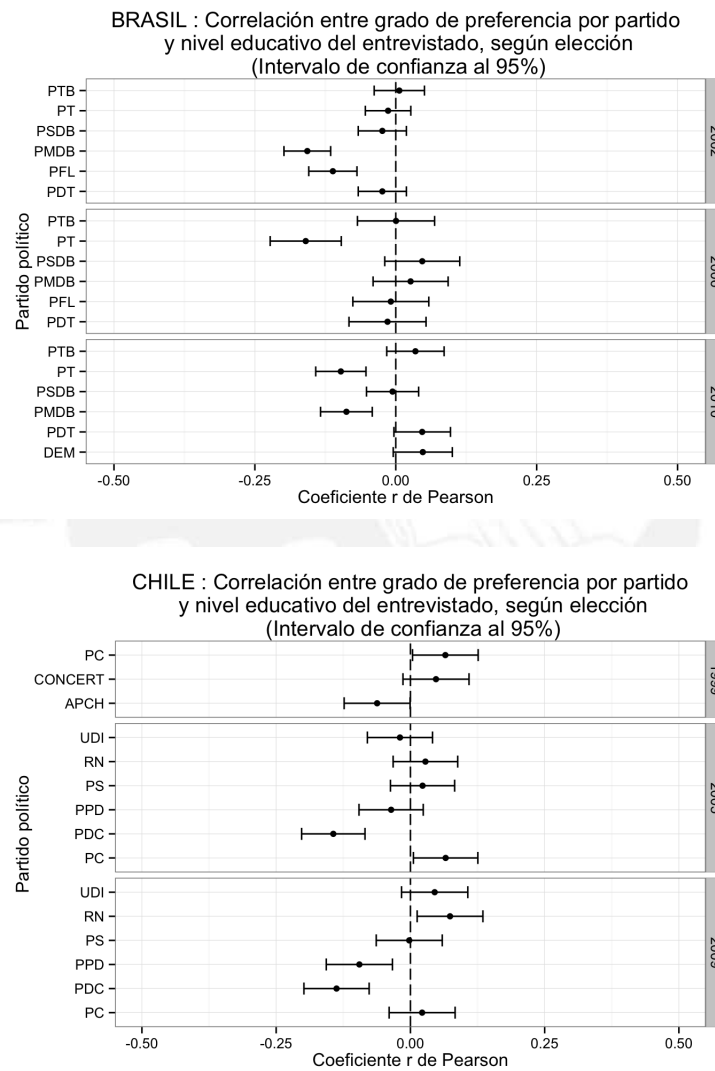
La variable nivel de ingresos ha sido sometida a un procedimiento similar y ha sido estandarizada en 5 categorías ordinales que representan diferentes niveles de ingresos de los hogares: 1) Inferior; 2) Medio inferior; 3) Medio; 4) Medio superior; 5) Superior.

En las figuras 7.13, 7.14, 7.15 y 7.16 se muestran las correlaciones entre el grado de preferencia por cada partido político con el nivel educativo y el nivel de ingresos del elector, respectivamente, por país y elección. La correlación bivariable entre cada partido y las variables de análisis está identificada por el punto que puede leerse en la escala horizontal. Se ha incluido en cada gráfico el intervalo de confianza al 95 % del coeficiente de correlación, ello nos permite identificar las asociaciones significativamente estadísticas, en las que el intervalo no incluye el punto cero marcado por la línea vertical.

En los gráficos de las figuras 7.13 y 7.14 veremos que aquellos partidos cuyas preferencias tienden a disminuir conforme aumenta el nivel educativo del entrevistado, tendrán un coeficiente de regresión positivo, y viceversa. En otras palabras, los partidos que cuyos coeficientes de regresión e intervalos de confianza correspondiente se ubican a la izquierda del punto cero, serán partidos que tienen más preferencias entre electores con niveles educativos más bajos. Los gráficos en 7.15 y 7.16, donde se analiza la relación con los niveles de ingreso, se interpretan de manera análoga.

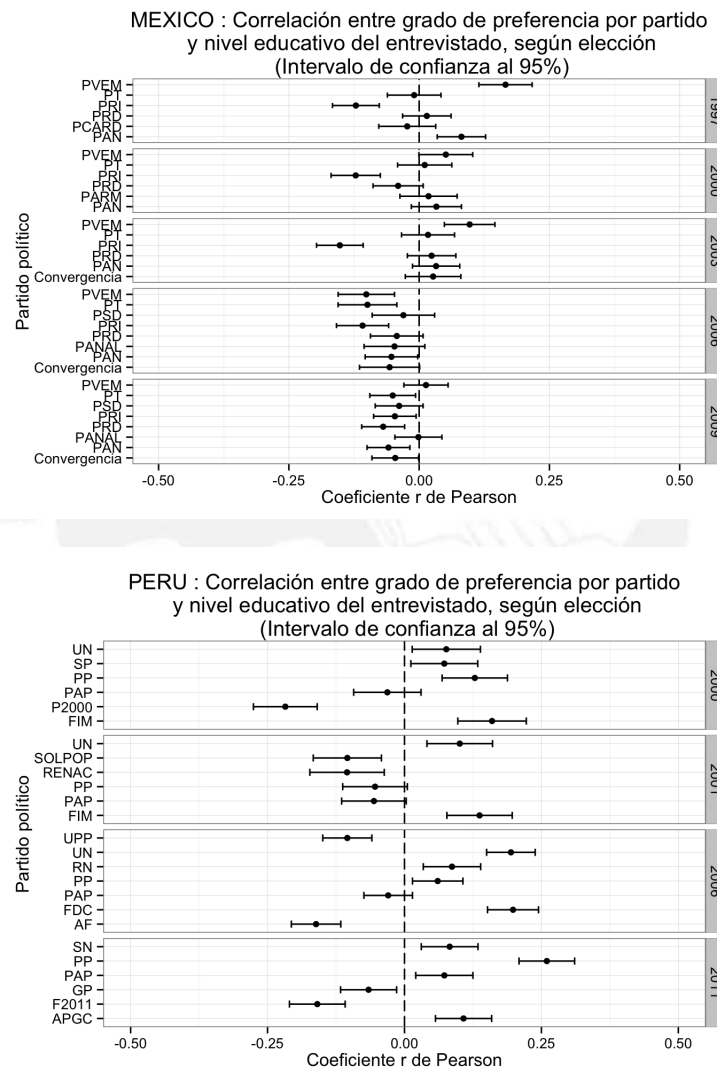
Por ejemplo, si nos concentramos en el caso peruano, observaremos que en las elecciones del 2011 existía una correlación negativa entre el nivel educativo del entrevistado y las preferencias por Gana Perú (GP), el partido de Ollanta Humala (figura 7.14). Lo mismo sucedía con las preferencias por Fuerza 2011 (F2011), encabezado por Keiko Fujimori. En estos dos casos conforme disminuía el nivel educativo del elector, el grado de preferencias por GP y F2011 (expresado en la escala de 0 a 10 mostrada en la sección anterior) tendía a ser mayor. Por otro lado, para la misma elección, entre el nivel educativo y el grado de preferencia por Perú Posible (PP) se observaba una correlación positiva, las preferencias por este partido tendían a

Figura 7.13: Brasil y Chile: Correlación entre Preferencias por Partidos y Nivel Educativo del Elector



Fuente: CSES. Elaboración propia

Figura 7.14: México y Perú: Correlación entre Preferencias por Partidos y Nivel Educativo del Elector



Fuente: CSES. Elaboración propia

Figura 7.15: Brasil y Chile: Correlación entre Preferencias por Partidos y Nivel de Ingresos del Elector

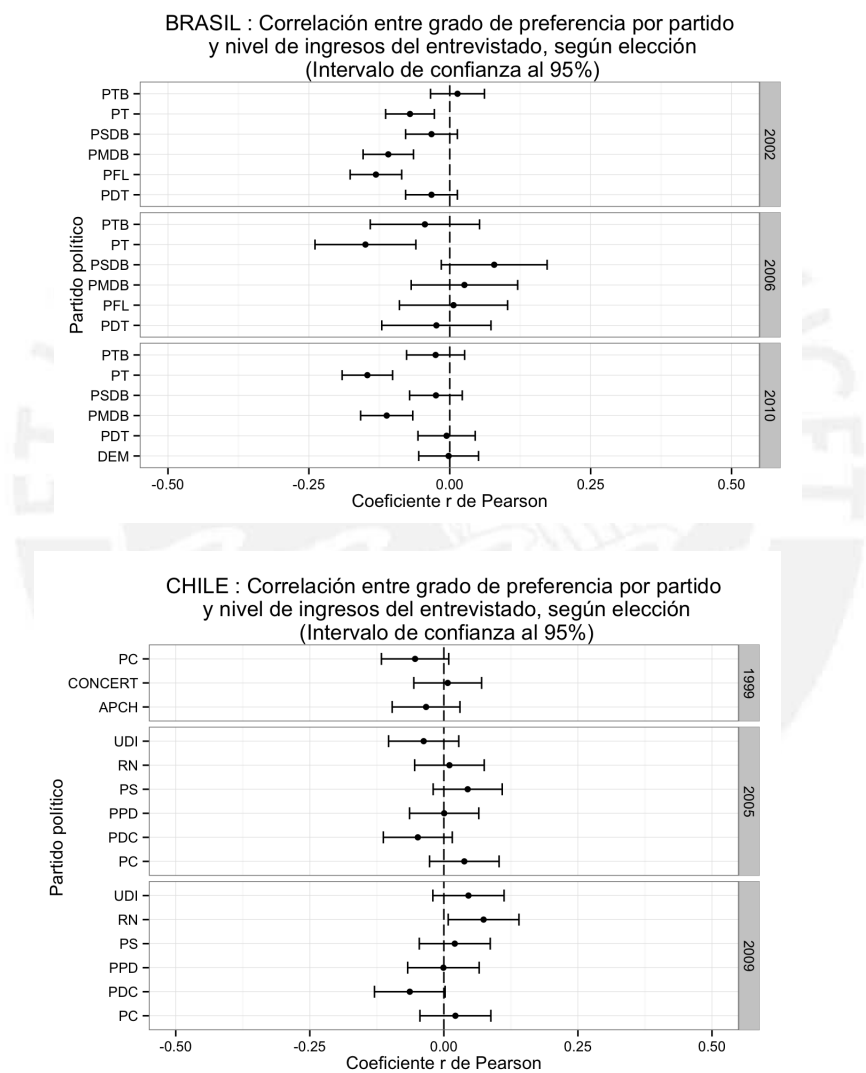
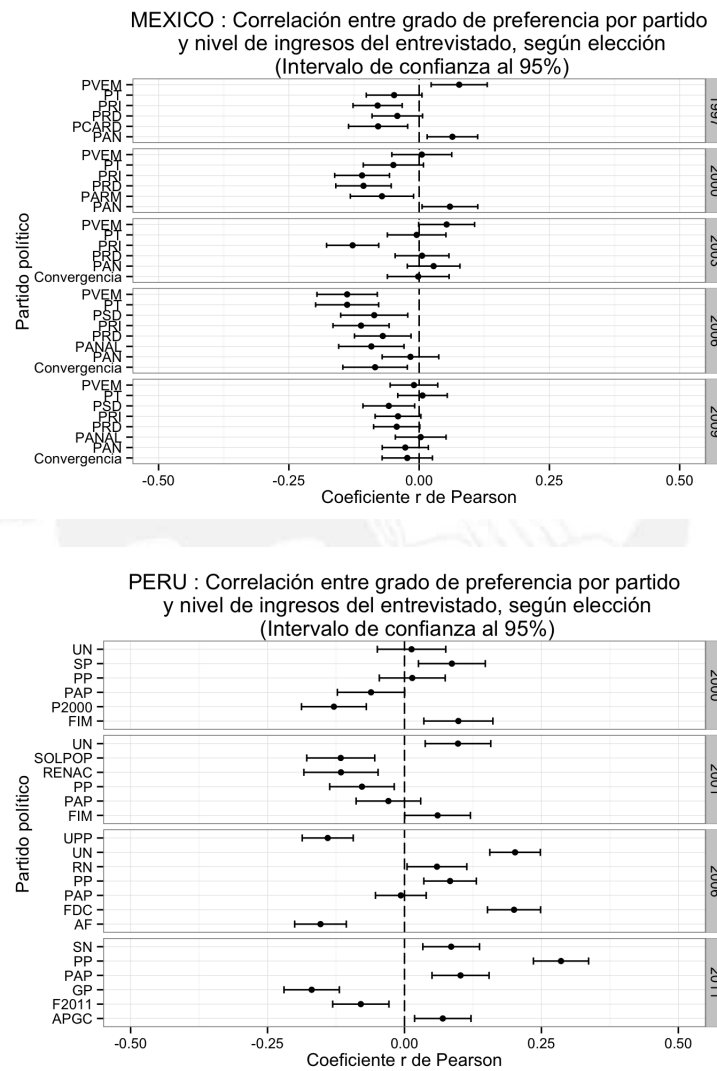


Figura 7.16: México y Perú: Correlación entre Preferencias por Partidos y Nivel de Ingresos del Elector



Fuente: CSES. Elaboración propia

aumentar conforme se incrementaba el nivel educativo del entrevistado. Entre estos partidos y el nivel de ingresos por el entrevistado se observa una relación similar (figura 7.16).

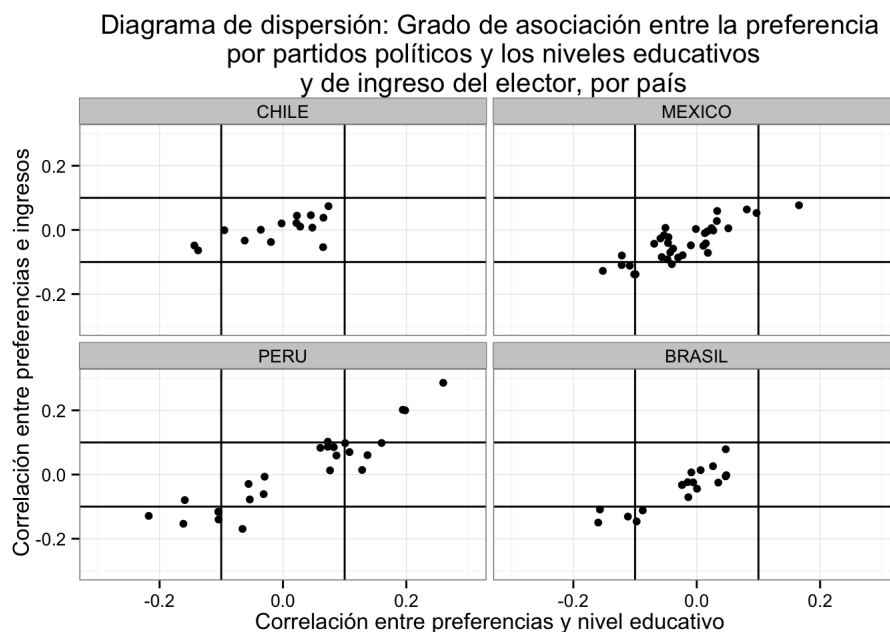
Sería demasiado tedioso describir todas las relaciones, puesto que en total, los ocho gráficos muestran 270 correlaciones bivariadas, de las cuales una gran parte no son estadísticamente significativas, es decir no muestran que exista una asociación entre el nivel socioeconómico de los electores (medido por el nivel educativo y de ingresos) y las preferencias por un partido político. Sin embargo sí es importante hacer notar que, en el caso de las correlaciones estadísticamente significativas,⁶ la gran mayoría son bastante débiles, inferiores a 0.2 (en valores absolutos), en una escala que tiene como límite superior 1. Todo ello nos indica que existen vínculos débiles entre los sistemas de partidos y las divisiones sociales en estos países.

Para tratar de profundizar y clarificar el análisis de este punto específico, usando la información de los coeficientes de correlación mostrados en las figuras anteriores, se ha elaborado el gráfico que se presenta en la figura 7.17, que en realidad contiene cuatro gráficos o diagramas de dispersión, uno por país. Cada punto representa un partido político en una elección. En el eje horizontal se representa el valor del coeficiente de correlación entre la preferencia por ese partido y el nivel educativo del elector. En el eje vertical el coeficiente correspondiente a la relación con el nivel de ingresos. Dentro del diagrama de cada país se han marcado dos líneas horizontales ($Y=-0.1$; $Y=0.1$) y dos líneas verticales ($X=-0.1$; $X=0.1$) para dividir zonas donde los coeficientes que están en los ejes X e Y muestran correlaciones extremadamente débiles y/o no significativas (de -0.1 a +0.1), y zonas donde las asociaciones son algo menos débiles (por debajo de -0.1 ó por encima de +0.1).

Si un país tiene un sistema de partidos polarizado en términos socioeconómicos, los partidos que tienen más vínculos con grupos socioeconómicos menos favorecidos deberían ubicarse en el cuadrante inferior izquierdo; en cambio los partidos que representan mejor a sectores sociales más privilegiados estarían en el cuadrante superior derecho. Un sistema de partidos altamente polarizado en términos sociales, tendría más partidos en estos dos cuadrantes extremos, o por fuera del cuadrante central. En cambio, sistemas de partidos poco polarizados en términos

⁶Considerando un nivel de significancia del 5%, que se expresa en intervalos de confianza que no incluyen el punto cero.

Figura 7.17: Partidos políticos y divisiones sociales



socioeconómicos tendrían más partidos en el cuadrante central. Partidos tipo “atrápalo todo” (catch all parties) son los partidos que se ubican en el cuadrante del medio.

Como se aprecia, de los cuatro casos, el que tiene el sistema de partidos menos polarizado en términos socioeconómicos es Chile. En este país, los partidos políticos no están fuertemente vinculados a divisiones de tipo socioeconómico o de clase social. Brasil y México también muestran una baja polarización social de su sistema de partidos. En términos comparados, es en el Perú donde los partidos muestran una mayor grado de polarización social, aunque en general, en todos los casos es débil, como lo indican los valores bajos de los coeficientes de correlación.

En la figura 7.18 se muestra, en forma de esquema, los nombres de los partidos y las fechas de la correspondiente elección que caen fuera de los cuadrantes centrales de la figura 7.17. De esta forma se puede identificar con mayor precisión cuáles son los partidos políticos cuyas preferencias guardan una relación comparativamente más fuerte con las divisiones socioeconómicas de sus países, en cada elección específica.⁷ En el caso de Brasil, destaca el PT y su relación con grupos sociales menos favorecidos. Algo parecido puede decirse del PRI en México. En el

⁷Se han excluido algunos partidos que fueron electoralmente muy poco importantes

caso de Chile, el Partido de la Democracia Cristiana (parte de la Concertación) tiene mayores niveles de preferencia conforme disminuye el nivel educativo del electorado.

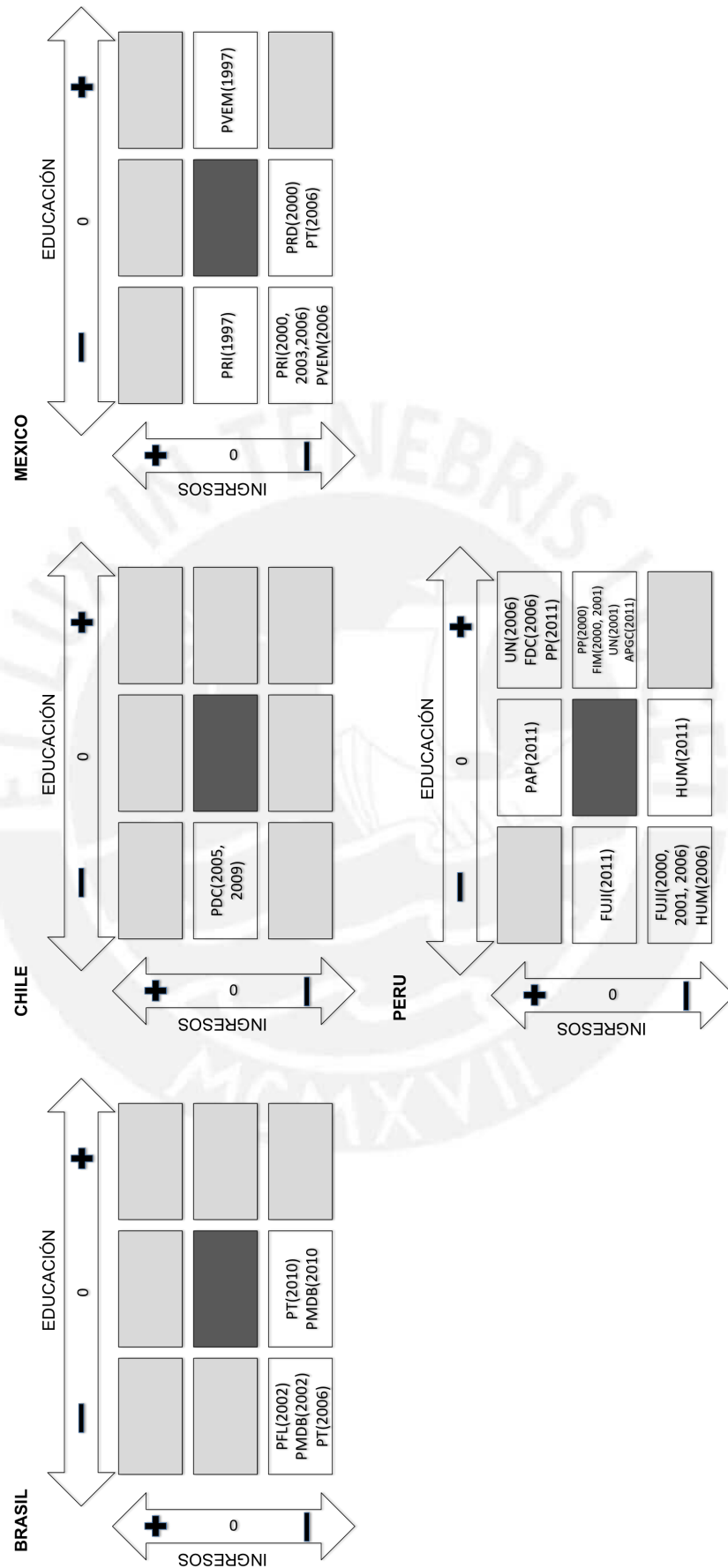
En Perú podemos ver que el Fujimorismo (en sus diferentes etiquetas partidarias) tiende a tener mayores preferencias conforme disminuye el nivel socioeconómico del elector; lo mismo puede decirse de las agrupaciones con las que postuló Ollanta Humala. Esto resulta interesante ya que, como veremos en los siguientes capítulos, estas dos agrupaciones se ubican en polos opuestos si analizamos sus orientaciones ideológicas. También es necesario mencionar que, a pesar que en términos socioeconómicos las preferencias por el Fujimorismo y el Nacionalismo (hasta el 2011) pueden ser similares, hay otras variables sociales, en particular de tipo cultural (diferencias étnico-raciales) y regional que marcan fuertes distinciones entre los grupos que tienen preferencias por estas agrupaciones. En el caso del Fujimorismo, en las elecciones del 2011 tuvo mejores resultados en zonas de la costa norte, costa central y sierra norte del país. En las mismas elecciones, Ollanta Humala tuvo mejores resultados en la costa sur, la sierra central, sierra sur y selva, algunas de ellas con importantes contingentes de población indígena, especialmente la sierra sur (Zacharías, Sulmont y Garibotti, 2015).

7.4. Divisiones Sociales y Voto

En la sección precedente se analizó la relación entre las divisiones sociales y el grado de preferencia por determinados partidos políticos, llegando a la conclusión de que, en general, en los casos estudiados hay una débil asociación entre sectores del electorado diferenciados socioeconómicamente y las preferencias por las agrupaciones que forman parte de los sistemas de partidos de esos países.

Un siguiente paso en el análisis será evaluar hasta qué punto ello se traduce en el comportamiento electoral, es decir en el voto del elector por determinadas opciones políticas en elecciones concretas. En los casos de Brasil, Chile y Perú nos centraremos en el voto reportado para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En el caso de México, en el voto por presidente en las elecciones del 2000 y 2006 y el voto por el partido en circunscripciones uninominales para la cámara de diputados en las elecciones de 1997, 2003 y 2009.

Figura 7.18: Partidos políticos y divisiones sociales - Detalle



En primer lugar, analizaremos si grupos socialmente ubicados en los extremos de la escala socioeconómica votan de manera diferente por las distintas opciones que tienen en cada elección. Para ello se comparará el voto de las personas que tienen niveles educativos menores a la secundaria con el correspondiente a las personas con niveles educativos universitarios. Seguidamente se hará lo mismo comparando al grupo de ingresos familiares inferior con el grupo de ingresos superior.

La herramienta analítica que emplearemos será el “índice de originalidad” (IO) del voto por los principales partidos políticos en cada elección. Este índice mide hasta qué punto, el porcentaje de votantes por un partido político que pertenecen a una determinada categoría social difiere del porcentaje que esta categoría social representa en el conjunto del electorado. Para ello se usa la siguiente fórmula:

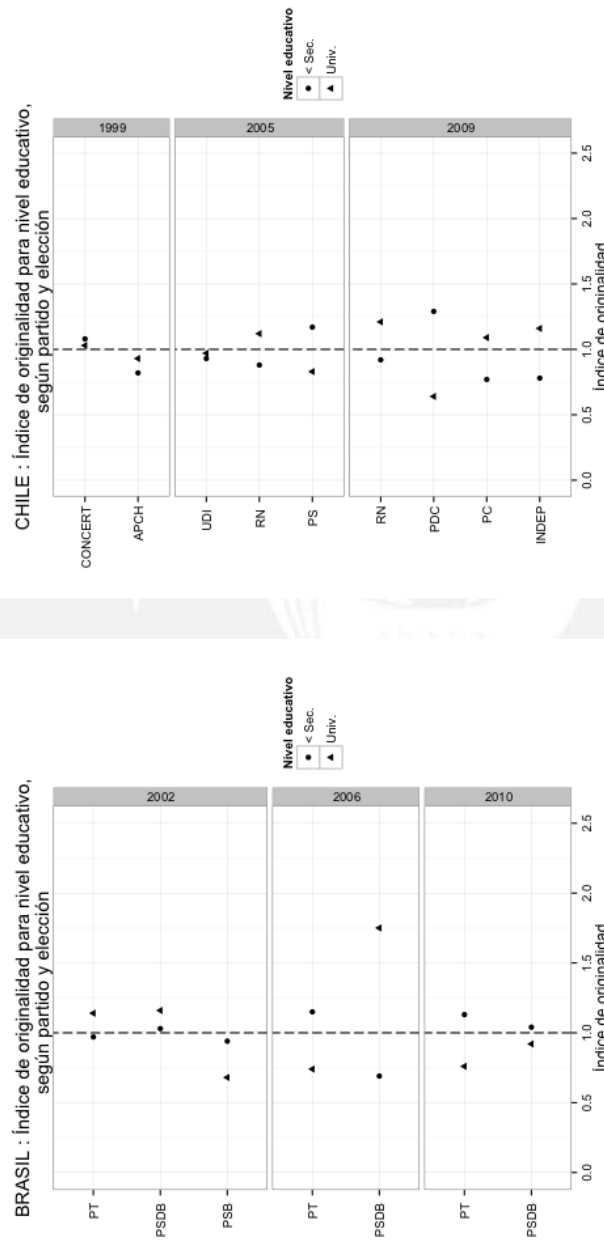
$$IO = \frac{C_P/P}{C_T/T} \quad (7.3)$$

Donde:

- C_P : Personas que pertenecen a categoría social C que votan por el partido P
- P : Votantes por el partido P
- C_T : Personas que pertenecen a categoría social C en el conjunto del electorado
- T : Total de electores

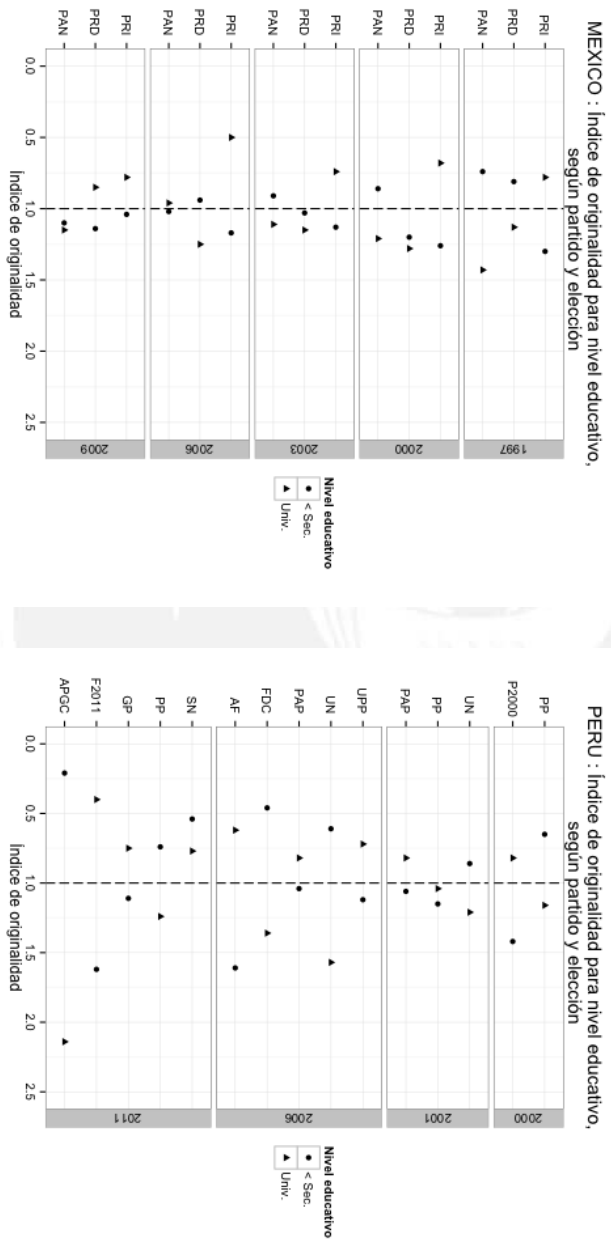
Si el IO es igual a 1, significa que la proporción de votantes de la categoría C entre los electores del partido P es igual a la proporción que tiene esta categoría en el conjunto de los electores. Un índice mayor a 1 significa que la categoría C tiene mayor presencia entre los votantes del partido P que en el conjunto de la población y viceversa. El índice se ha calculado con los datos de las encuestas del CSES para cada elección y principales partidos políticos. Para este análisis, el índice de originalidad nos permite identificar los sesgos que puede tener la composición social del electorado de una agrupación política, comparando con el conjunto del electorado.

Figura 7.19: Brasil y Chile: Índice de originalidad para nivel educativo



Fuente: CSES. Elaboración propia

Figura 7.20: México y Perú: Índice de originalidad para nivel educativo



Fuente: CSES. Elaboración propia

Si nos fijamos en el gráfico de Brasil en la figura 7.19, observamos que en el caso de las elecciones del 2006, el índice de originalidad para las personas con nivel educativo superior que votaron por el PSDB el 2006 es de 1.73. En Brasil, la encuesta del CSES 2006 registró un 10% de personas con educación universitaria. Entre los votantes por el PSDB, el porcentaje de votantes con educación universitaria fue de 17.3%. En este caso, el índice de originalidad nos informa que la proporción de electores del PSDB con educación universitaria es 1.75 veces la proporción de personas con educación superior en el conjunto del electorado. En los gráficos de Brasil y Chile se observa que las variaciones del índice de originalidad respecto de 1 en casi todos los casos no son muy extremas, salvo el caso del índice correspondiente para electores con educación universitaria del PSDB el 2006.

En el caso de México (figura 7.20), tampoco se observan valores muy alejados de 1 en el índice de originalidad para nivel educativo. Sin embargo, se aprecia que para los votantes por el PRI, existe un patrón que se repite en cada elección: entre los votantes por este partido, la proporción de electores niveles inferiores a la secundaria es mayor a la proporción que esta categoría representa en el conjunto del electorado, mientras que lo contrario ocurre en el caso del índice de originalidad para votantes con educación universitaria. Por su lado, el índice de originalidad para nivel educativo de votantes por el PAN muestra una tendencia contraria a la que se observa en el caso del PRI.

El índice de originalidad para niveles educativos en el Perú (figura 7.20 es el que muestra mayores valores y diferencias respecto de los otros casos analizados, sobre todo para las elecciones del 2006 y 2011. Por ejemplo, en las elecciones del 2011, el índice de originalidad para electores con educación superior de APGC (cuyo candidato presidencial era Pedro Pablo Kuczynski) era mayor a 2, es decir la proporción de votantes de APGC con este nivel educativo era el doble de la proporción de votantes con educación universitaria en el conjunto del electorado. Para la misma agrupación, el índice de originalidad de votantes con educación inferior a la secundaria era de 0.25, que significa que la proporción de votantes por APGC de esta categoría equivale a un cuarto de la proporción de personas con educación inferior a la

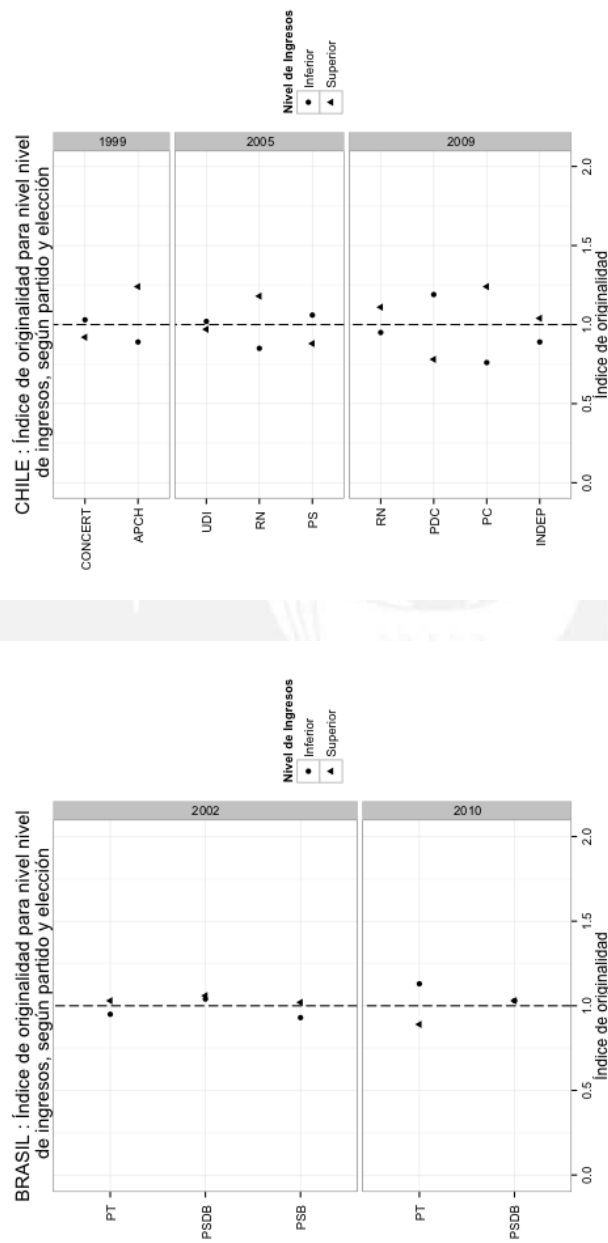
secundaria en el conjunto del electorado. Estas diferencias dan cuenta del sesgo particular que tenía el electorado de APGC.

Siguiendo con el análisis del índice de originalidad para el nivel educativo de los electores en Perú podemos anotar lo siguiente. En las elecciones del 2000, 2006 y 2011, los votantes por las agrupaciones que representan al fujimorismo (P2000, AF y F2011) muestran un sesgo particular: tienen más votantes con niveles educativos menores a la secundaria que el conjunto del electorado; lo inverso ocurre en el caso de votantes con educación universitaria. El mismo patrón, aunque con una intensidad algo menor, se observa para las agrupaciones que tuvieron como cabeza de lista a Ollanta Humala el 2006 y 2011 (UPP y GP). Partidos políticos que postularon con una plataforma de derecha neoliberal (UN y APGC) en el 2006 y 2011 muestran un sesgo contrario al humalismo y el fujimorismo.

Si pasamos a observar el índice de originalidad correspondiente al nivel de ingresos de los votantes (figuras 7.21 y 7.22) podemos encontrar tendencias similares a las detectadas para el nivel educativo, sobre todo en el caso peruano. En general, los sesgos medidos con el índice de originalidad para niveles de ingresos son algo menores respecto de los de nivel educativo. En el caso brasileño (figura 7.21) cabe resaltar que no se muestran los resultados para el 2006 debido a que los valores perdidos para la variable de nivel ingreso llegan al 50 %, por lo que al segmentar la muestra por niveles de ingreso y voto reportado, la cantidad de información que se pierde no permite contar con resultados estadísticamente significativos.

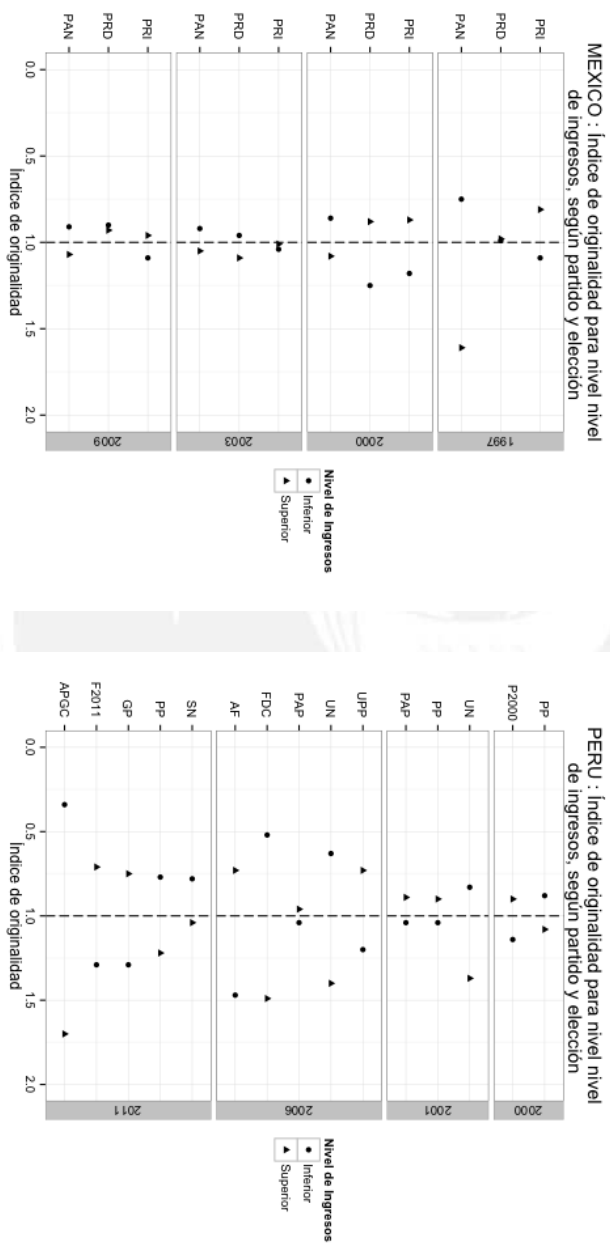
En análisis del índice de originalidad de grupos sociales en los extremos de la escala socioeconómica, nos permite identificar en qué sociedades y elecciones las tendencias del voto se alinean a potenciales clivajes socioeconómicos. Asimismo, podemos detectar qué partidos o preferencias electorales apelan más a unos extremos sociales que otros, y cuáles son más bien del tipo “atrápalo todo”, es decir que no presentan sesgos socioeconómicos marcados en la composición de su electorado. En general se aprecia que la competencia política electoral en el caso peruano está más marcada por procesos de polarización social del electorado que en los demás casos. Ello de alguna forma es consistente con los hallazgos mostrados en la sección precedente.

Figura 7.21: Brasil y Chile: Índice de originalidad para nivel de ingresos



Fuente: CSES. Elaboración propia

Figura 7.22: México y Perú: Índice de originalidad para nivel de ingresos



Fuente: CSES. Elaboración propia

Con el objeto de reforzar este análisis, se ha procedido a realizar correlaciones de tipo nominal, usando el coeficiente V de Cramer⁸ para evaluar la relación que existe entre el voto reportado en las elecciones que estamos estudiando y el nivel educativo de los votantes por un lado, y el nivel de ingresos por el otro. En la figura 7.23 se muestran los resultados de esta operación. Los coeficientes que no son estadísticamente significativos (considerando $\alpha = 0,05$) se marcan con un triángulo.

Como se aprecia en el gráfico, los coeficientes más altos para la relación del voto con los dos indicadores de nivel socioeconómico que estamos analizando se encuentran en los casos de las elecciones peruanas de 2006 y 2011, lo que refuerza las conclusiones esbozadas en párrafos anteriores respecto del caso de Perú. Llama también la atención los valores de los coeficientes correspondientes a la relación entre voto y nivel educativo en las elecciones de Brasil 2006 y 2010. A pesar de ello, en general, las asociaciones entre las variables socioeconómicas y el voto reportado son bastante débiles.

7.5. Comportamiento Electoral, Identidades Partidarias y Clivajes Sociales

A lo largo de este capítulo hemos visto que los cuatro países que estamos estudiando presentan bajos niveles de confianza en los partidos políticos; bajos niveles de militancia así como de identificación con los partidos políticos. Ello no es un fenómeno exclusivo de estos casos puesto que se presenta también de manera similar en otras democracias contemporáneas bastante consolidadas. Sin embargo, dentro de este panorama cabe resaltar los muy bajos niveles de confianza en los partidos políticos que se aprecian en el caso peruano, algo que lo diferencia de los demás casos estudiados. Es además el país que tiene el sistema de partidos menos institucionalizado, tal y como hemos visto en capítulos anteriores.

⁸El coeficiente V de Cramer se basa en el estadístico de χ^2 . Es apropiado para analizar la relación entre dos variables, donde por lo menos una de las cuales ha sido operacionalizada en una escala nominal (en este caso el voto). Mide la fuerza de asociación entre dos variables en una escala de 0 a 1. El nivel de significancia del coeficiente es el mismo que el de la prueba de χ^2 de la tabla de contingencia correspondiente.

Figura 7.23: Asociación entre voto reportado, nivel educativo y nivel de ingresos del elector



Fuente: CSES. Elaboración propia

A pesar de este panorama, en los cuatro países hay un sector importante del electorado que logra identificarse o manifestar simpatía con los partidos políticos. Ello varía ampliamente de elección en elección y de país en país en promedio resulta ser mayor en el caso Mexicano, mientras que en Chile es donde se aprecian menores niveles de identificación partidaria. Perú y Brasil muestran niveles de identificación partidaria que varían mucho de elección en elección, en el caso peruano, la identificación partidaria varió de 30 % en el 2000 a cerca del 60 % en el 2011 (ver figura 7.6).

La identificación partidaria resulta ser un predictor importante del comportamiento electoral. En general, en la mayoría de las elecciones identificarse con un partido político incrementa la probabilidad de votar por éste en más de 50 %. Si bien ello es común a todos los casos estudiados, la estabilidad y grado de institucionalización del sistema de partidos debe ponderar la importancia de este indicador. En casos como el peruano, donde la identificación partidaria aparentemente tiene un efecto importante en el voto, es necesario relativizar el significado de esta dimensión, ya que, a diferencia de sistemas donde la competencia política está más estructurada en un elenco relativamente más estable de partidos (como México, Chile y Brasil), la

identificación partidaria debería interpretarse más bien como simpatía o atracción respecto de líderes carismáticos, dado el bajo nivel de institucionalidad partidaria, alta volatilidad electoral y fuerte dependencia de liderazgos personalistas que tienen las instituciones partidarias.

En general, en los casos estudiados, los sistemas de partidos tienen una débil asociación con procesos de diferenciación social, especialmente de tipo socioeconómico. La polarización social no se manifiesta de manera fuerte en la identificación con las organizaciones políticas que conforman el sistema de partidos en estos países. La asociación entre grupos ubicados en los extremos de la escala socioeconómica y tanto la preferencia como el voto por los partidos políticos es débil, por lo que es difícil sostener que el sistema de partidos se configure en torno a una estructura de clivajes marcados por las desigualdades socioeconómicas. Estos hallazgos son consistentes con los resultados de los trabajos de Kenneth Roberts reseñados en el capítulo 1 (Roberts y Wibbels, 1999; Roberts, 2002*a,b*).

El caso donde se encuentra mayor asociación entre diferencias sociales y preferencias partidarias y voto es, paradójicamente, el caso peruano. Analizando resultados electorales a nivel provincial entre 1980 y el 2006, David Sulmont (2009*b*) ha encontrado también asociaciones significativas entre divisiones socioeconómicas y étnicas y el nivel de votación recibida por los partidos políticos peruanos. La paradoja consiste en que esta asociación no se plasma (aún) en un sistema de partidos más institucionalizado y estable, que permita “cristalizar” estructuras de clivaje. Es posible que un conjunto de componentes y tipos de incentivos institucionales dificulten esa configuración, como por ejemplo un sistema electoral que favorece comportamientos centrífugos, pragmáticos y oportunistas en las organizaciones políticas.

Por otro lado también hemos observado que, a diferencia de los otros casos, en el caso peruano el ejercicio del poder erosiona significativamente la identificación y preferencias por el partido de gobierno en el momento de la siguiente elección. Ello puede deberse por un lado al personalismo o caudillismo que caracteriza a las organizaciones políticas partidarias ya que una vez en el poder, el partido de gobierno no logra promover figuras alternativas al líder que ejerce la presidencia. Quien gobierna no desarrolla una estrategia política destinada a mejorar las probabilidades electorales de su organización en la próxima elección, ya sea

porque no quiere promover potenciales rivales a su propio liderazgo; o porque las acciones de gobierno están destinadas a favorecer intereses de poderes fácticos o grupos de poder que le pueden asegurar estabilidad y respaldo durante su mandato, pero que tienen réditos electorales limitados en el conjunto de la población.



Capítulo 8

El Voto Ideológico

Un requisito para que existan elecciones significativas en un régimen democrático es que éstas le permitan a los ciudadanos expresar sus preferencias en alternativas de gobierno claramente definidas y diferenciadas entre sí. En principio, en las democracias representativas los partidos políticos y el sistema de partidos cumplen, entre otras, la función de agregar las preferencias ciudadanas y estructurarlas en paquetes ideológicos o programáticos relativamente coherentes, que posteriormente son presentados como alternativas a los ciudadanos en los procesos electorales en los que participan (Diamond y Gunther, 2001*a*).

Para que los ciudadanos pueda usar las elecciones como medio de expresión de sus preferencias es necesario entonces que: a) los partidos ofrezcan un conjunto de alternativas claramente diferenciadas a los electores; b) los electores puedan efectivamente distinguir las alternativas programáticas que les ofrecen los partidos políticos; y c) los electores sean capaces de evaluar cuáles de ellas se aproximan más a sus propias preferencias e intereses (Best y McDonald, 2010, pp. 79).

Sin embargo, pretender que el ciudadano promedio realice una evaluación exhaustiva de las ofertas electorales es una expectativa poco realista. Diversas investigaciones han mostrado que, por lo general, los electores en las sociedades contemporáneas tienen poco interés en la política y manejan poca información sobre estos temas (Althaus, 2003; Delli Carpini y Keeter, 1996; Sulmont, 2009*a*). Normalmente, ante la disyuntiva de realizar una decisión política - como el hecho de votar - las personas suelen concentrarse en algunos pocos temas de interés y

utilizan una serie de atajos cognitivos u otros mecanismos de heurística política que le permiten simplificar su decisión electoral, minimizando en la medida de lo posible la búsqueda activa de información (Lau y Redlawsk, 2006). La personalidad de los candidatos y la memoria del desempeño de los partidos políticos en el gobierno constituyen algunos mecanismos de heurística política importantes.

En términos programáticos, la dimensión izquierda - derecha ha sido también una de las principales maneras en que los partidos políticos han sido diferenciados, tanto por analistas y actores políticos, como por los ciudadanos en general. En su libro clásico *La Teoría Económica de la Democracia*, Anthony Downs (1957) sostenía que las ideologías partidarias servían como un mecanismo para facilitarle a los electores identificar las diferencias fundamentales entre los partidos políticos respecto de un número amplio de temas, y que estas ideologías, y por tanto los partidos, podían ordenarse en un eje izquierda derecha. La comparación entre la distancia y cercanía de los electores y partidos en este eje izquierda derecha puede servir como un indicador para predecir el comportamiento del votante: las personas tenderán a votar por los partidos que son percibidos como cercanos a sí mismos en este eje. Este es el supuesto básico de los modelos espaciales de análisis del comportamiento electoral (Adams, Merrill y Grofman, 2005; Merrill y Grofman, 1999).

El contenido específico de las dimensiones izquierda – derecha varía mucho de país en país. Generalmente las diferencias entre izquierda y derecha han estado vinculadas a posiciones antagónicas de clase y de preferencias respecto del sistema económico. La izquierda se ha identificado con una mayor participación del gobierno en el manejo de la economía y un fuerte énfasis en políticas sociales a favor de los sectores populares. Por su parte, las posiciones de derecha se han vinculado con actitudes más favorables al libre mercado, la iniciativa privada y un Estado más pequeño (Dalton, 2010, pp. 105-106). En algunos países las posiciones de izquierda se asocian con valores liberales respecto de temas como la religión, la familia, el género y la sexualidad, mientras que las de derecha con valores conservadores. En países de América Latina que han experimentado gobiernos autoritarios o dictaduras militares de derecha, la izquierda ha sido también asociada con la defensa de los derechos humanos y la democracia;

mientras que las posiciones de derecha se han vinculado con actitudes autoritarias y de “mano dura” respecto de la protesta o movilización social.

La variedad de interpretaciones de lo que puede ser izquierda o derecha hace difícil que sean consideradas como posiciones fijas y con significados precisos. Más bien éstos varían en función de los contextos históricos y coyunturas específicas, producto de los cambios sociales y políticos que experimentan las sociedades contemporáneas (Martin, 2000, 18-20). Por lo general, el ciudadano promedio no tiene una definición altamente ideologizada de estas posiciones. Se trataría más bien de una dimensión que permitiría ordenar, diferenciar y estimar el grado de polarización que manifiestan los partidos o actores que compiten por el poder respecto de los principales problemas, conflictos o disyuntivas políticas que enfrenta un país en un momento dado. En tal sentido, se trataría una herramienta heurística, o un “atajo cognitivo” que pueden utilizar las personas para hacerse un mapa en una dimensión única, de las posiciones políticas que compiten en un determinado momento por las preferencias ciudadanas.

En este capítulo analizaremos lo que llamamos el “voto ideológico”, evaluando cuál es el efecto o peso que tiene la dimensión izquierda - derecha en la decisión del elector. En primer lugar se mostrará hasta qué punto los partidos que participan en las elecciones que estamos estudiando se diferencian entre sí en esta dimensión y el grado de polarización ideológica que tienen los sistemas de partidos. Seguidamente, se analizará cómo los electores se ubican en la escala izquierda - derecha y cuáles son los factores que están asociados a un uso más o menos competente de dicho atajo cognitivo. Finalmente, se abordará el efecto que puede tener la dimensión izquierda - derecha en la preferencia por determinados partidos políticos y en el voto mismo en elecciones concretas.

Nuestras principales variables de análisis serán los siguientes indicadores que provienen de las encuestas del proyecto CSES:

- *Posición izquierda – derecha del elector (IZDE)*: Es la ubicación reportada por los entrevistados del proyecto CSES en la escala izquierda - derecha que tiene valores del 0 al 10, donde 0 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha.

- *Posición izquierda - derecha de los partidos políticos según el elector (IZDEP)*: Es la ubicación que los entrevistados le asignan a los principales partidos políticos de sus respectivos países en la escala izquierda - derecha.
- *Posición izquierda - derecha de los partidos políticos según expertos (IZDEPX)*: En cada elección, el proyecto CSES solicitó a los investigadores responsables de la aplicación de las encuestas en sus respectivos países que clasifiquen a los partidos políticos en la escala izquierda - izquierda derecha.
- *Grado de preferencia por los partidos políticos (PREFP)*: Esta es la misma variable que ha sido analizada en el capítulo y sección 7.3 (ver página 204). Como se recuerda a los entrevistados se les pidió que califiquen qué tanto les gustan los principales partidos políticos que participan en una elección en una escala de 0 a 10. Para este análisis se ha multiplicado los valores de esta variable por 10 para tener una escala del 0 al 100.
- *Voto emitido (VOTO)*: Es el voto que el elector ha reportado haber emitido en las elecciones, ya sea en las primeras vueltas de las elecciones presidenciales y en las elecciones parlamentarias de las cuales se tenga información.

Adicionalmente el análisis tomará en cuenta las siguientes variables:

- *Identificación partidaria (IDP)*: Que registra si el entrevistado se identifica, se siente cercano o simpatiza con alguno de los partidos políticos que participaron en las elecciones (ver página 197 en la sección 7.2).
- *Conocimiento político (ICP)*: En las encuestas del CSES se hicieron 3 preguntas sobre datos fácticos de conocimiento político pertinentes para cada país. Utilizando las respuestas se construyó un indicador de conocimiento político que tiene valores del 0 al 3 y que registra el número de preguntas contestadas de manera correcta por el entrevistado. Estos indicadores no fueron incluidos en las encuestas de Perú 2000 y 2001, ni tampoco en las de Chile 1999 y 2009.

8.1. Partidos Políticos y Polarización Ideológica

El primer paso para responder a la pregunta del peso que tiene la dimensión izquierda derecha en la decisión electoral de los ciudadanos latinoamericanos es identificar si efectivamente los sistemas de partidos de sus países ofrecen una diversidad de opciones en este eje.

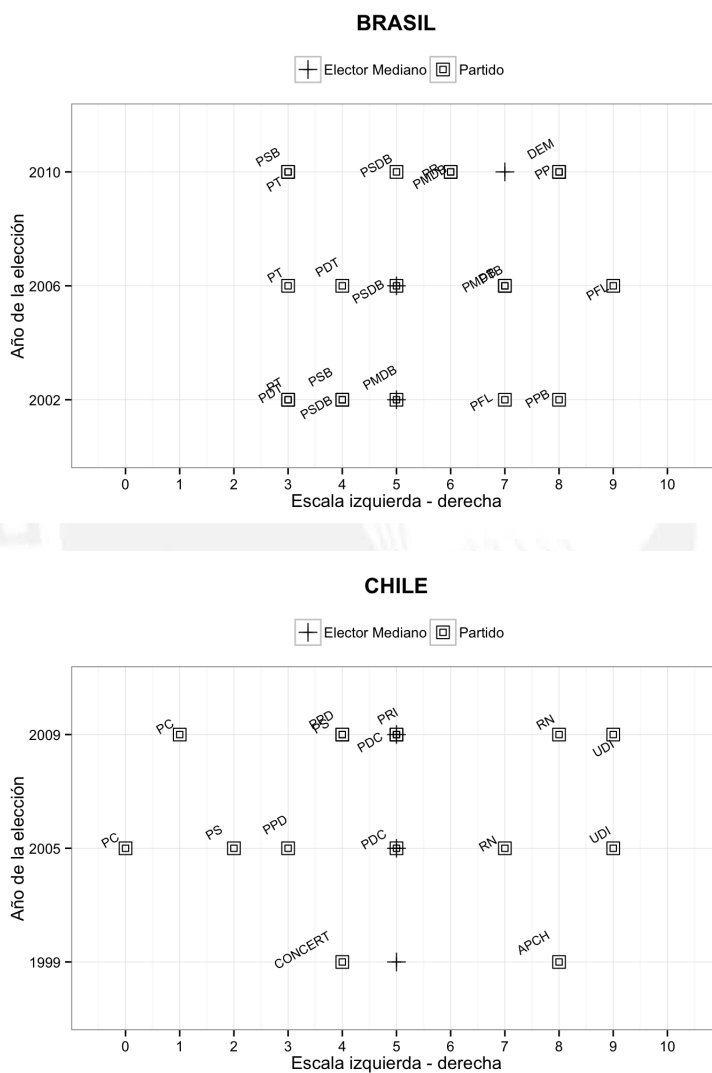
En los los gráficos de las figuras 8.1 y 8.2 se muestra la posición asignada por los expertos involucrados en el proyecto CSES en la variable IZDEPX a cada uno de los principales partidos políticos que han participado en las 15 elecciones presidenciales y parlamentarias de los cuatro países que se están analizando, estas posiciones están marcadas por el símbolo □. Adicionalmente se incluye en el gráfico la posición mediana de la auto ubicación de los electores entrevistados en cada encuesta en esta escala (IZDE), la cual está marcada por el símbolo [+].

En el proyecto del CSES se limitó la consulta a un máximo de 7 partidos por país/elección, sin embargo en algunos países participan mucho más que 7 agrupaciones en las elecciones. Por ejemplo es conocido que sistema de partidos en Brasil es altamente fragmentado, especialmente en lo que se refiere a elecciones parlamentarias: en las elecciones brasileñas del 2010 se presentaron 27 listas de partidos para la cámara baja, de los cuales 22 obtuvieron por lo menos a un representante. En las elecciones peruanas del 2006 se presentaron 20 listas de candidatos para presidente y 24 listas de candidatos al parlamento. La encuesta CSES trata de recabar información sobre los principales partidos, especialmente aquellos que logran superar las vallas electorales existentes en cada país para elegir algún parlamentario.

Como se aprecia en los gráficos, de acuerdo con los expertos consultados, en todos los casos los sistemas de partidos ofrecen una variedad de alternativas políticas en los diferentes puntos de la escala izquierda derecha. Sin embargo hay algunas diferencias importantes que tienen consecuencias en el grado de polarización ideológica del sistema de partidos.

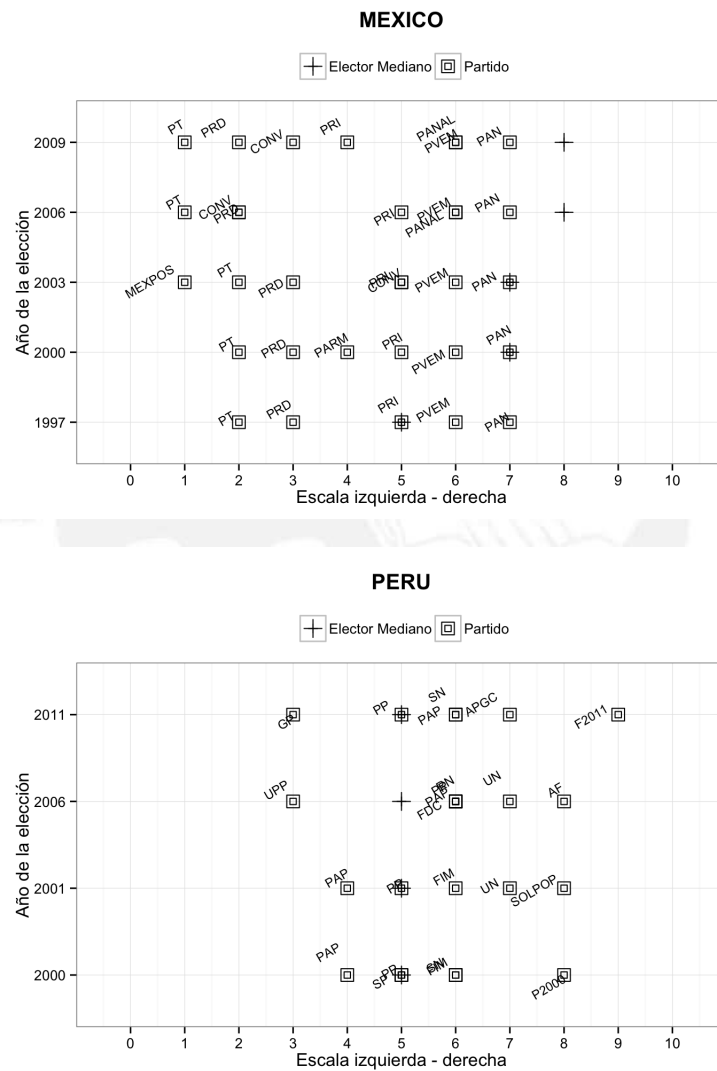
En Brasil, los principales partidos que se han disputado las elecciones presidenciales (el PT y el PSDB) ocupan principalmente el espacio de centro – izquierda (del 5 al 3). En cambio en Chile, los principales partidos están claramente diferenciados entre en centro izquierda (aquellos que forman parte de la Concertación con posiciones del 5 al 2) y la derecha (RN y la UDI con posiciones que van del 7 al 9).

Figura 8.1: Brasil y Chile: Posición Izquierda - Derecha de los Partidos Políticos según Expertos



Fuente: CSES. Elaboración propia

Figura 8.2: México y Perú: Posición Izquierda - Derecha de los Partidos Políticos según Expertos



Fuente: CSES. Elaboración propia

En México, los tres principales partidos del sistema (PAN, PRI y PRD) ocupan cada uno distintos nichos del espectro ideológico: el PAN claramente hacia la derecha; el PRI en el centro y el PRD hacia la izquierda.

En el caso peruano, la mayoría de los partidos aparecen más inclinados hacia el centro-derecha, con las agrupaciones fujimoristas posicionadas más firmemente en la derecha. A partir de las elecciones del 2006 aparece la figura de Ollanta Humala (líder de UPP y luego de la alianza GP) que pasa a posicionarse con mayor claridad en el lado izquierdo del espectro político donde no aparecen otros partidos importantes.

Por el lado de los electores, la posición mediana es por lo general el centro, con la notable excepción de México donde a partir del 2000, el elector mediano se inclina claramente hacia la derecha, hecho que ha sido también reportado en otros estudios que utilizan una escala similar (Moreno, 2009, pp. 157.201)

Con la finalidad de contar con un indicador que resuma el grado de diferenciación en la escala izquierda derecha de los sistemas de partidos en cada una de las 15 elecciones analizadas, se ha calculado un Índice de Polarización utilizando la siguiente fórmula (tomada de: Dalton y Anderson, 2010, pp. 260):

$$Polariz = \sqrt{\sum V p_i \left(\frac{IZDEPX_{p_i} - \overline{IZDEPX}}{5} \right)^2} \quad (8.1)$$

Donde:

- V es la proporción de votos obtenida por el partido p_i en la primera vuelta de la elección presidencial (o en la elección parlamentaria en el caso de México 1997, 2003 y 2009).¹
- $IZDEPX$ es la posición en la escala izquierda – derecha del partido p_i asignada por el experto.
- \overline{IZDEPX} es el promedio de las posiciones en la escala izquierda de los partidos, ponderado por sus respectivas proporciones de votos.

¹Para la proporción de votos se ha tomado en cuenta los resultados oficiales reportados por los respectivos organismos electorales: Tribunal Superior Eleitoral de Brasil; Servicio Electoral de Chile; Instituto Nacional Electoral de México; Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú

El índice de polarización tiene valores que van del 0 al 1. El valor 1 indica una polarización extrema del sistema de partidos, este sería el caso de un sistema bipartidista con un partido de extrema izquierda (0) y otro de extrema derecha (10) y donde cada partido obtiene la mitad de los votos. Un sistema de tres partidos que tienen cada uno un tercio del electorado, y que están ubicados en forma equidistante en la escala izquierda - derecha pero sin llegar a los extremos (por ejemplo posiciones 3, 5 y 7, como el PRD, el PRI el PAN en México 1997) tendría un índice de polarización de alrededor de 0.32.

En los casos de elecciones que han sido tanto presidenciales como parlamentarias, el índice de polarización se ha calculado sobre la base de los resultados en las elecciones presidenciales de los partidos evaluados en la encuesta CSES. En los casos de las elecciones parlamentarias intermedias de México 1997, 2003 y 2009, se ha calculado considerando los resultados de las listas parlamentarias.²

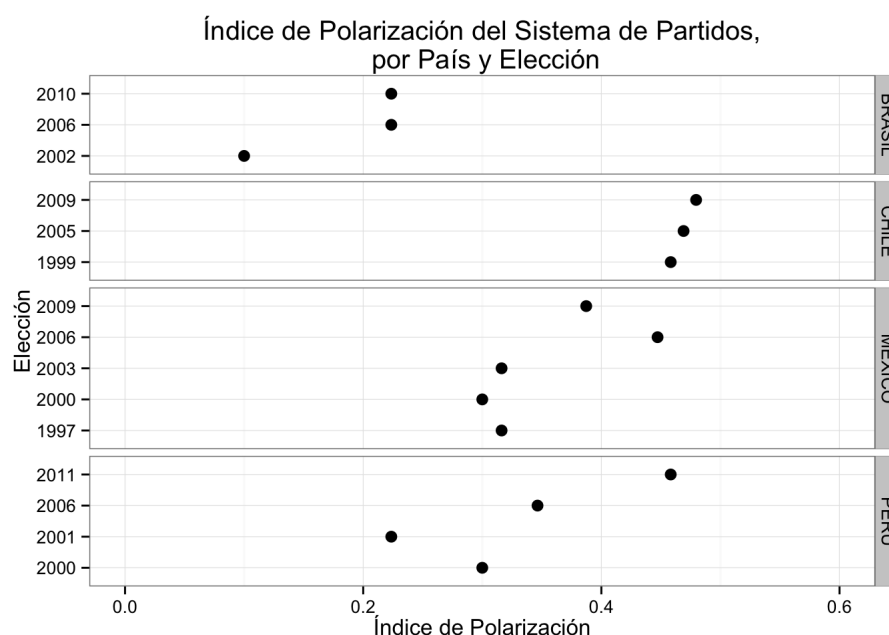
En otros trabajos que utilizan este índice (Dalton, 2010; Lachat, 2008), los cálculos se hacen sobre la base de resultados en elecciones parlamentarias, puesto que usualmente comparan regímenes tanto parlamentarios como presidenciales. En este trabajo se ha optado por privilegiar las elecciones presidenciales (salvo en los casos señalados de México), debido a que todos los países son presidencialistas y la competencia por la presidencia es la que estructura lo principal del debate y la lucha electoral.

En la figura 8.3 se presentan los resultados del índice de polarización calculado para las 15 elecciones que se están analizando. Como puede verse, de los cuatro países considerados, Chile es el que tiene un sistema de partidos que muestra un mayor grado de polarización en el eje izquierda derecha. En el otro extremo se ubica Brasil, donde las diferencias ideológicas entre los candidatos presidenciales no aparecen tan marcadas como en los otros casos.

El caso peruano mostraría cómo el nivel de polarización del sistema de partidos se ha ido incrementando en las elecciones posteriores al proceso de transición democrática iniciado con la

²No todos los partidos que participaron en las elecciones han sido evaluados en la escala izquierda derecha de la encuesta CSES. La proporción recogida en el término V de la fórmula del índice de polarización ha sido ajustada para que los votos obtenidos por los partidos evaluados en el CSES sume el 100 %. Con la excepción de Brasil 2010, en el resto de casos el porcentaje de votos obtenidos por los partidos considerados en las encuestas CSES suman más del 91.5 % de los votos válidos de las elecciones presidenciales o parlamentarias; en 11 de las 15 elecciones suman más del 96 %; sólo en las elecciones de Brasil 2010 estos sumaron 80.50 %.

Figura 8.3: Índice de Polarización del Sistema de Partidos



Fuentes: CSES y Organismos Electorales. Elaboración propia

caída del régimen Fujimorista en septiembre del 2000. Las elecciones del 2000 que enfrentaron duramente al fujimorismo con la oposición mostraron un nivel de polarización mayor que las primeras elecciones de la transición democrática del 2000. Posteriormente, en las elecciones del 2006 y 2011 la polarización se ha incrementado, fundamentalmente debido a la presencia de actores como Ollanta Humala que ocuparon el espectro izquierda del escenario político.

México, muestra niveles de polarización similares entre 1997 y 2003, los cuales se incrementan en las elecciones presidenciales del 2006 para luego disminuir en las siguientes elecciones parlamentarias. Estos resultados indican que en la mayoría de elecciones, el sistema de partidos ha presentado diversas alternativas claramente diferenciadas entre sí. Los casos donde estas diferencias han sido menos notorias son los de Brasil y de Perú 2001.

8.2. Los Electores y la Dimensión Izquierda Derecha

En el cuadro 8.1 se presentan la distribución y los principales estadísticos descriptivos de la variable de auto posicionamiento de los electores en la escala izquierda - derecha (IZDE). La posición mediana del elector en la mayoría de los casos es el centro y la mayoría relativa

de los entrevistados en los países se ubica en valores que van del 4 al 6. Las excepciones son México y Brasil 2010, que están más inclinados hacia la derecha, especialmente México. Las desviaciones estándar indican que hay mayor variedad de posiciones distintas en esta escala en los casos de México y Brasil, que en los de Chile y Perú.

Salvo una excepción (Chile 2005), en todos los casos el porcentaje de electores que se ubica a la derecha (7-10) supera a los que se ubican a la izquierda. En la mayoría de los casos, aquellos electores identificados entre posiciones 0 a 3 no supera el 20%. Este dato relativiza las afirmaciones que algunos analistas hicieron hace algunos años acerca “giro a la izquierda” en la región (Cleary, 2006; McClintock, 2006), con ocasión de victorias o altos niveles de votación para diversas agrupaciones de izquierda en la ronda de elecciones latinoamericanas de mediados de la primera década del siglo XXI, en particular en Bolivia, Brasil, México, Chile y Perú y Venezuela. Este “giro a la izquierda” en la tendencia política de algunos gobiernos no habría estado necesariamente vinculado con la expresión de clivajes sociopolíticos profundos o con un mayor activismo o adhesión popular a un conjunto de ideas o programas políticos de “izquierda”.

Por otro lado, en varios países (especialmente Chile, Brasil y Perú más recientemente con Humala), el acceso al gobierno de líderes identificados electoralmente como de izquierda no ha implicado un cambio radical en el manejo político y económico del gobierno, sino más bien una importante moderación de los planteamientos ideológicos y programáticos de estos liderazgos a la hora de gobernar.

8.2.1. La Competencia en el Uso de la Escala Izquierda Derecha

¿Qué tan competentes son los ciudadanos en el uso de la dimensión izquierda - derecha? Un primer indicador es el porcentaje de “no precisa” en el cuadro 8.1, que muestra una importante variación entre países e incluso dentro de los mismos países entre elecciones, especialmente en Brasil y Perú. En la mayoría de los casos más de un quinto de los entrevistados no logra ubicarse en esta escala. Para complementar este análisis, hemos calculado tres indicadores adicionales:

Cuadro 8.1: Electores y su Distribución en la Escala Izquierda - Derecha

Distribución de los entrevistados en la escala Izquierda – Derecha (agrupada) y estadísticos descriptivos, por país y elección

País	Elección	% de Entrevistados (horizontales)				Mediana	Media	Desv. Estándar
		Izquierda (0 a 3)	Centro (4 a 6)	Derecha (7 a 10)	No Precisa			
Brasil	2002	24.0	22.6	28.7	24.7	5	5.3	3.5
	2006	8.6	25.4	24.1	41.9	5	6.1	2.8
	2010	10.6	16.2	28.5	44.8	7	6.4	3.2
Chile	1999	19.6	44.7	26.5	9.2	5	5.5	2.6
	2005	25.2	39.8	19.2	15.8	5	4.8	2.6
	2009	18.6	33.3	24.6	23.5	5	5.4	2.7
México	1997	16.1	26.5	32.4	24.9	5	6.0	3.4
	2000	12.0	23.7	35.9	28.4	7	6.4	3.2
	2003	11.0	24.4	36.4	28.3	7	6.4	3.2
	2006	11.2	17.4	49.8	21.7	8	7.0	3.1
	2009	6.9	20.7	58.0	14.3	8	7.2	2.4
Perú	2000	11.3	38.6	30.5	19.6	5	6.0	2.8
	2001	15.8	46.0	29.3	8.9	5	5.5	2.8
	2006	20.0	40.6	22.1	17.4	5	5.1	2.8
	2011	10.8	35.4	26.7	27.2	5	5.8	2.6

Fuente: CSES. Elaboración propia

- Competencia en el uso de la escala izquierda: Este indicador trata de medir no solo si el entrevistado puede ubicarse en esta escala, sino también si es capaz de utilizarla para clasificar la oferta política que se le presenta en cada elección. Para ello se suman el porcentaje de personas que no pueden ubicarse en la escala I-D (que se muestra en el cuadro 8.1) y el porcentaje de personas que no puede ubicar a por lo menos dos partidos políticos en dicha escala.
- Diferencia absoluta entre el juicio del elector y de los expertos: Calcula la diferencia promedio en términos absolutos de la posición de cada partido en la escala I-D según en elector menos la posición atribuida por los expertos en la misma escala. La magnitud de este indicador muestra hasta qué punto el público general evalúa a los partidos políticos de manera diferente a los expertos en cada país.
- Diferencia promedio entre el juicio del elector y de los expertos: Es el promedio simple de la resta entre las posición atribuida por el elector y por los expertos a los partidos en la escala I-D. Mide el sesgo que tiene la evaluación de los ciudadanos respecto de los expertos, Una diferencia promedio positiva significa que los electores ubican a los partidos más hacia la derecha que los expertos; una diferencia promedio negativa significa que los electores ubican a los partidos más hacia la izquierda que los expertos.

En el cuadro 8.2 se muestran los resultados de estos indicadores para las elecciones que estamos analizando, con la excepción de Chile 1999. Como se aprecia, el porcentaje de electores que no pueden usar la escala izquierda - derecha (nuestro indicador de competencia en su uso) muestra una importante variabilidad, lo que apunta a que, para los electores, el significado de las dimensiones izquierda - derecha cambia no solo entre países sino también entre diferentes elecciones del mismo país. Incluso en países con sistemas de partidos más estables y consolidados, como Chile y México, se presentan variaciones importantes. Una posibilidad es que el nivel de competencia de los ciudadanos en el uso de la dimensión izquierda derecha esté relacionado con el grado de polarización política del sistema de partidos: cuanto más polarizado sea el sistema mayor claridad y relevancia hay sobre el significado y uso de esta dimensión para

Cuadro 8.2: Competencia en el Uso de la Escala Izquierda - Derecha

Competencia en el uso de la escala Izquierda – Derecha y diferencias entre el elector y el juicio de expertos, por país y elección

País	Elección	% electores que no pueden usar escala ID	Diferencia Elector – Expertos	
			Absoluta	Promedio
Brasil	2002	30.6	3.1	1.2
	2006	49.3	3.0	-0.9
	2010	48.9	3.2	0.2
Chile	2005	18.8	1.4	0.7
	2009	27.2	1.2	0.1
México	1997	29.8	3.1	0.0
	2000	30.4	2.8	-0.1
	2003	34.0	3.1	-0.4
	2006	25.3	3.1	0.5
	2009	20.3	2.8	0.9
Perú	2000	22.7	2.6	-0.9
	2001	10.9	2.8	-0.6
	2006	22.8	3.0	-1.4
	2011	32.2	2.7	-0.5

Nota: Se excluye Chile 1999 por falta de información acerca de ubicación de partidos en escala I-D por parte del elector.

Fuente: CSES. Elaboración propia

definir el panorama político de una elección. Sin embargo no aparece una correlación clara o significativa entre estos indicadores (el r de Pearson es bajo y no significativo).

Respecto de las diferencias entre los juicios del elector y los expertos, como se aprecia en el cuadro resultan ser menores en Chile que en los respecto de los otros países, lo que podría estar indicando que en ese país la competencia política se estructura a lo largo de la diferenciación izquierda derecha de manera más consistente que en los otros países. En Brasil y México se observan diferencias más importantes en términos absolutos. Otro hecho a resaltar de esta tabla es que los electores peruanos, en todas las elecciones, ubican a los partidos en posiciones más a la izquierda que los expertos. Ello ocurre sobre todo en el caso de los partidos que podríamos llamar de “derecha”, lo que podría indicar que, en comparación del juicio de expertos, los ciudadanos tienden a subestimar el grado de “derechización” de estos partidos ubicándolos en posiciones más centristas. En cambio en Chile sucede lo inverso.

A nivel individual ¿qué factores pueden estar asociados con un uso más competente de la dimensión izquierda - derecha? Con la finalidad de responder a esta pregunta se estimaron un conjunto de modelos de regresión logística binomial que se muestran en el cuadro 8.3, y que consideran como variable dependiente si el elector era o no competente en el uso de la dimensión izquierda derecha (como se ha definido en en el cuadro 8.2). Las principales variables independientes de estos modelos son:

- El género del entrevistado, considerando como categoría de control el género masculino.
- La edad.
- El nivel educativo.
- El nivel de ingresos.
- El conocimiento político, que se operacionaliza calculando un índice de conocimiento político a partir de tres preguntas de la encuesta CSES sobre datos fácticos de los sistemas políticos de sus respectivos países. Si las respuestas a las tres preguntas son incorrectas, el índice tiene un valor de 0; si las tres son correctas el índice toma el valor de 3. Estas

preguntas estuvieron ausentes en las encuestas realizadas en Chile 2009 y Perú 2000 y 2001.

- La identificación partidaria, que es una variable dicotómica que adquiere el valor de 1 si el entrevistado declara identificarse o simpatizar con algún partido político, y de 0 si es lo contrario.
- El país como variable categóricas (dummy), tomando a Chile como categoría de referencia.

Los modelos 1 y 3 excluyen la variable ingreso, debido a que en algunos casos la cantidad de valores perdidos es muy elevada (como puede comparando el N de los modelos), y nos sirven para evaluar si el resto de coeficientes sufre cambios importantes cuando esta variable es incluida o excluida. Debido a razones similares, a diferencia de los modelos 1 y 2, en los modelos 3 y 4 está presente la variable conocimiento político, ya que en tres de las elecciones que estamos analizando (Chile 1999, Perú 2000, Perú 2001) no se cuenta con la información necesaria para calcularla.

Como puede apreciarse en el cuadro 8.3, todos los coeficientes son estadísticamente significativos y muestran relaciones consistentes con lo que podría esperarse: la probabilidad de que un elector sea competente en el uso de la escala izquierda derecha se incrementa si se es hombre; se cuenta con mayores niveles de ingreso y mayores niveles educativos; asimismo se incrementa si el elector tiene algún tipo de afinidad o simpatía política por un partido político en particular (IDP). Los modelos 3 y 4, muestran resultados similares a los dos primeros, además de indicar una asociación positiva entre el conocimiento político y la competencia en el uso de la dimensión izquierda - derecha. Estos resultados confirman que, independientemente del sistema político y del sistema de partidos con el que se ven confrontados los electores, el status social, la educación y el manejo de mayor información sobre temas políticos son factores asociados a una mayor competencia en el uso de la escala izquierda derecha.³

³En el caso de Brasil, los trabajos de Ames y Smith (2010) y Carreirão de Souza (2002; 2007) muestran resultados similares.

Cuadro 8.3: Modelos Logit Binomiales para Uso de Escala Izquierda - Derecha

Factores Asociados al Uso Competente de la Escala Izquierda - Derecha
Modelos de Regresión Logística Binomial

	Variable dependiente			
	Uso de la escala Izquierda - Derecha (Si/NO)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Género = Masculino	0.414*** (0.031)	0.380*** (0.033)	0.317*** (0.034)	0.285*** (0.037)
Edad	-0.002 (0.001)	-0.003** (0.001)	-0.004*** (0.001)	-0.005*** (0.001)
Nivel Educativo	0.264*** (0.009)	0.214*** (0.011)	0.193*** (0.010)	0.158*** (0.013)
Nivel de Ingresos		0.140*** (0.014)		0.111*** (0.016)
Conocimiento Político			0.380*** (0.018)	0.349*** (0.020)
Identificación Partidaria	0.758*** (0.031)	0.749*** (0.033)	0.652*** (0.034)	0.649*** (0.037)
País = México	-0.271*** (0.057)	-0.241*** (0.062)	-0.497*** (0.147)	-0.675*** (0.169)
País = Perú	-0.230*** (0.061)	-0.231*** (0.065)	-0.435*** (0.151)	-0.665*** (0.173)
País = Brasil	-0.712*** (0.060)	-0.775*** (0.066)	-0.917*** (0.148)	-1.161*** (0.171)
Constante	-0.357*** (0.091)	-0.417*** (0.098)	-0.282* (0.168)	-0.088 (0.191)
No. Casos	23,414	20,544	19,202	16,613
Log Likelihood	-12,863.580	-11,034.250	-10,590.840	-8,978.554
Akaike Inf. Crit.	25,743.160	22,086.490	21,199.690	17,977.110
Pseudo R ²	0.145	0.149	0.173	0.166

Notas: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. Errores estándar entre paréntesis.
Se excluye Chile 1999 por falta de información acerca de ubicación de partidos en escala I-D por parte del elector. En los modelos 3 y 4 se excluyen además las elecciones de Perú 2000 y 2001 por falta de datos para la variable de conocimiento político.

Fuente: CSES. Elaboración propia

Resulta interesante observar que en relación a la edad, los modelos indican que la probabilidad de ser competente en el uso de la dimensión izquierda derecha aumenta conforme disminuye la edad, lo que parece ir a contracorriente con las ideas que afirman que las nuevas generaciones son políticamente mucho menos sofisticadas que sus predecesores.

En todos los modelos, los coeficientes correspondientes a las variables dummy de los países indican que la probabilidad de ser competente en el uso de la dimensión izquierda - derecha es mayor en Chile (que es el país “base” para el contraste con los demás considerando solo las elecciones del 2005 y 2009) que en los demás países. Entre Perú y México no habría mayores diferencias, mientras que en Brasil la probabilidad de que una persona sea competente en el uso de esta dimensión disminuye en forma significativa no solo respecto de Chile, sino también de México y Perú.

A este nivel de análisis individual podría observarse alguna relación entre las características del sistema de partidos de cada país y el nivel de competencia en el uso de la escala izquierda - derecha de los ciudadanos. Como podría deducirse de la figura 8.3, donde se presentan los índices de polarización del sistema político, los países y elecciones analizadas podrían agruparse en tres grandes grupos: En primer lugar Chile que muestra en todas sus elecciones y de manera consistente un mayor grado de polarización política en el eje izquierda derecha, donde la posición de los partidos respecto de la dictadura y su legado ha sido determinante en definir los contenidos de la diferenciación política. Desde el fin de la dictadura de Pinochet, el sistema de partidos chileno ha estado caracterizado por una competencia bastante estable entre dos bloques de partidos: la Concertación por un lado y la UDI y RN por el otro (ambos partidos de derecha formaron coaliciones en 1999 y 2009 para competir contra la Concertación en las elecciones presidenciales de esos años).

En otro extremo estarían las elecciones de Brasil, donde los niveles de polarización son los menores. Ello se explica en la medida que los principales partidos políticos que compiten en las elecciones presidenciales (el PT y el PSDB) ocupan sobre todo el centro izquierda del espectro político. Cuando ha aparecido otro contendiente importante en las elecciones presidenciales (Heloísa Helena del PSOL en el 2006 y Marina Silva del partido Verde en el 2010), ha compe-

tido con el PT y el PSDB en el mismo lado del eje (el “lado izquierdo”). En tal sentido, en las competencias electorales principales (la elección nacional), los brasileños no tienen referentes claros de una derecha electoralmente exitosa. Incluso otros partidos importantes que compiten fundamentalmente en las elecciones parlamentarias, como el PMDB o el PFL/DEM, han apoyado a diferentes candidatos en las elecciones presidenciales: el PMDB apoyó al candidato del PSDB en las elecciones del 2002 y a la candidata del PT en las del 2010. El PFL se inclinó por los candidatos del PSDB en el 2006 y 2010.

Un caso intermedio son México y Perú, aunque con importantes diferencias entre sí. En las últimas décadas, la política mexicana ha estado marcada por una gran estabilidad de la competencia entre el PRI, el PAN y el PRD, por lo menos desde que éste último se crea a finales de la década de 1980 a partir de grupos disidentes del PRI que se alían con otras agrupaciones de izquierda (Delury y Schlager, 2006, pp. 890). Estos tres partidos han estructurado la competencia electoral en México ubicándose respectivamente en el centro, la derecha y la izquierda del espectro político, aunque en contraste con Chile, el legado histórico del PRI en la centralidad del Estado como motor del desarrollo mexicano (posición que es compartida por el PRD) hace que la diferenciación política en México no esté tan marcada por posiciones ideologizadas sino por las tradiciones partidistas que estas agrupaciones (incluyendo al PAN) han ido construyendo son sus bases electorales.⁴

En Perú, el sistema de partidos es mucho más inestable y mucho más personalista que en México, es más incluso podría decirse que cada nueva elección da lugar a un nuevo sistema de partidos, aunque algunos actores políticos van marcando ciertos hitos que permiten al electorado orientarse en un eje izquierda - derecha: el Fujimorismo hacia la derecha junto con partidos como el PPC (impulsor de UN en el 2001 y 2006, y de APGC en el 2011); el PAP de Alan García y PP de Toledo hacia el centro; y entre el 2006 y 2011, Ollanta Humala que logró ocupar el espacio de la izquierda que estuvo vacío durante gran parte de la década de 1990.

Dadas las características del sistema de partidos en cada país, podría decirse que la probabilidad de encontrar ciudadanos más competentes en el uso de la dimensión izquierda derecha

⁴Sobre la identificación partidista en México y su relevancia para comprender el comportamiento electoral en ese país, véase: Moreno y Méndez (2007); Moreno (2003; 2009).

para diferenciar la oferta electoral depende de: a) a nivel individual del grado de educación e información política que se maneje que va de la mano con el status social; y b) a nivel del sistema político, del grado en que los principales actores (partidos o líderes políticos) han consolidado un sistema estable de competencia política que se diferencia mutuamente en términos que puedan traducirse en un eje izquierda - derecha.

8.2.2. La Posición Izquierda - Derecha y las Diferencias Socioeconómicas

Otra dimensión del uso de la escala izquierda derecha es la relación entre la posición ideológica del elector y sus características socioeconómicas. La pregunta en este caso es si determinados sectores sociales tienden a orientarse más hacia uno y otro lado del espectro ideológico que busca representar esta escala.

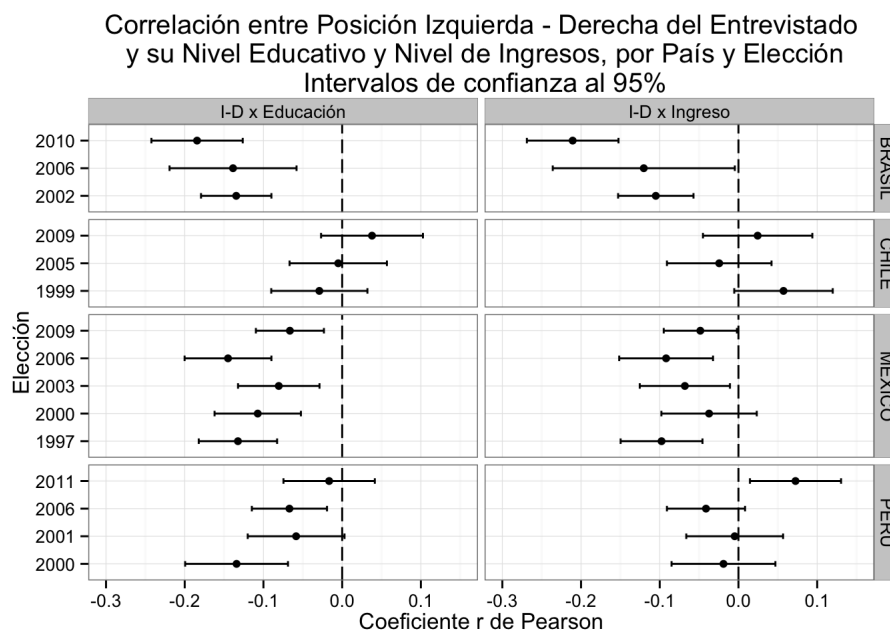
Con la finalidad de responder esta pregunta, se realizó un análisis de correlaciones entre la posición reportada por el elector en la escala izquierda - derecha (IZDE) y los dos indicadores de nivel socioeconómico que utilizamos en el capítulo previo: el nivel educativo y el nivel de ingresos. Los resultados de este análisis se muestran en la figura 8.4, en donde se ubica el coeficiente r de Pearson y su respectivo intervalo de confianza al 95 % que mide la relación entre estas variables en cada elección.

Como puede apreciarse, en general las correlaciones son débiles (inferiores a 0.2 en valores absolutos). En el caso de la correlación entre IZDE y nivel educativo, cuando resultan ser estadísticamente significativas ⁵, los coeficientes tienen un valor negativo, lo que indica que conforme se incrementa su nivel educativo, el elector tiende a ubicarse más hacia la izquierda, especialmente en el caso brasileño.

Respecto de las correlaciones entre nivel de ingresos y posición izquierda - derecha, se nota una relación menor que con nivel educativo, y con tendencia a que el elector se ubique más hacia la izquierda conforme se incrementa su nivel de ingresos en México y Brasil. En el caso de las elecciones de Perú 2011, sucede lo contrario: la tendencia es que a mayor nivel de ingresos

⁵Podemos decir que el coeficiente es estadísticamente significativo, con un $\alpha = 5\%$, cuando su intervalos de confianza no incluye el cero, marcado por la línea punteada vertical.

Figura 8.4: Posición Izquierda Derecha y Niveles Socioeconómicos



el elector se ubique más hacia la derecha. En el resto de elecciones peruanas no se aprecian correlaciones estadísticamente significativas.

En todas las elecciones chilenas no encontramos correlaciones estadísticamente significativas entre nuestros indicadores de niveles socioeconómicos y la posición en la escala izquierda - derecha.

Los resultados de este análisis muestran que el vínculo entre posiciones en la estructura social marcadas por diferencias socioeconómicas no guardan una clara o fuerte asociación con tendencias ideológicas. Ya en el capítulo anterior habíamos identificado una débil asociación entre estas diferencias sociales y las identificaciones o preferencias partidarias. Estos elementos refuerzan la conclusión de que, en los casos que estamos observando, no se aprecia la existencia de procesos que configuren clivajes políticos muy marcados.

8.3. La Dimensión Izquierda Derecha y la Decisión Electoral

Para evaluar hasta qué punto la dimensión izquierda derecha influye en la decisión del elector a la hora de votar se ha adoptado tres aproximaciones metodológicas complementarias que representan diferentes niveles de análisis que van de lo general a lo más específico. En primer lugar se analiza la correlación nominal entre la ubicación izquierda derecha de los entrevistados y su voto reportado, para luego evaluar hasta qué punto esa correlación varía en función del nivel de polarización ideológica del sistema de partidos en cada elección. Esto nos dará una idea “cruda” de la relación entre el voto ideológico y el nivel polarización política. Seguidamente se procede a realizar un análisis más específico de esta dimensión.

En la segunda aproximación, se procede a estimar una función de utilidad de proximidad espacial de la dimensión izquierda-derecha. Ello nos permitirá evaluar si la distancia en la escala izquierda derecha del elector respecto de los partidos que participan en las elecciones tiene algún peso en el grado de preferencia que se tiene por esos partidos y en la decisión de votar o no por ellos tanto en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En esta opción se controlan los efectos a nivel de país, de modo tal que el nivel de análisis resulta ser el sistema político de cada país.

En última aproximación metodológica se busca evaluar el efecto de la utilidad de proximidad espacial para cada una de las elecciones que estamos estudiando, de esta forma. A este nivel de análisis se pretende ver si el contexto específico (cada elección, más allá del sistema político de cada país) tiene algún efecto sobre la manera en cómo funciona el voto ideológico.

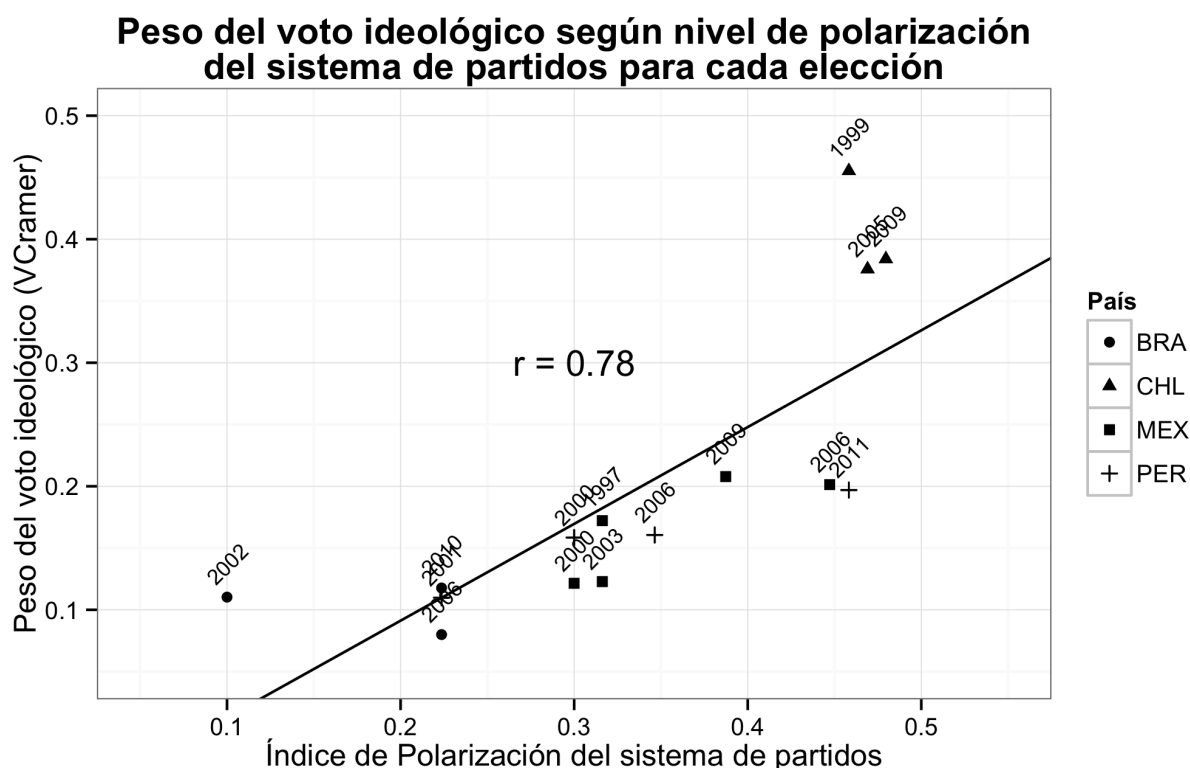
La complementariedad de estos tres niveles de análisis nos permitirá apreciar si las conclusiones derivadas de los resultados empíricos resultan ser robustas sobre el peso del voto ideológico en los casos estudiados.

8.3.1. Asociación Nominal entre Ubicación Ideológica y Voto

En primer lugar se analiza la relación bivariable entre la posición izquierda - derecha del entrevistado con el voto reportado en las elecciones que se están analizando (voto por el parlamento en México 1997, 2003 y 2009; y voto por presidente en el resto de casos). Para ello se ha recodificado la auto ubicación de los entrevistados en la escala izquierda derecha en las cuatro categorías que se mostraron en en cuadro 8.1: Izquierda (0-3); Centro (4-6); Derecha (7-10); No precisa.

Seguidamente se utilizó la correlación de nivel nominal V de Cramer⁶ para medir la relación entre las posiciones en la escala izquierda derecha y el voto reportado en las elecciones.⁷

Figura 8.5: Voto Ideológico y Polarización del Sistema de Partidos



⁶La V de Cramer es una medida de asociación nominal, calculada sobre la base del estadístico de χ^2 , y que es apropiada para tablas de NxN. La significancia del estadístico se evalúa con la misma prueba de χ^2 .

⁷Dalton (2010, pp. 107) usa este tipo de procedimiento y lo justifica indicando que la ventaja de este estadístico es que no es necesario que se hagan supuestos relativos al ordenamiento de los partidos en esta dimensión, ya que tan solo indica la existencia de una asociación entre las variables sin especificar la naturaleza de dicha asociación.

En la figura 8.5 se muestra diagrama de dispersión entre el índice de polarización ideológica del sistema de partidos y el coeficiente V de Cramer que mide el grado de asociación entre la posición ideológica del entrevistado y su voto. Si nos fijamos en los valores de V de Cramer en el eje vertical, es en las elecciones chilenas donde se detecta una mayor asociación entre la auto posición del elector en la escala izquierda derecha y su voto. En el otro extremo figuran las elecciones brasileñas, donde se registran los valores más bajos de este estadístico (junto con la elección peruana del 2001). El resto de casos de México y Perú muestran resultados variables, con tendencia a mayores niveles de asociación en las últimas elecciones que forman parte de los casos seleccionados. Por lo general, salvo en el caso de Chile, los valores de V de Cramer muestran asociaciones moderadas hacia débiles entre el posicionamiento del elector en la dimensión izquierda derecha y su decisión electoral. Ello podría indicar que, además de esta dimensión, hay otros elementos que pueden tener igual o mayor importancia para el elector al momento de decidir su voto.

Como puede verse en el gráfico, existe una cierta tendencia a encontrar un mayor nivel de asociación entre la posición en la escala izquierda derecha del elector y su voto en las elecciones en aquellas elecciones donde el grado de polarización del sistema de partidos es mayor. A pesar del reducido número de casos, la tendencia entre ambas variables muestra un r de Pearson de 0.78 que es estadísticamente significativo (con un $\alpha = 0.001$). Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Dalton utilizando variables y procedimientos similares para analizar la relación entre el voto ideológico y la polarización del sistema de partidos en las 36 elecciones cubiertas por el módulo II del CSES (Dalton, 2010, pp. 113). La diferencia radica en que en el presente trabajo el foco de atención está centrado en América Latina, pero introduciendo una dimensión longitudinal ya que se toma en cuenta todos los casos de la región incorporados en los módulos I, II y III del proyecto CSES.

8.3.2. Utilidad Espacial y Voto Ideológico

La segunda aproximación adoptada para analizar el peso del voto ideológico en América Latina está inspirada en el trabajo de Romain Lachat (2008) sobre el voto ideológico y polari-

zación política en países europeos, que consiste en estimar el peso que puede tener la *función de utilidad espacial de la dimensión izquierda derecha* en las preferencias hacia un partido político en particular. En primer lugar, consideraremos como variable dependiente es el grado de preferencia por los partidos políticos (PREFP) que se ha operacionalizado en una escala de 0 a 100. La principal variable independiente es una medida de utilidad espacial de proximidad ideológica (UTIL) en la escala izquierda derecha entre el elector y el partido, definida por la siguiente fórmula (Lachat, 2008, pp. 691):

$$UTIL_{ij}^p = -(IZDE_i - IZDEPX_j)^2 \quad (8.2)$$

Donde IZDE es la posición izquierda derecha del elector i , siendo IZDEPX la posición en la misma escala que los expertos le asignan al partido político j . Ello implica que el rango teórico de UTIL va de -100 (mayor distancia ideológica posible respecto a un partido) a 0 (menor distancia). Se utiliza la posición izquierda - derecha de los partidos políticos asignada por los expertos (IZDEPX) y no la asignada por los electores (IZDEP) ya que la primera resulta ser una medida más objetiva de la posición ideológica de los partidos políticos, evitando así problemas de endogeneidad donde los electores tienden a ubicar a los partidos donde ellos mismos se ubicarían.

Con estas variables se calcula un modelo de regresión lineal de mínimos cuadrados (OLS) que estima el efecto posible de la utilidad espacial en la preferencia por un partido político (PREFP). Para calcular el modelo ha sido necesario reestructurar la base de datos de manera tal que cada registro corresponda a la relación entre un elector y un partido en particular. Por ejemplo, si se estuviera evaluando solamente tres partidos políticos (A, B y C), para un conjunto hipotético de 3 electores, en la base de datos original la información estaría registrada de la siguiente forma:

Una vez reestructurada, la base de datos adopta el formato que se muestra en el cuadro 8.5, donde cada registro original es multiplicado por el número de partidos que son evaluados:

La variable de identificación partidaria es representada por dos variables dummy, siguiendo el mismo esquema de operacionalización que en el capítulo anterior. La primera variable, *IDP*

Cuadro 8.4: Ejemplo hipotético de base de datos original

Elector	IZDE	IZDEPX	IZDEPX	IZDEPX	PREFP	PREFP	PREFP
		A	B	C	A	B	C
Elector 1	3	4	5	8	80	30	0
Elector 2	5	4	5	8	20	80	90
Elector 3	10	4	5	8	0	30	100

Cuadro 8.5: Ejemplo de base de datos reestructurada para el análisis

Observaciones	IZDE	IZDEPX	UTIL	PREFP
Elector 1 x Partido A	3	4	-1	80
Elector 1 x Partido B	3	5	-4	30
Elector 1 x Partido C	3	8	-25	0
Elector 2 x Partido A	5	4	-1	20
Elector 2 x Partido B	5	5	0	80
Elector 2 x Partido C	5	8	-9	90
Elector 3 x Partido A	10	4	-36	0
Elector 3 x Partido B	10	5	-25	30
Elector 3 x Partido C	10	8	-4	100

- *Mismo Partido*, asume el valor 1 si el elector simpatiza o se identifica con el partido que es evaluado en la fila y 0 en caso contrario. La segunda variable, *IDP - Otro partido*, asume el valor 1 si el elector se identifica con un partido diferente al de la fila y cero en caso contrario. Si el elector no se identifica con ningún partido, ambas variables tienen valor cero. Siguiendo con el ejemplo hipotético de tres electores y tres partidos, si el elector 1 se identifica con el partido A; el elector 2 con el partido B; y el elector 3 no se identifica con ningún partido. El resultado de esta operación se muestra en el cuadro 8.6 (ejemplo tomado de: Lachat, 2008, pp. 691).

Cuadro 8.6: Esquema de codificación para la variable IDP

Observaciones	IDP Mismo Partido	IDP Otro Partido
Elector 1 x Partido A	1	0
Elector 1 x Partido B	0	1
Elector 1 x Partido C	0	1
Elector 2 x Partido A	0	1
Elector 2 x Partido B	1	0
Elector 2 x Partido C	0	1
Elector 3 x Partido A	0	0
Elector 3 x Partido B	0	0
Elector 3 x Partido C	0	0

Una vez acondicionados los datos, el modelo de regresión múltiple se estima utilizando la ecuación 8.3.

$$\begin{aligned}
 PREFP = & \beta_0 + \beta_1UTIL + \beta_2IDP_m + \beta_3IDP_o + \\
 & \beta_4BRA + \beta_5MEX + \beta_6PER + \beta_7UTIL * IDP_m + \\
 & \beta_8UTIL * IDP_o + \beta_9UTIL * BRA + \beta_{10}UTIL * MEX + \\
 & \beta_{11}UTIL * PER + \beta_{12}SOC + e
 \end{aligned}
 \tag{8.3}$$

El modelo incluye las principales variables independientes: UTIL e IDP, así como las correspondientes variables dummy para cada país (BRA, MEX, PER), considerando como país de referencia a Chile. Además considera algunos términos interactivos, especialmente respecto del peso de la utilidad de la proximidad en la escala izquierda derecha, donde se incluye la interacción con la identificación partidaria (IDP) y el país, con la finalidad evaluar si la utilidad espacial del voto izquierda derecha varía de acuerdo con estos factores. De esta forma, tomando en cuenta los β de los términos correspondientes, se puede calcular un valor γ que refleja el efecto de la utilidad espacial izquierda - derecha en la preferencia por un partido político, tanto en cada país como para cada tipo de elector según la identificación partidaria (ver cuadro 8.7).

Cuadro 8.7: Cálculo del efecto de la utilidad espacial γ según país e identificación partidaria

PAIS	Sin IDP (γ_1)	IDP Mismo (γ_2)	IDP Otro (γ_3)
Chile	$\gamma_1 = \beta_1$	$\gamma_2 = \beta_1 + \beta_7$	$\gamma_3 = \beta_1 + \beta_8$
Brasil	$\gamma_1 = \beta_1 + \beta_9$	$\gamma_2 = \beta_1 + \beta_7 + \beta_9$	$\gamma_3 = \beta_1 + \beta_8 + \beta_9$
México	$\gamma_1 = \beta_1 + \beta_{10}$	$\gamma_2 = \beta_1 + \beta_7 + \beta_{10}$	$\gamma_3 = \beta_1 + \beta_8 + \beta_{10}$
Peru	$\gamma_1 = \beta_1 + \beta_{11}$	$\gamma_2 = \beta_1 + \beta_7 + \beta_{11}$	$\gamma_3 = \beta_1 + \beta_8 + \beta_{11}$

Finalmente, el modelo incluye un término SOC, que en realidad corresponde a tres variables sociodemográficas que se evalúan de manera independiente: Género; Edad y Nivel Educativo.

El modelo se aplica a los casos de electores del proyecto CSES que se han sido capaces de utilizar la escala izquierda derecha para ubicarse a sí mismos. De los 24,690 casos que contienen las encuestas del proyecto CSES que se están analizando, el número de casos válidos para este análisis se reduce a 18,335. Debido a la reestructuración de los datos para realizar

este análisis, los registros se multiplican por el número de partidos que evalúa cada elector en la variable PREFP, lo que da un total de 97,156 registros, eso significa que en promedio los electores considerados en este análisis han evaluado en promedio 5 partidos. Para estimar los coeficientes del modelo, estos registros han sido ponderados por la inversa del número de partidos evaluados por cada elector, de forma tal que cada elector tiene el mismo peso relativo.

Los resultados del modelo elaborado se muestran en el cuadro 8.8. Además, en el mismo cuadro se presentan los resultados de otros dos modelos de regresión logística binaria que tienen como variables dependientes si el elector votó o no (1= votó; 0= no votó) en las elecciones presidenciales (VOTO Presidente) y parlamentarias (VOTO Parlamento) por el partido evaluado en cada fila de la base de datos reestructurada de acuerdo con los criterios previamente indicados.⁸ La diferencia entre los modelos PREFP y VOTO radica en el hecho de que el primero evalúa la preferencia por un determinado partido político, mientras que el segundo evalúa el comportamiento efectivo del elector al emitir su voto.

Considerando el modelo donde PREFP es la variable dependiente, analizando específicamente el efecto de la utilidad espacial γ podría afirmarse que la preferencia por un partido político:

- Se incrementa conforme la utilidad espacial es mayor (la distancia ideológica entre el elector y el partido disminuye).
- El efecto de la utilidad espacial es mayor en Chile, seguido de México y Perú, mientras que los casos de Brasil muestran el menor efecto.
- El efecto de la utilidad espacial es mayor cuando el partido evaluado es diferente al partido con el cual el elector tiene alguna identificación. Por el contrario, cuando un elector tiene algún nivel de identificación por un partido político determinado, el efecto de la utilidad espacial se atenúa respecto de ese partido. En otras palabras la identificación partidaria

⁸En los modelos VOTO el número de casos válidos y de registros cambia respecto del modelo PREFP: en el modelo VOTO Presidente no se incluyen las elecciones parlamentarias de México 1997, 2003 y 2009; en el modelo VOTO Parlamento no se incluyen las elecciones de Perú 2000 y Chile 1999 ya que en aquellas ocasiones la encuesta CSES realizada en esos países no incluye preguntas sobre voto al parlamento.

Cuadro 8.8: Modelos OLS y LOGIT para PREFP y VOTO

Modelos de Regresión Lineal (OLS) y Logística Binomial para Grado de Preferencia por Partidos Políticos, Voto en Elecciones Presidenciales y Voto en Elecciones Parlamentarias

	Variable Dependiente		
	PREFP Coeficientes OLS	VOTO Presidente Coeficientes Logit	VOTO Parlamento Coeficientes Logit
Género =Masculino	-1.436*** (0.191)	0.015 (0.051)	-0.001 (0.062)
Edad	-0.056*** (0.007)	0.001 (0.002)	-0.001 (0.002)
Nivel Educativo	-0.653*** (0.053)	-0.001 (0.014)	-0.003 (0.017)
UTIL	0.460*** (0.016)	0.084*** (0.006)	0.041*** (0.010)
IDP Mismo	35.547*** (0.410)	2.669*** (0.106)	2.414*** (0.103)
IDP Otro	-2.725*** (0.268)	-1.132*** (0.077)	-1.233*** (0.094)
País = Brasil	-6.034*** (0.437)	-0.875*** (0.100)	-0.335 (0.180)
País = México	-2.501*** (0.378)	-1.443*** (0.113)	-0.006 (0.130)
País = Perú	-8.497*** (0.398)	-1.671*** (0.092)	-0.287* (0.139)
UTIL * IDP Mismo	-0.259*** (0.022)	-0.005 (0.006)	-0.015** (0.006)
UTIL * IDP Otro	0.084*** (0.012)	0.001 (0.004)	0.006 (0.005)
UTIL * Brasil	-0.473*** (0.020)	-0.089*** (0.007)	-0.026* (0.012)
UTIL * México	-0.344*** (0.016)	-0.072*** (0.008)	-0.028** (0.010)
UTIL * Perú	-0.258*** (0.020)	-0.072*** (0.007)	-0.034** (0.011)
Constante	53.429*** (0.559)	0.329* (0.139)	-1.180*** (0.194)
Registros	97,156	43,334	61,834
No. de Casos	18,335	11,332	10,409
R ² / Pseudo ²	0.195	0.316	0.290

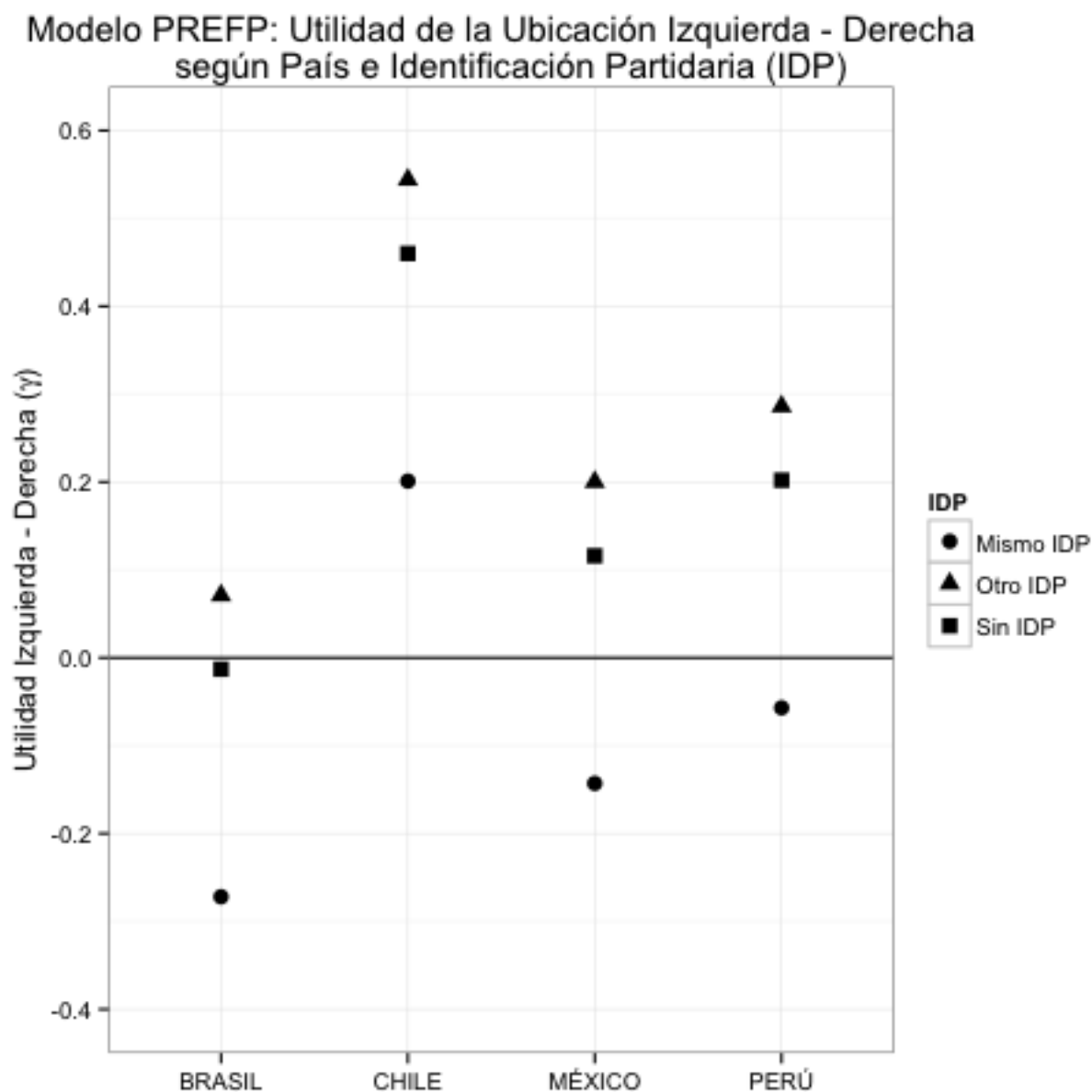
Notas: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. Errores estándar entre paréntesis.
Se excluye Chile 1999 por falta de información sobre escala Iz-De para partidos.
Modelo VOTO Presidente: Sólo datos de elecciones presidenciales
Modelo VOTO Parlamento: Sólo datos de elecciones parlamentarias.

tiende a anular el efecto de la evaluación de proximidad o distancia espacial respecto de la posición ideológica del partido político con el que el elector simpatiza.

Estas afirmaciones sobre el efecto de la utilidad espacial pueden representarse la figura 8.6 donde se muestran los valores de γ que se desprenden del modelo OLS de acuerdo con las especificaciones indicadas en el cuadro 8.7. El gráfico muestra claramente que en el caso de Brasil la utilidad espacial izquierda – derecha no tiene un efecto estadísticamente significativo en el caso de los electores que no simpatizan con un partido político, y que el peso que tiene en el caso de electores que evalúan un partido diferente del cual simpatizan es bastante limitado. Por otro lado, la identificación partidaria anula o convierte en negativa el efecto de la utilidad espacial para el partido con el que el elector simpatiza en todos los casos con excepción de Chile. Asimismo, en Chile, México y Perú, la utilidad espacial es mayor en los casos de electores que teniendo una identificación partidaria son invitados a evaluar un partido diferente al cual se identifican, lo que indicaría que el efecto de la distancia en la dimensión izquierda - derecha se acrecienta respecto de los partidos rivales al más cercano para el elector.

Al analizar los resultados de los modelo de regresión logística, que en última instancia reflejan el voto reportado por el elector, se confirma el efecto (aunque moderado) que tiene la utilidad espacial izquierda - derecha sobre el comportamiento electoral. Sin embargo, en el modelo VOTO Presidente las identificación partidaria dejan de tener un efecto interactivo con la utilidad espacial. La variable VOTO refleja más directamente el comportamiento electoral reportado, mientras que la variable PREFP reflejaría las jerarquía de las preferencias políticas del entrevistado. Aunque por la naturaleza de los modelos los valores de los coeficientes no son comparables, la diferencia entre ambos modelos (sobre todo la significancia de los términos interactivos entre UTIL e IDP) podría indicar la existencia de un efecto de “voto estratégico” en el comportamiento electoral, ya que independientemente de las preferencias, ante la disyuntiva de una elección concreta el elector también tiene que sopesar si el partido o candidato con el cual hay mayor afinidad ideológica o programática tiene reales chances de ganar, en especial en una elección presidencial donde, a diferencia de una elección parlamentaria en un sistema proporcional, la regla es que el ganador se lo lleva todo.

Figura 8.6: Utilidad del Voto Ideológico



8.3.3. Utilidad Espacial en el Contexto de cada Elección

En un tercer nivel de análisis se han estimado modelos de regresión para evaluar el efecto de la utilidad espacial sobre la preferencia por partidos pero controlando no sólo por el país sino por cada elección. Esto nos permite determinar si los efectos analizados en el acápite anterior son o no independientes de la coyuntura electoral específica.

Cuadro 8.9: Estimación del Efecto de Util. I-D en Preferencia por Partidos Controlando por Elección

	(Nulo)	1	2	3
Modelos de Regresión Lineal Jerárquica para uso Preferencia por Partidos Políticos - PREFP				
<hr/>				
Efectos Fijos				
Género = Masculino		-1.359***	-1.298***	-1.310***
		(0.190)	(0.190)	(0.215)
Edad		-0.063***	-0.063***	-0.068***
		(0.007)	(0.007)	(0.007)
Nivel Educativo		-0.718***	-0.662***	-0.628***
		(0.054)	(0.054)	(0.063)
Util. I-D		0.185***	0.192***	0.070
		(0.009)	(0.046)	(0.045)
Conoc. Político				-0.055
				(0.149)
IDP Mismo		35.348***	35.630***	37.247***
		(0.409)	(0.409)	(0.468)
IDP Otro		-3.377***	-3.294***	-2.767***
		(0.270)	(0.272)	(0.305)
Util. I-D * IDP Mismo		-0.316***	-0.263***	-0.201***
		(0.021)	(0.022)	(0.023)
Util. I-D * IDP Otro		0.067***	0.070***	0.083***
		(0.012)	(0.012)	(0.013)
Util. I-D * Conoc. Pol.				0.038***
				(0.006)
Constante	42.937***	49.735***	49.513***	48.891***
	(1.114)	(1.245)	(1.500)	(1.836)
<hr/>				
Efectos Aleatorios				
σ^2 Elección	18.440	20.030	30.556	33.853
σ^2 Util. I-D			0.030	0.020
<hr/>				
No. de casos	18,335	18,335	18,335	14,023
No. de grupos	15	15	15	11
Log Likelihood	-478,953	-468,901	-468,517	-369,940
Akaike Inf. Crit	957,941	937,825	937,060	739,909
χ^2		20,104.02***	768.91***	
<hr/>				

Notas: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. Errores estándar entre paréntesis. En el modelo 3 se excluye Chile 1999 y 2009 así como Perú 2000 y 2001 por falta de datos para Conocimiento Político.

En primer lugar se utilizó una regresión lineal jerárquica multinivel considerando como variable dependiente la preferencia por los partidos políticos (PREFP) cuyos resultados se muestran en el cuadro 8.9. En dicho cuadro se muestran cuatro modelos. El primer modelo es un modelo “nulo” o de base, que no considera ninguna variable independiente y que nos permitirá evaluar el ajuste de modelos subsiguientes al comparar los cambios en la verosimilitud (Log Likelihood). Seguidamente se introduce un siguiente modelo (1) que contiene prácticamente las mismas variables que en los modelos mostrados en el cuadro 8.8 pero con una diferencia importante: en vez de considerar a los países como una variable “dummy”, se toma en cuenta cada elección como un primer nivel jerárquico y se mide su efecto aleatorio en la constante de las ecuaciones de regresión, esto nos permite controlar el efecto de cada elección estimando una constante diferente para cada una. Como se aprecia, los coeficientes correspondientes al efecto de la función de utilidad espacial se mantienen significativos.

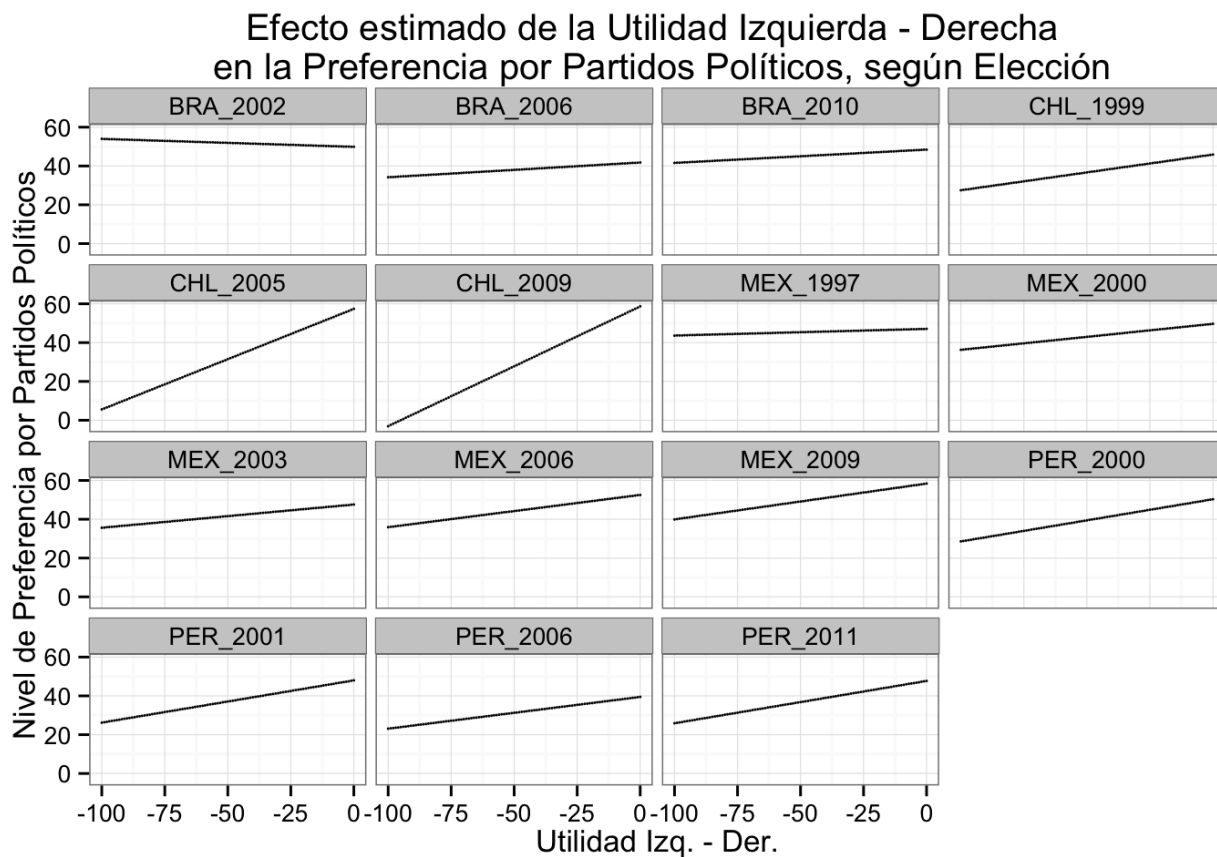
En el modelo 2 mostrado en el cuadro 8.9 se incluye un término adicional al hacer interactuar, como efecto aleatorio, la función de utilidad de proximidad espacial con cada elección. Como se aprecia, los cambios en la verosimilitud del modelo 2 respecto del modelo 1 son significativos (medidos con la prueba de χ^2), lo que quiere decir que el efecto de la utilidad espacial en la preferencia por los partidos políticos varía entre cada elección.

El modelo 3 del cuadro 8.9 es similar al modelo 2 (con conclusiones parecidas), pero en este caso se incluye una variable independiente adicional (como efecto fijo) que es el conocimiento político. En los casos donde se ha logrado medir el conocimiento político se aprecia un efecto interactivo y positivo entre el conocimiento político y la utilidad espacial en la preferencia del elector (controlando por país y elección). Esto quiere decir que la importancia de la ubicación izquierda derecha en el grado de preferencia por un partido político se incrementa conforme el elector tiene mayores conocimientos políticos, reforzando la idea de que electores más sofisticados – políticamente hablando – tienden a darle mayor importancia al componente ideológico para definir sus preferencias políticas.

A partir de los resultados del modelo 2 del cuadro 8.9 se ha calculado el valor estimado del grado de preferencia por un partido político según la función de utilidad espacial, manteniendo

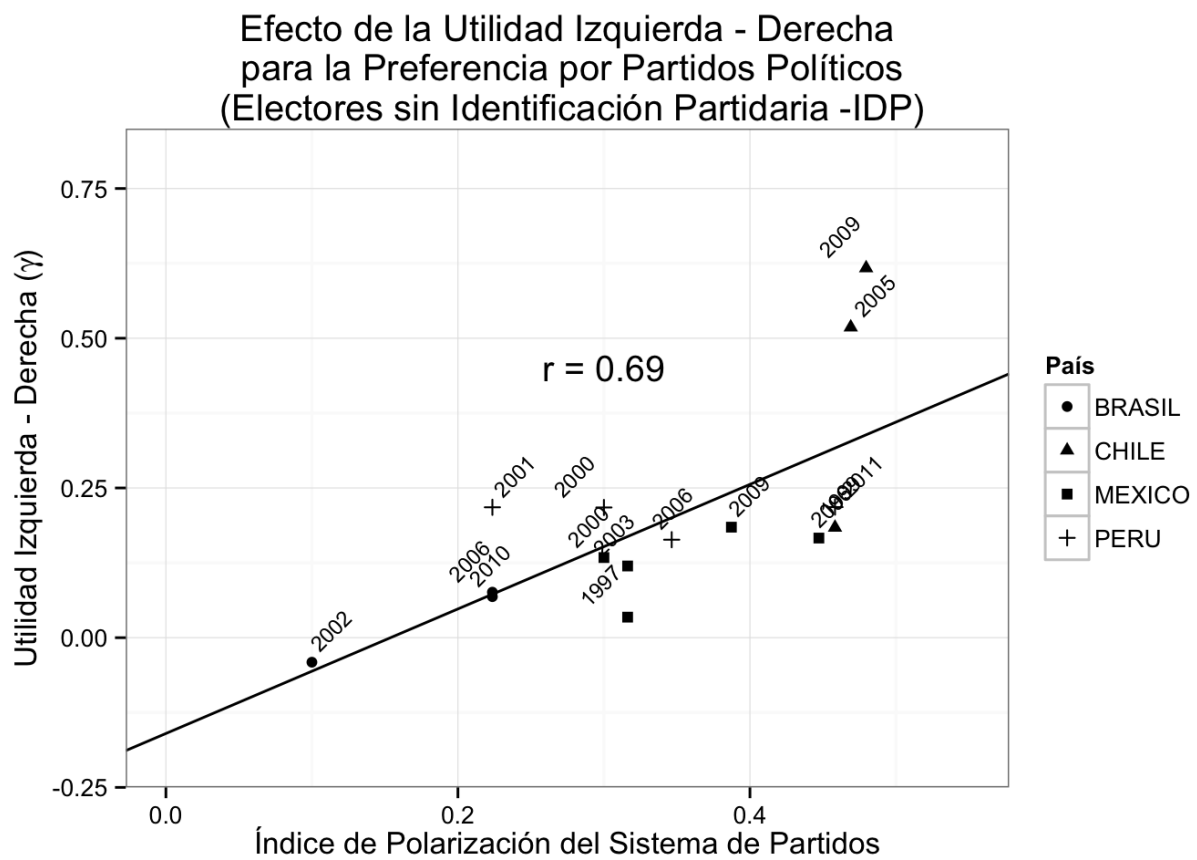
constantes las demás variables. Esto se puede visualizar en la figura 8.7. Como puede verse, salvo en el caso de las elecciones brasileñas y la de México 1997, por lo general la preferencia por un partido político tiende a incrementarse conforme hay mayor proximidad ideológica entre el elector y el partido.

Figura 8.7: Utilidad del Voto Ideológico Según Elección



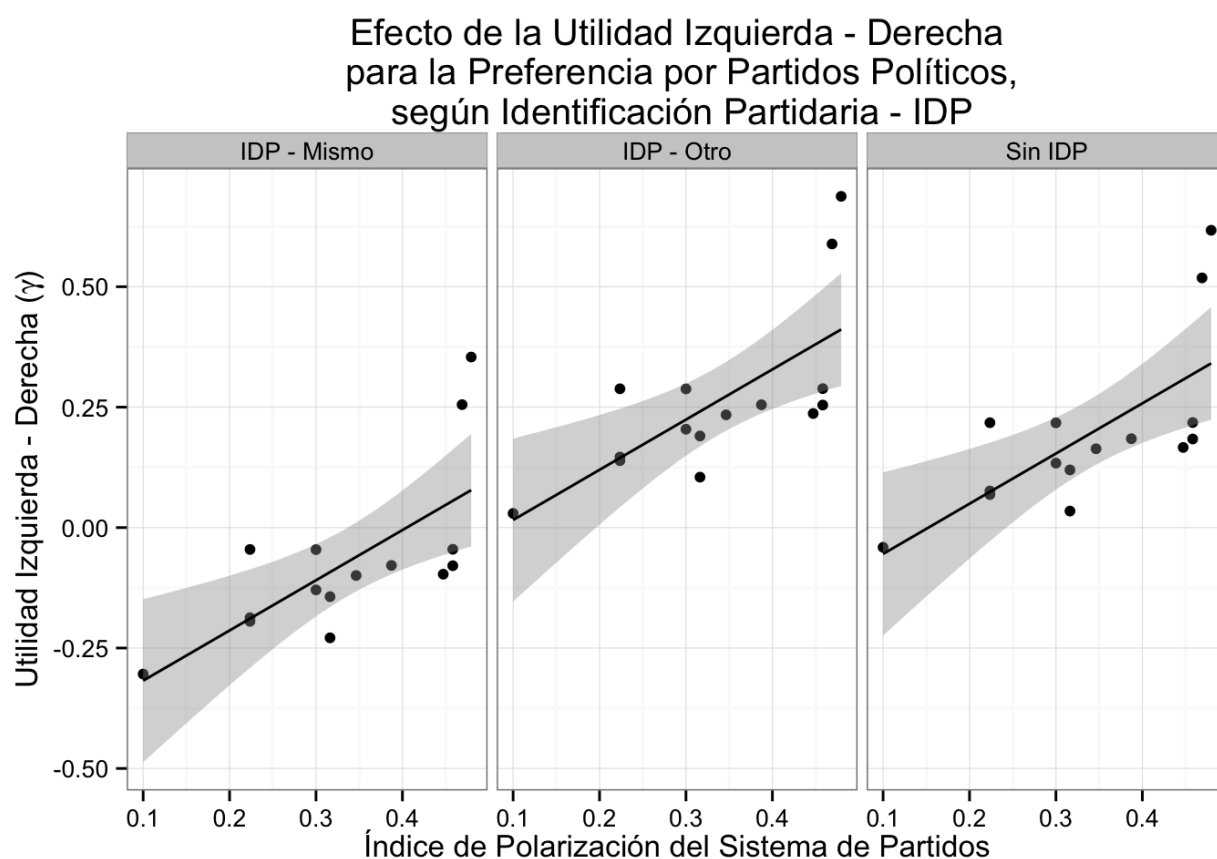
En la figura 8.8 se muestra el coeficiente γ correspondiente a la función de utilidad del voto ideológico para los electores que no se identifican con ningún partido (UTIL) para cada elección, según el índice de polarización del sistema político. Como puede verse, los resultados son consistentes con los que se mostraron en la figura 8.5: el efecto del voto ideológico tiende a ser mayor conforme aumenta la polarización del sistema de partidos. A pesar del número limitado de casos (N=15), el r de Pearson entre ambas variables es relativamente alto y estadísticamente significativo (considerando un $\alpha = 0.05$).

Figura 8.8: Utilidad del Voto Ideológico y Polarización del Sistema de Partidos



En la figura 8.9, se muestran resultados similares a la figura 8.8, pero comparando los electores que no se identifican con ningún partido, los que se identifican con el partido que se les pide evaluar, o los que se identifican con un partido diferente a los que se les pide evaluar. En este caso, los resultados nos indican que la identificación con el mismo partido político que se le pide evaluar al elector tiene a disminuir el efecto de la utilidad espacial de la dimensión izquierda derecha, respecto de electores que se identifican o simpatizan otros partidos o que no se identifican con ninguno.

Figura 8.9: Voto Ideológico, Polarización e Identificación Partidaria



8.4. Balance sobre el Voto Ideológico en América Latina

Los resultados del análisis empírico de la importancia del voto ideológico en los países de América Latina considerados en este estudio muestran que, controlando por otros factores, la

dimensión izquierda derecha y la evaluación de la distancia entre los electores y los partidos en este eje es un elemento que tiene un peso en la decisión electoral.

Sin embargo, este efecto está de alguna manera condicionado por la forma en que los partidos políticos logran diferenciarse entre sí en términos programáticos o ideológicos, y que ello pueda ser traducido en un eje izquierda - derecha. En aquellos países donde los partidos políticos se distinguen más claramente en esos términos, se encuentra un porcentaje más alto de electores que es capaz de utilizar la dimensión izquierda derecha para clasificarse a sí mismos y a los partidos.

Además, para este grupo de “electores competentes”, la utilidad espacial de la dimensión izquierda derecha resulta ser mayor a la hora de definir tanto sus preferencias políticas como su voto. De los casos analizados, Chile representa mejor esta situación. En el otro extremo se ubica Brasil, siendo México y Perú casos intermedios.

Más allá de las diferencias entre países, también se aprecian diferencias al interior de un mismo país entre distintas elecciones. Como se vio en el análisis de la correlación nominal entre la posición izquierda - derecha del elector y su voto, los niveles de asociación entre estas variables se incrementan conforme los partidos políticos muestran mayores niveles de polarización ideológica (evaluada por expertos) en distintas elecciones. De ahí que en la “activación” de la dimensión izquierda - derecha como mecanismo de evaluación de la oferta política por parte del votante también intervienen las particularidades de cada campaña y coyuntura electoral específica.

Estos resultados de alguna forma refuerzan las teorías espaciales acerca de la racionalidad del elector que fueron inicialmente propuestas en el clásico texto de Downs (1957), en el sentido de que los electores son capaces de evaluar la oferta política y jerarquizarla en función de sus preferencias en una dimensión como la de izquierda - derecha, especialmente cuando no tienen marcadas identificaciones o simpatías partidarias. Sin embargo, el contenido del eje izquierda derecha depende de cómo los partidos políticos estructuran la oferta electoral en una sociedad y en un momento dado. Si logran diferenciarse claramente en esos términos, ellos tendrán mayor importancia para el elector.

¿Qué sucede cuando esta dimensión es poco relevante o los partidos no se han diferenciado lo suficiente en términos de derecha e izquierda? En estos casos el elector puede recurrir a otros atajos cognitivos o mecanismos de heurística política, como la evaluación del desempeño del gobierno, que tiende a adquirir un peso mayor cuando el sistema electoral permite la reelección (como podría serlo en Brasil 2006 y Perú 2000), algo que examinaremos en el siguiente capítulo.

En otras circunstancias, como el caso de México, la identificación partidaria, construida sobre la base de lazos más permanentes entre partidos y determinados sectores de la sociedad, podría resultar un factor de mayor relevancia.

En un contexto donde la identificación partidaria viene declinando en varios países, la capacidad del elector para evaluar la oferta política y el desempeño de los actores políticos en responsabilidades gubernamentales adquiere cada vez mayor relevancia al momento de la decisión electoral. Ello supone que, por lo general, el electorado tiene un comportamiento racional y utiliza, en la medida de sus capacidades y su nivel de interés, la información que tiene a su disposición para hacer sus evaluaciones políticas en función de sus preferencias políticas o programáticas. Un sistema de partidos claramente diferenciados entre sí le facilita al elector su trabajo de evaluación y puede hacer a una elección más significativa desde el punto de vista del ciudadano, ya que le permite traducir sus preferencias políticas en mandatos gubernamentales con mayor precisión.

Capítulo 9

Desempeño Gubernamental y Comportamiento Electoral

Como se mencionó en el capítulo 1, el “voto económico” es una de las variantes de los modelos racionales de explicación del comportamiento electoral. La hipótesis básica de esta variante es que el elector tenderá a votar en función de la utilidad percibida de su decisión, en este caso, relacionada con los beneficios económicos que puede obtener de la gestión gubernamental, en tal sentido el voto puede ser utilizado como un mecanismo para recompensar o castigar un buen o mal gobierno. Este simple postulado de “accountability vertical” es el que permite suponer que, en un sistema democrático, los partidos que compiten por los votos en una elección tenderán a ser responsables o sensibles ante las demandas de la ciudadanía, creando así incentivos para producir o generar políticas públicas destinadas a incrementar el bienestar general de la población en un país.

Por lo general, los mecanismos de heurística política inherentes al voto económico afectan más la probabilidad de votar o las preferencias por el partido de gobierno que por los de la oposición, es por ello que son las evaluaciones retrospectivas de corto plazo sobre el desempeño de gobierno, más que las expectativas acerca del manejo futuro de la economía, las que pesan más a la hora de evaluar la decisión de votar. Por otro lado, como señalan Lewis-Beck y Paldam (2000), el diseño institucional (sistema electoral y sistema de partidos) así como la coyuntura

específica propia a cada elección, son otros de los factores que afectan la relación entre la evaluación del desempeño del gobierno y el comportamiento electoral.

En este capítulo se hará un análisis de la relación entre la evaluación del desempeño del gobierno y el comportamiento de los electores en los casos seleccionados. En primer lugar se hará una descripción de la coyuntura económica que ha marcado las elecciones que estamos estudiando y cómo han evolucionado las percepciones de los electores respecto de la situación económica y el desempeño gubernamental, para ello se utilizará información de las encuestas del Latinobarómetro realizadas entre 1995-2015 en los países que forman parte de los casos de estudio (Corporación Latinobarómetro, 2015). Posteriormente se analizará la relación, a nivel individual, entre las percepciones acerca de la economía y la evaluación de la gestión presidencial a partir de las encuestas del Barómetro de las Américas del proyecto LAPOP de la Universidad de Vanderbilt en los cuatro países estudiados entre el 2004 y el 2012 (Latin American Public Opinion Project (LAPOP), 2015). Finalmente, se utilizarán los datos del proyecto CSES para evaluar el efecto que tiene la evaluación del desempeño del gobierno en las preferencias por los partidos políticos y el voto presidencial y parlamentario.

Como referencia, en el cuadro 9.1 se muestran los presidentes y partidos en ejercicio para los países estudiados entre 1997 y 2015.

Cuadro 9.1: Presidentes en los casos estudiados entre 1997 y 2015

Año	Brasil	Chile	México	Perú
1997	Cardoso - PSDB	Frei - Concert.	Zedillo - PRI	Fujimori
1998				
1999	Cardoso - PSDB			
2000		Lagos - Concert.		
2001			Fox - PAN	Toledo - PP(*)
2002				
2003	Lula - PT			
2004				
2005				
2006		Bachelet - Concert.		García - PAP
2007	Lula - PT		Calderón - PAN	
2008				
2009				
2010		Piñera - RN		
2011	Rousseff - PT			Humala - PNP
2012				
2013			Peña Nieto - PRI	
2014		Bachelet - Concert.		
2015	Rousseff - PT			

(*) Entre noviembre 2000 y Julio 2001 hubo un gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua

9.1. Economía y Opinión Pública

Las 15 elecciones en los cuatro países (Brasil, Chile, México y Perú) que se están estudiando en esta investigación abarcan un periodo que va desde 1997 (elección parlamentaria en México) hasta el 2011 (elecciones generales en Perú). Entre esos años es posible distinguir dos grandes etapas en la evolución económica de estos países. Las primeras elecciones analizadas (México 1997 y 2000; Chile 1999; Perú 2000 y 2001; y Brasil 2000) corresponden a un momento en que sus economías todavía venían sufriendo los efectos recesivos de las crisis financieras de la segunda mitad de la década de 1990.¹

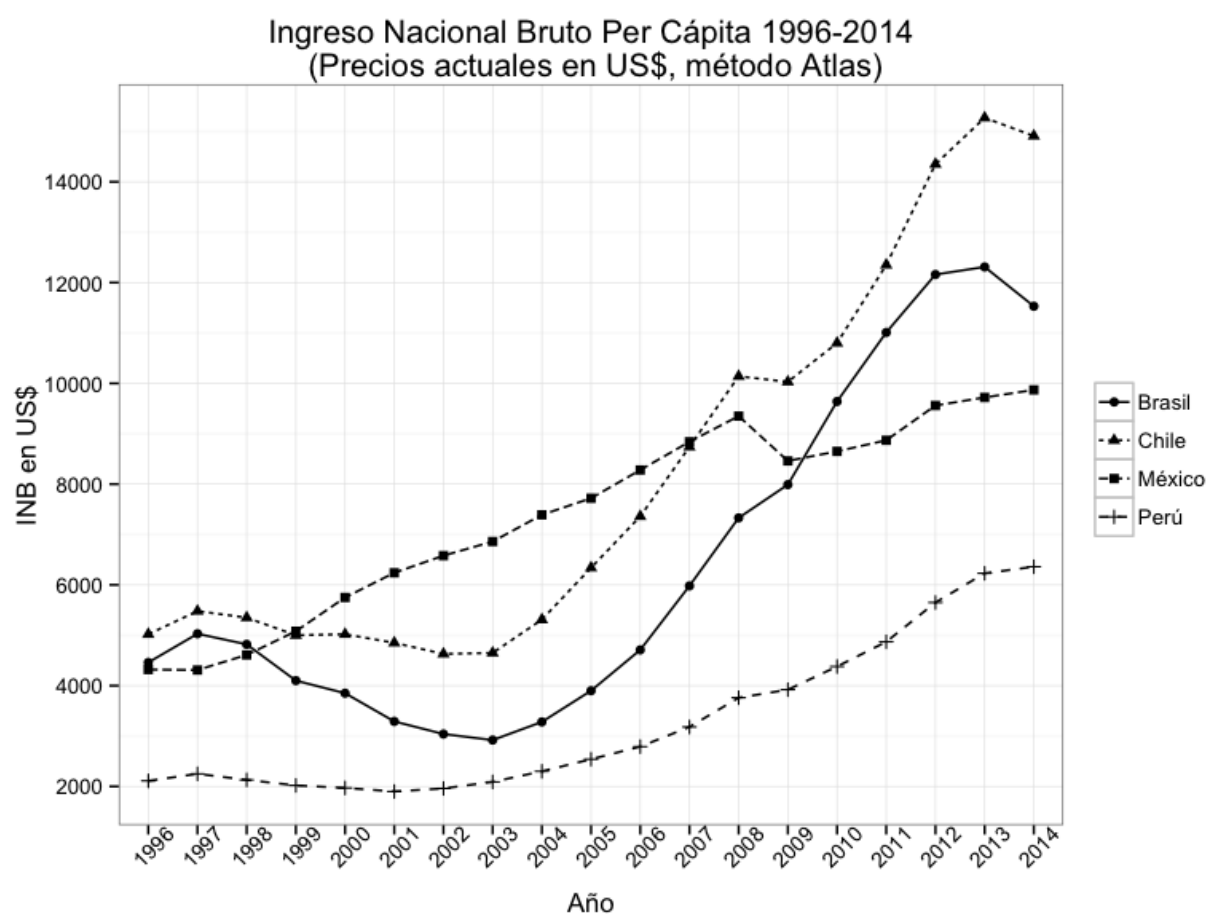
Como puede verse en los datos del Banco Mundial acerca del Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita (World Bank, 2016) reportados en las figuras 9.1 y 9.2, entre 1997 y el 2001-2003, Brasil, Chile y Perú venían experimentando un proceso de recesión económica, mientras que México venía recuperándose lentamente de la crisis de 1994 gracias a la ayuda otorgada por los Estados Unidos en el marco de su incorporación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La segunda etapa en la evolución de las economías de los casos de estudio se inicia aproximadamente hacia el 2002 y corresponde al ciclo de gran crecimiento económico experimentado por la mayoría de países exportadores de materias primas que se extendió por cerca de una década. Entre el 2003 y el 2013, el INB per cápita creció sostenidamente en todos los países, y de forma particularmente importante en Brasil, Chile y Perú. Como se aprecia en la figura 9.2, el tamaño de la economía en estos tres últimos países prácticamente se multiplicó por tres entre el 2000 y el 2013.

Si bien la economía Mexicana también creció de manera sostenida durante la misma década, lo hizo a tasas menos espectaculares que los demás países. Por otro lado, su mayor interdependencia con los EEUU hizo que la crisis mundial del 2008 afectara más su economía que las de los otros países y que la recuperación de su INB per cápita a niveles previos a la crisis tomara unos cuatro años más.

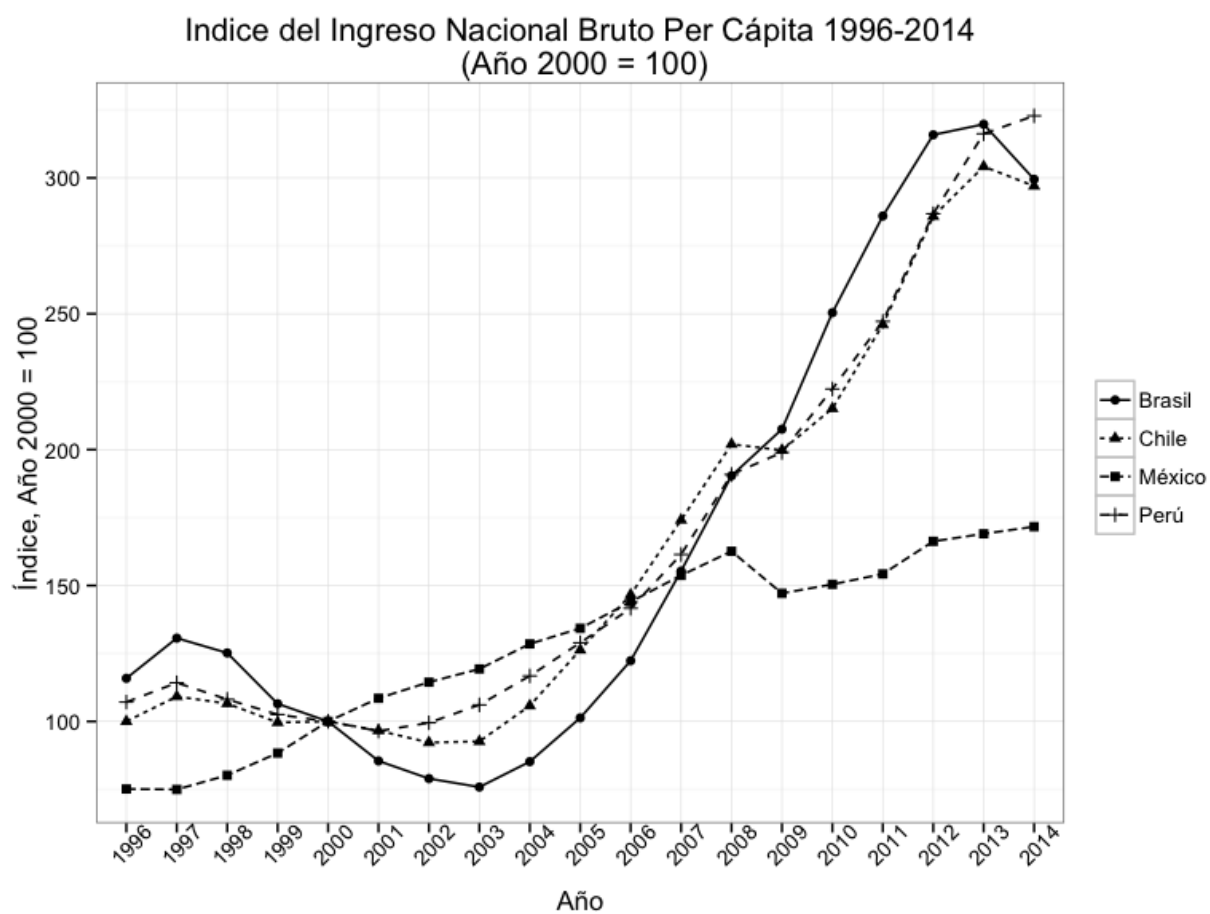
¹La crisis mexicana de 1994, que dio lugar a lo que se conoció como el “efecto Tequila”; la crisis en los mercados financieros asiáticos en 1997; la crisis económica en Rusia de 1998.

Figura 9.1: Ingreso Bruto Per Cápita 1996-2014



Fuente: World Bank, 2016. Elaboración propia

Figura 9.2: Crecimiento Económico: Índice del Ingreso Bruto Per Cápita 1996-2014



Fuente: World Bank, 2016. Elaboración propia

¿Hasta qué punto la opinión pública percibió estos cambios económicos? Entre el 1995 y el 2015 la encuesta del Latinobarómetro² incluyó en su cuestionario la clásica pregunta de evaluación de la economía.³ En la figura 9.3 se muestra el porcentaje de personas que respondieron que la situación económica era buena o muy buena, según año y país. Como puede verse, en Brasil, Chile y Perú estos porcentajes se incrementan de manera significativa luego del 2005, coincidiendo en cierta medida con el boom económico experimentado por sus respectivas economías. En el caso de México, la evaluación que tiene la opinión pública muestra más altibajos, y luego de la crisis del 2008 el porcentaje de personas que considera que la situación económica es buena o muy buena se mantiene sin mayores cambios alrededor del 10 %, lo que de alguna manera puede estar relacionado con el lento proceso de recuperación de la economía mexicana, como se vio en la figura 9.2.

Otro elemento que resulta interesante observar es que, en comparación con Chile y Brasil, el porcentaje de peruanos que evalúa su economía de manera positiva tiende a ser bastante menor, especialmente entre el 2005 y el 2010, a pesar que los ritmos de crecimiento económico de los tres países eran similares. Es probable que estas diferencias estén relacionadas con el tipo de política redistributiva implementada por los distintos países en contextos de crecimiento económico. Los gobiernos de tendencia de izquierda o centro izquierda de Brasil (Lula 2002-2010) y Bachelet (2006-2010) pueden haber sido más eficaces en vincular el crecimiento económico con una mejora de las condiciones sociales de la población que el gobierno de tendencia de centro derecha de Alan García (2006-2011).

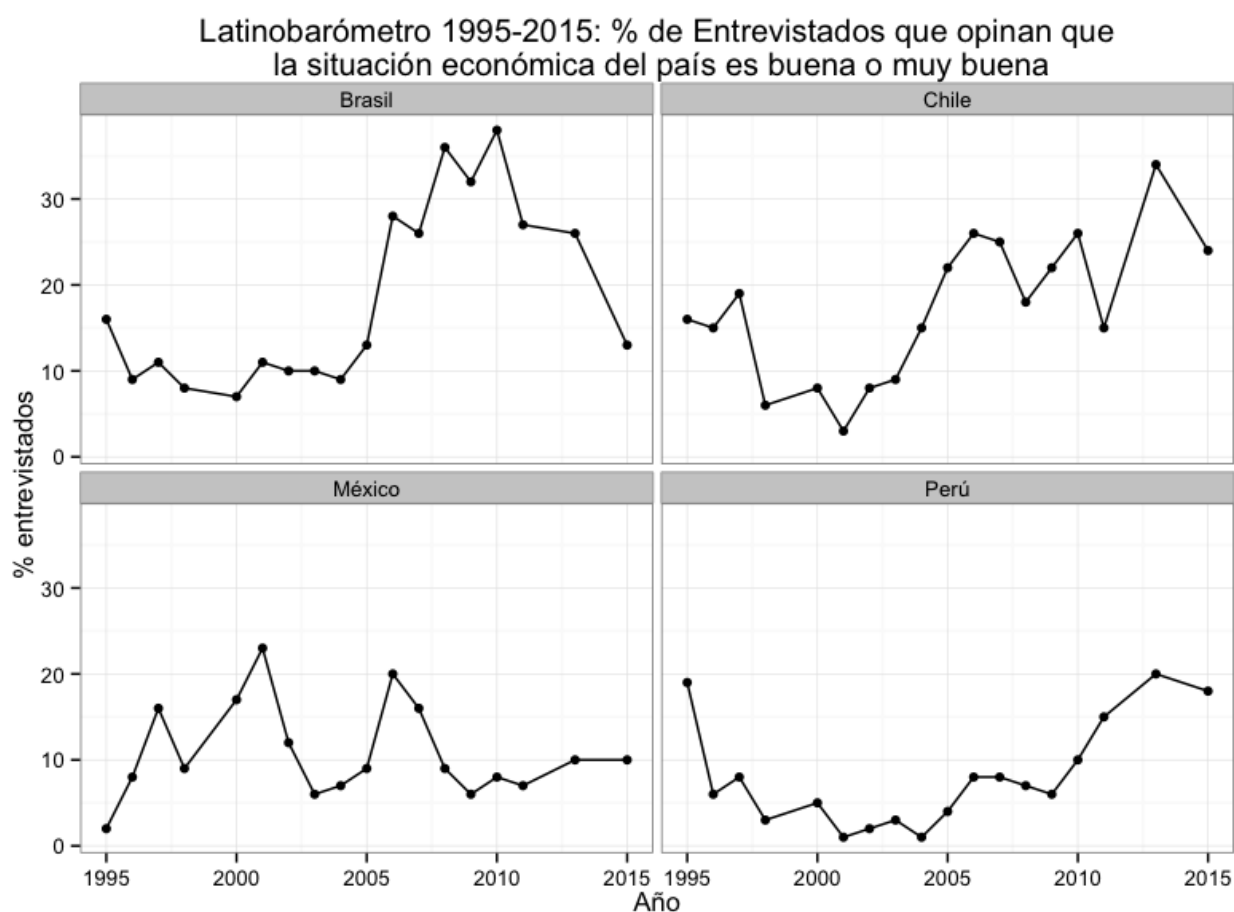
En la figura 9.4 se muestra la evolución de la aprobación presidencial entre el 2002 y el 2015 según las encuestas del Latinobarómetro en los cuatro países estudiados.⁴ En líneas generales la tendencia de la aprobación presidencial sigue la de la evaluación positiva de la economía, aunque los altibajos resultan ser más marcados en el Perú, donde los picos observados (2006 y 2011) corresponden al inicio de los nuevos gobiernos de García y Humala respectivamente.

²Al respecto de las fechas de aplicación, es necesario indicar que el Latinobarómetro no aplicó encuestas en 1999, 2012 y 2014.

³El fraseo de la pregunta es: “¿Cómo calificaría la situación económica actual del país? ¿Diría usted que es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?”

⁴El Latinobarómetro registra este indicador recién a partir del 2002.

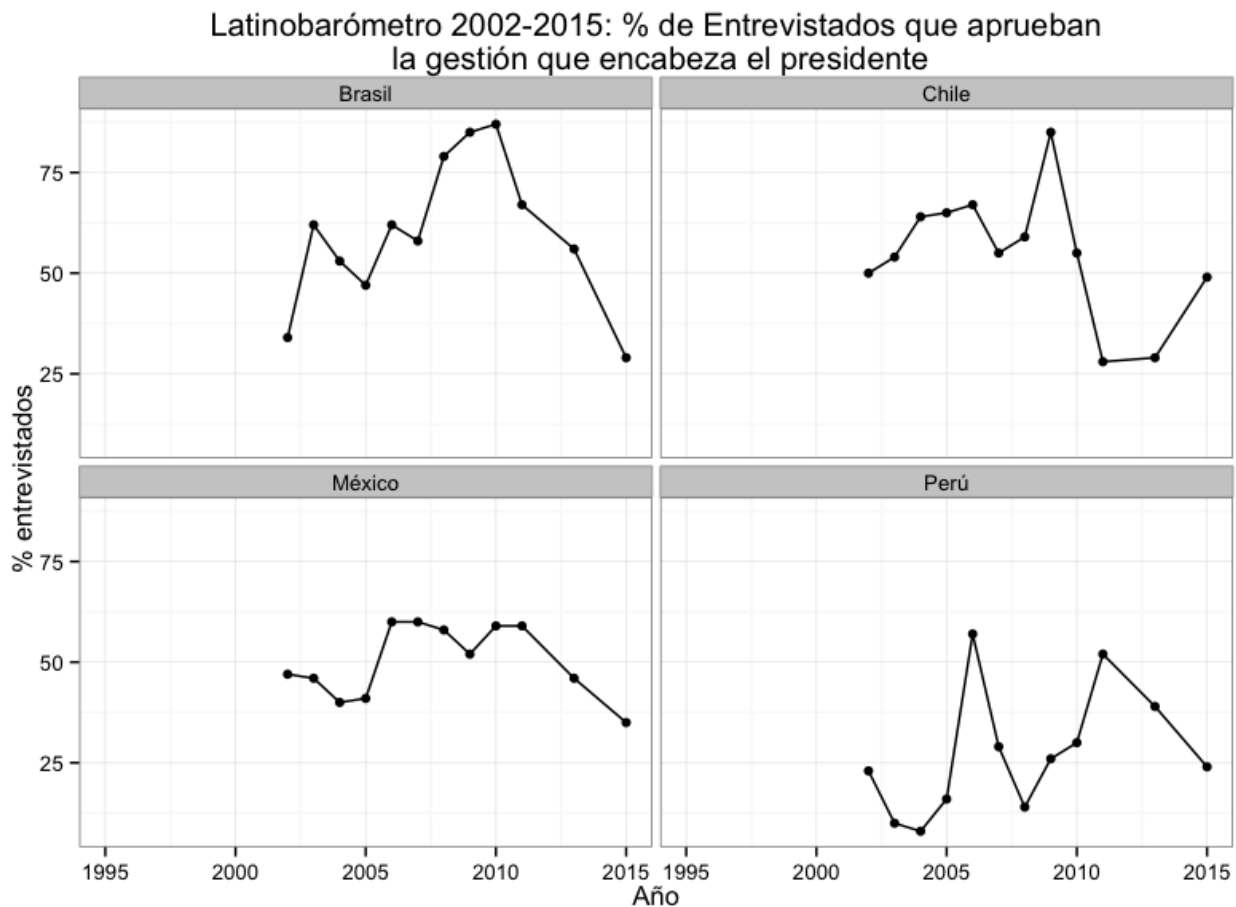
Figura 9.3: Opinión sobre la Situación Económica 2002-2015



Fuente: Corporación Latinobarómetro, 2016. Elaboración propia. No se consignan datos para 1999, 2012 y 2014 puesto que la encuesta no se aplicó en esos años.

Cabe precisar que el Latinobarómetro se ejecuta en el segundo semestre del año, lo que en los casos peruanos del 2006 y 2011 coincide con el periodo de “luna de miel” de los nuevos presidentes.

Figura 9.4: Aprobación Presidencial 2002-2015

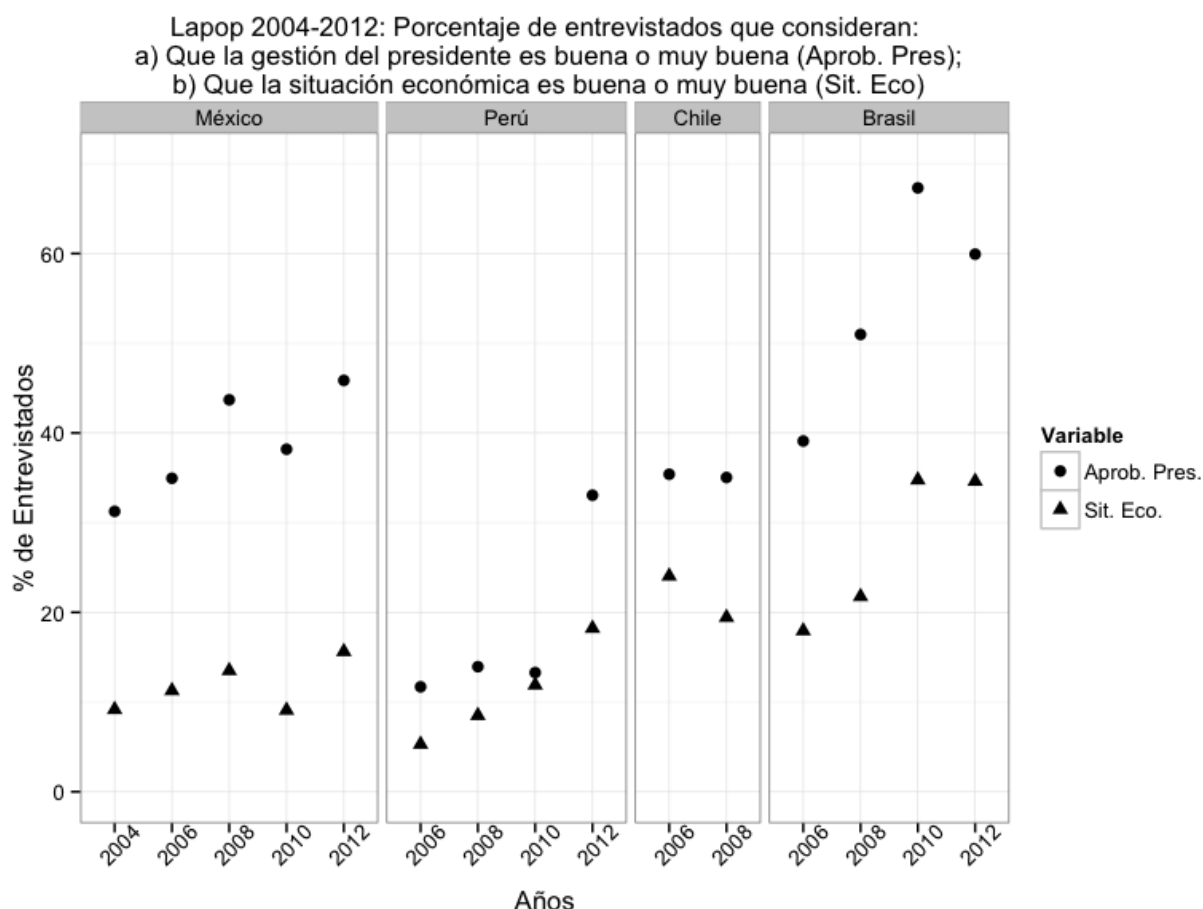


Fuente: Corporación Latinobarómetro, 2016. Elaboración propia

La información de las encuestas del Latinobarómetro parecen sugerir una correlación entre la evolución “real” de la economía (medida a partir del cambio en el INB per cápita), las percepciones de la opinión pública sobre la situación económica y la evaluación de la gestión gubernamental. Con la finalidad de profundizar en el análisis de estas conexiones se han utilizado los datos del Barómetro de las Américas de LAPOP realizadas entre el 2004 y el 2012. En dicha encuesta se incluyen las preguntas de evaluación de la situación económica y del trabajo

que realiza el Presidente,⁵ las alternativas de respuesta en ambas preguntas son similares: muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. En la figura 9.5 se muestra el porcentaje de entrevistados que respondieron evaluaron como muy buena o buena la gestión presidencial, por un lado, y la situación de la economía, por el otro.

Figura 9.5: LAPOP 2004-2012: Evaluación de la Economía y de la Gestión Presidencial



Fuente: El Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), www.LapopSurveys.org. Elaboración propia.

Como puede apreciarse, para los mismos años, en Chile y en Brasil, tanto la evaluación de la economía como la de la gestión presidencial son más positivas que en el Perú,⁶ lo que coincide con la tendencia observada en los datos del Latinobarómetro presentados previamente. En México los presidentes resultan ser mejor evaluados que en el Perú, mientras que las

⁵Las preguntas específicas son: “¿Cómo calificaría la situación económica del país?” y “Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el Presidente XXXX es...?”

⁶En la encuesta del 2006, el presidente evaluado en el Perú fue Alejandro Toledo, quien culminó su mandato a mediados de ese año.

percepciones acerca de la situación económica son similares en ambos países a pesar que las tasas de crecimiento económico registradas por el Perú hayan sido superiores a las de México en los años en que se aplicaron las encuestas. Estos elementos refuerzan la idea que, además del crecimiento económico, el tipo de políticas redistributivas que aplican los países puede estar también relacionado con la manera en que los ciudadanos evalúan la economía y el desempeño gubernamental.

Como un siguiente paso en el análisis, se calcularon modelos de regresión jerárquica de la evaluación presidencial, según la evaluación de la economía, controlando por variables sociodemográficas como sexo, edad y años de educación del entrevistado. Las categorías de respuesta de las variables de evaluación presidencial (APROBP) y de la situación económica (SITECO) fueron recodificadas del 0 al 4 (0 = muy mala; 4 = muy buena) para poder usar un modelo de regresión lineal. En el cuadro 9.2 se reporta en primer lugar los resultados de un modelo nulo donde no se ha considerado ninguna variable independientes, que servirá de base para evaluar el efecto de las variables independientes y el ajuste de los modelos jerárquicos. El modelo 1 considera como niveles jerárquicos los países y el año de la encuesta, ello permite tomar en cuenta el hecho que los valores correspondientes a la variable dependiente varían según cada país y año, independientemente de los demás factores considerados. Como puede apreciarse, el coeficiente correspondiente a la evaluación de la situación económica es positivo y estadísticamente significativo, lo que indica un efecto directo de las percepciones individuales acerca de la situación económica sobre la opinión que se tiene acerca del desempeño gubernamental.

En el modelo 2, se introduce como efecto aleatorio una interacción entre la evaluación de la situación económica y el año y país en que se realizó la encuesta, ello con la finalidad de estimar hasta qué punto el efecto de la evaluación de la economía sobre la evaluación presidencial varía según el país y su coyuntura política específica. De esta forma es posible calcular coeficientes específicos para cada país y cada año, los cuales se muestran en la figura 9.6. Como puede verse, a pesar de algunas pequeñas variaciones, en Brasil, Chile y México la opinión sobre la economía tiene efectos similares sobre la evaluación presidencial. En el caso de Perú, especialmente en los años de la gestión presidencial de Alan García en los que se aplicó la encuesta (2008 y

Cuadro 9.2: LAPOP 2004-2012: Estimación del Efecto de la Evaluación de la Situación Económica en la Aprobación Presidencial

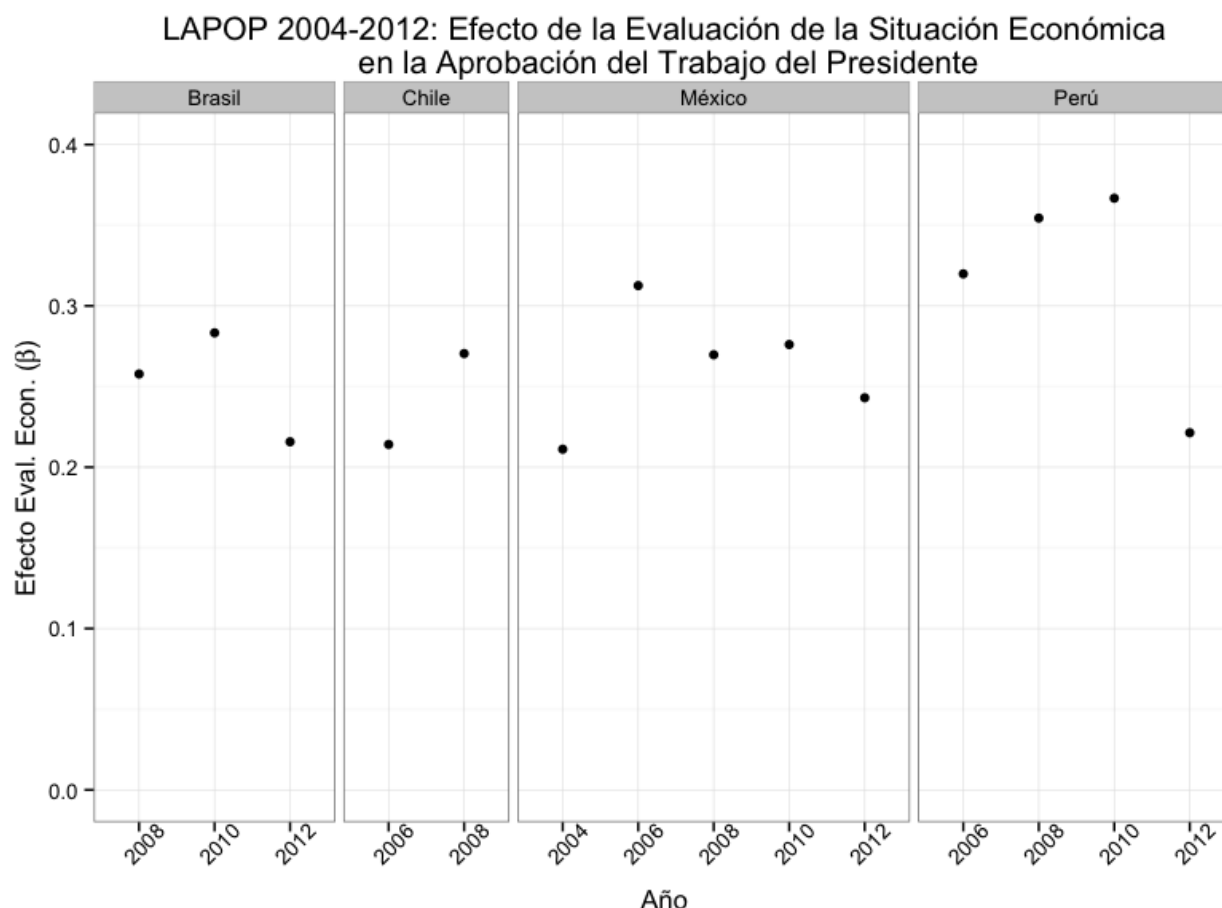
Modelos de Regresión Lineal Jerárquica
para Aprobación Presidencial (APROBP)

	(Nulo)	1	2
Efectos fijos			
Género = Femenino		0.050*** (0.011)	0.051*** (0.011)
Edad		0.001** (0.000)	0.001** (0.000)
Años de educación		-0.003 (0.001)	-0.003 (0.001)
Eval. Situación Económica (SITECO)		0.271*** (0.006)	0.273*** (0.016)
Constante	2.220 (0.081)	1.708*** (0.075)	1.708*** (0.091)
Efectos aleatorios			
σ^2 País-Año	0.091	0.068	0.104
σ^2 SITECO			0.003
No. de casos	21722	21722	21722
No. de grupos	14	14	14
Log Likelihood	-26850	-25992	-25971
Akaike Inf. Crit	53707	52053	52032
χ^2		1717.22***	41.29***

Notas: * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$. Errores estándar entre paréntesis.
Fuente: El Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), www.LapopSurveys.org. Elaboración propia.

2010), la percepción de la economía tenía efectos directos más importantes sobre la evaluación de la gestión presidencial que en los demás países.

Figura 9.6: LAPOP 2004-2012: Efecto estimado de la Evaluación de la Economía en la Opinión sobre la Gestión del Presidente



Fuente: El Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), www.LapopSurveys.org. Elaboración propia.

En todo caso, estos resultados confirman uno de los postulados centrales sobre las teorías del voto económico: las percepciones que tienen los individuos sobre la situación económica tienen efectos significativos sobre las evaluaciones políticas que ellos hacen acerca de desempeño del gobierno. A pesar de ligeras variaciones en su magnitud, que pueden estar asociadas a diferentes coyunturas o contextos institucionales, los efectos de las percepciones de la economía en la evaluación de los presidentes de los países estudiados son similares. La siguiente pregunta es cómo se traduce ello en decisiones políticas como el hecho de votar, que es otro de los

componentes que vinculan las teorías del voto económico con los procesos de “accountability vertical”.

9.2. Evaluación del Gobierno y Preferencias Electorales

Para analizar la relación entre la evaluación del desempeño del gobierno y las preferencias electorales se ha utilizado la información de las encuestas del CSES. En este análisis se ha considerado tres variables dependientes:

- PREFP: Nivel de preferencia de los partidos políticos: medida en una escala del 0 (nada) al 100 (mucho)
- Voto por el candidato del partido de gobierno en las elecciones presidenciales
- Voto por las lista parlamentaria del partido de gobierno en las elecciones parlamentarias

Las variables sobre voto son dicotómicas (votó / no votó), puesto que se asume que el voto económico tiene efectos principalmente al momento de evaluar la gestión del gobierno más que la de la oposición.

La principal variable independiente es la evaluación de la gestión del gobierno. En la serie de encuestas del CSES realizadas en los cuatro países que se están analizando, esta variable ha sido medida por dos tipos de preguntas en momentos diferentes. En las encuestas realizadas antes del 2002,⁷ la pregunta aplicada buscaba medir la percepción del estado de la economía en el país al momento de la elección: *“¿Qué piensa usted acerca de la situación económica de PAIS en estos días? ¿diría usted que la situación es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?”*. En las encuestas realizadas a partir del 2002,⁸ se preguntó directamente acerca del desempeño general del gobierno: *“Pensando en términos generales, ¿qué tan buen o que tan mal trabajo cree usted que ha hecho el presidente XXXX en los años que lleva de gobierno: muy buen trabajo, buen trabajo, mal trabajo o muy mal trabajo?”*. Si bien ambas preguntas no

⁷Chile 1999, México 1997 y 2000; Perú 2000 y 2001.

⁸Brasil 2002, 2006 y 2010; Chile 2005; México 2003, 2006 y 2009; Perú 2006 y 2011. En Chile 2009 no se aplicó esta pregunta.

son estrictamente comparables, para fines de este análisis se las ha considerado como un proxy para la evaluación del desempeño del gobierno al momento de la elección. En tal sentido se ha operacionalizado esta variable dicotomizando sus categorías: de muy bueno hasta regular por un lado; malo y muy malo por el otro lado. En el cuadro 9.3 se muestran los resultados del indicador elaborado de evaluación del desempeño del gobierno, asimismo se muestra el porcentaje reportado de votos por el partido de gobierno (según las encuestas del CSES) en las elecciones presidenciales y parlamentarias que se están analizando. Los presidentes en ejercicio en los periodos respectivos pueden verse en el cuadro 9.1.

Cuadro 9.3: Indicadores de Desempeño del Gobierno en los casos estudiados

CSES: Voto por Partido de Gobierno y Evaluación de su Desempeño

País	Elección	Voto reportado para el Partido de Gobierno (%)		Evaluación del Desempeño del Gobierno
		Presidente	Parlamento	Regular/Muy bueno (%)
Brasil	2002	21.9	7.0	50.6
	2006	66.7	4.3	76.3
	2010	48.3	4.8	93.6
Chile	1999	50.2	sd	66.1
	2005	46.7	42.6	80.3
	2009	29.1	27.0	sd
México	1997	nc	28.8	48.3
	2000	27.8	29.6	58.5
	2003	nc	29.6	59.9
	2006	39.5	36.8	76.7
	2009	nc	25.8	74.1
Perú	2000	44.1	sd	55.9
	2001	np	sd	30.8
	2006	np	2.2	37.2
	2011	np	3.8	44.2

Notas: sd: Sin datos; nc: No corresponde; np: Partido de gobierno no presentó candidato presidencial

Fuente de los datos: CSES. Elaboración propia.

Observando el cuadro 9.3, llama la atención el caso de Perú, donde el partido de gobierno no presentó candidato presidencial en las elecciones del 2001, 2006 y 2011. En el 2001 estaba en funciones el gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua quien, como presidente del Congreso, asumió la presidencia de la República en noviembre del 2000 con la finalidad de dirigir al país mientras se convocaban nuevas elecciones generales ante declaratoria de

vacancia del presidente Fujimori y la renuncia de sus dos vicepresidentes. En el 2006, luego de anunciar dos potenciales candidatos presidenciales, Perú Posible, el partido del entonces presidente Alejandro Toledo, decidió no postular candidaturas presidenciales y sólo presentar su lista parlamentaria, la cual tuvo una muy baja votación y sólo logró alcanzar dos escaños en el congreso. Algo similar ocurrió en las elecciones del 2011, cuando el Partido Aprista Peruano del presidente Alan García no logró ponerse de acuerdo en una candidatura presidencial y sólo presentó su lista parlamentaria, obteniendo tan solo cuatro escaños en el congreso. Como se aprecia, desde el fin del fujimorismo, en el Perú los partidos en el gobierno han tenido muy poco éxito en la siguiente elección.

En el caso de Brasil se aprecia que hay una gran distancia en el voto reportado por la lista presidencial del partido de gobierno y su respectiva lista parlamentaria. Como se mencionó en el capítulo correspondiente, si bien la competencia presidencial en Brasil ha confrontado por lo general dos partidos principales (el PT y el PSDB), en el caso de las elecciones parlamentarias el número de listas que compiten es muy alto y el sistema electoral genera una gran dispersión del voto entre varios partidos, muchos de los cuales tienen su base en maquinarias políticas regionales y locales. En México y Chile, hay una mayor correspondencia entre el porcentaje de votos obtenidos por los partidos en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Si se observa el indicador de evaluación del desempeño, salvo para el caso de las elecciones presidenciales del 2000, en el Perú se registran los niveles más bajos en comparación con los demás países. Ello es consistente con lo señalado en los datos de las encuestas de opinión pública del Latinobarómetro y del Barómetro de las Américas analizados en la sección precedente, lo que apunta a las dificultades que tiene el sistema político peruano para convertir un ciclo importante de crecimiento económico en capital político y legitimidad (especialmente popularidad del gobierno).

El siguiente paso del análisis consiste en calcular modelos de regresión jerárquica para estimar el efecto de la evaluación del desempeño en las variables dependientes (preferencia por partidos y voto por partido de gobierno) controlando cada elección y considerando el

efecto de otras variables independientes, específicamente la utilidad izquierda - derecha y la identificación partidaria.

El primer modelo elaborado es un modelo jerárquico lineal, en este caso la variable dependiente es el nivel de preferencia por el partido político. Las variables independientes son:

- UTIL: Utilidad espacial de proximidad ideológica (véase la sección 8.3.2 del capítulo 8.)
- IDP: Identificación partidaria, representada por dos variables dummy (IDP - Mismo partido; IDP - Otro partido) (véase la sección: 8.3.2 del capítulo 8.)
- DESEMP: Evaluación del desempeño del partido de gobierno como variable dicotómica (Regular - Muy bueno / Malo - Muy Malo)
- PGOB: Variable dummy que indica que el partido cuya preferencia se evalúa es el partido de gobierno.

La base de datos para calcular los modelos jerárquicos ha sido acondicionada en la misma forma descrita en la sección 8.3.2 del capítulo 8.

El modelo base puede expresarse mediante la siguiente ecuación:

$$PREFP = \beta_0 + \beta_1 UTIL + \beta_2 IDP_m + \beta_3 IDP_o + \beta_4 DESEMP + \beta_5 PGOB + \beta_6 DESEMP * PGOB + e \quad (9.1)$$

Se observa que en la ecuación se introduce un término interactivo para estimar el efecto de la evaluación del desempeño cuando el partido cuya preferencia se está analizando (PREFP) es el partido de gobierno (DESEMP*PGOB).

La regresión jerárquica lineal tiene 13 niveles, uno por cada elección, se excluyen las elecciones de Chile 2009 por falta de datos para DESEMP, así como las de Perú 2001 puesto que se trata de una elección posterior a un gobierno de transición que duró menos de un año. Como efectos aleatorios se considera cada elección para la constante, la variable DESEMP y PGOB, así como para DESEMP*PGOB. Ello permitirá calcular un coeficiente específico para el efecto de DESEMP en la preferencia por el partido de gobierno en cada una de las 13 elecciones que constituyen los niveles del modelo jerárquico.

En la tabla 9.4 se muestran los resultados del análisis de regresión jerárquica para el grado de preferencia por los partidos políticos. Se han calculado tres modelos, uno nulo que sirve de base para para estimar el ajuste de los modelos. El modelo 1 sólo incluye la elección como efecto aleatorios, mientras que en el modelo 2 se incluyen los demás efectos aleatorios.

Cuadro 9.4: Estimación del Efecto de Evaluación del Desempeño del Gobierno en Preferencia por Partidos, controlando por Elección

Modelos de Regresión Lineal Jerárquica para Preferencia por Partidos Políticos - PREFP			
	(Nulo)	1	2
Efectos fijos			
UTIL		0.161*** (0.006)	0.159*** (0.006)
IDP Mismo		37.139*** (0.342)	36.567*** (0.342)
IDP Otro		-4.543*** (0.224)	-4.242*** (0.223)
Desempeño Regular/Bueno (DESEMP)		2.518*** (0.245)	2.339 (1.396)
Evalúa Partido de Gobierno (PGOB)		-8.507*** (0.419)	-10.332*** (1.949)
DESEMP*PGOB		14.247*** (0.527)	15.996*** (3.284)
Constante	43.021 *** (1.268)	41.307*** (1.301)	41.316*** (1.366)
Efectos aleatorios			
σ^2 Elección		21.250	23.250
σ^2 DESEMP			24.300
σ^2 PGOB			45.860
σ^2 DESEMP*PGOB			135.100
No. de casos	15,981	15,981	15,981
No. de grupos	13	13	13
Log Likelihood	-416,588.0	-407,619.0	-406,946.0
Akaike Inf. Crit	833,181.0	815,256.0	813,927.0
χ^2		17,937.4***	1,346.9***

Notas: * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$. Errores estándar entre paréntesis.
Se excluye Chile 2009 y Perú 2001.

Como se aprecia en el modelo 1, tanto la función de utilidad como la identificación partidaria mantienen los efectos esperados y que fueron discutidos en el capítulo 8. Respecto del coeficiente negativo para PGOB, lo que se aprecia es que cuando el entrevistado califica su nivel de preferencia por un partido político, este suele ser más bajo cuando se califica al partido de gobierno que a los partidos de oposición. Lo que interesa en este punto es ver que una evaluación positiva del desempeño del gobierno tiende a incrementar la preferencia por

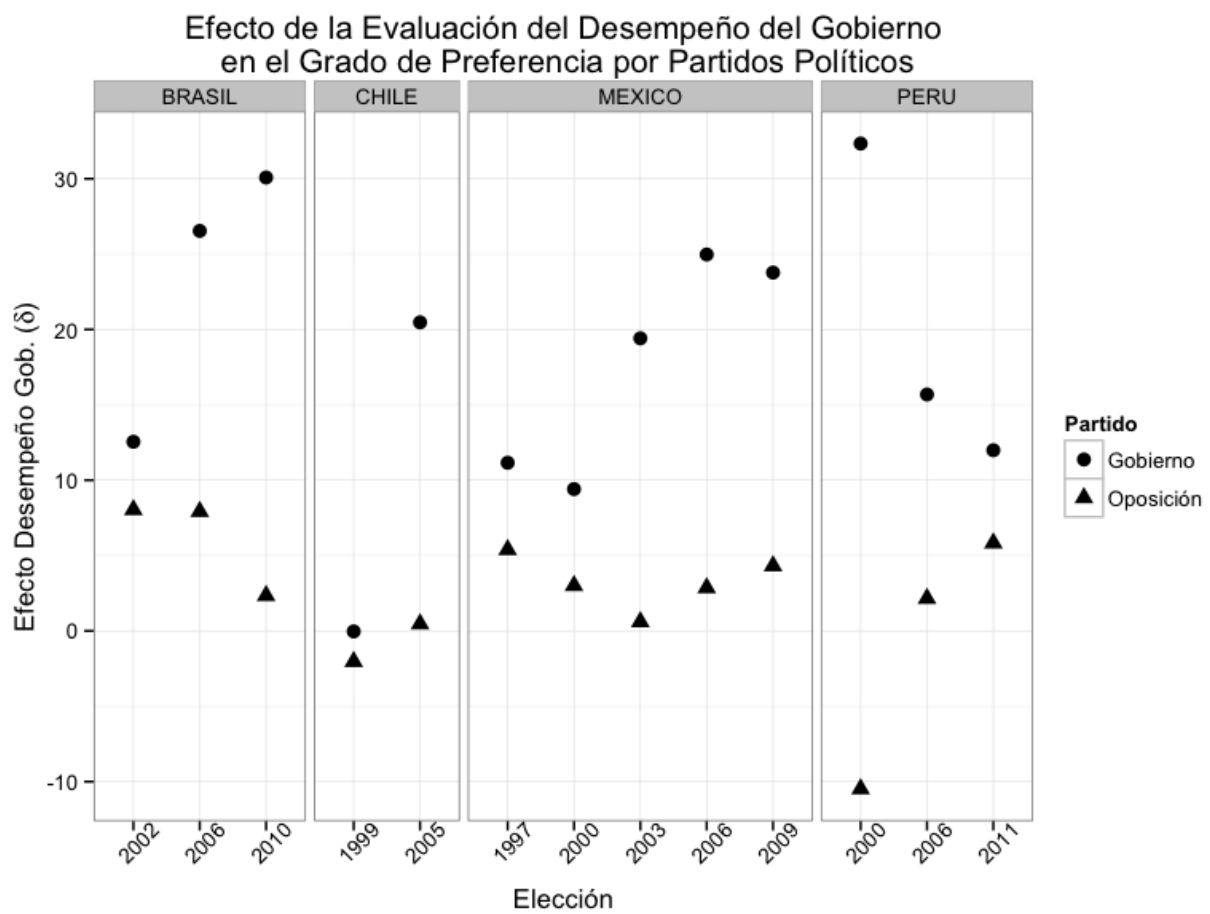
los partidos políticos, pero lo más relevante es observar lo que ocurre cuando se introduce el término interactivo (DESEMP*PJOB): cuando se califica el nivel de preferencia por el partido de gobierno, una evaluación positiva del desempeño del gobierno tiende a incrementar en poco más de 14 %⁹ el nivel de preferencia por el partido de gobierno. Ello refuerza la conclusión que una valoración positiva del desempeño en el gobierno se traduce en un incremento significativo de las preferencias por el partido de gobierno.

La diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2 radica en la inclusión de las variables DESEMP, PJOB y la interacción entre ambas (DESEMP*PJOB) como efectos aleatorios. Ello permite calcular un efecto de la evaluación del desempeño del gobierno en la preferencia por los partidos en cada elección, que en este caso llamaremos coeficiente δ . En la figura 9.8 se muestran los valores de δ en los casos estudiados, como puede verse se ha calculado un δ para la preferencia por el partido de gobierno y otro para los partidos de oposición. Por lo general los coeficientes correspondientes a las preferencias por el partido de gobierno son positivos y mantienen una distancia importante respecto de los correspondientes a la oposición.

En el caso de Perú llama la atención el caso de las elecciones del 2000 (en las que Fujimori se presentó a su segunda reelección), donde el efecto de la evaluación del desempeño del gobierno sobre el nivel de preferencias por el partido de gobierno, así como la diferencia respecto de la oposición, es el mayor de todos los casos analizados. Los resultados observados para δ en ese año muestran el grado de polarización que tuvieron esas elecciones y la importancia que jugó en ese contexto la evaluación del desempeño del gobierno, tanto a favor como en contra de las preferencias por Fujimori como por la oposición, que esa oportunidad estuvo sobre todo encabezada por Alejandro Toledo. Debe recordarse que las elecciones presidenciales peruanas del 2000 también estuvieron marcadas por un contexto de recesión económica, lo que hacía más relevante aún la evaluación del desempeño gubernamental. Como ha sido indicado más arriba en el texto, en el caso de la encuesta CSES peruana del 2000, el indicador de evaluación de desempeño gubernamental se refería específicamente al estado de la economía.

⁹Recordar que la variable dependiente se expresa en una escala de 0 a 100.

Figura 9.7: Desempeño del Gobierno y Grado de Preferencia por Partidos



En el cuadro 9.5 se presentan los resultados de modelos de regresión logística jerárquica para el voto presidencial por el partido de gobierno. En este caso la variable dependiente es dicotómica (votó o no votó por el partido de gobierno para presidente) y los efectos de la evaluación del desempeño del gobierno en el voto presidencial (DESEMP) se controlan por la identificación partidaria (IDP) como efecto fijo. Como puede observarse, el coeficiente correspondiente a DESEMP es positivo en los modelos 2 y 3, lo que confirma que una mejor evaluación del desempeño gubernamental tiene una influencia directa en mejorar las probabilidades de votar por la candidatura presidencial del partido de gobierno.

Cuadro 9.5: Estimación del Efecto de Evaluación del Desempeño del Gobierno en El Voto por Presidente, controlando por Elección

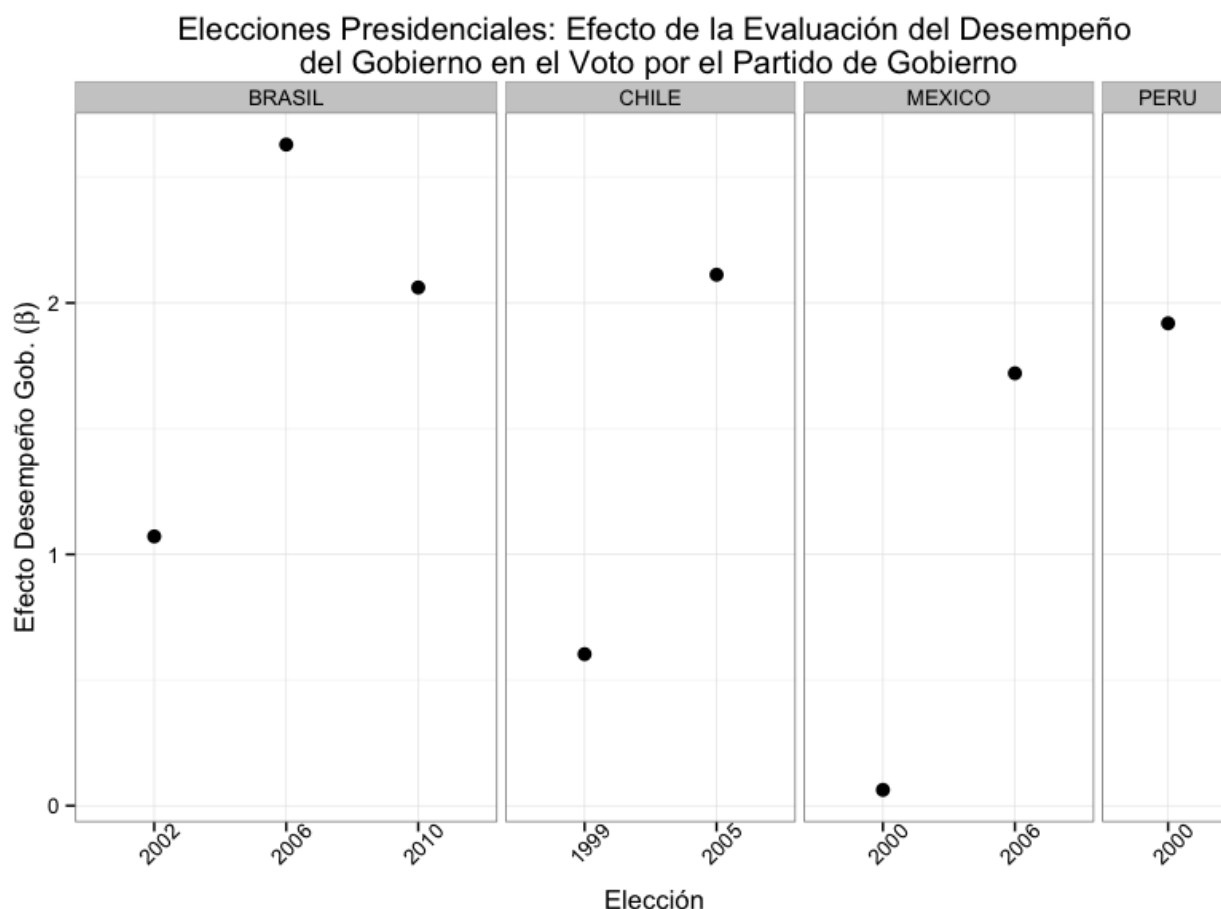
Modelos de Regresión Jerárquica - Binomial para Voto Presidencial			
	(Nulo)	1	2
Efectos fijos			
IDP Partido Gobierno (PGOB)		1.970*** (0.066)	1.925*** (0.066)
IDP Diferente PGOB		-1.206*** (0.063)	-1.215*** (0.064)
Desempeño Regular/Bueno (DESEMP)		1.269*** (0.060)	1.532*** (0.307)
Constante	-0.288 (0.202)	-1.347*** (0.182)	-1.589*** (0.210)
Efectos aleatorios			
σ^2 Elección	0.324	0.239	0.305
σ^2 DESEMP			0.704
No. de casos	10565	10565	10565
No. de grupos	8	8	8
Log Likelihood	-6778.8	-5264.3	-5184.0
Akaike Inf. Crit	13561.6	10538.6	10382.0
χ^2		3028.97***	160.68***

Notas: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. Errores estándar entre paréntesis.
Se excluye Chile 2009 y Perú 2001-2011

Al igual que en los casos anteriores, la regresión jerárquica mostrada en el cuadro 9.5, al considerar cada elección presidencial como un grupo o nivel, nos permite estimar los efectos de la evaluación del desempeño en cada elección (modelo 2). En este análisis se está trabajando sólo con 8 elecciones presidenciales ya que se excluyen los casos de Chile 2009 por no contar con información para DESEMP, y los de Perú posteriores al 2000 ya que en esas elecciones

el partido de gobierno no presentó candidatura presidencial. En la figura 9.8 se muestran los efectos de DESEMP sobre el voto presidencial en cada elección.

Figura 9.8: Desempeño del Gobierno y Voto Presidencial



Como se aprecia en el gráfico, el efecto más importante de DESEMP en Brasil ocurre en las elecciones del 2006, que corresponden a la reelección de Lula. En el caso de Perú 2000, donde también fue reelegido Fujimori se aprecian efectos bastante importantes. El único caso donde la evaluación del desempeño del gobierno no parece haber tenido efectos significativos sobre el voto presidencial por el partido de gobierno es el de México 2000. Como se ha indicado en secciones precedentes, las elecciones mexicanas del 2000 marcaron un momento central de la transición democrática en ese país, puesto que significaron el final de la hegemonía del PRI y la consolidación de un sistema electoral que garantice elecciones justas y competitivas. En tal sentido, la apuesta por la renovación política parece haber tenido un rol más importante en

esta elección que la evaluación del desempeño del gobierno en el ámbito económico (en ese año el indicador de DESEMP de la encuesta CSES en México se refería específicamente al estado de la economía).

En el cuadro 9.6 y la figura 9.9 se muestran los resultados de modelos de regresión logística jerárquica similares a los del cuadro 9.5, pero esta vez referidos al voto por la lista parlamentaria del partido de gobierno.

Cuadro 9.6: Estimación del Efecto de Evaluación del Desempeño del Gobierno en El Voto para Parlamento, controlando por Elección

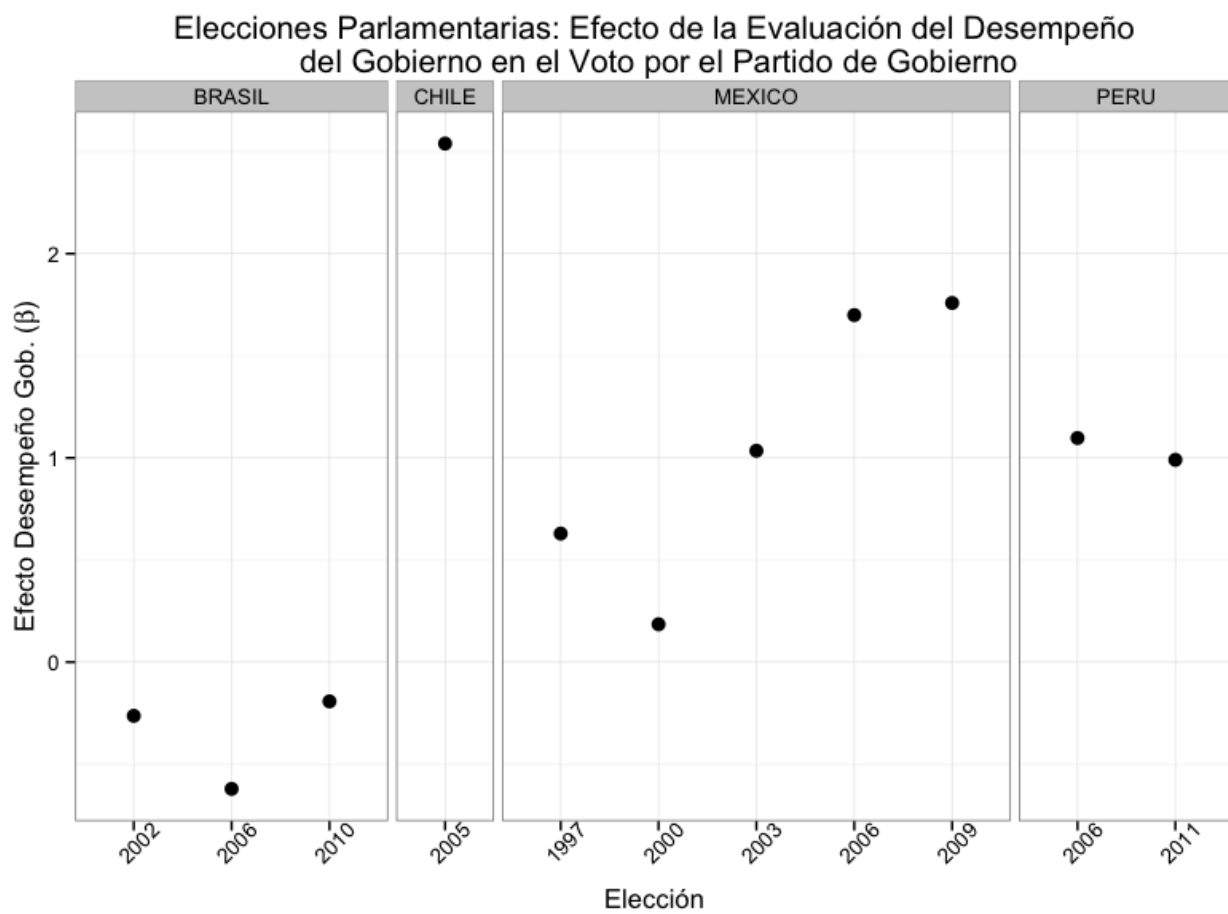
Modelos de Regresión Jerárquica - Binomial
para Voto al Parlamento

	(Nulo)	1	2
Efectos fijos			
IDP Partido Gobierno (PJOB)		2.254*** (0.066)	2.251*** (0.067)
IDP Diferente PJOB		-0.793*** (0.060)	-0.826*** (0.061)
Desempeño Regular/Bueno (DESEMP)		0.990*** (0.061)	0.818** (0.305)
Constante	-1.942*** (0.338)	-2.777*** (0.423)	-2.716** (0.298)
Efectos aleatorios			
σ^2 Elección	1.257	1.961	0.881
σ^2 DESEMP			0.931
No. de casos	16127	16127	16127
No. de grupos	11	11	11
Log Likelihood	-6429.4	-5285.1	-5210.7
Akaike Inf. Crit	12862.9	10580.1	10435.4
χ^2		2781.0***	148.72***

Notas: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. Errores estándar entre paréntesis.
Se excluye Chile 2009 y Perú 2000-2001

Como se aprecia, estos últimos resultados son consistentes con lo visto en el caso del voto presidencial: una evaluación positiva del desempeño del gobierno incrementa las probabilidades de votar por la lista parlamentaria del partido de gobierno. Sin embargo, también puede verse que el efecto de DESEMP sobre el voto parlamentario ($\beta=0.818$ en el modelo 2 del cuadro 9.6) es poco más de la mitad que el efecto sobre el voto presidencial ($\beta=1.532$ en el modelo equivalente del cuadro 9.5). Por otro lado, llama la atención los resultados para Brasil, donde el efecto de DESEMP sobre el voto parlamentario del partido de gobierno es casi nulo o negativo.

Figura 9.9: Desempeño del Gobierno y Voto por Parlamento



9.3. “Accountability vertical” y comportamiento electoral

Los resultados presentados en este capítulo son consistentes con los postulados generales de los modelos del voto económico: las percepciones acerca del estado de la economía tienen efectos directos en la evaluación positiva o negativa de los gobiernos, y estas a su vez repercuten en las preferencias políticas y la disposición de votar por los candidatos de los partidos en el gobierno o de la oposición. De esta manera, las elecciones sirven como un mecanismo para recompensar una buena gestión gubernamental o para castigar una mala, generando los incentivos necesarios para que los actores políticos (partidos y candidatos) respondan a las demandas o preferencias ciudadanas mediante la formulación y ejecución de políticas públicas. Este conjunto de relaciones entre desempeño, percepciones y preferencias ciudadanas y comportamientos políticos y electorales sustentan el funcionamiento de mecanismos de “accountability vertical” en las democracias contemporáneas.

Sin embargo, para que estos mecanismos funcionen como incentivos para generar lo que Sartori (1992) ha llamado “gobiernos que responden”, es necesario considerar también las dimensiones institucionales y coyunturales en las cuales los ciudadanos toman sus decisiones y los partidos presentan su oferta electoral. Los principales factores institucionales que hay que tomar en cuenta son: el tipo de régimen de gobierno; el grado de consolidación e institucionalización del sistema de partidos; y las reglas del sistema electoral, especialmente la posibilidad de reelección presidencial y la existencia o no de elecciones parlamentarias intermedias.

Todos los casos analizados corresponden a regímenes presidencialistas, por ello los mecanismos que vinculan la evaluación del gobierno con el voto tienen mayores efectos sobre la elección presidencial que sobre la elección parlamentaria. En todos los casos, las elecciones presidenciales coinciden con elecciones parlamentarias y se espera que la competencia por encabezar el ejecutivo defina el tenor de la campaña electoral. Sin embargo, la consolidación e institucionalización del sistema de partidos parece mediar en esos efectos: en los casos donde los sistema de partidos tienen mayor grado de consolidación, como Chile y México, la diferencia entre el

voto basado en la evaluación del desempeño entre las listas parlamentarias y presidenciales es mucho menor. Además, en México, donde existen elecciones parlamentarias intermedias (1997, 2003 y 2009), es posible apreciar un efecto significativo de la evaluación del desempeño del gobierno sobre el voto parlamentario, lo que indica que la ciudadanía utiliza también este tipo de elecciones como una forma de recompensar o castigar al gobierno en ejercicio, dando señales que pueden generar cambios en las orientaciones políticas de los mismos.

En los casos donde el sistema de partidos es mucho menos consolidado, hay mayores dificultades para que el voto funcione como un mecanismo de “accountability vertical”, el extremo de este tipo de casos es el Perú. En las elecciones del 2006 y del 2011 las crisis y disputas internas dentro de los partidos de gobierno (Perú Posible en el 2006 y Partido Aprista Peruano en el 2011) dieron como resultado que éstos no presenten candidatos presidenciales y que sólo presenten listas parlamentarias que lograron magros resultados: en el 2006 Perú Posible obtuvo el 4.1 % de los votos válidos y dos escaños en el congreso; por su parte, en el 2011 la lista parlamentaria del Partido Aprista Peruano alcanzó el 6.4 % de los votos válidos y cuatro escaños.¹⁰ En las elecciones del 2016, el Partido Nacionalista Peruano del presidente Ollanta Humala retiró tanto su lista presidencial como parlamentaria, luego de evaluar que la baja intención de voto que registraban las encuestas para su agrupación hacía poco probable que logre pasar el umbral electoral para conservar su inscripción como partido político.

Otra característica de los partidos de gobierno en el Perú en las últimas dos décadas es su alto grado de dependencia de la figura del líder que postula como presidente (Fujimori el 2000, Toledo el 2001, García el 2006 y Humala el 2011). Salvo en el caso del Fujimorismo, en los demás partidos no ha surgido un líder alternativo que sea electoralmente exitoso. El presidente en ejercicio tampoco ha promovido esa posibilidad, manteniendo un importante control sobre su propia organización partidaria. Ello explica en parte por qué tanto Toledo y García se presentaron nuevamente como candidatos presidenciales en las elecciones subsiguientes a su presidencia sin mayor competencia dentro de sus partidos. Es posible que en el caso peruano, la

¹⁰Desde las elecciones parlamentarias del 2006 se estableció un umbral mínimo de porcentaje de votos para que una lista obtenga un escaño en el parlamento peruano. En el 2006 este umbral fue del 4 % de los votos válidos, para el 2011 se elevó al 5 %.

no-reelección inmediata, la debilidad institucional de los partidos y la dependencia del líder se haya convertido en una combinación institucional que convierte en poco relevante la evaluación que tiene la ciudadanía sobre el desempeño del gobierno y la situación socioeconómica del país a la hora de decidir su voto, puesto que el propio partido de gobierno no aparece como un actor relevante en las elecciones, y su cabeza más bien se reserva para la elección subsiguiente.

Esto último contrasta con las elecciones peruanas del 2000, donde el estado de la economía, y la evaluación que se tenía del desempeño gubernamental si jugó un rol central en la decisión electoral puesto que el propio presidente se presentaba a su segunda reelección. También contrasta con las elecciones brasileñas del 2006, en las que Lula se presentaba a la reelección, o en las del 2010, en las que el propio Lula apostó por fortalecer la figura de Dilma Rousseff como su heredera política.

Un balance de los resultados presentados en este capítulo parece sugerir que para que los mecanismos que se asocian al llamado “voto económico” funcionen y las elecciones se conviertan en un instrumento efectivo de accountability vertical se requiere de alguna de las siguientes condiciones institucionales: a) la posibilidad de la reelección presidencial, o b) la consolidación de un proyecto político partidario más institucional y que permita la construcción de liderazgos alternativos fuertes que defiendan las banderas partidarias en elecciones sucesivas. Cuando no existe reelección ni partidos más institucionalizados o menos personalistas que permitan un recambio de sus liderazgos, un elemento clave que permite definir lo que está en juego en una elección (la continuidad de una visión de gobierno o su alternancia), pierde relevancia.

Capítulo 10

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha tratado de describir el efecto que tienen sobre la decisión electoral algunas de las variables identificadas en las teorías clásicas acerca del comportamiento electoral. Asimismo, se ha buscado evaluar hasta qué punto estos efectos guardan alguna relación con las diferentes configuraciones institucionales de los casos estudiados: Brasil, Chile, México y Perú.

Como se ha expuesto en este trabajo, un primer grupo de teorías sostiene que el comportamiento electoral está relacionado con diferencias en la estructura social. Dependiendo de la posición que tienen los individuos en la estructura social, se van configurando grupos sociales con intereses determinados, que en muchos casos entran en conflicto con otros grupos sociales, especialmente relacionados con la distribución del poder social, político y económico en las sociedades. Dependiendo del país, algunos de estos conflictos y divisiones sociales adquieren mayor importancia que otros, los partidos políticos que logren representar los intereses contrapuestos de estos grupos en aquellas etapas en las que se expande el sufragio universal, tenderán a convertirse en los actores clave que estructuran la competencia política y organizan el sistema de partidos en una sociedad.

El vínculo estable que estas organizaciones partidarias desarrollan con los grupos o sectores de la sociedad que buscan representar tenderá a formar estructuras de clivaje y procesos de identificación partidaria, los cuales generan atajos cognitivos que facilitan a los electores la tarea de decidir su voto en una elección, orientándose hacia aquellas agrupaciones o candi-

datos con los cuales se ha generado un mayor nivel de identificación a lo largo del tiempo. Si bien cambios sociales y culturales pueden debilitar estos vínculos a lo largo del tiempo, produciendo procesos de desalineamiento o realineamiento político, los actores de los sistemas de partidos que lograron en un momento determinado desarrollar vínculos relativamente estables con sectores del electorado y perdurar entre diversas elecciones, tenderán a jugar un papel clave en organizar la competencia electoral. Este rol puede verse reforzado por las reglas electorales que pueden favorecer a los actores ya establecidos por sobre los nuevos, especialmente interviniendo en la estructura de costos e incentivos para entrar a competir en la arena electoral (estableciendo requisitos o umbrales electorales exigentes, por ejemplo). Los partidos ya establecidos cuentan con un capital que los pone en ventaja por sobre nuevos competidores: son más conocidos por el electorado, tienen mayor capacidad organizativa, y recursos para financiar y mantener campañas electorales.

En este trabajo se ha explorado algunas de las divisiones sociales que pueden estar asociadas con la configuración de sistemas partidarios y estructurar intereses y demandas en la competencia electoral. Nos hemos concentrado principalmente en las de tipo socioeconómico, utilizando indicadores relacionados a las desigualdades en cuanto al nivel educativo y de ingresos de los votantes. Somos conscientes que los indicadores escogidos no son suficientes para dar cuenta de divisiones de tipo clasista en las sociedades, pero sí permiten identificar desigualdades y distancias sociales verticales “gruesas”. Las limitaciones del desarrollo capitalista en América Latina y la extensión de las economías informales (sobre todo en Perú, México y Brasil) dificultan el empleo de criterios más propiamente “clasistas” para delimitar las diferencias sociales.

Históricamente, las desigualdades socioeconómicas han sido una de las principales fuentes de conflicto en las sociedades capitalistas modernas, ya sea centrales o periféricas (como lo son nuestros casos). En América Latina las demandas de inclusión social a procesos de modernización económica, que colisionaron con lógicas de exclusión oligárquica, han sido uno de los principales vectores de organización del conflicto político.

Como se vio en el capítulo 7, en los procesos electorales estudiados, el grado de asociación entre diferenciaciones socioeconómicas y las preferencias políticas y electorales es bastante débil en la mayoría de los casos. No solo es débil sino que también muestra variaciones de elección en elección dentro de los mismos países, por lo que es difícil encontrar patrones estables de vinculación entre los componentes del sistema de partidos y grupos sociales diferenciados por las variables socioeconómicas seleccionadas. La variabilidad entre elecciones dentro los mismos países sugiere que el vínculo entre grupos sociales diferenciados en términos socioeconómicos y organizaciones políticas depende en cierta medida de la coyuntura y de la manera en que se presenta el debate político en elecciones específicas (los componentes “macro - cerca” del esquema propuesto en la figura 2.1 del capítulo 2).

Paradójicamente, uno de los casos donde se presentan el mayor grado de asociación entre desigualdades socioeconómicas y preferencias políticas y electorales es el peruano. Allí aparece, por lado, una cierta asociación entre sectores más “integrados” a la sociedad capitalista (mayor educación e ingresos) con partidos “tradicionales” de centro y centro - derecha; y por el otro, preferencias por ofertas políticas populistas de derecha (el fujimorismo) o de izquierda (Ollanta Humala el 2006 y 2011) por parte de grupos sociales menos “integrados”. Sin embargo esta vinculación resulta inestable y volátil, asociada a agrupaciones políticas altamente personalistas que no logran - utilizando la terminología de Carlos Meléndez (2012*a*) - articular verticalmente diferentes niveles de acción política (local, regional, nacional), ni horizontalmente con organizaciones y grupos de interés de la sociedad civil (sindicatos, organizaciones sociales, gremios, etc.).

El caso donde la asociación entre las variables socioeconómicas y las preferencias políticas es la más débil es el chileno. El sistema político no parece reflejar conflictos de intereses derivados de la arena social sino más bien entre posiciones ideológicas vinculadas con el legado de la dictadura de Pinochet y el grado de intervención o regulación del Estado en una economía fuertemente liberalizada por las reformas de la década de 1980. En tal sentido el sistema de partidos refleja más bien divisiones de tipo político que sociales, siguiendo la clasificación propuesta por Bartolini (2005) (véase el cuadro 1.1).

A pesar de los vínculos débiles y variables entre divisiones sociales y el sistema de partidos en los casos que estamos estudiando, sí se encuentra que la “identificación partidista” tiene un efecto predictor importante del comportamiento electoral. Identificarse o simpatizar con un partido incrementa en más de un 50 % la probabilidad de votar por esa agrupación en todos los casos estudiados. El problema respecto de este fenómeno es tratar de comprender qué significa la “identificación partidista” en nuestros grupo de países y elecciones.

En general, se ha visto que, con excepción de Perú (que se ubica en el grupo de países con menor identificación partidista), la proporción de personas que se identifica con un partido político o que se considera militante de un partido en los países estudiados no es sustancialmente diferente de otros países del mundo acerca de los cuales se tiene información, ya sean estas democracias consolidadas o “nuevas democracias”.

En los casos estudiados, lo que se ha llamado “identificación partidaria” no necesariamente implica una vinculación o preferencia más o menos estable con una agrupación política. Esta tiende a variar mucho de elección en elección y parece ser un proceso más volátil de simpatías políticas coyunturales que vínculos que pueden dar lugar a lo que hemos llamado “clivajes”. En tal sentido, en la identificación partidaria intervendrían más los procesos vinculados a la dimensión “cerca” de la figura 2.1 del capítulo 2, es decir más sujetos a variaciones coyunturales, en las cuales el marketing político y las estrategias de campaña electoral para generar simpatía (por ejemplo cómo se presentan los candidatos) pueden jugar un rol importante.

A pesar de ello, podemos proponer algunas excepciones. La principal excepción es el caso Mexicano, especialmente en lo referente al PRI y el PAN. De los cuatro países estudiados, México es el que presenta menor nivel de volatilidad electoral y de fragmentación. Tanto el PRI como el PAN tienen una larga historia de participación en la política Mexicana y, especialmente el PRI, ha podido generar bases y vínculos continuos con diferentes grupos sociales o regiones de la sociedad mexicana. El control de los recursos estatales, relaciones corporatistas o clientelistas pueden haber sido los mecanismos para generar estos vínculos estables, pero que a fin de cuentas sustentan procesos de identificación partidaria con importantes consecuencias en el comportamiento electoral.

Podría darse el caso que el PT brasileño y el Fujimorismo en el Perú sean otras de las agrupaciones capaces de generar el tipo de vínculos como para sustentar identidades políticas más estables. El PT en Brasil se ha presentado como un partido sensible a demandas redistributivas y durante la presidencia de Lula se expandieron los programas sociales gubernamentales, generando altos niveles de adhesión que permitieron la reelección de Lula el 2006 y la posterior elección de su sucesora, Rouseff, en dos ocasiones consecutivas. Es cierto que una coyuntura económica favorable facilitó esas adhesiones. Habría que evaluar hasta qué punto los escándalos de corrupción en los que está involucrado el PT afectarán sus adhesiones. Sin embargo, el PT mantiene una importante capacidad organizativa y dentro del sistema de partidos brasileño hay pocas agrupaciones que podrían diferenciarse exitosamente del PT respecto de sus vínculos con la corrupción.

En el caso peruano, ya desde el 2006 un sector cada vez más creciente del electorado peruano se ha mantenido leal al fujimorismo y ha sintonizado con sus propuestas de un populismo de “mano dura”: capaz de garantizar estabilidad y orden; con “sensibilidad social” promoviendo programas sociales para los sectores más desfavorecidos; y con “mano dura” para enfrentar amenazas para la seguridad, especialmente la delincuencia común.

Es importante resaltar que el análisis sobre la relación entre divisiones sociales y preferencias partidarias ha estado limitado por el tipo de variables disponibles y comparables entre los casos estudiados. Hay un conjunto de factores que producen divisiones sociales y conflictos de interés que podrían reflejarse en el sistema de partidos que no han sido exploradas en este estudio: las tensiones centro - periferia; identidades, diferencias y conflictos regionales; identidades étnicas. Sin embargo, el bajo nivel y la variabilidad de los indicadores de identificación partidaria al interior de cada país entre diferentes elecciones (con la relativa excepción de México) sugiere que este tipo de divisiones sociales tampoco lograrían vincularse o representarse de manera más estable con el sistema de partidos, lo que refuerza la tesis de la ausencia de clivajes sociales propuesta por autores como Kenneth Roberts (2002*a*; 2002*b*).

A pesar de la ausencia de clivajes, algunos sistemas de partidos muestran un mayor grado de estabilidad que otros. México y Chile y Brasil tienen un sistema de partidos mucho más estable

que el peruano. Ese grado de estabilidad no necesariamente estaría asociado con el hecho de que los partidos logran desarrollar fuertes vínculos de identificación partidaria con sectores y grupos sociales cuyos intereses y conflictos representan en la esfera política (estructuras de clivaje). Un factor puede ser el diseño de los sistema electorales que genera costos diferenciados a viejos y nuevos partidos políticos para entrar y permanecer en la competencia electoral.

En el caso de México, tres quintos de la cámara de diputados son elegidos en circunscripciones uninominales que tienden a tener un efecto reductor sobre la cantidad de partidos que logran representación electoral; en el caso de las circunscripciones plurinominales la elección es por listas cerradas y bloqueadas. Ello junto con la imposibilidad de reelección en ninguno de los niveles de elección de cargos representativos, le otorga una importancia central a los aparatos partidarios para definir candidaturas; proveer de opciones de carreras políticas (variando el nivel al cual se postula: local, estatal, nacional, etc.); coordinar los varios niveles en donde se produce la competencia en diferentes momentos; así como sostener la inversión necesaria para las campañas electorales. Tanto el PRI como el PAN tienen una larga historia de presencia en la política mexicana, lo que les permite contar con “marcas” partidarias bastante conocidas y establecidas en la sociedad. Ello genera vallas muy altas para nuevas agrupaciones y favorece a quienes tienen un mayor capital político, especialmente reconocimiento (una “marca partidaria”) y capacidad organizativa.

En el caso Chileno, el sistema binomial vigente hasta las elecciones del 2013 para la elección parlamentaria, establecía un umbral muy alto para obtener un escaño y generó poderosos incentivos para que la competencia política se estructure sobre la base de bloques de alianzas integradas, por un lado por partidos de centro y de centro izquierda (PDC, PS, PPD fundamentalmente) que lideraron la oposición al régimen de Pinochet; y por el otro por los partidos de derecha (UDI y RN) que reivindicaban en mayor o menor medida algunos de los “logros” de la dictadura, en particular el modelo económico y su estabilidad. Si bien en determinadas circunstancias aparecieron nuevas candidaturas como la de Ominami el 2009 (que renunció al PS para postular con su propia agrupación), difícilmente lograban pasar el umbral electoral. Entre 1989 y el 2013, partidos diferentes a los de la concertación y las alianzas de derecha han

obtenido tan solo entre el 0.8 % y 4.2 % de los 120 escaños de la cámara de diputados (véase el cuadro 4.4). Esta estabilidad del sistema de partidos chileno se mantiene a pesar de que, entre los cuatro casos estudiados, es donde se encuentran algunos de los menores niveles de identificación partidaria. Las reformas del 2015 han eliminado el sistema binomial, haciendo del sistema electoral chileno algo más proporcional. Habría que evaluar en las próximas elecciones si esto tendrá como efecto una mayor apertura o cambios en el sistema de partidos, o generará incentivos para estrategias centrífugas para quienes hasta entonces competían mediante alianzas.

Brasil y Perú son los que tienen los sistemas electorales más abiertos puesto que en estos dos casos las elecciones parlamentarias se producen en sistemas proporcionales en distritos plurinominales con listas cerradas pero no bloqueadas. En el caso brasileño su diseño genera una mayor fragmentación del sistema de partidos en comparación al peruano, sin embargo, el sistema de partidos brasileño resulta ser mucho más estable que el peruano. Desde 1994, las elecciones presidenciales en Brasil han estado marcadas por la competencia entre el PT y el PSDB. El PT ha tenido como su principal figura presidencial entre 1989 y 2006 a Lula, logrando construir una “marca política” bastante estable en el tiempo, respaldada por un importante aparato organizativo con vínculos en organizaciones sindicales de los estados industrializados del sur este brasileño. Por otro lado, desde 1998 la posibilidad de la reelección presidencial ha convertido a las elecciones presidenciales en una especie de plebiscito respecto de la evaluación del desempeño del partido de gobierno. El éxito de Cardoso en combatir la crisis económica de la década de 1990 y generar crecimiento económico le valieron ser reelegido en 1998 (previa reforma constitucional). En el caso de Lula, estuvo al frente de un importante ciclo de crecimiento económico que le permitió al estado brasileño desarrollar políticas redistributivas que redujeron significativamente la pobreza e incidieron en cierta medida mitigar las desigualdades sociales, esto fue recompensado el 2006 con su reelección y el 2010 con la elección de su sucesora Rousseff, quien a su vez fue reelegida el 2014. Esta combinación de marcas partidarias duraderas, capacidad organizativa de los partidos, un sistema electoral que recompensa el éxito en el gobierno, y coyunturas económicas favorables, le han permitido al sistema de

partidos brasileños (por lo menos hasta el 2014) mantener un alto grado de estabilidad a pesar de funcionar en un marco de reglas institucionales con potencial desestabilizador, que de alguna forma tiene efectos manifiestos en el grado de fragmentación del sistema de partidos en el parlamento. A todo ello hay que agregar el hecho que, desde el retorno a la democracia electoral a inicios de la década de 1980, Brasil no ha tenido rupturas institucionales, sino que más bien las crisis políticas y económicas han sido enfrentadas utilizando los cauces legales disponibles en su momento y ajustándolos en forma institucional.

A diferencia de los otros casos, en el Perú ni el sistema electoral ni la fortaleza organizativa con capacidad de generar “marcas partidarias” estables han estado presentes en el sistema de partidos que han competido en las elecciones luego del periodo Fujimorista. Los partidos que estructuraron la competencia política en la primera etapa de la democratización peruana en los años 1980 resultaron fuertemente debilitados por la crisis económica y el conflicto armado interno de la década de los 80's, así como por el proyecto autoritario Fujimorista. En ese contexto, un sistema electoral más “abierto” a la entrada de nuevos actores en la competencia política y a dinámicas centrífugas y fragmentarias (como el voto preferencial y la posibilidad de que “agrupaciones independientes” compitan en las elecciones subnacionales), generaron un entorno hostil a procesos de consolidación partidaria, a pesar de que algunas agrupaciones lograron articularse con intereses y preferencias de sectores sociales diferenciados por brechas socioeconómicas en mayor medida que en los otros casos estudiados.

A estos podría añadirse otros factores identificados por Noam Lupu (2015) en un trabajo recientemente publicado acerca del colapso de sistemas de partidos en América Latina. A partir del estudio de los casos de Argentina y Venezuela, Lupu sostiene que habría dos elementos que contribuyen a la disolución de “marcas partidarias” y el declive del apoyo e identificación de los electores con algunos partidos políticos. El primero de ellos es la consistencia o inconsistencia programática e ideológica de los partidos. Cuando los partidos envían señales diferentes al electorado respecto temas que les son importantes, se tiende a incrementar la incertidumbre de los ciudadanos respecto de cuáles son las posiciones que tienen los partidos y cómo se diferencian de las de otros competidores, erosionando de esta manera su respaldo en la población.

El otro factor es la convergencia: cuando los partidos se alían con rivales o convergen con otros competidores en programas o políticas, la “marca partidaria” sufre y puede disolverse ante los ojos del electorado. De acuerdo con Lupu, las crisis económicas y el limitado margen de maniobra que ello impone a partidos políticos a la hora de gobernar (muchas veces constreñidos por políticas económicas inspiradas en el “consenso de Washington”), son elementos que incentivan los procesos de inconsistencia programática y de convergencia.

Traslandando estas ideas al caso peruano, si un partido es elegido con un programa de “transformación” o “cambio responsable” pero durante su mandato las políticas que implementan se distancian de su programa electoral o convergen con las propuestas de sus rivales, su respaldo en base electoral inicial puede verse erosionado. Ello puede haberle ocurrido tanto a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, quienes postularon con plataformas “populistas” en diversos grado pero que al momento de gobernar mostraron una gran continuidad en torno a lo que podríamos llamar un “consenso neoliberal” en cuanto al manejo de la economía y el limitado rol regulador y redistributivo del Estado en la sociedad. En tal sentido el potencial que algunos de estos actores tenían (como Toledo y sobre todo Humala) de reforzar sus vínculos con grupos sociales excluidos del desarrollo capitalista peruano (poblaciones de provincias, del Sur Andino, sectores populares urbanos) se diluyó y con ello la “marca partidaria” que iban construyendo. En el caso de Alan García y del APRA, a pesar de ser una agrupación política antigua en el contexto peruano, su viraje ideológico y programático desde la “centro izquierda” en los años 1980 hacia una derecha más conservadora y cercana a los grupos de poder económico entre el 2006 y 2011, también pudo haber contribuido a la disolución de su marca partidaria. En ese escenario, el fujimorismo tiene ventajas comparativas ya que ha logrado mantener una identidad política bastante constante, sobre la base de un discurso populista conservador y autoritario, que le ha permitido contar con una mayor consistencia ante los ojos del electorado que otros de sus competidores.

El trabajo de Lupu ilumina además algunos elementos sobre el rol de la polarización política en la institucionalización del sistema de partidos. Como este autor sostiene en otro documento:

“Political moderation often seems normatively appealing; where extremism is dogmatic and polarization is conflictual, moderation is pragmatic and consensual (...) But if partisanship is necessary for the institutionalization of a party system, then voters need to be offered meaningfully different party choices rather than consensus. Too much polarization may well be destabilizing (...) but too little may be just as harmful.” (Lupu, 2016, pp. 29)

Esto quiere decir que un cierto grado de polarización política, más allá de su potencial conflictivo y desestabilizador para el sistema político, puede ser provechoso para consolidar un sistema de partidos que ofrezca opciones relevantes al electorado. En este caso la polarización funcionaría como la vela que se prende en los altares católicos, siguiendo el dicho popular, esta “no debe estar ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo ilumine”.

La polarización política en este trabajo ha sido analizada en el capítulo referido al voto ideológico, utilizando la clásica escala “izquierda - derecha” para evaluar las diferencias tanto de la oferta política de los partidos políticos como las preferencias de los ciudadanos. Si bien la dimensión izquierda derecha no es la única en la cual los partidos políticos pueden diferenciarse, ésta forma parte del repertorio tradicional de pistas políticas que tienden a activarse en los procesos electorales.

El significado y contenido específico de la dimensión izquierda derecha varía entre países e incluso entre elecciones dentro de un mismo país, en todo caso para que adquiera relevancia como factor que influye en la decisión del votante, los partidos políticos deben presentar alternativas programáticas que se diferencien claramente entre sí en esos términos ante el electorado. En la mayoría de las elecciones analizadas, los votantes han tenido ante sí un repertorio de opciones electorales que han cubierto los diferentes grados de la diferenciación izquierda derecha, aunque con distintos niveles de polarización. El caso del sistema de partidos que más se diferencia en esos términos es el Chileno, donde la competencia electoral ha opuesto sistemáticamente a la Concertación de partidos de centro izquierda ante los partidos de la derecha.

El sistema de partidos menos polarizado en términos de derecha e izquierda es el Brasileño. Si bien el PT se ubica hacia la izquierda, su principal oponente en las elecciones presidenciales,

el PSDB, se ubica hacia el centro político. Los demás partidos que tienen mayor relevancia en las elecciones parlamentarias (PMDB, PFL y PSB) han jugado en diversas elecciones distintos roles, en algunas han sido aliados del PT, en otras lo han sido del PSDB; en el congreso han apoyado iniciativas tanto de uno como de otro partido. Esta combinación de inconsistencia programática y de convergencia (usando los términos de Lupu) han contribuido a diluir el significado de lo que es izquierda o derecha en el caso brasileño.

México y Perú son casos de polarización intermedia. México presenta un sistema de partidos tripartido (centro izquierda - centro - centro derecha) bastante estable de polarización moderada en la escala izquierda - derecha. En el caso peruano, la polarización es variable y se ha incrementado en las elecciones donde aparece la figura de Ollanta Humala y el Partido Nacionalista que ocupa el lado izquierdo del espectro político en clara contraposición con el resto de actores políticos.

Por su lado, el electorado en los casos y elecciones analizadas se ubica mayoritariamente en posiciones de centro, aunque en promedio hay una ligera tendencia hacia la centro - derecha, con la excepción de México donde los electores se identifican más claramente en la derecha de la escala. Sin embargo, es importante anotar que entre un quinto y un tercio de los electores no son “competentes” en el uso de la escala izquierda derecha, es decir no se ubican a sí mismos en esa dimensión y no son capaces de ubicar por lo menos a dos partidos políticos en esa dimensión. El mayor porcentaje de “electores no competentes” en el uso de la escala izquierda derecha se encuentra en Brasil, sobre todo en las dos últimas elecciones. Brasil es precisamente el caso donde el grado de polarización en términos de izquierda derecha es el menor de todos los casos estudiados.

La competencia en el uso de la dimensión izquierda derecha está asociada al grado de sofisticación política del elector, es decir su nivel educativo y el conocimiento político, así como el hecho de identificarse con algún partido. Las características del sistema político también influyen en esa competencia política cognitiva, ya que resulta significativamente mayor en Chile respecto del resto de países, mientras que ocurre lo contrario en el caso de Brasil.

El análisis del voto ideológico muestra que los electores competentes en el uso de la escala izquierda derecha son capaces de utilizar una racionalidad espacial (que hemos medido calculando una función de “utilidad espacial”) para ubicar sus preferencias políticas respecto de la oferta del sistema político, identificando las más cercanas o lejanas a sus propias preferencias. Ello valida hasta cierto punto las teorías espaciales sobre el voto, aunque un factor que mitiga los efectos de la utilidad espacial es la identificación partidaria: cuando uno desarrolla algún tipo de identificación o simpatía con una opción política, la distancia izquierda - derecha respecto de las posiciones de ese partido pierde peso al momento de determinar su comportamiento electoral y a la vez esa distancia se exacerban al momento de evaluar opciones políticas diferentes de las que uno se identifica. Ello puede permitirle a determinados electores mantenerse “leales” a los partidos con los cuales han logrado desarrollar un tipo de identificación o simpatía más estable a pesar de los cambios programáticos que ellos puedan realizar y que pueden expresarse en procesos de convergencia o alianzas políticas con antiguos rivales, o abandono de ciertas propuestas a la hora de gobernar.

Sin embargo, entre los electores que no han desarrollado alguna identificación partidaria o simpatía más fuerte respecto de algún partido político (que son la gran mayoría del electorado en todos los casos), el peso de la “utilidad espacial izquierda derecha” al momento de tomar una decisión electoral tiende a ser más importante. Cuando se cuenta con las competencias políticas cognitivas desarrolladas, este grupo de electores es sensible a las diferencias programáticas que exhiben los partidos y tienen a aproximarse o alejarse de ellos en función de sus propias preferencias políticas.

Las variables institucionales juegan un rol importante en estos procesos, sobre todo las características del sistema de partidos y su grado de polarización. Usando diversos métodos hemos visto que existe una cierta correlación entre el grado de polarización del sistema de partidos y la importancia del efecto de la utilidad espacial izquierda derecha en el comportamiento electoral, lo que corrobora hallazgos similares en otros contextos e investigaciones (Dalton, 2010; Lachat, 2008). En tal sentido, cuando los partidos políticos presentan opciones claramente diferenciadas al elector, éste es capaz de evaluarlas “racionalmente” y ajustar su

comportamiento político según el resultado de esa evaluación. De ahí la importancia tanto de la trayectoria política que genera un efecto de reputación que permite construir una “marca partidaria”, pero también de la comunicación política que en coyunturas de campaña electoral permite resaltar diferencias claras entre opciones políticas en competencia. Ello también implica que fenómenos de incongruencia o convergencia deterioran la utilidad de estas pistas cognitivas para la decisión electoral.

El análisis de las variables que se han asociado a las teorías sobre el “voto económico” también reafirman el hecho que los electores son capaces de realizar evaluaciones retrospectivas de los actores políticos y las políticas públicas (especialmente de quienes conducen el gobierno), asociarlas a sus preferencias o función de bienestar, y generar comportamientos políticos castigando malos desempeños y premiando los buenos. Estos son unos de los principales mecanismos que permiten el funcionamiento de los procesos de “accountability vertical” en las democracias contemporáneas.

Nuestros hallazgos son consistentes con las investigaciones desarrolladas en este campo. Asimismo también resaltan la importancia de los elementos institucionales en los mecanismos que activan, refuerza o mitigan el efecto del “voto económico” en el comportamiento del elector. Uno central es la posibilidad de la reelección presidencial ya que, por definición, cuando ésta está permitida, uno de los temas fundamentales que estructura el debate y la competencia electoral es la evaluación del gobernante que busca ser reelegido, especialmente en el corto plazo. Ello es más evidente en los casos de Brasil (elección del 2006) y de Perú (elección del 2000), que son las dos elecciones donde el presidente en ejercicio se presentaba a la reelección y donde se ha observado algunos de los efectos más importantes de la evaluación del gobierno en el comportamiento del elector.

Sin embargo, en los casos donde no se permite la reelección, la existencia de un sistema de partidos más institucionalizado, que permite la renovación o alternancia de líderes al interior de los mismos partidos y que a la vez mantiene posiciones programáticas y/o ideológicas más claras, constituye otro factor que permite que la evaluación del desempeño gubernamental se convierta en un factor importante en la determinación del voto. Nuevamente el caso peruano

ilustra este punto. La incapacidad de los partidos en el gobierno de proponer candidatos a su propia sucesión (en el 2006 y 2011) hace que la evaluación del desempeño del gobierno sea irrelevante en la decisión del elector en las elecciones presidenciales.

La evaluación del desempeño del gobierno también tiene efectos en el voto por las listas parlamentarias, aunque el efecto promedio resulta menor que en el caso del voto por la presidencia. Ello puede explicarse en la medida que los sistemas de gobierno de todos los casos son presidencialistas, por lo que la competencia por la cabeza del ejecutivo es la que estructura la lucha política y la decisión electoral. Ello es particularmente cierto en el caso de Brasil, donde se observa casi un efecto nulo de la evaluación del desempeño del gobierno en la probabilidad de votar por la lista parlamentaria del gobierno o por algún partido de la oposición. De alguna manera ello da cuenta de una especie de carácter “esquizofrénico” del sistema político brasileño, donde la dinámica de la política electoral parlamentaria aparece como completamente desvinculada de la presidencial.

El caso de México resulta interesante en la medida que, siendo el único país que tiene elecciones parlamentarias intermedias, estos procesos electorales se convierten en una oportunidad para el electorado de castigar o premiar el desempeño del partido de gobierno a mitad de su mandato. Los resultados de las elecciones parlamentarias intermedias en México por lo general han significado una reducción significativa (más del 25 %) de los escaños en la cámara de diputados del partido gobernante - el PAN en las elecciones estudiadas - en beneficio de sus opositores, especialmente del PRI.

A lo largo de esta investigación se ha podido observar la importancia que tiene el sistema de partidos de un país para estructurar y a la vez activar el marco de opciones políticas respecto de las cuales los votantes deben tomar una decisión. El voto es uno de los pocos actos políticos que un ciudadano promedio realiza. Si bien es cierto que participar en organizaciones sociales, militar en partidos o participar en movilizaciones y protestas sociales también son actos políticos, éstos involucran a una minoría relativa de la ciudadanía. En las democracias contemporáneas, la mayoría de los ciudadanos tienen un escaso interés en los asuntos políticos y manejan poca información sobre los mismos. Este interés tiende a aumentar en las elecciones,

pero corresponde a los partidos políticos movilizar al electorado y activar los atajos cognitivos y pistas que utilizará el votante para tomar una decisión, la capacidad de iniciativa política está en manos de los partidos más que de los electores. Como se ha visto, a pesar del limitado interés e información que tienen las personas sobre temas políticos, la mayoría sí llega a manejar una cantidad suficiente de información como para tomar una “decisión racional”, es decir, evaluar con las pistas que tienen a su alcance, hasta qué punto la oferta política se aproxima o se aleja de sus preferencias o es capaz de incrementar o disminuir su “bienestar”, entendido éste de manera subjetiva. El voto recompensa o castiga a quienes se aproximan o se alejan de esas preferencias. Cuando los partidos logran diferenciarse claramente entre sí, o cuando el sistema electoral genera de manera más clara la posibilidad de recompensar o castigar a quien está en el poder, los mecanismos que podemos asociar a las variantes racionales del comportamiento electoral (el razonamiento espacial del voto ideológico y el voto económico) adquieren mayor peso en la decisión electoral.

En la investigación también se ha visto que, por lo general los partidos políticos no han logrado desarrollar vínculos muy fuertes con sectores del electorado que pueden diferenciarse en función de divisiones o desigualdades socioeconómicas. Incluso en los casos donde hay una asociación más fuerte entre estas variables (divisiones socioeconómicas y preferencias partidarias), la posibilidad de generar identificaciones políticas más estables entre los ciudadanos parece limitada. Existe por lo tanto una distancia o una brecha entre el electorado, la sociedad y el sistema de partidos.

En los cuatro casos estudiados se encuentra relaciones bastantes flexibles y elásticas entre los electores y la oferta electoral, las lealtades políticas “fuertes” no están demasiado extendidas en el electorado. Ello otorga una gran capacidad de autonomía tanto a los ciudadanos como a los partidos políticos, y obliga a estos últimos a desarrollar estrategias más activas de convencimiento de un electorado que no tienen ganado a priori.

Esta exigencia y plasticidad de la relación elector - representante puede tener costos como la incertidumbre o la inestabilidad. En la búsqueda de un electorado más grande y del “votante medio”, los partidos pueden desarrollar campañas que difuminan sus identidades ideológicas o

programáticas, o establecer alianzas con agrupaciones que antes eran rivales (como en Brasil), lo que tiene un efecto similar. Una vez en el gobierno, las limitaciones del contexto económico, local o internacional, así como la presión de poderes fácticos (intereses económicos, medios de comunicación, iglesias, etc.) pueden forzar virajes programáticos que contribuyen también con desdibujar las identidades y “marcas partidarias”. Todos estos elementos contribuyen a incrementar la distancia entre los ciudadanos y la representación política, así como la desconfianza en los partidos políticos.

A pesar de ello, en tres de los cuatro casos estudiados (Brasil, México y Chile), el sistema de partidos goza de una relativa estabilidad: el mismo elenco de agrupaciones es el que compete de una elección a otra. Sin embargo esta estabilidad del sistema de partidos no tiene su base en fuertes vínculos con los actores sociales o en estructuras de clivajes, sino más bien parece estar asociada a los diseños institucionales (características del sistema electoral) o la acumulación de capital organizativo y reputacional, lo que eleva los costos a la entrada de nuevos actores. Haciendo una analogía con la economía, estos países tienen “barreras de entrada” relativamente elevadas al “mercado electoral”, ya sea por reglas de juego restrictivas (México y Chile) o por una sobre saturación de agrupaciones con una historia de interacciones y negociaciones políticas que no ha sufrido rupturas institucionales demasiado severas (Brasil). Ello contrasta con el caso peruano, que combina reglas electorales bastante permisivas para la proliferación de organizaciones políticas, con organizaciones débiles que, además, exhiben giros programáticos e ideológicos relativamente bruscos que diluyen su identidad política.

En todos los casos estudiados, los actores que forman parte del sistema político tienen el reto de enfrentarse a un elector ecléctico y crecientemente crítico del conjunto de instituciones políticas, especialmente los partidos. Este elector crítico representa un doble desafío para las democracias. Por un lado, un electorado crítico puede ser más exigente, consciente de sus derechos ciudadanos y forzar cambios en el sistema político que lo hagan más responsable respecto de la ciudadanía. Pero por el otro lado, un elector crítico también puede orientarse hacia el cinismo y la impaciencia, rechazar de plano a la “clase política” y eventualmente brindar su apoyo a alternativas populistas ya sea de izquierda o de derecha que aparecen

como “renovadoras” o prometen cambios radicales desde el ejercicio de una autoridad más centralizada, con el riesgo de deslizarse hacia proyectos autoritarios. En muchas sociedades contemporáneas se experimenta esa tensión en el electorado y ningún diseño electoral o sistema de partidos ofrece plenas garantías de que el voto no se traduzca en empoderar a actores y proyectos que socaven los derechos y libertades democráticas que, junto con el del sufragio, constituyen el sustento de la sociedad democrática.



Apéndice: Siglas y Nombres de los Partidos Políticos

Brasil

- PT - Partido dos Trabalhadores
- PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
- PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PFL - Partido do Frente Liberal
- DEM - Democratas (antiguo PFL)
- PR - Partido da República (PR)
- PP - Partido Progressista
- PDT - Partido Democrático dos Trabalhadores
- PPB - Partido Progressista do Brasil
- PSB - Partido Socialista Brasileiro
- PTB - Partido dos Trabalhadores Brasileiro

Chile

- CONCERT - Concertación (PS, PPD, PDC, PRSD)
- APCH - Alianza por Chile (UDI, RN)
- PDC - Partido Demócrata Cristiano
- PS - Partido Socialista de Chile
- PPD - Partido Por la Democracia
- PRSD - Partido Radical Socialdemócrata

- UDI - Unión Demócrata Independiente
- RN - Renovación Nacional
- PC - Partido Comunista de Chile
- PRI - Partido Regionalista Independiente

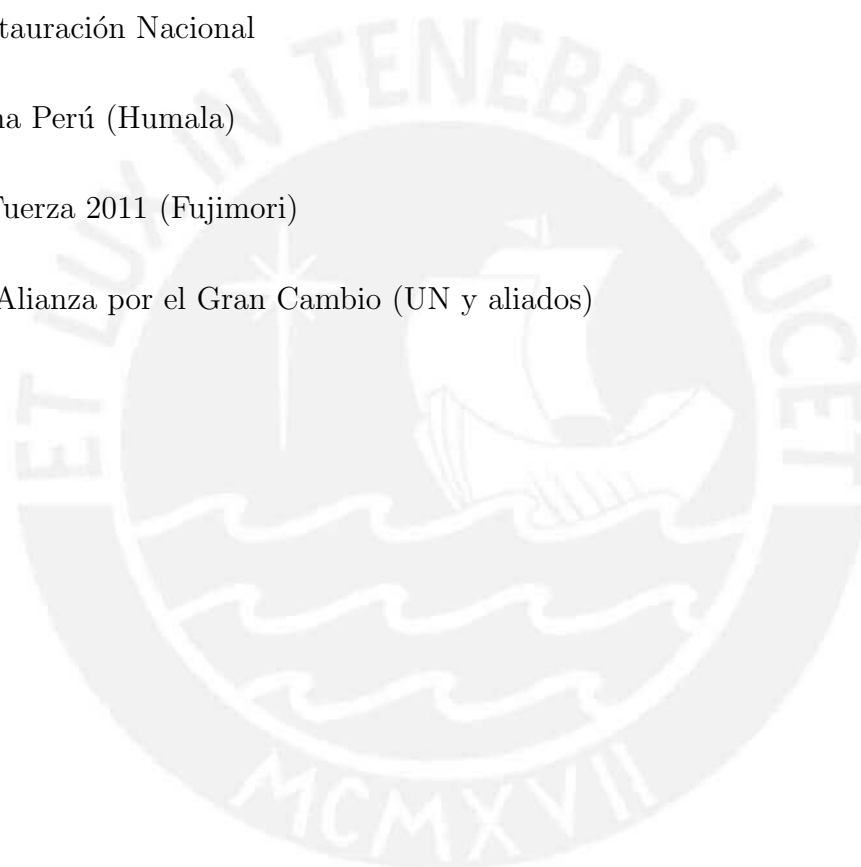
México

- PRI - Partido Revolucionario Institucional
- PAN - Partido de Acción Nacional
- PRD - Partido de la Revolución Democrática
- PVEM - Partido Verde Ecologista de México
- PT - Partido del Trabajo
- PARM - Partido de la Auténtica Revolución Mexicana
- Convergencia
- PANAL - Nueva Alianza Social

Perú

- P2000 - Perú 2000 (Fujimori)
- PP - Perú Posible
- FIM - Frente Independiente Moralizador
- SP - Somos Perú
- PAP - Partido Aprista Peruano
- SN - Solidaridad Nacional

- UN - Unidad Nacional
- SOLPOP - Solución Popular (Fujimoristas)
- UPP - Unión por el Perú (Humala)
- AF - Alianza por el Futuro (Fujimoristas)
- FDC - Frente de Centro
- RN - Restauración Nacional
- GP - Gana Perú (Humala)
- F2011 - Fuerza 2011 (Fujimori)
- APGC - Alianza por el Gran Cambio (UN y aliados)



Bibliografía

- Achen, Christopher H. y Larry M. Bartels. 2004. Musical Chairs: Pocketbook Voting and the Limits of Democratic Accountability. En: *Annual Meeting of the American Political Science Association - Chicago*. APSA.
- Adams, James, Samuel Merrill y Bernard Grofman. 2005. *A unified theory of party competition : a cross-national analysis integrating spatial and behavioral factors*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
- Alcántara, Manuel. 2013. Elecciones en América Latina: Un análisis comparado. En: *Elecciones y política en América Latina: 2009-2011*, ed. Manuel Alcántara y María Laura Tagina. México D.F.: Instituto Federal Electoral; Cámara de Diputados; Senado de la República; Miguel Ángel Porrúa.
- Althaus, Scott. 2003. *Collective preferences in democratic politics: opinion surveys and the will of the people*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ames, Barry y Amy Erica Smith. 2010. "Knowing Left From Right: Ideological Identification in Brazil, 2002-2006." *Journal of Politics in Latin America* 2(3):3-38.
URL: <http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jpla/article/view/321>
- Anderson, Christopher J. 2007. The interaction of structures and voter behavior. En: *The Oxford Handbook of Political Behavior*, ed. Russell J. Dalton y Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Apoyo Opinión y Mercado. 2000. Informe de Opinión. Abril del 2000. Informe. Apoyo Opinión y Mercado.

- Apoyo Opinión y Mercado. 2006. Informe de Opinión Data. Julio 2006. Informe. Apoyo Opinión y Mercado.
- Badescu, Gabriel y Pauk E. Sum. 2005. The Importance of Left-Right Orientations in the New Democracies. En: *Conference on Elections and Democratic Governance - Taipei*. Institute of Political Science, Academia Sinica (IPSAS).
- Banducci, Susan A. y Jeffrey A. Karp. 2009. Electoral systems, efficacy and voter turnout. En: *The Comparative Study of Electoral Systems*, ed. Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Barnes, Samuel H. 1997. Electoral behavior and comparative politics. En: *Comparative politics: Rationality, culture and structure*, ed. Mark Irving Lichbach y Alan S. Zuckerman. New York: Cambridge University Press.
- Bartolini, Stefano. 2005. "La formation des clivages." *Revue Internationale de Politique Comparée* 12(1):9-34.
- Basadre, Jorge. 2005. *Historia de la República del Perú 1822 - 1933*. Lima: Empresa Editora El Comercio - Orbis Ventures.
- Base de Datos Políticos de las Américas. 2013. "Peru: 1978 Constituency Elections." Página Web (consulta: 16/02/2013).
URL: <http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Peru/1978Asam.html>
- Bellucci, Paolo y Paul Whiteley. 2006. "Modeling Electoral Choice in Europe in the Twenty-First Century: An Introduction." *Electoral Studies* 25(3):419 - 423.
URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379405000624>
- Berelson, Bernard. 1954. *Voting; a study of opinion formation in a presidential campaign*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bernales, Enrique y Alberto Otárola. 1996. *La constitución de 1993: análisis comparado*. Lima: Konrad-Adenauer Stiftung.

- Best, Robin E. y Michael D. McDonald. 2010. The role of party policy positions in the operation of democracy. En: *Citizens, context and choice. How context shapes citizen's electoral choices*, ed. Russell J Dalton y Christopher Anderson. Oxford: Oxford University Press.
- Bustani, Camilla. 2001. "The 1998 Elections in Brazil." *Electoral Studies* 20(2):305–313.
- CADEM. 2016. Plaza Pública: Track semanal de opinión pública, 18 enero 2016, Estudio No. 105. Informe. CADEM Santiago de Chile: .
- Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes. 1960. *The American voter*. New York: Wiley.
- Carey, John M. 2006. "Las virtudes del sistema binomial." *Revista de Ciencia Política* 26(1):226–235.
- Carey, John M. y Peter M. Siavelis. 2005. "Insurance for Good Losers and the Survival of Chile's Concertación." *Latin American Politics and Society* 47(2):1–22.
- Carmines, Edward G. y Robert Huckfeldt. 1988. Political Behavior: An Overview. En: *A new handbook of political science*, ed. Robert E. Goodin y Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Carreirão de Souza, Yan. 2002. "Identificação ideológica e voto para presidente." *Opinião Pública* 8(1):54–79.
- Carreirao de Souza, Yan. 2007. "Identificação ideológica, partidos e voto na eleição presidencial de 2006." *Opinião Pública* 13(2):307–339.
- CEPAL. 2010. *La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Clark, Terry Nichols y Seymour Martin Lipset. 2001. *The Breakdown of Class Politics: A Debate on Post-Industrial Stratification*. Washington D.C.: Johns Hopkins University Press.

- Cleary, Matthew. 2006. "A left turn in Latin America? Explaining the left's resurgence." *Journal of Democracy* 17(4):35–49.
- Collier, Simon y William F Sater. 2004. *A history of Chile, 1808-2002*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación. 2003. *Informe Final*. Lima: CVR.
- Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 1991. *Informe Rettig: informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*. Santiago de Chile: La Nación.
- Comparative Study of Electoral Systems - CSES. 2003. "CSES Module 1 Full Release." Base de Datos en Página Web (consulta: 01/05/2011).
URL: <http://www.cses.org/datacenter/module1/module1.htm>
- Comparative Study of Electoral Systems - CSES. 2007. "CSES Module 2 Full Release." Base de Datos en Página Web (consulta: 01/05/2011).
URL: <http://www.cses.org/datacenter/module2/module2.htm>
- Comparative Study of Electoral Systems - CSES. 2013. "CSES Module 3 Full Release." Base de Datos en Página Web (consulta: 01/10/2013).
URL: <http://www.cses.org/datacenter/module3/module3.htm>
- Corporación Latinobarómetro. 2015. "Latinobarómetro." Página Web (consulta: 24/02/2015).
URL: <http://www.latinobarometro.org/>
- Curtice, John. 2002. "The state of election studies: mid-life crisis or new youth?" *Electoral Studies* 21(2):161–168.
- Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson y Daniel Berlin. 2005. Ideological voting under different institutional contexts. Political communication and effective representation in 37 countries. En: *XIV Nordic Political Science Association Conference - Reykjavik*. NOPSA.
- Dalton, Russell J. 2004. *Democratic challenges, democratic choices : the erosion of political support in advanced industrial democracies*. Oxford ; New York: Oxford University Press.

- Dalton, Russell J. 2010. Left–Right Orientations, Context, and Voting Choices. En: *Citizens, context and choice. How context shapes citizen’s electoral choices*, ed. Russell J Dalton y Christopher Anderson. Oxford: Oxford University Press.
- Dalton, Russell J. y Christopher J. Anderson. 2010. *Citizens, context and choice. How context shapes citizen’s electoral choices*. Oxford: Oxford University Press.
- Dalton, Russell J. y Hans-Dieter Klingemann, eds. 2007. *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford University Press, USA.
- Dalton, Russell J y Martin P Wattenberg. 2000. *Parties without partisans : political change in advanced industrial democracies*. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Defensoría del Pueblo. 2011. Reporte de conflictos sociales No. 93. Noviembre 2011. Informe. Defensoría del Pueblo.
- Degregori, Carlos Iván. 2000. *La década de la antipolítica: auge y caída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Delli Carpini, Michael y Scott Keeter. 1996. *What Americans know about politics and why it matters*. New Haven: Yale University Press.
- Delury, George E y Neil Schlager. 2006. *World encyclopedia of political systems and parties*. New York: Facts On File.
- Diamond, Larry Jay y Richard Gunther. 2001a. *Political parties and democracy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Diamond, Larry y Richard Gunther. 2001b. Types and functions of parties. En: *Political parties and democracy*, ed. Larry Jay Diamond y Richard Gunther. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Dogan, Matteï. 1996. “Clase, religion, parti: triple déclin dans les clivages électoraux en Europe.” *Revue Internationale de Politique Comparée* 3(3):515–540.

- Dorussen, Hans y Michael Taylor, eds. 2002. *Economic voting*. Londres: Routledge.
- Downs, Anthony. 1957. *An economic theory of democracy*. New York: Harper & Row.
- Duch, Raymond. 2001. "A development model of heterogeneous economic voting in new democracies." *The American Political Science Review* 95(4):895 – 910.
- Duch, Raymond M y Randolph T Stevenson. 2008. *The economic vote : how political and economic institutions condition election results*. New York: Cambridge University Press.
- Duch, Raymond y Randy Stevenson. 2006. "Assessing the magnitude of the economic vote over time and across nations." *Electoral Studies* 25(3):528–547.
- Duverger, Maurice. 1965. *Los partidos políticos*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Duverger, Maurice. 1992. Influencia de los sistemas electorales en la vida política. En: *Diez textos básicos de ciencia política*, ed. Albert Battle. Barcelona: Ariel.
- Eisenstadt, Todd A. 2004. *Courting democracy in Mexico: Party strategies and electoral institutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Evans, Jocelyn A. J. 2003. *Voters and voting: and introduction*. London: Sage.
- Fearon, James D. 1999. Electoral accountability and the control of politicians: selecting good guys versus sanctioning poor performance. En: *Democracy, accountability, and representation*, ed. Adam Przeworski, Susan C. Stokes y Bernard Manin. Cambridge: Cambridge University Press.
- Franco-Cuervo, Ana Beatriz y Javier Andrés Flores Henao. 2008. "Latinoamérica: radiografía de las barreras político-electorales." *Elecciones* 7(8).
- Frogner, André Paul, Lieven De Winter y Pierre Baudewyns. 2007. *Elections: le reflux? Comportement et attitudes lors des élections en Belgique*. Bruxelles: De Boeck Université.
- Frogner, André Paul y Anne-Marie Aish-van, Vaerenbergh. 2003. *Elections : la rupture? Le comportement des Belges face aux élections de 1999*. Bruxelles: De Boeck Université.

- Gamboa, Ricardo y Carolina Segovia. 2006. "Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile: Diciembre 2005 - Enero 2006." *Revista de Ciencia Política* 26(1):84–113.
- Gobierno de Chile. 2015. "Fin al binominal: Conoce el nuevo sistema electoral." Nota informativa en Página Web (consulta: 24/08/2015).
URL: <http://www.gob.cl/2015/04/27/fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/>
- González, Francisco Enrique. 2008. *Dual transitions from authoritarian rule : institutionalized regimes in Chile and Mexico, 1970-2000*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Greene, Kenneth F. 2007. *Why dominant parties lose : Mexico's democratization in comparative perspective*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
- Grompone, Romeo y Rodrigo Barrenechea. 2010. Political regime, institutional improvisations and democratic governance in Peru. En: *Challenges to democratic governance: Political and institutional reforms and social movements in the Andean Region*, ed. Martín Tanaka y Francine Jácome. Ottawa: IDRC - CRDO.
- Grosse, Ashley y Andrew Appleton. 2009. "Big social science" in comparative politics: The history of the Comparative Study of Electoral Systems. En: *The Comparative Study of Electoral Systems*, ed. Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Gschwend, Thomas. 2009. District magnitude and the comparative study of strategic voting. En: *The Comparative Study of Electoral Systems*, ed. Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Haber, Stephen H. 2008. *Mexico since 1980*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
- Hayner, Priscilla. 2011. *Unspeakable Truths: Transitional justice and the challenges of Truth Commissions*. New York: Routledge.
- Heath, Roseanna Michelle. 2007. "Presidential and congressional elections in Chile, December 2005 and January 2006." *Electoral Studies* 26(2):516–520.

- Hughes, Emma y Nigel Parsons. 2001. "The 1999-2000 presidential elections in Chile." *Electoral Studies* 20(4):641-649.
- Hunter, Wendy y Timothy J. Power. 2007. "Rewarding Lula: Executive Power, Social Policy, and the Brazilian Elections of 2006." *Latin American Politics and Society* 49(1):1-30.
- Huntington, Samuel P. 1994. *La tercera ola: La democratización a finales del siglo XX*. Buenos Aires: Paidós.
- IDEA. 2006. *Diseño de sistemas electorales: El nuevo manual de IDEA Internacional*. México D.F.: IDEA Internacional, IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- INEI. 2002. *Condiciones de vida en el Perú: Evolución 1997-2001*. Lima: INEI.
- INEI. 2016. "Estadísticas Sociales." Página Web (consulta: 30/11/2016).
URL: <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/>
- Inglehart, Ronald. 1997. *Modernization and postmodernization : cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart, Ronald. 2008. "Changing values among Western Publics from 1970 to 2006." *West European Politics* 31(1-2):130-146.
- Inglehart, Ronald y Christian Welzel. 2005. *Modernization, cultural change, and democracy: the human development sequence*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
- Instituto Nacional Electoral. 2015. "Histórico de Resultados Electorales." Página Web (consulta: 24/08/2015).
URL: <http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/>
- Islas, Gloria. 2008. "Inició con muerte de Colosio etapa de división y debacle del PRI." *El Periódico de México*. México, 24/03/2008 (consulta: 12/02/2013).
URL: <http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=160816>

- Jurado Nacional de Elecciones. 2015. “Infogob: Observatorio para la gobernabilidad.” Página Web (consulta: 24/08/2015).
URL: <http://www.infogob.com.pe/>
- Karvonen, Lauri y Stein Kuhnle. 2001. *Party systems and voter alignments revisited*. London ; New York: Routledge.
- Katz, Richard S. y William Crotty, eds. 2006. *Handbook of party politics*. London: Sage.
- Key, V. O. 1955. “A theory of critical elections.” *Journal of Politics* 17(1):3–18.
- Klesner, Joseph L. 2002. “Presidential and congressional elections in Mexico, July 2000.” *Electoral Studies* 21(1):140–147.
- Klesner, Joseph L. 2005. “Electoral Competition and the New Party System in Mexico.” *Latin American Politics and Society* 47(2):103–142.
- Klesner, Joseph L. 2007. “The July 2006 presidential and congressional elections in Mexico.” *Electoral Studies* 26(4):803–808.
- Klesner, Joseph L. 2010. “The 2009 Mexican midterm congressional elections.” *Electoral Studies* 29(3):537–540.
URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379410000582>
- Klingemann, Hans-Dieter, ed. 2009. *The Comparative Study of Electoral Systems*. New York: Oxford University Press.
- Klingemann, Hans Dieter y Bernhard Wessels. 2009. How voters cope with the complexity of their political environment: differentiation of political supply, effectiveness of electoral institutions, and the calculus of voting. En: *The Comparative Study of Electoral Systems*, ed. Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Knight, Kathleen y Michael Marsh. 2002. “Varieties of election studies.” *Electoral Studies* 21(2):169–187.

- Knutsen, Oddbjorn y Elinor Scarbrough. 1995. Cleavage politics. En: *The impact of values*, ed. Elinor Scarbrough y Jan W. Van Deth. Oxford: Oxford University Press.
- Kroh, Martin. 2009. The ease of ideological voting: Voter sophistication and party system complexity. En: *The Comparative Study of Electoral Systems*, ed. Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Laakso, Markku y Rein Taagepera. 1979. “Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe.” *Comparative Political Studies* 12(1):3–27.
- Lachat, Romain. 2008. “The impact of party polarization on ideological voting.” *Electoral Studies* 27(4):687–698.
URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379408000851>
- Latin American Public Opinion Project (LAPOP). 2015. “The AmericasBarometer.” Página Web (consulta: 20/11/2016).
URL: <http://www.LapopSurveys.org>
- Lau, Richard R. y David P. Redlawsk. 2006. *How voters decide: Information processing during election campaigns*. New York: Cambridge University Press.
- Lazarsfeld, Paul Felix, Bernard Berelson y Hazel Gaudet. 1968. *The people’s choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign*. New York: Columbia University Press.
- León, Carlos. 2011. El reino de la incertidumbre: elecciones y alianzas en Gana Perú y Fuerza Social. En: *Anti-candidatos: Guía analítica para unas elecciones sin partidos*, ed. Carlos Meléndez. Lima: Mitin.
- Levitsky, Steven y Lucan Way. 2010. *Competitive authoritarianism : hybrid regimes after the Cold War*. New York: Cambridge University Press.
- Levitsky, Steven y Maxwell Cameron. 2003. “Democracy without parties? Political parties and regime change in Fujimori’s Peru.” *Latin American Politics and Society* 45(3):1–33.

Lewis-Beck, Michael S. y Maria Celeste Ratto. 2013. "Economic voting in Latin America: A general model." *Electoral Studies* 32(3):489 – 493. Economics and Elections: Effects Deep and Wide.

URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413000711>

Lewis-Beck, Michael S y Martin Paldam. 2000. "Economic voting: an introduction." *Electoral Studies* 19(2-3):113 – 121.

URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379499000426>

Lipset, Seymour Martin y Stein Rokkan, eds. 1967. *Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives*. New York: The Free Press.

Luna, Francisco Vidal y Herbert S Klein. 2006. *Brazil since 1980*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.

Lupu, Noam. 2015. *Party brands in crisis: partisanship, brand dilution, and the breakdown of political parties in Latin America*. New York: Cambridge University Press.

Lupu, Noam. 2016. "Party brands, partisan erosion and party breakdown. Chapter forthcoming in *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse*, ed. Scott Mainwaring, Cambridge University Press." Publicación Electrónica (consulta: 07/12/2016).

URL: <http://www.noamlupu.com/mainwaring.pdf>

Mackena, Bernando. 2015. "Composición del electorado en elecciones con voto obligatorio y voluntario: un estudio cuasi experimental de la participación electoral en Chile." *Revista Latinoamericana de Opinión Pública* 5:49–98.

Mair, Peter. 2006. Cleavages. En: *Handbook of party politics*, ed. Richard S. Katz y William Crotty. London: Sage.

Maldonado, Arturo. 2011. "Compulsory voting and the decision to vote." LAPOP: Americas-Barometer Insights, No. 63.

URL: <http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0863en.pdf>

- Maldonado, Arturo. 2014. "When voting is compulsory, who opposes it? Evidence from Ecuador and Peru." LAPOP: AmericasBarometer Insights, No. 104.
URL: <http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO904en.pdf>
- Martin, Pierre. 2000. *Comprendre les évolutions électorales: la théorie des réalignements révisité*. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- Mayer, Nonna. 2006. "Qui vote pour qui et pourquoi? Les modèles explicatifs du choix électoral." *Pouvoirs, Revue Française d'Etudes Constitutionnelles et Politiques* (120):17–28.
- McCann, Bryan. 2008. *The throes of democracy : Brazil since 1989*. New York: Palgrave Macmillan.
- McClintock, Cynthia. 2006. "A left turn in Latin America? An unlikely comeback in Peru." *Journal of Democracy* 17(4):95–109.
- Meléndez, Carlos. 2007. Partidos y sistema de partidos en el Perú. En: *La política por dentro: cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos*, ed. Rafael Roncagliolo y Carlos Meléndez. Lima: IDEA - Transparencia Internacional Internacional.
- Meléndez, Carlos. 2012a. *La soledad de la política. Transformaciones estructurales, intermediación política conflictos sociales en el Perú (2000 - 2012)*. Lima: Mitin.
- Meléndez, Carlos. 2012b. "Partidos inesperados: La institucionalización del sistema de partidos en un escenario de post colapso partidario. Perú 2001 - 2011." Documento de Trabajo: Fundación Friedrich Ebert.
- Meléndez, Carlos. 2013. Perú: las elecciones de 2011. Populistas e integrados. Las divisiones políticas en un sistema "partido". En: *Elecciones y política en América Latina: 2009-2011*, ed. Manuel Alcántara y María Laura Tagina. México D.F.: Instituto Federal Electoral; Cámara de Diputados; Senado de la República; Miguel Ángel Porrúa.
- Meneguello, Rachel. 2011. Las elecciones de 2010 y los rumbos del sistema de partidos brasileño. Política nacional, fragmentación y lógica de coaliciones. En: *América Latina: Política*

- y elecciones del bicentenario (2009-2010)*, ed. Manuel Alcántara y María Laura Tagina. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Merrill, Samuel y Bernard Grofman. 1999. *A unified theory of voting: directional and proximity spatial models*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Molinar Horcasitas, Juan. 1999. Las elecciones federales de 1997 en México: Evaluación del sistema de partidos y la reforma electoral en materia de regulación financiera. En: *Administración y financiamiento de las elecciones en el umbral del siglo XXI: Memoria del III Congreso de Derecho Electoral*, ed. J. Jesus Orozco Henríquez. México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Moreno, Alejandro. 2003. *El Votante Mexicano: Democracia, actitudes políticas y conducta electoral*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Moreno, Alejandro. 2009. *La decisión electoral: Votantes, Partidos y Democracia en Mexico*. Mexico D.F.: Porrula Miguel Angel.
- Moreno, Alejandro y Patricia Méndez. 2007. “La identificación partidista en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 en México.” *Política y Gobierno* 14(1):43–44.
- Nadeau, Richard, Richard G Niemi y Antoine Yoshinaka. 2002. “A cross-national analysis of economic voting: taking account of the political context across time and nations.” *Electoral Studies* 21(3):403 – 423.
- URL:** <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379401000026>
- Nevitte, Neil, André Blais, Elisabeth Gidengil y Richard Nadeau. 2009. Socioeconomic status and nonvoting: A cross national comparative analysis. En: *The Comparative Study of Electoral Systems*, ed. Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Nicolau, Jairo. 2004. “The October 2002 elections in Brazil.” *Electoral Studies* 23(2):338–345.
- Nicolau, Jairo. 2008. “The presidential and congressional elections in Brazil, October 2006.” *Electoral Studies* 27(1):170–175.

- Nishizawa, Yoshikata. 2009. Economic voting: Do institutions affect the way voters evaluate incumbents? En: *The Comparative Study of Electoral Systems*, ed. Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Nohlen, Dieter. 2005. *Elections in the Americas : a data handbook*. New York: Oxford University Press.
- Nohlen, Dieter. 2006. “La reforma del sistema binomial desde una perspectiva comparada.” *Revista de Ciencia Política* 26(1):191–202.
- Norris, Pippa. 2006. *Electoral engineering: voting rules and political behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Palacios Rodríguez, Raúl. 2006. *Historia de la República del Perú 1933-2000. Tomo 18*. Lima: Empresa Editora El Comercio - Orbis Ventures.
- Palermo, Vicente, ed. 2003. *Política brasileña contemporánea: De Collor a Lula en años de transformación*. Buenos Aires: Siglo XXI - Instituto di Tella.
- Payne, J. Mark, Daniel Zovatto y Mercedes Mateo Díaz. 2007. *Democracies in development : politics and reform in Latin America*. Washington D.C.: Inter-American Development Bank and International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Pease, Henry. 1977. *El ocaso del poder oligárquico: lucha política en la escena oficial 1968 - 1975*. Lima: DESCO.
- Pease, Henry. 2003. *La autocracia fujimorista: del estado intervencionista al Estado mafioso*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Pedersen, Mogens. 1979. “The dynamics of European party systems: Changing patterns of electoral volatility.” *European Journal of Political Research* 7(1):1–26.
- Pérez-Liñán, Aníbal. 2001. “Neoinstitutional accounts of voter turnout: moving beyond industrial democracies.” *Electoral Studies* 20(2):281–297.

- Perrineau. 2006. “Les usages contemporains du vote.” *Pouvoirs, Revue Française d’Etudes Constitutionnelles et Politiques* (120):29–42.
- Portocarrero, Gonzalo. 1983. *De Bustamante a Odría: el fracaso del Frente Democrático Nacional, 1945-1950*. Lima, Perú: Mosca Azul Editores.
- Power, Timothy. 2000. Political institutions in democratic Brazil: Politics as a permanent constitutional convention. En: *Democratic Brazil: Actors, institutions and processes*, ed. Peter R. Kingstone y Timothy Power. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Power, Timothy. 2010. “Brazilian democracy as a late bloomer: Reevaluating the regime in the Cardoso - Lula era.” *Latin American Research Review* 45(1):218–247.
- Ratto, María Celeste. 2015. “La influencia del contexto en la atribución de responsabilidades al gobierno por la economía en América Latina: Una propuesta de análisis multinivel.” *Revista Latinoamericana de Opinión Pública* 5:99–137.
- Rennó, Lucio, Amy Smith, Matthew Layton y Federico Batista. 2011. *Legitimidade e qualidade da democracia no Brasil: Uma Visão da cidadania*. Sao Paulo: Intermeios; LAPOP - Vanderbilt University.
- Roberts, Kennet. 2002a. El sistema de partidos y la transformación de la representación política en la era neoliberal latinoamericana. En: *El asedio a la política: Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*, ed. Marcelo Cavarozzi y Juan Abal Medina. Rosario: Homo Sapiens.
- Roberts, Kenneth M. 2002b. “Social Inequalities Without Class Cleavages in Latin America’s Neoliberal Era.” *Studies in Comparative International Development* 36(4):3.
- Roberts, Kenneth M. y Erik Wibbels. 1999. “Party Systems and Electoral Volatility in Latin America: A Test of Economic, Institutional, and Structural Explanations.” *American Political Science Review* 93(3):575–590.
- Rojas, Priscilla y Patricio Navia. 2005. “Representación y tamaño de los distritos electorales en Chile, 1988-2002.” *Revista de Ciencia Política* 25(2):91–116.

- Roncagliolo, Rafael y Carlos Meléndez, eds. 2007. *La política por dentro: cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos*. Lima: IDEA - Transparencia Internacional.
- Rose, Richard. 2000. *International encyclopedia of elections*. London: Macmillan.
- Sartori, Giovanni. 1992. *Partidos y sistemas de partidos*. Madrid: Alianza Universidad.
- Scarrow, Susan E. 2006. The nineteenth-century origins of modern political parties: The unwanted emergence of party-based politics. En: *Handbook of party politics*, ed. Richard S. Katz y William Crotty. London: Sage.
- Schmidt, Gregory D. 2007. "Back to the future? The 2006 Peruvian general election." *Electoral Studies* 26(2):813 – 819.
- Schmidt-Hebbel, Klaus. 2006. "El crecimiento económico de Chile." Documento de Trabajo No. 365. Banco Central de Chile.
- Schmitt, Hermann y Bernhard Wessels. 2005. "Meaningful choices: Under which conditions do general elections provide a meaningful choice set, and what happens if they don't?" Documento de Trabajo. Comparative Study of Electoral Systems.
- Servicio Electoral de Chile. 2015. "Servicio Electoral de Chile." Página Web (consulta: 08/01/2015).
URL: <http://www.serve.cl>
- Siavelis, Peter M. 2005a. Chile: The unexpected (and expected) consequences of electoral engineering. En: *The politics of electoral systems*, ed. Michael Gallagher y Paul Mitchell. New York: Oxford University Press.
- Siavelis, Peter M. 2005b. "Electoral system, coalitional disintegration, and the future of Chile's Concertación." *Latin American Research Review* 40(1):56–82.
- Siavelis, Peter M. 2006. Party and social structure. En: *Handbook of party politics*, ed. Richard S. Katz y William Crotty (eds.). London: Sage.

- Sigelman, Lee y William D. Berry. 1982. "Cost and the Calculus of Voting." *Political Behavior* 4(4):419–428.
- Sniderman, Paul M. y Matthew S. Levendusky. 2007. An institutional theory of political choice. En: *The Oxford Handbook of Political Behavior*, ed. Russell J. Dalton y Hans-Dieter Klingemann. New York: Oxford University Press.
- Sulmont, David. 2009a. Conocimiento político, opinión pública y democracia en la sociedad peruana. En: *Opinión Pública: una mirada desde América Latina*, ed. Maria Braun y Cecilia Straw. Buenos Aires: Emece.
- Sulmont, David. 2009b. Líneas de frontera y comportamiento electoral en el Perú: Diferencias sociales y tendencias del voto en las elecciones presidenciales peruanas 1980 - 2006. En: *Cambios sociales en el Perú: 1968-2008*, ed. Orlando Plaza. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Tanaka, Martín. 1998. *Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980 - 1995, en perspectiva comparada*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Tanaka, Martín. 2005. *Democracia sin partidos: Perú, 2000 - 2005*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Tanaka, Martín. 2011. "A vote for moderate change." *Journal of Democracy* 22(4):75–83.
URL: <http://search.proquest.com/docview/902872247?accountid=28391>
- Telles, Edward Eric y Project on Ethnicity and Race in Latin America. 2014. *Pigmentocracies: ethnicity, race, and color in Latin America*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Thomassen, Jacques, ed. 2005. *The European voter: a comparative study of modern democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Tuesta, Fernando. 2005. *Representación política: las reglas también cuentan - Sistemas electorales y partidos políticos*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - Fundación Friedrich Ebert.

- Vergara, Alberto. 2007. *Ni amnésicos ni irracionales: Las elecciones peruanas de 2006 en perspectiva histórica*. Lima: Solar.
- Vergara, Alberto. 2011. ¿Qué es el APRA? (Hoy). En: *Anti-candidatos: Guía analítica para unas elecciones sin partidos*, ed. Carlos Meléndez. Lima: Mitin.
- Visser, Max. 1994. “The psychology of voting action.” *Journal of the History of the Behavioral Sciences* 30(1):43 – 52.
- Weyland, Kurt. 2005. The growing sustainability of Brazil’s low-quality democracy. En: *The third wave of democratization in Latin America: Advances and setbacks*, ed. Scott P. Mainwaring y Frances Hagopian. Cambridge: Cambridge University Press.
- Whitten, Guy D. y Harvey D. Palmer. 1999. “Cross-national analyses of economic voting.” *Electoral Studies* 18(1):49 – 67.
URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379498000432>
- World Bank. 2016. “Data The World Bank.” Página Web (consulta: 26/03/2016).
URL: <http://data.worldbank.org/>
- World Values Survey. 2015. “Data & Documentation.” Página Web (consulta: 01/03/2016).
URL: <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp>
- Zacharías, Daniela, David Sulmont y Gilda Garibotti. 2015. “Elecciones presidenciales Perú 2011: Análisis comparativo de la asociación entre los resultados de la primera y segunda vuelta electoral a nivel de mesa de sufragio.” *Revista Latinoamericana de Opinión Pública* 5:173 – 200.
- Zavaleta, Mauricio. 2013. “Los costos de la informalidad política.” NoticiasSer. Lima, 09/01/2013 (consulta: 01/05/2015).
URL: <http://www.noticiasser.pe/09/01/2013/la-cantera/los-costos-de-la-informalidad-politica>

Zavaleta, Mauricio. 2014. *Coaliciones de independientes: las reglas no escritas de la política electoral*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Zechmeister, Elizabeth J, ed. 2015. *The Political Culture of Democracy in the Americas, 2014: Democratic Governance across 10 Years of the AmericasBarometer*. Nashville: Vanderbilt University - USAID.

Zucco, Jr., Cesar. 2007. "Where's the bias? A reassessment of the Chilean electoral system." *Electoral Studies* 26(2):303–314.

